

Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980

Desafíos en el abordaje
del pasado reciente en la Argentina 1



Daniel Lvovich
(compilador)

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

POLÍTICAS PÚBLICAS, TRADICIONES POLÍTICAS Y SOCIABILIDADES
ENTRE 1960 Y 1980

Daniel Lvovich (compilador)

**Políticas públicas, tradiciones políticas
y sociabilidades entre 1960 y 1980**
Desafíos en el abordaje del pasado
reciente en la Argentina 1

Guadalupe Ballester, Juan Luis Besoky, Ernesto Bohoslavsky,
Gabriela Gomes, Federico Iglesias, Daniel Lvovich, César Mónaco,
Sergio Daniel Morresi, Florencia Osuna, Cristian Vázquez
y Martín Vicente

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980 : desafíos en el abordaje del pasado reciente en la Argentina 1 / Guadalupe Anahi Ballester.. [et al.] ; compilado por Daniel Lvovich.- 1a ed.- Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020.
286 p. ; 21 x 15 cm. - (Humanidades ; 43)

ISBN 978-987-630-449-8

1. Estado. 2. Sociedades. 3. Historia Política Argentina. I. Ballester, Guadalupe Anahi. II. Lvovich, Daniel, comp.
CDD 320.0982

AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA



EDICIONES **UNGS**

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020
J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX)
Prov. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4469-7507
ediciones@campus.ungs.edu.ar
ediciones.ungs.edu.ar

Diseño gráfico de colección: Andrés Espinosa
Diagramación: Eleonora Silva
Corrección: María Valle



Licencia Creative Commons 4.0
Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd)



Libro
Universitario
Argentino

Índice

Introducción 9

Primera parte. Políticas públicas en tiempos dictatoriales

Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría del Menor y la Familia en la historia argentina reciente 17
Florencia Osuna

Actores transnacionales y proyectos de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) 43
Gabriela Gomes

El rol del INTA en la conformación de la organización campesina en Formosa durante la década del sesenta 75
Cristian Eduardo Vázquez

Las ciencias sociales y los estudios de opinión pública en la llamada “Revolución Argentina” 97
Daniel Lvovich

Segunda parte. Tradiciones políticas e intelectuales de las derechas

Los congresos anticomunistas en la Argentina: redes y sociabilidades latinoamericanas y globales en los años sesenta 121
Ernesto Bohoslavsky

Violencia paraestatal en el Gran La Plata (1973-1976): el caso de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) 143
Juan Luis Besoky

Los rostros del liberalismo-conservador: polémicas en torno de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía procesista 171
Sergio Daniel Morresi y Martín Vicente

Tercera parte. Sociabilidades, asociacionismos y micropolítica

Un acercamiento a las dinámicas de subsidiariedad del Estado a escala local. General Sarmiento, 1973-1983	205
<i>Guadalupe Ballester</i>	
Escritores y dictadura: trayectorias, prácticas y sociabilidades. El caso de la revista literaria <i>El Ornitorrinco</i> , 1977-1983.....	231
<i>Federico Iglesias</i>	
Sindicalismo y política. El lugar de la UOM en el escenario público nicoleño, 1972-1973	259
<i>César Mónaco</i>	
Autoras y autores	283

Introducción

Este libro presenta parte de los resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica 2013-1160 “Desafíos teóricos, historiográficos y didácticos del abordaje del pasado reciente en la Argentina”. El proyecto fue financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) del por entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y se desarrolló entre 2014 y 2017.

El objetivo central de aquel proyecto fue reunir, articular e integrar investigaciones centradas en los siguientes problemas: a) la naturaleza de la historia reciente como campo disciplinar específico y los debates que le han dado forma en los últimos treinta años; b) los vínculos entre algunos actores sociales y los regímenes dictatoriales en la Argentina entre 1966 y 1983; y c) las diversas estrategias ensayadas en el campo de la enseñanza de la historia reciente desde 1983 a la fecha.

Los trabajos que aquí presentamos forman parte del núcleo historiográfico del proyecto, y se complementan con los que integran el núcleo didáctico, coordinado por María Paula González, y el núcleo teórico-epistemológico, coordinado por Florencia Levín. Este volumen es el primer tomo de una obra mayor, que se articula con el tomo 2, titulado *Saberes y prácticas escolares en torno a la historia contemporánea y reciente*.

Los trabajos que componen este volumen son el resultado de investigaciones dedicadas a indagar en diversas dimensiones de la sociedad y el Estado entre las décadas de 1960 y 1980. Con base en las preguntas propias de las tradiciones de la historia política, social o cultural, y más allá de la relativa amplitud de sus objetos de estudio, una serie de puntos de partida en común articulan estos trabajos. Entre ellos se encuentra la constatación de la necesidad de inscribir la temporalidad relativamente corta de la historia reciente en marcos cronológicos más amplios, que permitan de ese modo una valoración acerca de los elementos de continuidad o de las relativas novedades de cada uno de los elementos considerados. De ese modo, buscamos articular las especificidades del período dentro de continuidades institucionales, identitarias, políticas o culturales de mayor alcance, lo que permite a su vez dar cuenta con mayor certeza de la es-

pecificidad de los fenómenos novedosos. Junto a ello, compartimos el criterio de considerar la escala de análisis empleada en cada caso no como un elemento dado *a priori*, sino como una dimensión seleccionada conscientemente, que acarrea consecuencias metodológicas y posibilita en cada caso dar cuenta de determinadas formas de las experiencias, trayectorias o prácticas, mientras dificulta la percepción de otras.

En el conjunto de los trabajos aquí reunidos, se observa una marcada preocupación por dar cuenta de las múltiples maneras en que, de un modo osmótico, se vinculan las distintas agencias estatales consideradas como segmentos de la sociedad. Partimos de una concepción en la que el Estado resulta receptivo de los diversos modos de los conflictos, tensiones y presiones de la sociedad civil. Se trata, en esta perspectiva, de la existencia de fronteras porosas entre el Estado y la sociedad, a través de las que se desplazan los intereses sociales y corporativos, las ideologías, sujetos, grupos profesionales, tradiciones intelectuales, etcétera.

Hemos organizado los trabajos en tres bloques, que reúnen los dedicados a las políticas públicas dictatoriales, la tradición política de las derechas y al estudio de experiencias asociativas de diversa índole.

El primer bloque, titulado “Políticas públicas en tiempos dictatoriales”, se abre con el trabajo en el que Florencia Osuna analiza las transformaciones burocráticas y la red de actores católicos de la Secretaría del Menor y la Familia del Ministerio de Bienestar Social de la Nación (MBS) en el período 1971-1979, y sitúa su origen institucional en el Consejo Nacional de Protección de Menores creado en 1957 por la “Revolución Libertadora”. La autora señala una diferencia importante entre la “Revolución Argentina” y la dictadura instaurada en 1976: mientras que los tres gobiernos de facto del período 1966-1973 tuvieron un programa “estatalizante” que pretendió restar autonomía a todas las dependencias públicas para centralizarlas, con lo que otorgaba al Estado un papel preponderante, la última dictadura se basó en el principio de “subsidiariedad del Estado” y sus políticas hacia la familia dan cuenta del desdibujamiento del rol estatal en la planificación y ejecución de esas iniciativas.

A continuación, Gabriela Gomes propone en su capítulo un análisis que da cuenta de los modos en que, en el contexto de la Guerra Fría, la problemática urbana excedió los límites nacionales y se convirtió en un problema político de escala transnacional, ya que diversas agencias internacionales jugaron un rol importante en materia de investigación y financiamiento de planes de desarrollo y alentaron las reformas rurales y urbanas en América Latina. La autora articula esta perspectiva con el análisis de las políticas de vivienda destinada a

los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973).

En su contribución, Cristian Vázquez da cuenta de los modos, hasta ahora escasamente estudiados, en que diversas iniciativas emprendidas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que tenían como destinataria a la población rural de Formosa, en la década de 1960, impactaron, sin que fuera su propósito original, en la formación de una de las experiencias organizativas más importantes de la provincia, como lo fue la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF), en 1971.

Cierra el bloque el trabajo en el que Daniel Lvovich estudia la incorporación por agencias del Estado argentino, bajo un gobierno dictatorial, del uso de las encuestas de opinión pública, resultado a su vez de la renovación de las ciencias sociales desplegada desde la década de 1950; y por otro, del modo en que en esos instrumentos es considerada la aceptación o rechazo de las políticas desplegadas por el gobierno militar instalado desde junio de 1966. El trabajo analiza en particular la encuesta piloto de opinión pública desarrollada en junio de 1970 en Rosario y en Santa Fe, que resultaba un insumo indispensable para la realización de una gran encuesta nacional posterior, que, aparentemente, no llegó a aplicarse. El capítulo contribuye a mostrar un vínculo no demasiado advertido hasta el momento entre la modernización de las ciencias sociales y el empleo de sus procedimientos, métodos y resultados por agencias del Estado en períodos dictatoriales.

Tres trabajos integran el bloque que hemos titulado “Tradiciones políticas e intelectuales de las derechas”. El de Ernesto Bohoslavsky estudia la realización de congresos anticomunistas en Buenos Aires organizados por la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas en la década de 1960, y muestra las filiaciones ideológicas y alianzas internacionales de los actores intervinientes. A partir de este estudio de caso, en el capítulo se avanza en una reflexión acerca de las diversas escalas en las que se movieron los actores estudiados, que podían participar de manera simultánea de redes nacionales, latinoamericanas y transnacionales, y sobre la naturaleza de las ambiguas relaciones establecidas entre organismos públicos y organizaciones anticomunistas en la Argentina de los años sesenta.

El capítulo de Juan Luis Besoky estudia el tránsito de la Concentración Nacional Universitaria de ser una agrupación estudiantil de extrema derecha con fuerte presencia en las ciudades de La Plata y Mar del Plata, reconocida por su propensión a la acción directa y al enfrentamiento con la izquierda, a vincularse a la Triple A. La escala de análisis elegida permite indagar en la relación entre

aparatos del Estado y organizaciones políticas y, en particular, en la vinculación entre las organizaciones de derecha y la represión estatal.

Cerrando esta sección, Sergio Morresi y Martín Vicente analizan las polémicas en torno al liberalismo en el período en el que José Alfredo Martínez de Hoz estuvo al frente del Ministerio de Economía durante la última dictadura argentina, y muestran cómo varios intelectuales y líderes políticos cercanos a la dictadura y que se autodefinían como liberales fueron severos críticos de su política económica al expresar disidencias que previamente habían estado soterradas dentro del espacio de las derechas argentinas. El artículo enfatiza en la necesidad de hacer una lectura específicamente política del plan económico de la última dictadura.

El tercer bloque se denomina “Sociabilidades, asociacionismos y micropolítica”, y contiene tres capítulos. En el primero de ellos, Guadalupe Ballester indaga en perspectiva micropolítica la relación establecida entre el municipio de General Sarmiento y la Asociación de Protección y Ayuda al Discapacitado (APAD), especialmente durante los primeros años de funcionamiento de la asociación (1973-1983). Considera, en particular, la implementación de políticas públicas de apoyo a la entidad y sus consecuencias en la relación con el municipio, y los vínculos institucionales y personales que se pusieron en juego en la relación entre la APAD y el gobierno local. La autora sostiene que en las políticas municipales ligadas al asociacionismo pesaron tanto los aspectos ideológicos como las preocupaciones coyunturales, y que los vínculos institucionales y personales establecidos entre la dirigencia de la entidad y el municipio se mantuvieron más allá de los recambios de gobierno.

Por su parte, Federico Iglesias explora en su capítulo los significados sociales y culturales del grupo de escritores que publicó la revista literaria *El Ornitorrinco* entre 1977 y 1983, y considera la trayectoria de Abelardo Castillo, y las otras personas que conformaron el grupo, en sus prácticas y en los ámbitos de sociabilidad que desarrollaron durante los años dictatoriales. Para el diseño, armado y publicación de *El Ornitorrinco* era necesario poner en juego diversas prácticas y circuitos sociales que permitieran materializarla, pero debía, al mismo tiempo, preservarse de la represión y la censura. No obstante, mantuvieron cierta visibilidad a partir de las actividades que desarrollaron. Si bien no se trataba de acciones clandestinas de lucha contra la dictadura, formaban parte de una cultura y de una tradición político-literaria que no encajaban en los cánones que la dictadura imponía en el espacio público y en el campo cultural. El análisis de este conjunto de prácticas y ámbitos de sociabilidad compartidos por el grupo de escritores permite observar las rupturas y continuidades producidas al calor

del punto de inflexión que representaron los años del terrorismo de Estado en el terreno de la cultura y la vida literaria con respecto a la etapa anterior.

En el cierre del volumen, César Mónaco analiza los modos en que la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, liderada por José Ignacio Rucci, exteriorizó su poder gremial en la vida pública y, en particular, en la vida política municipal. Consolidado como el principal gremio en el escenario local a comienzos de los años setenta, el sindicato de los metalúrgicos devino en una especie de factor de poder que buscó tener una participación insoslayable en la vida política del distrito, incluyendo la del peronismo local. El trabajo de César Mónaco muestra con contundencia que la clara subordinación de Rucci a Perón en la escala nacional contrasta con su conducta relativamente autónoma como protagonista de la arena peronista local, en la que hizo prevalecer la lógica corporativa, que se aunaba con su propia construcción de poder.

En definitiva, este volumen reúne diez trabajos que abren temáticas poco visitadas con anterioridad o revisitan con nuevas lentes objetos previamente analizados. En ese sentido, este libro es tanto expresión de un estado de la historiografía de la historia reciente, cuanto producto de una época expansiva en lo relativo a los recursos públicos disponibles para la investigación social y a la voluntad de las autoridades de las distintas instituciones que componen el sistema científico y tecnológico de apoyar ese tipo de indagaciones. En el momento de redactar esta introducción, a fines de 2018, y como en otras tantas áreas de la vida argentina, esa época parece haber llegado a su ocaso.

Primera parte
Políticas públicas en tiempos dictatoriales

Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría del Menor y la Familia en la historia argentina reciente

Florencia Osuna

Introducción

Este trabajo estudia las iniciativas, las transformaciones burocráticas y la red de actores católicos de la Secretaría del Menor y la Familia (SMYF) del Ministerio de Bienestar Social de la Nación (MBS) en el período 1971-1979, y sitúa su origen institucional en el Consejo Nacional de Protección de Menores creado en 1957 por la dictadura “Revolución Libertadora”.

El interés en esta problemática surgió a raíz de tres constataciones: 1) el lugar relevante que el “problema de la familia” fue adquiriendo en la agenda estatal y en el MBS, en particular, desde la gestión de Francisco Manrique en 1971; 2) el entrelazamiento discursivo que, desde ese momento, realizaron amplios actores sociales, estatales, religiosos y militares entre el diagnóstico de la “crisis moral” y el avance del enemigo “interno” y “externo”; y 3) las posibilidades que las prácticas de la SMYF y las fuentes disponibles nos ofrecen para observar la extrema porosidad entre el Estado y la sociedad en los años del *terrorismo de Estado*. En relación con este último punto, nuestro interés reside en problematizar las formas de construcción del poder en ese contexto autoritario. De hecho, señalaremos una diferencia importante entre la “Revolución Argentina” y la última dictadura: mientras que los tres gobiernos de facto del período 1966-1973 tuvieron un programa “estatalizante” que pretendió restar autonomía a todas las dependencias públicas para centralizarlas y dirigir las desde el Poder Ejecutivo, con lo que otorgaba al Estado un papel preponderante, la última dictadura se basó en el principio de “subsidiariedad del Estado” y las

políticas del MBS hacia la familia son un ejemplo claro –y, quizás, extremo– del desdibujamiento del rol estatal en la planificación y ejecución de esas iniciativas.

En el primer apartado, el artículo da cuenta de la creación del Consejo Nacional de Menores, en 1957, por parte de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Debido a que la red de actores reclutados –jueces y abogados católicos conservadores con vínculos laborales, académicos y sociales– y sus propuestas tuvieron continuidad en los años de la última dictadura, creemos que allí podríamos situar el origen institucional de la Secretaría. También analizaremos los intentos del “onganiato” de restar autonomía al Consejo, cuando lo transformó en el Servicio Nacional de la Minoridad y lo subsumió a la estructura burocrática de un Estado jerárquico y centralizado.

En el segundo apartado, analizaremos el contexto de creación de la Secretaría en el marco de la gestión de Manrique en el MBS. En este proceso confluyeron varios factores, pero prestaremos especial atención a dos: la búsqueda de amplias alianzas y adhesiones del ministro frente a su futura candidatura presidencial, y la progresiva instalación en la agenda pública, social y religiosa de la “crisis de la familia” y la ruptura generacional. En este sentido, una cuestión que el ministro atendió particularmente en esta área fue el “problema de las drogas”, como parte del progresivo “decaimiento de las estructuras morales” de la juventud. Como veremos, el siguiente ministro de Bienestar Social, José López Rega, profundizó estas iniciativas a partir de su propio diagnóstico de una “crisis de la familia”, la que vincularía también con el accionar de otro enemigo: el imperialismo estadounidense. En este sentido, las políticas natalistas y de protección de la familia buscarían contrarrestar los objetivos de los Estados Unidos de esterilizar a las mujeres del tercer mundo, para despoblar los países y apropiarse de los recursos naturales.

En el tercer apartado, veremos que, durante la última dictadura, la política del MBS en su conjunto tuvo como fundamento el restablecimiento de la familia nuclear, entendida como el pilar básico de la sociedad occidental y cristiana. La coincidencia de lecturas y propuestas entre los principales funcionarios ministeriales y el amplio “mundo católico”,¹ llevó a que se desdibujaran los límites entre el Estado y la sociedad a la hora de enfocar las políticas hacia la familia. El importante rol que adquirió el laicado junto a la Iglesia puede explicarse por la revitalización del principio socialcristiano de “subsidiariedad del Estado”, que

¹ Nos referimos a la red de organizaciones en las que se entrecaban las estructuras y sacerdotes de la Iglesia católica con organismos e intelectuales del laicado.

resaltaba la “participación activa” de la sociedad civil en la gestión de actividades culturales que promovieran la “unidad familiar”.

Los cursos de formación dictados entre 1977 y 1978, la conformación de un “Plan de Promoción Familiar”, así como la existencia de una Coordinación Eclesiástica en el interior del MBS, nos muestran que Iglesia y dictadura compartían mucho más que un mismo horizonte de expectativas.

El origen histórico-institucional de la Secretaría

Si tenemos en cuenta los actores, las ideas, los estilos y los proyectos de la SMYF, podríamos afirmar que su antecedente institucional fue el Consejo Nacional de Menores creado en 1957 durante la dictadura “Revolución Libertadora”. Como indica Carla Villalta (2012), esta agencia se encargaba de la ejecución de políticas sociales, actuaba como auxiliar de la justicia y tenía facultades para ejercer tareas de vigilancia y tutela sobre los menores en “peligro moral y/o material”, sin la obligación de dar intervención a la justicia. Los especialistas en minoridad convocados eran jueces y asesores de menores, de clara orientación católica y conservadora, y dado que conformaban un grupo bastante homogéneo en términos profesionales y político-ideológicos, se los conocía como los “minoristas”, quienes, según Sarrabayrouse y Villalta (2004), conformaban el grupo más reaccionario del Poder Judicial. Como demuestran las autoras, varios miembros de este grupo integrarían, luego, la Cámara Federal en lo Penal o “Cámara del terror”, creada durante la dictadura de Lanusse con el objetivo de intervenir en el juzgamiento de “actividades subversivas”.² Asimismo, algunos “minoristas” fueron más tarde funcionarios importantes de la última dictadura, como Jaime Lucas Lennon (secretario de Justicia de la dictadura de 1976), Mario Rassó (subsecretario de Justicia en el mismo período) y Julio Martínez Vivot (ministro de Defensa). A esta red de jueces y asesores de menores ligada a la “familia judicial” también pertenecía el abogado católico Florencio Varela; un actor clave, como veremos, desde su cargo de secretario de la SMYF de la última dictadura.

Las autoras citadas consideran que el paso desde Minoridad hacia la Cámara Federal en lo Penal (llamada coloquialmente el “Camarón”) no fue azaroso, ya que estos funcionarios en el Consejo Nacional de Protección de Menores tenían amplias prerrogativas para decidir qué hacer con un menor de edad y su familia,

² Creada por Ley N° 19053, *Boletín Oficial*, 1/6/1971.

“disponer tutelarmente” de los niños y adolescentes, determinar su internación, restringir la patria potestad de los padres; es decir, prácticas que revestían a sus intervenciones de una gran autonomía, arbitrariedad y discrecionalidad. Junto con esto, tenían una actitud salvacionista y de *bonus pater*. Entonces, el perfil reaccionario de los “minoristas” se relacionaba fuertemente con la “tutela” sobre los menores: por “seguridad”, porque estaban “locos”, etcétera. Y estas prácticas y estilos también permitirían explicar que el Consejo y, en general, la red de asesores y jueces de minoridad, proveyeran hombres a la Cámara Federal en lo Penal de Lanusse y al Poder Judicial de la última dictadura.

En 1959, la agencia encargada de las problemáticas del menor comenzó a llamarse Consejo Nacional de Protección de Menores, extendió progresivamente su campo de acción y fue facultada para “contribuir al afianzamiento de la familia” y a la “protección integral” de la niñez. El rol del consejo se fue volviendo cada vez más abarcativo y ambiguo, ya que no era propiamente judicial, aunque ejercía las funciones de los defensores de menores, ni tampoco se encargaba simplemente de ejecutar políticas sociales. En este marco, se creó la “Policía de la Minoridad”, un cuerpo especial de inspección y vigilancia que colaboraba con las autoridades policiales y municipales haciendo operativos en cines y teatros, bares, confiterías, *whiskerías*, *boites*, plazas, parques, e intermediaciones de los establecimientos educacionales de las niñas. Como indica una trabajadora social entrevistada por Villalta, “salían a cazar pibes” por la vía pública y averiguaban los medios de vida y costumbres de los hogares de los menores identificados.

Durante la “Revolución Argentina” (1966-1973), el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970) adoptó la estrategia de centralizar, articular y controlar estatalmente por medio de una estructura institucional basada en cinco ministerios (Interior, Exterior, Economía, Bienestar Social y Defensa), todas las áreas de la política pública. Aunque también se intentaron desarrollar complejos mecanismos de descentralización de la ejecución de las políticas, los sistemas de planificación y control debían estar vinculados estrechamente con el Poder Ejecutivo. Estas intenciones se materializaron en el Decreto N° 2462, de 1968, de centralización de organismos de la Administración Pública. En clara sintonía con este programa de gobierno, y como ocurrió con otros subsistemas de la política social en esos años, intentó disolverse la autonomía de la que había gozado el Consejo Nacional de Protección de Menores y quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC) dependiente del flamante MBS. En 1968, el nuevo organigrama de la SEPAC supuso la existencia de dos direcciones generales. Una de ellas, la Dirección

General de Asistencia Comunitaria, comenzó a coordinar el Servicio Nacional de la Minoridad, y el de la Familia y la Mujer, cuando aún el Consejo mencionado subsistía. Esto muestra algunos avances en los intentos de “estatalizar” la cuestión del menor y la familia. En este sentido, pocos meses después, en enero de 1969, la dictadura decidió directamente disolver el Consejo Nacional de Protección de Menores por las dificultades que su autonomía implicaba para el programa centralista de gobierno. Más precisamente, la nota de elevación de la Ley N° 18120 (31/1/1969) explicaba que había traído “problemas de orden administrativo que han dificultado el manejo del órgano proteccional” por parte de la SEPAC. Al poco tiempo, un mes después de la sanción de esta ley, el secretario de esta agencia estatal, Pedro Martínez Segovia, renunció. En su lugar asumió otro abogado católico conservador que se convertiría, en la última dictadura, en el súpersecretario de Seguridad Social, Santiago de Estrada. Es posible observar que, a pesar de los intentos “estatalistas” del gobierno, la red de actores católicos ligados al problema de la familia tendría injerencia en las iniciativas del área. Por dar un ejemplo ilustrativo de una tendencia que se reeditaría con más fuerza desde el golpe de 1976, con el auspicio de la SEPAC, la Liga Pro Comportamiento Humano organizó las jornadas “El menor abandonado, problemas socioeconómicos y jurídicos”. En este evento, participaron jueces, asesores de menores y agentes del organismo de protección de la minoridad, pero también la Liga de Madres de Familia, el Instituto Pastoral de la Adolescencia, Cáritas, el Equipo de Adopción del Movimiento Familiar Cristiano, el Patronato de la Infancia, la Unión Argentina de Protección a la Infancia, el Ejército de Salvación, las Obras Privadas de Asistencia al Menor, entre otras (Villalta, 2009). Al mes siguiente, se aprobó la creación del “Régimen de familia sustituta”,³ en el que el *lobby* católico influyó claramente. Las posiciones de los católicos apuntaban a agilizar el trámite de adopción, a garantizar la “adopción plena”, a evitar la injerencia de los padres biológicos, como se daba en el régimen de “adopción simple”, y, en este sentido, consideraban que la familia era el ámbito adecuado para la socialización de los niños y se oponían fuertemente a la institucionalización de los menores.⁴ Por ello, la “familia sustituta” coadyuvaría a disminuir la permanencia en institutos. La adopción plena recién se garantizaría en 1971, durante la gestión de Francisco Manrique frente al MBS.⁵

³ Resolución N° 1379, 22/10/1969.

⁴ Ídem.

⁵ Ley N° 19134, 21/7/1971. Se deroga la Ley N° 13252 de 1948.

Un año antes de la creación de la Subsecretaría del Menor y la Familia, en 1970, se fusionaron el Servicio Nacional de la Minoridad y el de la Familia y la Mujer en la Dirección General de la Minoridad y la Familia. Frente a esta dirección estaba Florencio Varela, quien, como dijimos, unos años después, sería el secretario del Menor y la Familia de la última dictadura.

La creación de la Secretaría: proteger a la familia para enfrentar mejor al “enemigo” interno y externo

En el período 1971-1973, durante las presidencias de facto de los generales Roberto Levingston y Alejandro Lanusse, el ministro de Bienestar Social, Manrique, adquirió un gran poder debido a la importancia de la cartera como articuladora de alianzas y consensos frente a la transición democrática y como plataforma para el lanzamiento de su candidatura presidencial (Osuna, 2017). Debido a esto, se jerarquizaron algunas dependencias y se crearon otras nuevas. A la estructura heredada del “onganiato” de cuatro Secretarías de Estado (Vivienda, Salud, Seguridad Social y Asistencia y Promoción de la Comunidad), se agregaron dos que existían hasta entonces como direcciones dentro de la amplia e indefinida SEPAC: del Menor y la Familia, y de Deportes. Manrique designó como subsecretaria a la profesora Ruth Fernández de Monjardín de Masci, convirtiéndose en la segunda mujer designada para un cargo de esa envergadura en el orden nacional.⁶ Fernández de Monjardín estudió Filosofía y Ciencias de la Educación (UNLP), era profesora en la Escuela Normal de Luján y secretaria pro Universidad Nacional de la ciudad de Luján (UNLU). Se inició en la actividad política en la Unión Cívica Radical y en la Unión Cívica Radical Intransigente, había actuado en el centro de estudiantes (1946-1950) y fue convencional nacional en 1957. Entre 1959-1960 había sido subsecretaria de Acción Social en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Oscar Alende.⁷

En relación con esto, hay varios factores concurrentes para explicar por qué se creó en 1971 la Subsecretaría del Menor y la Familia. Por un lado, por la indudable voluntad política de Manrique de otorgar mayor jerarquía institucional a las áreas claves del MBS, sin temerle al crecimiento de la burocracia estatal como sus predecesores. Por otro lado, en este sentido, la idea de jerarquizar

⁶ Anteriormente, entre noviembre de 1970 y marzo de 1971, Diana Levillier había ocupado el cargo de subsecretaria de Cultura en el Ministerio de Cultura y Educación.

⁷ *La Nación*, 11/8/1971.

esta dirección concretamente surgió cuando la Comisión pro Universidad de la UNLU, a la que pertenecía Fernández de Monjardín, sugirió a Manrique, en una entrevista acordada con el ministro, que el Instituto de menores Ángel T. de Alvear, que dependía del Ministerio de Bienestar Social, podía ser anexado a la Universidad, transformándose en un establecimiento modelo para contribuir al estudio de los problemas de la minoridad. Luego de realizar una presentación del proyecto al ministro, este, tras conocer y escuchar a Fernández de Monjardín, la nombró en el hasta ese momento inexistente cargo de subsecretaria del Menor y la Familia (Malacalza, s/f). Por otra parte, creemos que a medida que crecía la conflictividad social y se iban trazando las características del “enemigo subversivo”, el “lobby” católico fue adquiriendo mayor fuerza para incidir en la definición de ciertas políticas que tradicionalmente consideraban sensibles como la familia. En este sentido, que Varela estuviese frente a la anterior Dirección de la Minoridad es un dato relevante.

A pesar de que Lanusse, en gran medida a través de Manrique, apostó al desarrollo de una estrategia sensible frente a los sindicatos, los trabajadores y los sectores populares, con el fin de amortiguar el conflicto social frente a la transición democrática que vehicularía el Gran Acuerdo Nacional, en su gestión comenzaron a delinearse las características de una estrategia represiva que iría adquiriendo formas más definidas en los años posteriores. En un contexto caracterizado por el incremento de la conflictividad social y las acciones de la izquierda armada, se produjeron avances en la normativa represiva. Como dijimos, por ejemplo, fue creada la Cámara Federal en lo Penal de la Nación para juzgar a quienes cometiesen delitos calificados de subversivos (Pittaluga, 2006). Sin embargo, en la agenda de la gestión de Lanusse y Manrique, fue instalado otro tema que en poco tiempo se asociaría retóricamente con el “enemigo” a combatir y con el problema de la familia: la cuestión de las drogas. Entre las estrategias utilizadas por Manrique en su campaña, como indica Valeria Manzano (2014), también se encontraba la interpelación a “los padres” frente a este problema. De hecho, a finales de 1971, los medios reprodujeron la carta de una madre de familia de clase alta dirigida a Manrique en la que relataba la adicción de su hija a la marihuana y las anfetaminas, con el objetivo de que el gobierno afrontara el problema (Manzano, 2014). En 1972, mientras la policía hacía razias antimarihuana, Manrique creó la Comisión Nacional de Toxicomanía y Narcóticos (CONATON), presidida por él e integrada por delegados de la División de Toxicomanía y las cátedras de Toxicología de la UBA.⁸ Luego, en 1973, fue

⁸ *La Nación*, 11/8/1971.

aprobada la creación del Centro Nacional de Reeducción Social (CENARESO) para la rehabilitación de toxicómanos.⁹ En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, diversos actores proyectaron en la figura del “toxicómano” los rasgos del “enemigo interno”. En la reunión inaugural de la CONATON, por ejemplo, Manrique había indicado que “el consumo de drogas corroe la moral de los jóvenes y los mueve a seguir a grupos que tratan de subvertir el orden social”, y concluía que “la droga” era un problema “de seguridad y de salud” (Manzano, 2014: 61). En 1973, profundizando los acuerdos con los Estados Unidos en la materia, el siguiente ministro de Bienestar Social, José López Rega, firmó un nuevo tratado con el embajador de ese país, Robert C. Hill, y luego expresó: “Nuestro compromiso mutuo es luchar contra el mal de las drogas y de la subversión”. En esta línea, durante su gestión frente al MBS, en 1974, fue sancionada la Ley N° 20771,¹⁰ que creó un instrumento legal para avanzar con la represión en la tenencia de una amplia gama de sustancias, incluso para el uso personal, con prisión, penalidades y la obligatoriedad de realizar tratamientos de “rehabilitación”. Como señala Manzano, esta ley se inscribió en la cadena legislativa creada en 1974 con el fin de delinear al “enemigo interno”, conformar un proyecto represivo, reformar el Código Penal y allanar el camino para la represión militar.

Podríamos afirmar que, en términos generales, desde los tempranos setenta, amplios sectores sociales, militares, religiosos y estatales van confluyendo en un diagnóstico relacionado con el “decaimiento de las estructuras morales” de la juventud a través de la experimentación con drogas y prácticas sexuales más liberales que, en gran medida, se consideraba que eran el resultado del accionar de un enemigo interno, que tenía el objetivo de “debilitar” moralmente a los jóvenes a fin de ser fácilmente cooptados en el futuro para las filas “subversivas”. Manrique y López Rega enfrentaban el “problema de las drogas” con la legislación y los institutos mencionados, pero también, sobre todo este último, como veremos, con iniciativas tendientes a la protección de la familia nuclear.

Desde los años sesenta, efectivamente, se venía produciendo una ruptura generacional que dio lugar a la sociabilidad informal, la flexibilización del cortejo y el noviazgo, la aceptación y legitimación de la experiencia sexual de las jóvenes solteras, la disociación entre la sexualidad y el matrimonio, los avances de la cultura divorcista (Cosse, 2010a y 2010b), las uniones libres y los cuestionamientos a la división de género. En este marco, mientras los ministros

⁹ Ley N° 20332, *Boletín Oficial*, 30/4/1973.

¹⁰ Ver *Boletín Oficial*, 9/10/1974.

referidos comenzaron a incorporar el problema de la juventud y la familia en su agenda programática, con una visibilidad pública mayor que antaño, los sectores integristas y conservadores de la jerarquía eclesiástica coincidieron en que existía una “crisis moral” y desarrollaron planes para “restablecer” el lugar de la familia en la Nación, devolviéndole la fortaleza que debía tener la “célula básica de la comunidad”. La preocupación de la Iglesia por la familia se materializó en la elaboración de diferentes documentos. Por ejemplo, en septiembre de 1973, el Episcopado publicó la “Declaración Pastoral del Episcopado argentino sobre la Familia y la Educación”, que denunciaba un “clima emocional y una disposición favorable al divorcio”, una “lamentable realidad del pecado”, y defendía a la familia como una institución anterior al Estado con derechos naturales y propios.¹¹ En el mismo año, apareció un documento que tuvo trascendencia, llamado “Carta Pastoral colectiva del Episcopado sobre el Matrimonio y la Familia” que, nuevamente, apuntó a defender el carácter divino y natural del matrimonio indisoluble, y rechazaba cualquier posibilidad de modificarlo. Para ello, no solo insistió en que la familia era una institución natural y anterior al Estado, sino que también propuso medidas económicas, sociales y políticas en defensa del matrimonio cristiano con una tónica renovadora.¹² En 1975, el Episcopado estableció que el “Plan Matrimonio y Familia” sería la prioridad de la acción nacional de la Iglesia para 1975 y 1976. Luego, la vigencia de este plan se fue prorrogando temporalmente a lo largo de la última dictadura.¹³

En este contexto, el ministro López Rega adoptó un repertorio de metáforas organicistas para referir a la sociedad y a la familia, y consideró, en línea con el espíritu eclesiástico, que la “célula básica de la comunidad” se encontraba en peligro. Aunque este discurso tendría una fuerte continuidad en los años de la última dictadura, en el tercer peronismo se enlazó con elementos diferentes.

¹¹ “Declaración pastoral del Episcopado argentino sobre la familia y la educación”, *Boletín de la Agencia Informativa Católica* (AICA), n° 874 (anexo), 20/9/1973, pp. 1-8. Tomado de Cosse (2010). Las organizaciones católicas laicas, como la Liga de Madres de Familia, reclamaban a los legisladores que consideraran que el divorcio violentaba la ley natural y moral.

¹² “Documento episcopal sobre matrimonio y familia”, *Boletín de la Agencia Informativa Católica*, n° 880, 1/11/1973, pp. 2-3 y anexo “Matrimonio y familia”, pp. 1-16; “Adhesión de la Liga de Madres de Familia a la Pastoral colectiva del Episcopado”, *Boletín de la Agencia Informativa Católica* (AICA), n° 882, 15/11/1973, p. 5.

¹³ En el *Boletín de la Conferencia Episcopal*, se anunciaba: “Próximos al fin de este año 1976, es bueno recordar que por decisión del Episcopado Argentino se ha prorrogado el lapso para el desarrollo del Programa de Acción Pastoral Matrimonio y Familia, previsto en un principio para el bienio 1975-1976, el tiempo que requiera su ejecución”. Ver *Boletín AICA*, n° 1041, 2/12/1976, p. 13.

La SMYF, según la retórica biologicista de López Rega, representaba la unificación del “pasado y el presente, desembocando en la continuidad genética de la raza y procurando su armónico desenvolvimiento en una niñez protegida en todos sus aspectos, incrementando para ello la unidad familiar, célula básica del organismo social”.¹⁴ La Secretaría estaba presidida por el médico César de la Vega, un funcionario vinculado con el italiano Licio Gelli, de la logia fascista Propaganda Due. Había realizado una extensa carrera masónica que lo llevó a ocupar, entre 1972 y 1975, el cargo máximo (Gran Maestro) de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Ya con Perón en el poder y luego, con María Estela Martínez, fue embajador argentino en Unesco, en Francia y en Dinamarca.

Al cumplirse un año de gestión al frente de la Secretaría del Menor y la Familia, la revista *Las Bases* publicó una nota que explicitaba que la defensa de la “célula básica de la sociedad argentina” era la “concepción justicialista, diametralmente opuesta tanto al individualismo liberal, que deja a la familia librada a su suerte, como al colectivismo marxista, que la convierte en un mero instrumento del Estado”.¹⁵ En esos años, a diferencia de lo que ocurriría, como veremos, a partir de 1976, aún no se atribuía directamente al “enemigo subversivo” toda la responsabilidad frente a la crisis de la familia, sino que se consideraba que existía una campaña internacional, proveniente sobre todo del imperialismo estadounidense, para disminuir la tasa de natalidad en el Tercer Mundo.

Sobre el tema, Karina Felitti (2004 y 2008) ha indicado que en la historia argentina el estigma del “país vacío” existió en distintas generaciones de políticos, médicos y militantes católicos. En la segunda posguerra, el problema poblacional adquirió un carácter geopolítico: era necesario aumentar la tasa de natalidad para defender la soberanía nacional. Una Argentina despoblada, en un mundo cada vez más superpoblado, sería presa fácil para los países necesitados de recursos naturales y excedidos de habitantes. Con la aparición de los anticonceptivos modernos, como la píldora, la planificación familiar y las nuevas formas de cortejo de la década del sesenta, la tendencia declinante de la tasa de natalidad se acentuó, agudizándose también uno de los “males” que se suponía que amenazaban al país. A pesar de que la “Alianza Para el Progreso”

¹⁴ López Rega, José, “Un año de labor del Ministerio del Pueblo en la justicia social en la comunidad organizada. Reseña del ministro de Bienestar Social, D. José López Rega ante el Congreso de la Nación-1974”, Buenos Aires, Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, 1974.

¹⁵ *Las Bases*, n° 117, 29/10/1974.

recomendaba disminuir la tasa de natalidad por las asociaciones que realizaban entre número de habitantes, subdesarrollo y radicalización política, la Argentina intentó promover, en general, sin demasiado éxito, el aumento de la natalidad.

En 1974, el MBS, a través de *Las Bases*, comenzó su campaña contra los presuntos planes del imperialismo tendientes a frenar el crecimiento del país. A principios de 1974, la revista indicaba: “Dramáticas conclusiones de un estudio reservado donde se demuestra que la Argentina está siendo sometida a un plan mundial de esterilidad” y vaticinaba un panorama sombrío: “De seguir así solo se nos abre una perspectiva: desaparecer como pueblo, para favorecer a QUIEN YA LE INTERESA NUESTRO TERRITORIO COMO RESERVA DE MATERIAS PRIMAS”.¹⁶

Según la publicación, los Estados Unidos tendría el plan de esterilizar a las mujeres argentinas “física y psicológicamente” para que “dentro de 25 años (en el año 2000) no hayamos alcanzado ni siquiera los 30 millones de habitantes” con el fin de “avanzar sobre nuestro territorio rico en alimentos con el lógico argumento de que somos muy pocos para tanta fortuna”. La única forma de hacer frente a esta situación era, para la revista, poblando al país con “no menos de 50 millones de seres humanos”.¹⁷ En este marco, criticaban los planes estadounidenses que, desde los años sesenta, proponían controlar las tasas de natalidad en los países con escaso desarrollo socioeconómico. Frente a estos planes de “esterilización” o “castración”, se ensayaron diferentes iniciativas.

Una de estas fue el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974-1977) que planteó la necesidad de aumentar la población por medio del incremento de la tasa de fecundidad, la disminución de la mortalidad y el fomento a la inmigración. El Decreto N° 659/74, firmado por Perón y López Rega el 28/2/1974, dispuso el control de la comercialización y venta de productos anticonceptivos y la prohibición de desarrollar actividades relacionadas con el control de la natalidad.¹⁸ En las consideraciones del decreto, afirmaban que “la persistencia de los bajos índices de crecimiento de la población del país constituye una amenaza” y que, además de factores sociales, económicos y culturales, “existen otros –determinados por intereses no argentinos– que auspician y estimulan modos de vida antagónicos con los que corresponden al destino de un gran país” y que desalientan “la consolidación y expansión de la unidad familiar”.¹⁹

¹⁶ *Las Bases*, n° 84, 5/3/1974, subrayado en el original.

¹⁷ Ídem; *ibidem*, n° 85, 12/3/1974.

¹⁸ *Boletín Oficial*, 8/3/1974; *La Nación*, 16/4/1974.

¹⁹ Decreto N° 659, *Boletín Oficial*, 8/3/1974.

En este marco, también se cuadruplicó el presupuesto asignado a la Secretaría del Menor y la Familia para desarrollar diferentes iniciativas de reforzamiento del núcleo familiar, “pilar de la sociedad moderna”.²⁰ Además de estimular el aumento de la tasa de natalidad, era necesario bajar los índices de mortalidad infantil. Para esto, crearon un plan de “salud materno infantil” impulsado, principalmente, por “la Cruzada de Solidaridad Justicialista”. La familia empezaba a ser definida desde el Estado de forma explícita como “centro de toda preocupación oficial”. Martínez de Perón afirmaba “vamos a poner especial énfasis en los núcleos familiares más expuestos para que puedan ejercer su derecho a la salud, teniendo acceso a una atención médica digna e igualitaria, brindada por equipos especialmente capacitados”.²¹ De acuerdo a la importancia del problema sanitario del paciente —madre o niño—, podía ser atendido en el propio lugar de residencia, en una zona próxima o trasladado a una ciudad que contara con los elementos de diagnóstico y tratamiento. Las autoridades afirmaban: “Si se empieza por cuidar en cada región, en cada ciudad, en cada madre y en cada niño, esta labor hecha en gran escala en todas nuestras provincias permitirá tener futuros ciudadanos sanos y mejor dispuestos para hacer un país también mejor”.²²

En este marco, se les dio impulso, asimismo, a los Centros de Acción Familiar (CAF), que aún hoy existen. El objetivo era “colaborar con la familia en la atención y formación integral del niño en sus aspectos físicos, intelectuales y morales desde que nace hasta su total desarrollo psicosocial en estrecha relación con el desarrollo y fortalecimiento de esa familia”.²³ Aunque, se aclaraba que dentro del grupo familiar, “la misión más trascendente de la mujer es mantener vivos los valores morales de la familia, núcleo básico de la sociedad, en la que ninguna otra institución puede reemplazarla”. El objetivo del CAF era resolver el problema de las familias que debían dejar a sus hijos cuando concurren a sus obligaciones y quedaban “librados a un sinnúmero de riesgos físicos y morales”. Los servicios del Centro también podrían ser utilizados por las mujeres que trabajaban en su hogar de manera remunerada o realizando tareas domésticas, para capacitarse, lograr esparcimiento y renovar “sus energías físicas y espirituales”. Los CAF también se planteaban como espacios de alfabetización, enseñanza

²⁰ *Las Bases*, n° 117, 29/10/1974.

²¹ *Las Bases*, n° 81, 12/2/1974.

²² *Ídem*.

²³ Ministerio de Bienestar Social, “Reunión Nacional de Ministro de Bienestar Social para la aplicación del programa de colonización y centros de justicia social para el despegue de una Argentina potencia”, marzo de 1975.

de oficios, actividades recreativas y artísticas. Entonces, el Centro “compartirá con la familia la responsabilidad de formar los futuros ciudadanos de la Patria, ayudándole a asumir sus derechos y deberes en la formación integral de los hijos. Será como institución la continuación del hogar”.²⁴

Es importante considerar también que en este período hubo importantes aumentos de las asignaciones familiares basados en la “función fundamental que las mismas tienen para la protección de la familia”. En los primeros meses del gobierno, cuando la negociación salarial estaba congelada, se otorgó un incremento del 40%²⁵ y un mes y medio antes del golpe, por medio del Decreto N° 562/76, el gobierno de Isabel Perón estableció otro incremento del 40%.

¿Cómo pensar los límites entre Estado y sociedad? La Secretaría del Menor y la Familia durante la última dictadura

Durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, los dos secretarios de Estado que adquirieron gran relevancia en materia social fueron Santiago de Estrada, en Seguridad Social –que permaneció a lo largo del período 1976-1983–, y Florencio Varela en la SMYF (1976-1979). La gestión de ambos coincidió con el período en que tuvo fuerte peso el diagnóstico de la creciente “amenaza” del “enemigo subversivo” sobre la familia nuclear.

En una conferencia de prensa en 1976, el primer ministro de Bienestar Social, el contralmirante Julio Bardi, señaló que el propósito del MBS era el “fortalecimiento global de la familia a través de las áreas que componen este organismo”, es decir, que la “la célula básica de la sociedad tenga bases sólidas en lo que respecta a vivienda, seguridad social, recreación y salud”.²⁶ La familia, “que es el eje alrededor del cual gira toda la problemática del bienestar”, y no

²⁴ Ídem.

²⁵ Decreto N° 101, *Boletín Oficial*, 23/7/1973.

²⁶ *Boletín MBS*, n° 12, 18/10/1976. Esta preocupación evidentemente era compartida por miembros de otras armas. Por ejemplo, en una ocasión, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Omar Domingo Graffigna afirmó: “La célula fundamental de la república que todos debemos reorganizar debe ser la familia, institución que en muchos países desarrollados está perdiendo vigencia con deletéreas consecuencias. Sabemos lo difícil que es para una joven pareja concretar una familia, por los altos costos de las viviendas y el hecho que ambos cónyuges tengan que trabajar para mantener a los hijos. Nos preocupa, porque es en la familia donde la juventud cumple un papel protagónico, al educar a las futuras generaciones en un ambiente de amor, dialogo, autoridad, responsabilidad y libertad” (*La Nación*, 12/5/1979).

los individuos considerados aisladamente, sería la destinataria de la política de todas las secretarías del Ministerio.²⁷ Según Bardi: “Con una familia fortalecida espiritualmente, cristianamente y con estilo de vida argentino se podrá hacer frente a cualquier tipo de agresión”.²⁸ El refuerzo ideológico y material de ese núcleo social se materializó en diferentes iniciativas, como los aumentos de las asignaciones familiares, el impulso del “Plan de Promoción Familiar”, la capacitación sobre los “roles” dentro de la familia y la creación del Cuerpo de Vigilancia Juvenil para garantizar el control de los menores en la vía pública.

En este contexto, el concepto de “subsidiariedad del Estado” adquirió una fuerza inusitada y se le otorgó a diversos grupos del laicado católico el desarrollo y ejecución de políticas orientadas al “cuidado” de la familia. En un *Boletín* del MBS se afirmaba que “no solo al gobierno le incumbe la responsabilidad de ejecutar programas y acciones”, sino que:

El pueblo todo debe asumir conciencia sobre la necesidad de que estas se cumplan, por lo que resulta propicio que en este año la gama de acciones gubernamentales se unan a las de otras entidades, en especial las de bien público, que tanto colaboran en la acción proteccional. Por ello el Ministerio presentará su auspicio a todo programa, acción u obra que inspirado en objetivos coincidentes, propongan las asociaciones privadas u otras entidades no gubernamentales.²⁹

La importancia otorgada al accionar de las “entidades no gubernamentales” o –como preferían llamarlas los funcionarios del MBS– “entidades de bien público” se tradujo no solo en intentar que la sociedad “resolviera por sí misma sus problemas”, sino que implicó que los roles entre Estado y Sociedad se desdibujaran y resultaran difíciles de discernir. Si bien la frontera entre estos ámbitos siempre es porosa, ya que no funcionan como compartimentos estancos, lo que intentaremos mostrar es que, en algunos casos, los roles directamente se tendían a confundir. El secretario Varela afirmaba: “Es la primera vez que en nuestro país se logra unificar la acción del Estado con la de las instituciones privadas en la obtención de un objetivo común: el afianzamiento y protección de la familia”.³⁰

²⁷ *Boletín MBS*, n° 22, 27/12/1976.

²⁸ *La Nación*, 24/4/1977.

²⁹ MBS, *Boletín Semanal*, n° 121-122, 19-26/2/1979.

³⁰ *La Nación*, 2/10/1978.

Para lograr la “reorganización nacional” no bastaba solo con una “operación quirúrgica”, llevada a cabo mediante el mecanismo represivo basado en la desaparición forzada de personas o en la tortura llevada adelante en los Centros Clandestinos de Detención. Para restaurar la trama social, era fundamental promover un tipo de familia deseable que involucrara aspectos espirituales y económicos. Tanto en el “mundo católico” como en el militar, se consideró imprescindible que las familias contaran con recursos suficientes que permitieran su “preservación”. El Episcopado consideró fundamental que se atendieran los aspectos materiales de la familia. Pero esto también era una propuesta histórica del laicado católico, como las Ligas de Madres y Padres de Familia (Vázquez Lorda, 2012). Para mencionar un caso ilustrativo, durante la dictadura, Carlos Ellif, presidente de Cáritas, además de hablar de la “crisis moral”,³¹ señaló que el otro gran problema de la familia argentina era la situación económica: “La familia atraviesa la misma crisis por la que pasa el mundo. Es la crisis de un cambio de valores que ha sacudido la convivencia en muchos aspectos. La subversión de valores hace que la familia deba soportar ataques”. Asimismo, sostuvo que la familia “en muchos casos está sitiada en su subsistencia. Entonces, si está moral y económicamente sitiada, esa familia no puede cumplir su papel, de ser la célula donde nazca y se cultiven los valores básicos, que son el orden, la seguridad, el amor, la paz y la tranquilidad”.³² Por su parte, Carlos Zaragaza, de la Liga de Padres de Familia, afirmó:

La penetración de la guerrilla en la familia es un proceso que viene desde muy atrás. La incomodidad del hogar a través de casas incómodas produce el éxodo de sus componentes. A nadie le gusta estar incómodo en su casa. Eso naturalmente responde al costo de la construcción [...] Quiero significar que esas casas incómodas determinaban que la gente estuviera fuera del hogar y no se desarrollara la vida dentro de él como debiera ser [...] Creo que si todos estos problemas se producen por una disolución del grupo familiar y por atacar lo que constituye el núcleo de la familia hay que tratar de restablecerlo.³³

Como veremos, la relación entre Iglesia, Estado y sociedad durante la última dictadura fue más allá de la ubicación de cuadros católicos en el Estado, tam-

³¹ *Ibidem*, 2/5/1978. Para considerar las preocupaciones sociales de la Iglesia católica en relación con la familia en el largo plazo, ver Zanatta (1999) y Auza (1987).

³² *La Nación*, 2/5/1978.

³³ *Ibidem*, 8/5/1978.

bién se promovió la activa participación de la militancia católica en diferentes políticas estatales. Según puede leerse en distintos documentos, esto permitía ampliar las bases de sustentación del régimen, aprovechando la influencia de la Iglesia en amplios sectores de la sociedad civil. En el documento llamado “Directivas del Estado Mayor del Ejército” se defendía el papel de la Iglesia “para la consecución de los objetivos básicos que se apoyan en los valores de la moral cristiana”. Según Martín Obregón (2005), el catolicismo era necesario como instrumento ideológico y la Iglesia era clave en la búsqueda de legitimidad política. Incluso, los sectores “renovadores” —entre los que se encontraba el obispo de Santa Fe, monseñor Vicente Záspe—, además de retomar los tópicos del conservadurismo (la moral sexual y familiar, y el anticomunismo), hacían un llamado similar al de los conservadores: “Todos debemos reorganizar la Nación: las Fuerzas Armadas, desde una unidad sin amenaza de fractura, la juventud, los padres de familia, los jueces, los docentes, los medios de comunicación social, los políticos, los sindicatos, los empresarios y la Iglesia” (Obregón, 2005: 75).

Además de los funcionarios ministeriales de extracción católica mencionados, en distintas actividades vinculadas con la promoción de la familia participaron sectores religiosos y del laicado. Entre los grupos que adquirieron gran protagonismo encontramos el Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, las Ligas de Madres y de Padres de Familia, y la Acción Católica Argentina. También participaba activamente la Liga Pro Comportamiento Humano, más difícil de clasificar, pero que era una “entidad de bien público” con distintos campos de acción de carácter entre filantrópico y conservador. Estos sectores aparecen constantemente en las acciones de la Secretaría del Menor y la Familia, pero también en los medios de comunicación, en los que difundían mensajes en consonancia con las autoridades de la Iglesia y también del MBS, con lo que mostraban un universo en común de ideas y propuestas.

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) fue uno de los grupos del laicado que estuvo fuertemente involucrado con estas políticas. Surgió en 1948 por iniciativa de algunas mujeres de la parroquia San Martín de Tours de Recoleta que se encontraban para intercambiar experiencias inspiradas en otros movimientos similares de los Estados Unidos, Europa y Canadá. Tenía un carácter autónomo respecto de las organizaciones de la Acción Católica y, pese a las resistencias iniciales, fue reconocido por la jerarquía. Según los estatutos aprobados en 1959, su propósito era la promoción del matrimonio cristiano y la espiritualidad conyugal mediante la intensificación de la vida comunitaria y el apostolado familiar, siendo uno de sus propósitos centrales el dictado de cursos de catequesis prematrimonial para novios, que abordaban reflexiones

sobre el amor, las características del noviazgo, y aspectos legales y económicos del matrimonio y la sexualidad, en sintonía con la prédica de los médicos católicos. Desde mediados de los años sesenta, se dedicó a gestionar adopciones al organizar charlas y encuentros de padres adoptantes en diferentes parroquias y en la sede de la organización (Villalta, 2010).³⁴ Durante la última dictadura estuvo dirigido por Franklin Obarrio.³⁵ En esos años, diferentes miembros del grupo estuvieron vinculados con la apropiación de niños y uno de los involucrados, Francisco Martín Zabalo, fue detenido y procesado en los últimos años por la justicia por los delitos cometidos.³⁶

Las Ligas de Madres y Padres de Familia también tuvieron una importante presencia en las políticas de la SMYF. Estos grupos del laicado surgieron por iniciativa del Episcopado argentino a mediados del siglo XX con el objetivo expreso de “salvar la familia”. En este emprendimiento, jugó un papel preponderante monseñor Manuel Moledo (1907-1988), un teólogo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quien además ejerció como profesor en los Cursos de Cultura Católica. La intervención sobre la familia se realizaba, en gran medida, en la clase baja, mediante una labor asistencialista (reparto de alimentos, vestimenta). Sin embargo, la defensa moral y la vigilancia de las costumbres revistieron un carácter prioritario en el despliegue de las actividades de las Ligas hacia el resto de la sociedad. Moledo definía a las Ligas como movimientos “dispuestos a colaborar con la Iglesia en todo lo que concierne al bien de la familia, en todos los planos en que la familia actúa: al bien cultural, al bien material, al bien económico, al bien espiritual y al bien moral” (Vázquez Lorda, 2012).

En estos años, fue muy estrecha la relación entre las distintas asociaciones de padres católicos y la SMYF del MBS. Por ejemplo, en el Primer Congreso Nacional de Padres de Familia realizado en el colegio Lasalle, en 1978, estuvo presente

³⁴ Según Cosse, el MFC en 1973 atravesaba una profunda y conflictiva radicalización política como mostraba el compromiso resuelto de las autoridades con la “teología de la liberación”, hasta que en 1974 fue intervenido por el Episcopado y restauró la autoridad de los sectores más conservadores (2010b: 145).

³⁵ Abogado de la UBA, militante del Partido Demócrata Cristiano hasta 1966. Desde entonces tuvo una intensa actuación en la Pastoral Juvenil y luego presidió con su esposa el Movimiento Familiar Cristiano de Buenos Aires. Entre 1981 y 1985 fue presidente de la comisión de Justicia y Paz instituida por el Episcopado Argentino, que integró hasta 1987. Desde 1965 hasta la actualidad ejerce la profesión de abogado en el campo del derecho civil y empresario. Abogado ante el tribunal eclesiástico. Tuvo actuación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ver <http://www.e-contexto.com.ar/archivos/autores/index.php?id=25>.

³⁶ Ver *Página 12*, 16/5/2013, “La Iglesia y la apropiación de bebés”, disponible en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-220091-2013-05-16.html>

el secretario Varela, junto con Videla, Pío Laghi y monseñor Plaza.³⁷ Luego, en octubre de 1978, se realizó en el predio de la Sociedad Rural Argentina la EXPOFAM 78, “una exposición para la familia”, con la organización de la Liga de Padres de Familia y el auspicio de los ministerios de Bienestar Social y de Cultura y Educación.³⁸

El laicado católico ligado con la problemática de la familia, además de estar involucrado en los planes del MBS, difundía sus propósitos en los medios de comunicación y, fundamentalmente, en el diario *La Nación*, a través de la columna de opinión “La familia, tema de hoy”. En este diario, también encontró un espacio de expresión otro de los grupos que participaría de las políticas ministeriales: la “Obra Orientación para la Joven”. Fue creada a mediados de los años setenta y tuvo como objetivo albergar a chicas jóvenes que llegaban a las grandes ciudades del país en busca de trabajo. Según su presidenta, María Teresa Pérez de González: “Nuestra experiencia nos indica que las chicas llegan del interior del país, padecen –fundamentalmente– una falta de familia. Porque, aunque la tengan, existe un gran porcentaje de chicas entregadas por su familia a otras familias que las mantienen a cambio de trabajo”.³⁹ También mencionaba otros casos, chicas que vivían con su madre y su padrastro o que eran hijas de madres solteras: “Un ambiente a todas luces poco apropiado para su desarrollo”. Esta organización católica que difundía su voz en el diario *La Nación* y en las actividades del MBS dedicándose a “orientar” y “contener” a estas jóvenes “sin familia”, aún existe.

Otro de los actores centrales en estos años que colaboró en este tipo de políticas, a partir de una labor orientada a la niñez, fue Oscar Schiariti, miembro fundador, junto con Francisco Rizzutto, de la Liga Pro Comportamiento Humano. Este grupo existía desde la década del cincuenta y una de sus misiones fue construir “decálogos” moralizantes que apuntaban a difundir valores éticos que debían ser respetados en el ámbito laboral, educativo, en la función pública, frente a los niños, etcétera. Establecieron que el 31 de marzo se celebraría “el Día del Comportamiento Humano”, iniciativa que se cumplía estrictamente en el seno del MBS. Aunque la Liga también fue integrada en las iniciativas re-

³⁷ *La Nación*, 9/9/1978.

³⁸ Según el diario *La Nación*, “ofrecía un panorama renovado de juegos y espectáculos para niños, simultáneas de ajedrez, modas, clases de cocina, cerámica, espectáculos artísticos, cine, conferencias, charlas, educación vial, *stands* comerciales con productos y elementos y servicios para el grupo familiar. Asimismo se atienden consultas sobre aspectos de la problemática familiar y se entrega material alusivo” (*La Nación*, 2/10/1978).

³⁹ *La Nación*, 15/5/1978.

lacionadas con la familia del Ministerio, fue uno de sus principales miembros fundadores, Schiariti, quien adquirió un gran protagonismo, sobre todo en 1979, cuando se festejó a nivel local e internacional “el Año del Niño y la Familia”. A lo largo de la dictadura, y, fundamentalmente en 1979, lo encontramos proponiendo y participando activamente en las iniciativas del MBS ligadas con los niños. Todas estas organizaciones de laicos aparecen constantemente en las acciones de la SMYF y en distintos medios, difundiendo mensajes en consonancia con las autoridades de la Iglesia y del MBS.

Estado y “mundo católico” en la conformación del “Plan de Promoción Familiar”

A lo largo de 1977, se evidenciaron los vínculos entre el Ministerio y la jerarquía eclesiástica. Esto se materializó, por ejemplo, en el dictado de cursos, en el marco del “Programa Nacional de Capacitación”, aprobado por la Resolución N° 223/77 de la SMYF,⁴⁰ para “educadores familiares”, destinado a funcionarios, profesionales, docentes, padres y madres de familia. En estos cursos, que tenían una duración de dos meses, participaban como docentes los funcionarios de la SMYF, entidades ligadas al mundo católico –como la Confederación de Obras Privadas de Bienestar Social–,⁴¹ miembros de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires⁴² y representantes del Plan Matrimonio y Familia

⁴⁰ *Boletín del MBS*, n° 37, 9/5/1977.

⁴¹ Diversas entidades llamadas de “bien público”, con características similares, estaban vinculadas con el Ministerio de Bienestar Social y se nuclearon, a partir de 1964, en el Consejo Coordinador de Obras Privadas de Bienestar Social (CONDECOORD). Estas entidades estaban dirigidas, al igual que antaño, por mujeres pertenecientes a las elites tradicionales argentinas que eran militantes católicas. Si analizamos detenidamente las redes de pertenencia de estas mujeres, también veremos que fueron miembros destacados de la Acción Católica. Por sus características, estas entidades fueron algunas de las interlocutoras privilegiadas del MBS en su conjunto, por sus labores tendientes a suplir las acciones de “asistencia social”.

⁴² A pesar de que la Escuela de Salud Pública de la UBA, en los documentos ministeriales, es reiteradamente mencionada como espacio en el que se realizaron distintas jornadas sobre la problemática de la familia y, en este caso, como participante en los cursos dictados sobre la cuestión, al consultar los archivos de esos años de esta dependencia de la Facultad de Medicina de la UBA no aparece ningún registro que dé cuenta de esta vinculación. Según lo que nos han informado en la biblioteca de la institución, después de la dictadura, “se quemaron muchos documentos”. Aunque no podamos verificarlo, es probable que este hecho nos explique la inexistencia de fuentes sobre estos cursos.

del Episcopado.⁴³ En Tucumán, según un boletín ministerial, para el dictado del curso estuvo designado el presidente de la Acción Católica Argentina, Eduardo Madero,⁴⁴ como representante de la Iglesia, y por la Escuela de Salud Pública (UBA) participó su interventor, el médico Héctor Raúl Ramó.⁴⁵ Asimismo, se dieron estos cursos en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Avellaneda⁴⁶ y San Isidro. Este último estuvo dirigido a “directivos de instituciones de bien público, profesionales, docentes y padres de familia de la zona”.⁴⁷ Por su parte, en los Institutos de Menores y de Ancianos dependientes de la SMYF, existían capellanes que participaban en las jornadas sobre estas problemáticas.⁴⁸ Por ejemplo, en uno de los principales Institutos de Menores, llamado “Mercedes de Lasala y Riglos”, se realizaron “jornadas sacerdotales para elaborar planes de trabajo para el 77 en las diferentes áreas de la carterá”.⁴⁹

En estos años, desde el Ministerio se creó una Coordinación eclesial presidida por el monseñor Antonio Maggi.⁵⁰ Así como los católicos (laicos y religiosos) participaban en las jornadas organizadas por el MBS vinculadas a la familia, los funcionarios adherían y participaban en los eventos del Episcopado y del laicado relacionados con la misma problemática. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Argentina –con la adhesión del MBS–, organizó las I Jornadas Nacionales de Pastoral de la Minoridad y la Familia en 1978, que, desde entonces, se realizaron todos los años. En ellas, participó el Comité Nacional del Programa Pastoral Matrimonio y Familia del Episcopado (dirigido por el presbítero Carlos Pandelo), la Liga de Madres de Familia y el Movimiento Familiar Cristiano, entre otros, sumando en total setenta delegados de la Iglesia y el laicado de todo el país. El acto de apertura estuvo a cargo del arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado, cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien manifestó el interés de la Iglesia por el desarrollo del Programa de Acción Pastoral Matrimonio y Familia. También estuvieron presentes como expositores a cargo de los “distintos temas técnicos con que se ilustraron los trabajos de las

⁴³ *Boletín del MBS*, n° 23, 3/1/1977.

⁴⁴ Madero era un arquitecto ligado a una familia tradicional de la elite argentina. Fue el presidente nacional de la Acción Católica durante la dictadura, y en el período 1977-1985 fue también miembro de las Comisiones Nacionales para las prioridades Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina.

⁴⁵ *Boletín del MBS*, n° 37, 9/5/1977.

⁴⁶ *Ibidem*, n° 53, 29/8/1977.

⁴⁷ *Ibidem*, n° 65, 21/11/1977.

⁴⁸ *Boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA)*, n° 1110, 30/3/1978.

⁴⁹ *Boletín del MBS*, n° 30, 21/3/1977.

⁵⁰ *Ídem*.

Jornadas”, varios funcionarios de la smyf: José Ernesto Los Santos –director del Servicio Nacional de Rehabilitación y Capacitación de Ciegos del MBS–, Cecilia Pérez de Gracia –directora del Servicio Nacional del Anciano del MBS–, Nélide Secreto –directora nacional de la Minoridad y la Familia del Ministerio–, el secretario de Estado del Menor y la Familia, Florencio Varela, y el ministro Bardi.⁵¹ En el *Boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina* (AICA), se dijo de Secreto, Varela y Bardi, quienes tuvieron a cargo las conclusiones durante el acto de cierre:

Pusieron de manifiesto el deseo de coordinar tanto la acción evangelizadora y catequística, como la coordinación a nivel nacional junto a una puesta en marcha de la acción con la familia. Un mensaje del ministro de Bienestar Social de la Nación contralmirante Bardi, comprometió la opinión del Poder Ejecutivo para la recuperación del valor de la persona humana y alentó a proseguir la obra de evangelización y promoción de menores, ancianos y ciegos.⁵²

Meses más tarde, mediante la Resolución N° 237/78 de la smyf, se aprobó el Plan de Promoción Familiar y, luego, la Resolución N° 499, constituyó formalmente la Comisión Nacional del Plan, presidida por el secretario del Menor y la Familia, Varela, e integrada por la subsecretaria del Menor y la Familia, Graciela Borzone;⁵³ la directora del Servicio Nacional del Menor y la Familia, Nélide Secreto; el coordinador de la Subárea de Asistencia y Coordinación, Ángel Castro; la jefa del Servicio Nacional del Anciano, Edith M. Pazos de Velar; Félix Lafiandra, asesor de gabinete, y “los docentes que intervinieron en los seminarios de educación familiar dictados por este organismo”: Beatriz Balián,⁵⁴ parte del grupo de los sociólogos católicos de la UCA, y el presbítero

⁵¹ *Boletín AICA*, n° 1110, 30/3/1978; *Boletín AICA*, n° 112, 13/4/1978; *Boletín del MBS*, n° 103-104, 18/9/78-25/9/1978.

⁵² *Boletín AICA*, n° 112, 13/4/1978.

⁵³ Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. En la administración pública nacional ocupó los cargos de asesora letrada del Consejo Nacional de Protección de Menores, de la dirección nacional de la Minoridad y la Familia (1963-66 y 1966-71), coordinadora del área de asesoría e investigación jurídica de la Secretaría del Menor y la Familia (1973-1974 y 1976-1977) hasta su acceso a la Dirección Nacional de los Servicios del Menor y la Familia (1977). *Boletín del MBS*, n° 68, 12/12/1977.

⁵⁴ Beatriz Balián de Tagtachian es licenciada (1972) y doctora en Sociología (1996) por la Universidad Católica Argentina. Después de su gestión en el MBS, fue directora del Departamento de Sociología de la UCA (1981), directora académica de la Fundación Pérez Companc (1993-1994),

Carlos Pandelo. Como hemos visto, este último representaba el Plan de Acción Pastoral Matrimonio y Familia del Episcopado argentino. La Junta Ejecutiva del Plan estaba presidida por la subsecretaria Borzone y conformada por los actores mencionados, pero, por medio del artículo 3, a esa lista se agregó un conjunto de entidades perteneciente al laicado y al Episcopado.⁵⁵ Luego, por medio de la Resolución N° 502, se incorporó a otras “entidades de bien público”, como la Federación de Iglesias Evangélicas, el Consejo Argentino de Alcoholismo, la Obra de Protección a la Joven, la Obra de Protección al Menor, la Federación Salesiana de Padres de Familia, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, la Asociación de Rectores de Enseñanza Privada y la Federación Argentina de Mujeres Universitarias.

A diferencia de las políticas sociales concretas destinadas a la familia del MBS, el Plan de Promoción Familiar revestía un carácter centralmente programático e ideológico que los funcionarios también consideraban pedagógico y educativo. La SMYF, como ninguna otra dependencia del MBS, consagró de manera explícita y contundente la relación entre el “mundo católico” y el Estado, más allá de las filiaciones religiosas de los funcionarios. Dichos planes le otorgaron un sentido programático a toda la labor ministerial relacionada con las políticas hacia la familia que, a su vez, atravesaron a casi todas las secretarías dependientes del MBS. El ministro Bardi reafirmó que el propósito del plan era “preservar los valores esenciales para el desarrollo individual y social de los núcleos familiares”, en un contexto en que “una ideología intrínsecamente perversa busca un medio más de conquistarnos y esclavizarnos, en espíritu y cuerpo”. Sin embargo, destacó que en la Argentina “la familia es algo presente y vigoroso, donde se anidan reservas capaces de rechazar las afecciones que producen deformidad social”.⁵⁶

vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA (1999-2001) y desde el 2009 se desempeña como vicerrectora de Asuntos Académicos de la misma universidad. En 2010 fue incorporada por la Academia Nacional de Educación como miembro de número. Ver <http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/cartelera/beatriz-balian/>

⁵⁵ Franklin Obarrio por el Movimiento Familiar Cristiano (MFC); el arquitecto Aurelio Rafael Vargas, y los abogados José M. Boselli y Francisco Gil Roura por la Liga de Padres de Familia; Liva Chamorro de Castillo por el Ejército de Salvación; Roberto Bonnani por el Instituto de Asistencia, Promoción e Investigación Familiar; Oscar Schiariti por la Liga Pro Comportamiento Humano; Lidya de Magaldi por el Consejo de Coordinaciones de Obras Privadas de Bienestar Social; Lidia Traverso de Bocci por la Liga de Madres de Familia; Jorge di Gennaro, por Cáritas Buenos Aires; Mario Zabala por la Confederación Argentina de Uniones de Padres de Familia; Enrique Fabbri por el Centro de Investigación y Acción Social; el arquitecto Carlos Alberto Sabatté por la Junta Argentina de la Acción Católica.

⁵⁶ MBS, *Boletín semanal*, n° 90, 12/6/1978.

En la “Fundamentación” del Plan, se afirmaba que para “lograr el pleno desarrollo de las potencialidades del hombre” era necesario afianzar, respetar y proteger el núcleo familiar, en el que se forma “la personalidad social del niño” y del futuro adulto, ya que “los elementos indispensables para la formación y existencia de personalidades sanas que integrarán sociedades más equilibradas se dan indiscutiblemente en un núcleo familiar integrado que supere los naturales desajustes y evite caer en el conflicto destructivo”. En el contexto diagnosticado de “crisis de la familia”, se consideraba que se producía el “abandono material y/o moral de los hijos, problemas de desintegración o inestabilidad, agresiones en las relaciones cotidianas y otras manifestaciones”.⁵⁷

El objetivo general del plan era “implementar una política tendiente al fortalecimiento y protección de la familia mediante la acción coordinada de las instituciones del sector público y privado”. Se pretendía aplicar, como hemos señalado, el principio de subsidiariedad, en el sentido de participación de los organismos públicos en los diferentes niveles estatales (nación, provincia, municipio), pero también de las entidades de bien público, sobre todo, las dedicadas a la familia que, en general, como hemos visto, eran en su mayoría católicas. Entre los objetivos particulares se destacó: “Fortalecer y dinamizar, a través de una conveniente educación, los roles de cada uno de los integrantes en forma tal que se adapten al crecimiento de los mismos y logren una adecuada comunicación”; “proporcionar conocimientos referentes a la dinámica interna de la familia”; “desarrollar, propiciar y difundir investigaciones y experiencias relativas a orientación, educación y tratamiento familiar”, y “coordinar acciones con los organismos específicos cuya temática sea la preservación del núcleo familiar”.⁵⁸

El Plan estaba organizado en niveles. El primero era de “sensibilización”, que resaltaría los valores familiares a través de mensajes radiales y televisivos, afiches, notas periodísticas, exposiciones y paneles. El segundo era “de orientación familiar”, que buscaba brindar asesoramiento técnico y difundir investigaciones y experiencias que asumieran el enfoque de familia en las diversas áreas de asistencia. Para llevar a cabo estas iniciativas, se pretendía realizar una coordinación institucional que involucrara a las instituciones del sector público y privado que realizaran una labor educacional, sanitaria o recreativa, y que tomaran como destinataria a la familia. Los modos de acción prioritarios eran los seminarios, los cursos de educación familiar que hemos mencionado,

⁵⁷ Ídem.

⁵⁸ Ídem.

la difusión de investigaciones y experiencias específicas, y la elaboración de documentos sobre orientación familiar, vocacional y recreativa.

Dada la fuerte confluencia ideológica entre la Iglesia, el laicado católico y los funcionarios estatales alrededor del diagnóstico sobre el problema de la familia argentina, los principales actores del campo católico fueron incorporados a múltiples acciones estatales que promovieron la importancia del núcleo familiar, como fue el caso de la SMYF.

A modo de cierre

En este capítulo estudiamos la conformación y derrotero de la Secretaría del Menor y la Familia del MBS en el período 1971-1979, aunque encontramos el origen de su estilo de intervención e, incluso, a los actores principales de esta agencia en 1957, durante la dictadura “Revolución Libertadora”.

Como pudimos observar, desde 1971, el “problema de la familia” fue adquiriendo un papel crecientemente relevante en la agenda del Estado y del MBS. Se produjo una conexión de sentidos entre el diagnóstico de la “crisis moral” (relacionado con las prácticas de las familias –padres, jóvenes y niños–) y el avance del enemigo “interno” y “externo”. Desde el MBS de Manrique, además de crearse la secretaría específica, se atendió particularmente al “problema de las drogas”, como parte del progresivo “decaimiento de las estructuras morales”. José López Rega profundizó estas iniciativas a partir de su propio diagnóstico de “crisis de la familia” y, principalmente, promovió políticas natalistas y de protección de la familia. Durante la última dictadura, la política del MBS en su conjunto tuvo como fundamento el restablecimiento de la familia nuclear, entendida como el pilar básico de la sociedad occidental y cristiana. En estos años, a su vez, observamos que la coincidencia de lecturas y propuestas entre los principales funcionarios y el “mundo católico” llevó a que se desdibujaran los límites entre Estado y sociedad a la hora de enfocar las políticas hacia la familia.

En suma, observamos que desde mediados de los años cincuenta hasta finales de los setenta existió un estilo de intervención común que se institucionalizó en la secretaría estudiada y que implicó una agenda y un perfil de funcionario comunes, que se forjaron en un marco de amplio cuestionamiento a las formas de las relaciones familiares e intergeneracionales que habían existido hasta el período analizado.

Bibliografía

- Auza, Néstor (1987). *Aciertos y fracasos sociales del catolicismo argentino*. Buenos Aires: Docencia.
- Cosse, Isabella (2010a). *Pareja, sexualidad y familia en Buenos Aires (1950-1975)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2010b). “Una cultura divorcista en un país sin divorcio: la Argentina de 1956 a 1975”. En Cosse, Isabella; Felitti, Karina y Manzano, Valeria, (eds.), *Los '60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina*, pp.131-168. Buenos Aires: Prometeo.
- Felitti, Karina (2004). “Una política demográfica nacional: debates y repercusiones del simposio sobre política de población para la Argentina (1969)”. Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tandil.
- (2008). “La ‘explosión demográfica’ y la planificación familiar a debate. Instituciones, discusiones y propuestas del centro y la periferia”. *Revista Escuela de Historia*, vol. 7, n° 2, pp. 1-20.
- Malacalza, Leonardo (s/f). “La Universidad Nacional de Luján: entre utopías, mitos y realidades”. Universidad Nacional de Luján: Concurso Ensayos 35° aniversario de la creación. Disponible en file:///D:/usuario/Downloads/lujan%20univ%20historia%20de%20Malacalza.pdf
- Manzano, Valeria (2014). “Política, cultura y ‘el problema de las drogas’ en la Argentina, 1960-1980s”. *Apuntes de Investigación del CECYP*, n° 24, pp. 51-78.
- Obregón, Martín (2005). *Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del “Proceso”*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Osuna, María Florencia (2017). *La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar Social entre dos dictaduras (Argentina, 1966-1983)*. Rosario: Prohistoria.
- Pittaluga, Roberto (2006). “La memoria según Trelew”. *Cuadernos del CISH*, n° 19-20, pp. 81-111.
- Sarrabayrouse Oliveira, María José y Villalta, Carla (2004). “De ‘menores’ al ‘Camarón’: itinerarios, continuidades y alianzas en el Poder Judicial”. Actas del II Congreso Nacional de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

- Vázquez Lorda, Lilia Mariana (2012). “Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar: Las Ligas de Madres y Padres de Familia (Argentina, 1950-1970)”. Tesis de Maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés.
- Villalta, Carla (2009). “De secuestros y adopciones: el circuito institucional de la apropiación criminal de niños en Argentina (1976-1983)”. *Historia Crítica*, n° 38, pp. 146-171.
- (2010). “Imitar a la naturaleza. La adopción de niños en los años 60: entre ficciones legales y prácticas consuetudinarias”. En Cosse, Isabella; Felitti, Karina y Manzano, Valeria, (eds.), *Los 60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- (2012). *Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños*. Buenos Aires: Ediciones del Puerto.
- Zanatta, Loris (1999). *Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1943 - 1946)*. Buenos Aires: Sudamericana.

Actores trasnacionales y proyectos de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973)*

Gabriela Gomes

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión integral necesariamente condensada sobre el rol que asumieron actores trasnacionales en la promoción de la construcción de vivienda social en Buenos Aires. Mostraremos que la escala trasnacional es clave para comprender cómo en distintos países se implementaron políticas habitacionales similares. En el marco de la Guerra Fría, la problemática urbana excedió los límites nacionales y se convirtió en un problema político de escala trasnacional. Las agencias internacionales jugaron un rol importante en materia de investigación y financiamiento de planes de desarrollo y alentaron las reformas rurales y urbanas. Esas políticas podrían ser leídas como parte de una estrategia más amplia orientada a extender y promover el anticomunismo global y trasnacional que en América Latina se potenció luego de la Revolución cubana y la posterior Alianza para el Progreso en 1961. A partir del rol desplegado por las agencias internacionales pertenecientes al esquema de la Organización de las Naciones Unidas y el sindicalismo libre estadounidense, se produjo un notable impulso en la construcción de viviendas y adquirió legitimación la planificación urbana a escala trasnacional. Si durante la segunda mitad del siglo xx los enfoques sobre el problema habitacional variaron al compás de la coyuntura internacional, cabe preguntarnos por qué se adoptaron determinados modelos y no otros.

* Agradezco la lectura atenta y los comentarios de Ernesto Bohoslavsky y Jorge Cernadas. Versiones preliminares de este texto fueron discutidas en el Programa de Historia Contemporánea de la UNGS que dirige Daniel Lvovich y en el II Colóquio Internacional sobre Violência Política no século xx de 2017, en la ciudad de Río de Janeiro.

Para los militares de la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), la proliferación de los asentamientos informales y la gran concentración poblacional en las urbes eran interpretadas como una “anormalidad”, estigma del “subdesarrollo” y una potencial “amenaza” para la estabilidad social, la propiedad privada y la seguridad nacional. Asimismo, la erradicación de las villas de emergencia del área metropolitana y la política habitacional orientada a los sectores populares fue presentada como parte de su política social que no escatimó en la represión para implementarla. Así, la vivienda social fue un instrumento gubernamental destinado a normalizar los espacios cotidianos de los sectores populares. El Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) de la dictadura estuvo marcado por una impronta profiláctica social urbana, que se profundizaría durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Al mismo tiempo, la vivienda social sirvió para generar respaldo entre los sectores más concentrados de la industria de la construcción.

En ese trabajo, abordamos una dimensión específica entre Estado y sociedad: el análisis de las políticas de vivienda social promovidas por actores ligados a determinadas agencias internacionales. Particularmente, se analizan las políticas de intervención social del Estado en materia de vivienda destinada a los sectores populares durante la dictadura, en el barrio Villa Lugano, ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La dictadura impulsó un ambicioso plan de modernización urbana a partir del impulso a la obra pública. Así, la creación de conjuntos habitacionales fue de la mano con la erradicación de las *villas miseria*. Dichas políticas se llevaron a cabo en un contexto en el que la noción de “desarrollo” era sinónimo a la erradicación de los asentamientos. Se trata de dar cuenta de las formas de cooperación entre agencias internacionales, profesionales y organismos públicos en torno a las políticas habitacionales. Para comprender dicha cuestión, planteamos que el análisis de toda política de vivienda social orientada a los sectores de bajos recursos desplegada en el contexto de la Guerra Fría requiere ser analizada a escala trasnacional, para comprender mejor cómo el anticomunismo trasnacional adquirió lógicas y dinámicas propias en cada país. Si bien la política habitacional no puede ser reducida a la dinámica anticomunista trasnacional, nos interesa abordar cómo la problemática urbana a partir del aumento de las *callampas*, *favelas*, *villas miseria*, *tugurios*, etcétera, se convirtió en una preocupación central de los gobiernos y los múltiples organismos internacionales, cuáles fueron sus estrategias de intervención y los discursos sobre la erradicación de dichos asentamientos. La escala trasnacional nos permitirá mostrar las distintas estrategias gubernamentales que, simultáneamente, buscaron atender el déficit habitacional y la demanda

de los organismos internacionales que operaron como actores políticos globales. Las estrategias de autoconstrucción popular y el desarrollo comunitario fueron presentados en clave modernizante y se convirtieron en un espacio de disputa entre los funcionarios nacionales y los elencos provenientes de organizaciones no gubernamentales, ya sean católicas o laicas.

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se aborda la vivienda social como problema político transnacional al atender al rol que desempeñaron los organismos internacionales y los actores no gubernamentales frente al problema de la vivienda en América Latina. En la segunda, se revisan los principales antecedentes de las políticas de vivienda social para contextualizar mejor los planes y políticas habitacionales que son objeto de este capítulo. Asimismo, para comprender el gran impulso otorgado por el Estado a la construcción masiva de viviendas durante la dictadura, es preciso revisar la situación en la que se encontraba la industria de la construcción antes del golpe de 1966 y las presiones que ejerció dicho sector. En la tercera, se analizan los principales proyectos y la formación de agencias estatales destinados a formular las políticas de vivienda social que se pusieron en marcha entre 1966 y 1973. Como mencionamos antes, prestaremos atención al conjunto urbano de alta densidad: el Barrio General de División Manuel Nicolás Savio (1969-1985), popularmente conocido como Lugano I (1970) y Lugano II (1970-1973).

La vivienda social como problema político transnacional

En el marco de la Guerra Fría, hubo múltiples fuentes de financiamiento para la autoconstrucción asistida, la construcción de viviendas y para los planes de erradicación de asentamientos informales. Surgieron una serie de agencias internacionales y organizaciones transnacionales vinculadas al laicado católico que se ocuparon de promover planes de vivienda social y soluciones habitacionales. Su mayor área de influencia se concentró en países de África, Asia y América Latina, donde el déficit habitacional se tornó un problema especialmente complejo.

Los organismos internacionales y el problema de la vivienda en América Latina

Durante los años cincuenta, el proceso de industrialización produjo un acelerado crecimiento de las áreas metropolitanas latinoamericanas y se profundizó la crisis

habitacional.¹ Eso se tradujo en la proliferación de asentamientos informales, que obligó a los Estados a prestar atención al problema de la vivienda visto como síntoma de “atraso”. Hacia 1950, el Banco Mundial (BM) difundió el término “Tercer Mundo” para referirse a los países “subdesarrollados” política, económica y culturalmente, caracterizados por una pobreza extendida. En 1951, los documentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enunciaban el objetivo de diseñar políticas y medidas concretas “para el desarrollo económico de los países subdesarrollados”. En ese contexto, proliferaron centros y agencias transnacionales dedicados a los “problemas de desarrollo del ‘Tercer Mundo’ y a ‘perfeccionar’ a profesionales de esa parte del planeta” (Escobar, 2007: 29). Por su papel en el desarrollo de los pueblos del “Tercer Mundo”, el BM operó como actor político y financiero en la región. Su influencia en la difusión de ideas para apoyar proyectos financieros debe ser entendida en el marco de la infraestructura de poder global que tuvo a los Estados Unidos a la cabeza, tanto por su rol determinante en la creación de dicho organismo como en la dirección de sus políticas (Mendes Pereira, 2010).

En el marco del paradigma modernizador, los organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideraron la transformación del hábitat como un poderoso instrumento de cambio social.² En buena medida, las políticas habitacionales estuvieron formuladas de acuerdo a los criterios de la burocracia internacional correspondiente a los organismos vinculados al sistema de la ONU. Eso explicaría por qué la preocupación por el desarrollo urbano formó parte de la agenda de casi todos los países de forma simultánea mediante programas de desarrollo muy similares entre sí. Los organismos internacionales sugirieron llevar adelante los Planes Reguladores como un mecanismo para imponer un orden racional ante el crecimiento descontrolado de las ciudades, producto de las migraciones internas. Los asentamientos informales fueron percibidos como una “anormalidad” en expansión y estigma del “subdesarrollo”, por lo que debían ser erradicados.

Asimismo, se trató de una problemática compartida por los científicos sociales especializados en la cuestión urbana. Los organismos internacionales

¹ La población del subcontinente se incrementó en un 60% en veinte años: pasó de 112 millones de habitantes en 1930 a 170 millones en 1950 (Del Pozo, 2002: 123).

² Sobre el problema de la teoría del desarrollo y sus implicancias en la intelectualidad y en las ciencias sociales de América Latina, así como la carga peyorativa y de dominación que lleva implícita la categoría de “Tercer Mundo”, que tiende a homogenizar las condiciones de vida de manera universal, ver Escobar (2007).

difundieron conceptos como “ayuda mutua”, “esfuerzo propio” y “autoconstrucción” junto al rol supletorio del Estado en materia social, que apelaba a la participación de los sectores marginados en la ejecución de obras y servicios en el “Tercer Mundo”. Así comenzaron a circular los primeros planes de erradicación de villas y los de Autoconstrucción Asistida en América Latina, Asia y África. La planificación nacional adquirió legitimación en el subcontinente tras el lanzamiento de la Alianza para el Progreso, en 1961, en el marco de Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES). Allí, los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a planificar e implementar programas de desarrollo económico y social que mejorasen las condiciones económicas, el ingreso per cápita y la distribución del ingreso, impulsar reformas agrarias, mejorar las condiciones sanitarias, disminuir los índices de analfabetismo y construir viviendas populares (Aguirre, 2010; Agudelo Villa, 1966).

En el contexto de la disputa bipolar, las agencias transnacionales ofrecían fuentes de financiamiento para que los gobiernos latinoamericanos llevaran adelante un conjunto de políticas públicas orientadas a mejorar su infraestructura socioeconómica y evitar posibles conflictos sociales. Las agencias transnacionales establecieron prioridades para otorgar dichos fondos y, por tanto, direccionaron las políticas gubernamentales. El principal objetivo de las agencias transnacionales era mantener su hegemonía política en la región latinoamericana mediante la asistencia técnica y financiera a los proyectos gubernamentales reformistas que sirvieran como “antídoto” al avance comunista, y “combatir” los anhelos de transformaciones sociales por la vía revolucionaria, inspirados en el modelo cubano. En ese sentido, el BM, la OEA, Naciones Unidas y el BID, que promovían asistencia técnica y financiera para el movimiento cooperativo de los países miembros del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, alentaron a los gobiernos a que promovieran reformas urbanas, empresas cooperativas y la vinculación del cooperativismo con el sindicalismo para disminuir los conflictos sociales urbanos.

Durante los años sesenta, se produjo el auge de la planificación urbana, que interpeló a las corporaciones de los arquitectos, ingenieros y urbanistas. Se trató de una concepción integral de la planificación que implicó el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a escala nacional. La idea de los polos nacionales de desarrollo como estrategia para corregir los desequilibrios regionales apuntó a la descentralización territorial y al traslado de la actividad económica e industrial concentrada en las áreas metropolitanas hacia áreas menos desarrolladas. Eso demandaba una serie de incentivos económicos y productivos que motivaran el desplazamiento poblacional hacia el interior de los países. Esa idea provino

de Francia y fue bien recibida por los investigadores y planificadores latinoamericanos (Coraggio, 1990). Se crearon organismos centralizados encargados de la planificación económica, la promoción del desarrollo económico y social, nacional y local, planes de reforma agraria, la erradicación de las *villas miseria*, programas de saneamiento y desarrollo comunitario, recreación, deporte y la promoción de cooperativas.³ Dichas ideas inspiraron a los gobiernos liderados por Arturo Frondizi, Arturo Illia y Juan Carlos Onganía en la Argentina, Eduardo Frei Montalva en Chile, Juscelino Kubitschek en Brasil, Fernando Belaúnde Terry en Perú, aunque no todos recibieron la misma ayuda financiera. Los principales beneficiados fueron los gobiernos que favorecían las inversiones estadounidenses directas en áreas estratégicas para su desarrollo económico, como Frondizi, Onganía, Frei y Kubitschek. Según Beigel (2011: 113), las enormes sumas en préstamo que recibió el gobierno de Frei, convirtieron a Chile en el *showcase* local de la Alianza para el Progreso.

Durante sus primeros años de actividad, el Fondo para el Progreso Social administrado por el BID orientó los préstamos para financiar programas de vivienda y saneamiento básico, lo que constituyó una experiencia singular de intervención en los vecindarios urbanos de América Latina. El objetivo de este programa fue incentivar la planificación de las inversiones públicas para vivienda, procurar la mayor movilización de recursos internos y encontrar sistemas que permitieran dotar de vivienda a los sectores de bajos ingresos (Calvo, 2014: 90). Por ejemplo, entre 1961 y 1969, la Argentina, Brasil y México recibieron del Banco Mundial fondos significativos para infraestructura social.⁴

³ Así surgió el Consejo Nacional de Desarrollo (Argentina), la Consejería Nacional de Desarrollo Social (Chile), la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad (Colombia), la Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) (Venezuela) y la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (Uruguay), entre otros. También se difundió la conformación de los consejos económicos y sociales y los comunitarios, como órganos políticos de representación que servirían como nuevos canales de comunicación entre el gobierno y la comunidad.

⁴ Brasil obtuvo el 20,8% y México 12,9%. La Argentina recibió un promedio anual de 42,3 millones de dólares. Del BID se obtuvo el 13,7% del total financiamiento (47,4 millones de dólares, un promedio anual de 52 millones) y de la Corporación Financiera Internacional 23,7 millones. Entre 1966 y 1969 se recibió del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un promedio anual de 76,16 millones y de la Agencia Interamericana del Desarrollo otros 51 millones entre 1962 y 1968 (Consejo Nacional de Desarrollo, 1970. *Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974*, SECONADE, Buenos Aires, pp. 187-196). En los años setenta se ampliaron las operaciones del BID, aumentó el número de préstamos otorgados, pasaron de 293,7 en 1961 a 1434,5 millones de dólares en 1977. Algunos de los préstamos tenían un impacto directo en la infraestructura urbana (planes de vivienda, agua potable, etcétera) y provenían del Fondo para el Progreso Social (Hardoy 1990: 19).

Según la OEA, mediante el cooperativismo era posible solucionar el déficit habitacional.⁵ Se difundieron una serie de estrategias orientadas a promover el desarrollo comunitario mediante la formación de cuerpos técnicos capacitados en métodos de educación comunitaria, técnicas de acción y desarrollo social. Mediante un discurso tecnicista y modernizante, se propagó la idea de que los valores tradicionales de los sectores marginales constituían la principal limitación para la modernización económica. Entendían que el desarrollo comunitario y la participación popular eran parte de una estrategia social y un instrumento político para paliar los efectos de la “marginalidad” y que los gobiernos latinoamericanos debían difundir. Las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvieron que las técnicas de desarrollo comunitario eran un instrumento capaz de optimizar e incrementar la producción e infraestructura agrícola, la construcción de escuelas, la extensión de servicios sanitarios y obtener mejoras en el sector vivienda. La CEPAL concibió la necesidad de la participación popular en el “esfuerzo de desarrollo” y de su planificación. Ello conducía a que los organismos planificadores tuvieran que ampliar su visión e incorporar la voz de las comunidades para el desarrollo económico y social.⁶ En definitiva, el trasfondo del “desarrollo comunitario” implicaba abaratamiento de la mano de obra y la reducción de costos para el Estado y las empresas privadas. Además, mediante ese discurso, se trasladaba la responsabilidad de “desarrollo” hacia los individuos.

El BID estableció la vivienda social como área prioritaria. La Agencia Interamericana del Desarrollo (AID) también promovió programas de vivienda y desarrollo urbano a través de los fondos de garantía de préstamos de instituciones de los Estados Unidos a entidades dedicadas a construir y financiar viviendas económicas. Pese a las múltiples operaciones financieras y los recursos destinados por las agencias transnacionales, su nivel de impacto fue mínimo, ya que el problema habitacional era muy grande. El BID financió grandes obras de infraestructura económica y social en varias regiones como en el nordeste de Brasil, el valle del Cauca en Colombia o las cuencas hidrográficas del norte de México, además de varios proyectos hidroeléctricos, la construcción de

⁵ Ministerio de Bienestar Social (1969). *Primera Conferencia Interamericana sobre cooperativismo*. Dirección Nacional de Cooperativas, Buenos Aires, 4 al 8 de noviembre, 1969, pp. 84-86; OEA (1961). *Carta de la Organización de Estados Americanos*, OEA, Washington, DC; OEA (1962). *La Organización de los Estados Americanos: su estructura y funcionamiento*, OEA, Washington, DC.

⁶ Comisión Económica para América Latina (1963). “Papel que desempeña el desarrollo de la comunidad en los planes generales de desarrollo económico y social”. *Boletín Económico de América Latina*, vol. 8, Nueva York, Naciones Unidas, pp. 100-102.

carreteras, otorgó fondos para la descentralización industrial y la agricultura, y para impulsar el desarrollo en regiones más pobres.

Como vimos, los organismos trasnacionales promovían enfáticamente campañas de asesoría técnica y partidas presupuestarias otorgadas por el BID y el BM para financiar obras de infraestructura urbana. Lo cierto es que las reformas agrarias, los planes de vivienda social y el planeamiento e infraestructura urbana que promovieron los gobiernos civiles y militares del subcontinente deben ser entendidos como parte de los prerrequisitos y exigencias gubernamentales para acceder al financiamiento y a los créditos externos.

La problemática social ocupó un lugar preponderante en la programática fundacional de la dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina” e hizo propias una serie de preocupaciones sociales contenidas en las agendas de los organismos internacionales, como el BID y la ONU, como la premisa de que la transformación del hábitat era una poderosa herramienta para inducir el cambio social. La solución a la falta de infraestructura urbana y vivienda se transformó en una de las prioridades del régimen. Por ejemplo, la OEA estimuló a los gobiernos para que destinaran terrenos fiscales al emprendimiento de proyectos de vivienda cooperativa y apostaran a la organización de cooperativas urbanas para solucionar los problemas de los estratos bajos, relacionados al déficit habitacional. En ese marco, mediante la Ley N° 16956 Orgánica de Ministerios Nacionales, se creó el Ministerio de Bienestar Social (MBS).⁷ El gobierno militar sostuvo un discurso social que giró en torno a la consolidación de los valores morales según la tradición occidental y cristiana, y a preservar la integridad de la familia. Se consideró que el déficit habitacional era la principal causa de promiscuidad, lo que ponía en “peligro” al núcleo familiar. De ahí la importancia que adquirió la promoción de la vivienda social orientada a los sectores populares. Desde el MBS se elaboró un sistema de construcción de vivienda social para reducir el déficit habitacional y se promovieron una serie

⁷ Del MBS dependerían las siguientes Secretarías de Estado: de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPA), de Seguridad Social (SESS), de Salud Pública (SESP) y de Vivienda (SV). El MBS se ocupó de la formación de cuerpos técnicos y de promover la participación activa de la población en la gestión de lo social. Para cubrir los cargos gubernamentales, se abocó a la búsqueda de técnicos y profesionales, y la Ciudad Católica y el Ateneo de la República fueron los principales espacios de reclutamiento (Gomes, 2016: 46-70). La Ciudad Católica fue una organización anticomunista, antiprogresista y antiliberal de origen francés, que rechazaba la organización político-partidaria, la masonería y el laicismo (Scirica, 2010). El Ateneo de la República surgió en 1962 como un grupo cercano al catolicismo reaccionario, creado por Mario Amadeo y Máximo Etchecopar. Siguió una orientación antiliberal, anticomunista y reivindicó el orden corporativista y un nacionalismo de raíz hispanista-católico.

de instalaciones recreativas para el “sano” empleo del tiempo libre en familia. Mediante dicho ministerio, la dictadura promovió la autoorganización de la comunidad en cooperativas, mutualidades, uniones vecinales y comisiones de ayuda mutua.⁸ Se pensó en un sistema de construcción de vivienda social que permitiera el abaratamiento de los costos y que demande mano de obra local, a partir de la conformación de entidades de ayuda mutua y sociedades mixtas de trabajadores y empresarios.⁹ La SEPAC se creó en octubre de 1966 y fue pensada como una institución que se abocaría a la promoción social de los sectores y regiones postergadas, y que trabajaría en forma conjunta con la comunidad y los organismos públicos y privados en las zonas rurales “subdesarrolladas” y en las villas de emergencia. La SEPAC promovió una política de construcción de viviendas dignas para “impedir” la formación de nuevas *villas miseria*. De ahí surgió la Dirección Nacional de Cooperativas dependiente de la SEPAC, que se encargaría de su gestión, control y asistencia técnica. Las cooperativas fueron concebidas como instrumentos poderosos para organizar la iniciativa de los trabajadores y los sectores medios, y convertirlos en sujetos activos del proceso “revolucionario” (Gomes, 2016: 92-94).

Los actores transnacionales no gubernamentales y el problema de la vivienda

Existieron múltiples fuentes de financiamiento para la promoción de viviendas sociales y la autoconstrucción asistida a escala transnacional. Un ejemplo de ello fue la organización católica internacional Emaús, que se abocó a promover proyectos comunitarios, educativos y de autoconstrucción de viviendas en países sometidos a la extrema pobreza. Emaús fue creada en 1947 por el sacerdote católico francés Henri Grouès, conocido como Abbé Pierre –miembro de la Resistencia– y surgió como un movimiento destinado a brindar ayuda a las familias que fueron devastadas por la guerra.¹⁰ El movimiento Emaús no era estrictamente católico, ya que era abierto a todas las personas que deseaban co-

⁸ Sobre las ventajas y los tipos de cooperativas, la legislación, los principios universales del cooperativismo y su desarrollo en la Argentina, ver Ministerio de Bienestar Social (1969). *Digesto de Promoción y Asistencia de la Comunidad*. Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Buenos Aires, pp. 23-30.

⁹ Ministerio de Bienestar Social (1968). *Criterios de normalización en materia de planeamiento del desarrollo de la comunidad*. La Plata: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

¹⁰ *La Nación*, 29 de enero de 2007. Sitio web disponible en <https://www.emmaus-international.org/es/>

laborar con la institución, independientemente de su credo e ideología política. Vinculada directamente a su sede francesa, Emaús financió proyectos similares en otros países, como en la España franquista, que fue reconocida oficialmente en 1972, y en 1977 se puso en marcha la operación Emaús-Juventud mediante la que desarrolló tareas de asistencia social en distintas localidades de ese país y en el “Tercer Mundo” (Díaz y Pacheco, 2008).

En la Argentina, la sede de Emaús funcionó como una organización civil. Se fundó en 1952 por obra de José Balista, sacerdote jesuita y sociólogo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. En 1956, Emaús llevó adelante el primer proyecto de autoconstrucción asistida en la Villa N° 16 de la ciudad de Buenos Aires y promovió el cooperativismo para enfrentar el problema habitacional. Hubo socios de Emaús Argentina que ocuparon importantes cargos en distintas carteras ministeriales. Un ejemplo de ello fueron los secretarios de la SEPAC, Roberto Gorostiaga (1966-1967) –ingeniero y empresario de la construcción– y Raúl Puigbó (1967-1969), quienes habían estrechado lazos con Emaús y eso les facilitó su acción social. En ese momento, la SEPAC no disponía de suficientes recursos para cumplir sus objetivos¹¹ y Puigbó consiguió que en diversas oportunidades Emaús donara dinero para llevar adelante los planes de acción social de la SEPAC. Asimismo, en 1968, *Emaús* le entregó a la Secretaría de Estado de Vivienda (sv) escrituras de tierras para la construcción de viviendas sociales en Villa Lugano y financió cooperativas barriales.¹² En 1970, Emaús consiguió financiamiento del Plan VEA y del BHB para la construcción de un conjunto habitacional conocido como Barrio Emaús, en ciudad General Belgrano, partido de La Matanza.¹³ El caso de Emaús da cuenta de cómo se articularon las acciones del Estado con otras provenientes de la sociedad civil en torno al problema habitacional. Dicha articulación fue posible por los vínculos de Emaús Argentina con los funcionarios Gorostiaga y Puigbó del Ministerio de Bienestar Social.¹⁴

¹¹ Sobre el rol de la SEPAC en la “Revolución Argentina”, las trayectorias políticas de Puigbó, Gorostiaga y otros funcionarios del MBS partidarios del corporativismo vinculados a la Ciudad Católica y el Ateneo de la República, ver Gomes (2011 y 2016).

¹² *Primera Plana*, n° 223, 4/4/1967, p. 12.

¹³ Dicho proyecto urbanístico fue diseñado para albergar a 3496 habitantes. Contó con dos torres con 48 unidades de dos dormitorios y 200 de tres dormitorios, y una torre con 24 unidades de dos dormitorios y 48 de tres dormitorios, además de 22 tiras con 176 unidades de cuatro dormitorios. *Revista Summa*, n° 36, abril de 1970, pp. 78-79.

¹⁴ En los años setenta, Puigbó comenzó a desempeñarse como Especialista Principal de la OEA, en misión de asesoramiento técnico ante el gobierno de Colombia. Como experto en Desarrollo de Comunidades, trabajó como consultor de la Unesco, ver Puigbó (1975).

En Chile, Emaús surgió en 1957 al calor de la toma de La Victoria, en Santiago. Allí se formó un grupo de jóvenes dispuestos a colaborar con los pobladores y adoptaron el nombre Las Urracas. En 1959 Abbé Pierre –fundador de Emaús– conoció a algunos de sus miembros y los envió a Francia para que conocieran la actividad de Emaús. Dos años más tarde, Las Urracas pasaron a formar parte de Emaús Internacional. En cambio, en Brasil, Emaús se fundó en 1963 producto de los vínculos entre el obispo de Río de Janeiro, Hélder Câmara y Abbé Pierre. Durante varias décadas, Emaús llevó adelante un trabajo comunitario en las *favelas* de Río y en otros Estados de Brasil.

En esos años, la cooperación internacional católica fue muy importante. Cáritas desarrolló varios proyectos de autoconstrucción asistida en América Latina y el Caribe. Asimismo, se construyeron viviendas con fondos provenientes de distintas fundaciones internacionales. Por ejemplo, en Chile, los jesuitas tuvieron un rol significativo a través del Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL) que el jesuita belga Roger Vekemans fundó a mediados de 1960.¹⁵ La DESAL trabajaba junto al Centro Bellarmino, una organización internacional abocada al estudio de los grupos sociales “marginales” a través de la promoción popular.¹⁶ El Centro Bellarmino funcionó como un espacio aglutinador de los militantes social-católicos y adquirió una notable importancia para los demócratas cristianos. Vekemans fue un personaje central para el PDC, no solo porque fue el ideólogo del “Programa de Promoción Popular”, sino porque tenía contactos con una amplia red internacional que le permitía gestionar fuentes de financiamiento y subsidios para instalar cooperativas de producción y encarar un programa de construcción de viviendas a bajo costo. Como señala Beigel, Vekemans “se convirtió en un funcionario internacional de la cooperación católica y DESAL, se constituyó en un acabado ejemplo de su estado de institucionalización” (2011: 12). Con Santiago como centro de operaciones de la DESAL, Vekemans pudo convocar a múltiples organizaciones de Europa y los Estados Unidos para concretar sus proyectos de promoción popular. Entre las principales organizaciones católicas que aportaron a su causa, se destacaron Misereor, la Acción Episcopal alemana Adveniat, varios empresarios católicos y prestigiosas organizaciones privadas como la Fundación Konrad Adenauer, ICA-Punto Cuarto, Fundación Rockefeller, Fundación

¹⁵ Vekemans dirigió la Escuela de Sociología de la Universidad Católica, vinculada al cardenal Raúl Silva Henríquez y actuó como asesor de la Acción Sindical Chilena y de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).

¹⁶ Sobre una crítica teórica al uso del concepto de “marginalidad” en ese período, ver Segre (1977: 246-249) y Castells (1976).

Ford, entre otras. Asimismo, Vekemans recibió varios subsidios estatales para promover cooperativas y promover viviendas a bajo costo. La Fundación Ford y la DESAL también financiaron cooperativas de autoconstrucción. La DESAL comenzó a funcionar como una oficina regional de Misereor, que pertenecía a la Obra Episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación del desarrollo socioeconómico (Beigel, 2011: 83-84). Misereor y DESAL formaron parte de un amplio movimiento de cooperación internacional que confluyó en la Cooperación Internacional para el Desarrollo Socioeconómico. Se trató de una red internacional que se creó en 1967 y que agrupó a dieciséis agencias católicas de desarrollo estadounidenses y europeas, integradas por expertos católicos, que promovían la doctrina social de la Iglesia y los principios del desarrollo comunitario. Según Beigel (2011: 110-113), un cuarto de la ayuda de las agencias de cooperación católica para el desarrollo se destinó hacia América Latina. Dichos fondos iban dirigidos a promover proyectos de educación popular, de bienestar social y de autogestión para la construcción de viviendas.

Por otra parte, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD) jugó un rol importante en la promoción del modelo sindical estadounidense en Latinoamérica luego de la Revolución cubana. El sindicalismo libre estadounidense también vio en la proliferación de barriadas, *favelas*, poblaciones y *villas miseria* la expresión más evidente y alarmante de la necesidad de participación internacional en la gestión de los problemas sociales. Por ello, la AIFLD combinó una intensa propaganda anticomunista con actividades educativas y destinó subsidios para la construcción de vivienda, sedes sindicales, cooperativas de créditos y bancos sindicales (Bozza, 2014; Pozzi, 1990). Por su parte, en 1962, AIFLD se abocó a reclutar y entrenar a líderes obreros anticomunistas en toda América Latina. En Chile, esa campaña fue especialmente potente, ya que “entre 1962 y 1972 más de nueve mil chilenos pasaron por sus dependencias” (Casals, 2016: 503). Hubo actores gremiales que llevaron adelante sus propios planes habitacionales mediante el acceso a préstamos externos. Del mismo modo, hubo fondos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional (BHN) y por la AID y la central obrera estadounidense American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Por ejemplo, el Sindicato Luz y Fuerza de la Argentina construyó 1120 viviendas obreras con un préstamo internacional de la central obrera estadounidense AFL-CIO en los partidos de San Justo y Quilmes, ambos pertenecientes al Gran Buenos Aires.¹⁷

¹⁷ Revista *Summa*, nº 72, febrero de 1974, pp. 20-21.

La alternativa “modernizadora” al problema de la vivienda social

El golpe de Estado de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora”, inició un rumbo económico en el que se privilegiaron las inversiones extranjeras y el Estado redujo al máximo su inversión en la vivienda respecto a la política del peronismo (Aboy, 2005). Para el financiamiento de los planes habitacionales, en 1957 se modificó el esquema financiero del BHN a través de su nueva Carta Orgánica que restableció el sistema de la célula hipotecaria y se recurrió a nuevos mecanismos que descansaban en el ahorro privado y en los préstamos extranjeros. Los tecnócratas desarrollistas de la “Revolución Libertadora”, en 1956, declararon la crisis en materia de vivienda popular y propusieron la erradicación de las *villas miseria*. Se consideró que se trataba de un problema compartido por varios países, pero que en la Argentina no se trataba únicamente de déficit habitacional, sino de un “mal social” que se había agravado por el desempeño “demagógico” del gobierno peronista (Yujnovsky, 1984). En 1956, se creó la Comisión Nacional de la Vivienda (CNV), que dependía del Ministerio de Trabajo y Previsión, cuya principal función consistió en planificar las políticas de vivienda. En parte, el énfasis en la planificación surgió de las recomendaciones que Raúl Prebisch (1955) incluyó en su *Informe económico ante la Junta Consultiva Nacional* que asesoraba al general Pedro Eugenio Aramburu.¹⁸ El Primer Censo de Villas de Emergencia se realizó en 1956 y registró 78.000 personas que habitaban en asentamientos informales del Gran Buenos Aires (Armus y Bohoslavsky, 2015: 499). Allí se dio inicio al Plan de Emergencia de la CNV y a la planificación sistemática para erradicarlos (Ballent, 2005). Se propuso una solución “integral” para eliminar las *villas* de la Capital Federal y sus alrededores a través de proyectos urbanísticos que contemplaran la unidad vecinal, la participación popular, la vida comunitaria y viviendas que sirvieran como espacios de “adaptación” (González Duarte, 2015: 99). Así, se elaboró el primer Plan de Erradicación de Villas y se promovió la construcción de viviendas subsidiadas por el Estado.

El gobierno de Arturo Frondizi (1952-1962) también contó con un plan similar, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Su gobierno recibió financiamiento proveniente de créditos externos para llevar adelante planes de

¹⁸ Sobre los miembros que integraron la CNV, sus respectivas trayectorias y los discursos sociales, técnicos y económicos que explicaron las causas de la proliferación de las villas y el fundamento del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, ver González Duarte (2015: 96-107).

vivienda social. En 1962, surgió en primer Plan Federal de la Vivienda que financió el BID y lo aplicó el BHN, se trató de “un préstamo de 30 millones de dólares destinado a cubrir el 50% del costo total de un programa de viviendas” (Ballent y Liernur, 2014: 292-293). Asimismo, el Programa del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, fue el primer organismo estatal que inició y financió planes de vivienda de autoconstrucción asistida, que utilizaba exclusivamente la mano de obra de los participantes. El programa se extendió entre 1959 y 1973, y tuvo como resultado la construcción de 2687 viviendas en 43 localidades de la provincia (Bellardi y De Paula, 1986: 87-88). Pese a ello, en el marco del Plan de Estabilización de 1959 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Frondizi se comprometió a cancelar las financiaciones hipotecarias para viviendas, por tanto los recursos del BHN quedaron reducidos a los fondos de ahorro y a los derivados de la recuperación económica (en moneda deteriorada) de su propia cartera hipotecaria (Ballent y Liernur, 2014; Schteingart y Broide, 1974). La reducción de la política crediticia del BHN truncó la posibilidad de que los sectores de nivel socioeconómico medio bajo pudieran acceder a una vivienda por su capacidad de ahorro y complementarlo con un crédito. Asimismo, los efectos del Plan de Estabilización (aumento en las tarifas del transporte público y pérdida del poder adquisitivo de los salarios) tornaron inviable la propuesta de autoconstrucción progresiva que había lanzado el gobierno oportunamente (Kullock y Murillo, 2010).

Durante la gobernación de Oscar Alende (1958-1965) en la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial impulsó la construcción de viviendas sociales con el apoyo técnico y financiero de la AID y la mano de obra de los futuros destinatarios. Se construyeron *monoblocks* “en la primera corona (Avellaneda y San Martín) y en la segunda (Berazategui y Tigre). En La Matanza, los barrios Urquiza, Sarmiento y Vicente López –de 950 casas cada uno– comenzaron a edificarse en 1958 y se terminaron en 1964” (Armus y Bohoslavsky, 2015: 497). Buena parte del parque habitacional que se creó en la gestión de Alende, y en los años siguientes, fue a través de estrategias de solución colectiva al problema habitacional. Eso implicó la formación de cooperativas de autoconstrucción y estrategias de ayuda mutua. El Estado impulsó la autoconstrucción y prestó asistencia técnica y financiera a las cooperativas para la adquisición de terrenos y materiales para la construcción, cuya relevancia resultó insignificante.

Durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), existieron tres líneas operatorias del BHN en 1964: 1) el Plan Federal de la Vivienda; 2) los Planes de Ahorro y Préstamo para la vivienda; 3) el Plan de Acción Directa que previó la construcción de diez mil viviendas para sectores de bajos recursos en dis-

tintas localidades del país (Ballent y Liernur, 2014: 293). Paralelamente, ese mismo año, se sancionó la Ley N° 16601 (1964) que dio lugar al Plan Piloto de Erradicación de Villas de Emergencia N° 5, 6 y 18 ubicadas en el Parque Almirante Brown,¹⁹ donde la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) llevó adelante “una intensa acción social a fin de lograr la erradicación eficaz de las *villas* que por su ubicación afectaban al plan de reordenamiento urbano” (Catenazzi, 1991: 33).²⁰ El Plan Piloto se realizó en función de las políticas del gobierno municipal regidas por el Plan Regulador de 1962, el que seguía las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).²¹ Se contempló la construcción de viviendas destinadas a las poblaciones de las villas y la formación de Centros Comunitarios en cada núcleo “villero”, encargados de generar condiciones de apoyo y credibilidad por parte de sus pobladores para posibilitar su erradicación. El Plan apuntaba a que dichos Centros operasen como disparadores del “cambio” en la mentalidad en los pobladores, para que “abandonaran” su actitud “estática” y participaran dinámicamente. Asimismo, se encargarían de tres tipos de tareas: sociales (censos, promoción de obras de infraestructura e equipamiento colectivo, organización de actividades culturales y deportivas); médicas (campañas de vacunación y atención sanitaria); y educativas (campañas de alfabetización y seguimiento escolar). Para los individuos que se opusieran a la erradicación y a fin de garantizar su desalojo inmediato, se estableció, en la legislación vigente, la categoría jurídica de “intruso”, que anulaba su derecho a solicitar recurso de amparo.

A diferencia del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) del onganiato, que veremos a continuación, el Plan Piloto de 1964 contempló obras para mejorar las condiciones de habitabilidad en las *villas*. Se repararon algunas calles interiores de los barrios, se tendieron redes de alumbrado público, se reconstruyeron viviendas y se promovieron campañas de vacunación (Bellardi y De Paula, 1986: 14-15). Este conjunto de medidas contribuyó al incremen-

¹⁹ El Parque Almirante Brown comprende 1400 hectáreas situadas en el sudeste de la CABA y representa el 7% de dicha área. Se encuentra ubicado sobre la ribera del Riachuelo, zona recuperada del ex Bañado de Flores, limitada por las Avenidas General Paz, Teniente General Dellepiane, Perito Moreno y Avenida Costanera 27 de Febrero, lindera al Riachuelo.

²⁰ El Plan Piloto fue reglamentado por la Ordenanza Municipal N° 20220 dictada en junio de 1965.

²¹ Presidencia de la Nación Argentina (1969). *Organización de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Esquema Director Año 2000*. Buenos Aires: SECONADE, Oficina Regional de Desarrollo Área Metropolitana, 30 de enero de 1970.

to de la población en las *villas miseria* y al surgimiento de formas inéditas de expresiones de protesta de sus habitantes, que oscilaron entre la negociación y la confrontación (Ziccardi, 1977). Vale recordar que, en 1958, el Partido Comunista había impulsado la creación de la Federación de Barrios y Villas de Emergencia de la Capital Federal –entidad vinculada a Unión de Mujeres Argentinas–, que se constituyó como interlocutor válido entre organizaciones de las distintas *villas* y el gobierno municipal de la Capital Federal, que logró contactos con el Concejo Deliberante. En 1964, el movimiento villero se vinculó con la protesta gremial y acompañó el Plan de Lucha de la CGT. Eso impidió que el gobierno radical avanzara con su plan de erradicación. Si bien el Poder Ejecutivo reconoció como interlocutor a la Federación de Barrios y Villas de Emergencia, durante la aplicación del Plan Piloto de Erradicación de 1964, el gobierno municipal intentó disolverla y reemplazarla por organizaciones subordinadas al poder estatal (Bellardi y De Paula, 1986: 64-65).

La vivienda social y el sector de la construcción (1955-1966)

Durante el gobierno de Frondizi, se cerraron las grandes plantas de prefabricación pesada de viviendas provenientes de Francia, Italia y Suecia, que se habían instalado en Buenos Aires a finales de los años cincuenta. La caída de la demanda de viviendas a bajo costo, sumada al estancamiento de la política estatal, provocó su cierre incluyendo las plantas del sistema Coignet –construcción pesada de hormigón–, mientras que los sistemas complejos Outinord lograron perdurar, ya que permitían reducir costos, tiempo y mano de obra calificada (Segre, 1977: 202). Desde el gobierno de Frondizi hasta el de Illia, el sector de la construcción prácticamente no absorbió mano de obra. En 1963, el sector público construía el 8,5% y el privado el 91,5% (Segre, 1977: 206). Ese año, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) sostuvo que la principal causa del déficit habitacional obedecía a la política económica cortoplacista del gobierno peronista (1946-1955) y al desequilibrio crónico en la balanza de pagos que derivó en una inflación incontrolable. Sostuvo que la Ley de Alquileres de 1946 –que estableció el congelamiento del precio de las locaciones y sumó a la falta estímulos para aumentar el parque habitacional– había “agudizado” el déficit habitacional y sugirió su eliminación. Según la CAC, dicha ley había provocado el desplazamiento de importantes capitales del mercado inmobiliario (nacionales y extranjeros) que tradicionalmente invertían en la construcción de viviendas de alquiler. La solución “definitiva” se daría cuando el Estado le

garantizara a los sectores populares mecanismos financieros para adquirir su vivienda propia, a través del fomento del ahorro, el otorgamiento de préstamos y créditos hipotecarios, antes que cederlas como “dádivas del Estado”. Asimismo, la CAC sugirió que el Estado debía financiar la construcción masiva de viviendas económicas a partir de los grandes conjuntos.²² Finalmente, se consiguió la derogación del congelamiento de alquileres, los que pasaron a estar desregulados. Eso afectó gravemente a los habitantes de los inquilinatos, ya que muchos fueron desalojados masivamente. Los hoteles y pensiones fueron la frágil solución habitacional que el gobierno aportó mediante una resolución que permitía que en dichos espacios se alojaran familias por amplios períodos de tiempo (Gazzoli, 1991).

Ante el estancamiento del sector privado de la construcción, en 1963 surgió la Comisión Central de Asociaciones Privadas para la Reactivación de la Industria de la Construcción (CAPRICO), que reunió a las principales instituciones empresariales y profesionales vinculadas a la construcción e interesadas en el problema habitacional: la CAC, la Cámara de Ahorro y Préstamos para la Vivienda, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, el Centro Argentino de Ingenieros, la Sociedad Central de Arquitectos y la Unión Industrial Argentina. La consigna que animó a la agrupación de dichas corporaciones fue anteponer el “bien del país” por encima de cualquier interés sectorial. CAPRICO asesoró a los poderes públicos, confeccionó anteproyectos de leyes y operativas para el BHN. Estimuló la creación de la Secretaría de Estado de Vivienda, a la que se le asignó la función de planificar a nivel nacional soluciones para reducir el déficit habitacional, controlar las técnicas constructivas, promover mecanismos de ahorro popular y fomentar la creación de las cooperativas, y que las organizaciones sindicales llevaran adelante sus planes habitacionales (Kullock y Murillo, 2010). CAPRICO también intervino en la concreción del decreto de desgravación impositiva a la construcción de viviendas económicas.²³ En 1966, CAPRICO armó un proyecto para estudiar cómo reactivar la industria y brindar soluciones definitivas a la crisis habitacional. Primero fue presentado al gobierno de Illia, pero no pudo aplicarse por razones políticas.

En 1966 y luego del golpe de Estado que derrocó a Illia, CAPRICO presentó su proyecto a los funcionarios de la “Revolución Argentina” y allí cosechó sus mayores éxitos. Propuso un plan de inversión total del 17,1% en 1967 y el 22,5% en 1971, que contaría con financiamiento público, privado y externo.

²² Cámara Argentina de la Construcción, *Revista Construcciones*, n° 187, noviembre-diciembre, 1963, pp. 357-361.

²³ *Revista de la SCA*, n° 63, 1968, p. 10.

Reconoció a la vivienda como factor de bienestar social y subrayó el efecto multiplicador de la industria de la construcción para movilizar las industrias productoras de bienes de capital. CAPRICO entendió a la vivienda como un elemento central de la infraestructura social, junto a la salud pública y la educación. Asimismo, advirtió que la satisfacción de las necesidades habitacionales era condición necesaria para disminuir el descontento social. Según los estándares internacionalmente aceptados, recomendó una inversión del 5% del Producto Bruto Nacional o del 25% de la Inversión Bruta Interna. Sostuvo que la inversión en vivienda cumplía un doble rol. Como promotora económica, permitía la expansión de las fuentes de trabajo, y en lo social, incidía en el aumento de la tasa de natalidad. La cuestión del déficit poblacional en regiones estratégicas para el desarrollo económico, como la patagónica, era una de las mayores preocupaciones del gobierno militar.²⁴

CAPRICO —al igual que la Cámara de Vivienda y Equipamiento Urbano (CAVERA) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda Argentina (AEV)— representaba a un conjunto de importantes empresas de la construcción y canalizaba sus reclamos al sector público para “arrancarles políticas de construcción directa que los beneficie en su adjudicación” (Fernández Wagner, 1995: 5). Enfatizó en la importancia de captar nuevas inversiones para la industria, lo que requería asegurar el libre juego del mercado y la “sana competencia”. La “armónica” relación entre la oferta y la demanda alentaría la rentabilidad de las empresas e incrementaría su interés por invertir en el mejoramiento de las industrias instaladas y en otras nuevas. El rol del Estado sería central para garantizar la estabilidad de la demanda, lo que evitaría que los capitales nacionales fluyeran hacia actividades especulativas o, sencillamente, se retiraran del país. En consonancia con las demandas de las corporaciones empresariales de la industria de la construcción, el gobierno militar promovió un plan de ordenamiento urbano y de desarrollo de infraestructura que pretendió equipararse al de los países “desarrollados”. Se trató de un ambicioso objetivo de “modernizar” el país que implicó la inversión de enormes sumas en obra pública. A partir de 1967, se expandió notoriamente la construcción e inversión pública en infraestructura de base. Se construyeron caminos, puentes, diques y represas, lo que se evidencia en el incremento del número de licitaciones de la Secretaría de Obras Públicas. El gobierno militar encontró en los sectores concentrados de la industria de la construcción un instrumento para impulsar la economía. La producción

²⁴ CAPRICO (1966). *Bases para un programa habitacional indicativo a nivel nacional*. Buenos Aires: CAPRICO.

masiva de vivienda económica favoreció a prestigiosos estudios de arquitectura y a múltiples empresas asociadas a la CAC y vinculadas al capital extranjero.

Una ciudad dentro de la ciudad: el Conjunto Urbano Barrio General de División Manuel Nicolás Savio (1969-1973)

La “Revolución Argentina” buscó “modernizar” la RMBA y para ello promovió un plan de ordenamiento urbano. Con el objetivo de “mejorar” el aspecto urbanístico, apostó a la erradicación de los asentamientos informales e impedir su proliferación mediante la construcción de viviendas higiénicas bajo sistemas rápidos y económicos, llamados Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT). Desde el MBS de la provincia de Buenos Aires se afirmó que el alto precio de los inmuebles y la falta de infraestructura favorecían la propagación de las villas de emergencia. Se consideró que el estado de “subdesarrollo” del interior del país originaba las migraciones internas que provocaban el aumento de los núcleos de viviendas “improvisadas y clandestinas”. Se promovió la descentralización demográfica y productiva mediante la conformación de los Polos Nacionales de Desarrollo para reducir las y “descongestionar” el RMBA.

Las inundaciones de octubre de 1967, producto del desborde de los ríos Matanza y Reconquista, afectaron el sur y oeste del Gran Buenos Aires.²⁵ En consecuencia, el gobierno decretó el estado de emergencia, puso en marcha un programa sanitario para evitar epidemias en las zonas afectadas y anunció un plan de construcción de viviendas y erradicar las no aptas.²⁶ En 1967, el secretario de vivienda, Esteban Guaia, y el ministro de Bienestar Social, Julio Álvarez, impulsaron la Ley N° 17605 de Promoción Social, Construcción y Financiación de Viviendas, que dio lugar al Plan de Erradicación de Villas de Emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires (PEVE).²⁷ El PEVE fue ejecutado por la SV con el apoyo del BHN y el Comando de Ingenieros del Ejército.²⁸ El artículo 7 de dicha ley, declaró que la “insalubridad” de una villa

²⁵ *Clarín*, 11, 13, y 14/10/1967.

²⁶ *Ibidem*, 15, 17 y 18/10/1967.

²⁷ Los primeros esbozos del PEVE surgieron de la Comisión Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia, dependiente de la SEPAC, meses antes de las inundaciones.

²⁸ La SEPAC y la SESS también aportaron fondos. El Comando de Ingenieros del Ejército sumó tareas de dirección técnica en el “Plan Nacional para la Construcción de Viviendas Transitorias” elaborado por la SV. Se ocupaba de trasladar a los pobladores a los NHT y demoler las “villas”

de emergencia era motivo suficiente para autorizar su erradicación.²⁹ Inicialmente, se consideró que el PEVE contribuiría a erradicar el mercado informal, la especulación sobre la venta o alquiler de viviendas o cesión de derechos sobre tierras usurpadas. Allí se contempló el desalojo de setenta mil familias (veinte mil en la Capital federal y cincuenta mil en los partidos bonaerenses circundantes), un total de 280.000 personas. La erradicación suponía, por un lado, ofrecer “mejores” condiciones habitacionales y “eliminar” la situación marginal producto de los “desajustes sociales”. En el marco de la programática dictatorial, supuestamente, se trataba de “auxiliar” a las familias que, en razón de la escasez de viviendas, se habían visto forzadas a “invadir” terrenos ajenos y a desplazarse de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. Si bien no contemplaba su “eliminación arbitraria y violenta”, lo cierto es que ante la resistencia de sus habitantes, el gobierno no escatimó la represión.

La condición de “anormalidad” de las *villas* fue percibida como una potencial “amenaza” al orden social, que aún se estaba a tiempo de “erradicar”, ya que sus habitantes estaban dispuestos a mejorar sus condiciones de vida. Se estableció un orden de prioridades para la erradicación: 1) *villas* afectadas por las inundaciones, 2) *villas* situadas en terrenos requeridos para obras públicas, especialmente los accesos a la Capital Federal; 3) *villas* cuyo grado de motivación haya alcanzado el nivel “satisfactorio”, 4) *villas* que ocupen terrenos aptos para la construcción de viviendas definitivas. El PEVE contempló una prueba piloto en la Capital Federal que se concretaría dos etapas. La primera correspondía a la vivienda transitoria que serviría como espacio de “adaptación” y garantizaría seguridad jurídica, física y sanitaria. Se consideró que los habitantes no estaban “capacitados” para vivir en departamentos, por lo que serían trasladados a pequeños NHT, cuya construcción era precaria y desmontable. Pese a la estrechez de las viviendas, se le otorgó importancia al pequeño terreno individual, que posibilitara el jardín y la huerta, pensada para contribuir a la economía familiar.

La segunda etapa del PEVE, consistía en el traslado de las familias a las viviendas definitivas, una vez concluido el período de “adaptación” en los NHT. Para ello se contemplaron las siguientes alternativas: 1) la posibilidad de traslado y su radicación en el interior del país con pasajes gratuitos; 2) la adjudicación de viviendas, en uso y habitación, mediante el pago de un canon proporcional al ingreso de los interesados; 3) la construcción de viviendas destinadas exclu-

evacuadas. El gobierno consideró que la participación del Ejército en dichas obras permitiría la reducción de costos y reforzaría la imagen positiva de la Fuerza ante la población.

²⁹ Ministerio de Bienestar Social (1968). *Plan de erradicación de las villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Ministerio de Bienestar Social, p. 54.

sivamente a los estratos bajos, mediante el pago de un canon proporcional a sus ingresos que se destinaría al Fondo de Vivienda; 4) en caso de que existiera una vivienda propia transportable, se consideraría su traslado. El seguimiento del trabajo social con las familias trasladadas a las nuevas viviendas estaba a cargo de la SEPAC. Mediante un sistema de penas y sanciones, inspeccionaba el uso de la vivienda familiar y distribuía manuales con instrucciones para su buen uso. Allí se incluían detalles para su limpieza interna y la conservación de los espacios comunes. Distribuía materiales que enseñaban cómo elaborar jardines y huertas individuales. Para los adultos, existían cursos de alfabetización y capacitación en economía doméstica, educación cívica, laboral y familiar. En el área de la salud, la SEPAC se concentró en lo preventivo (exámenes médicos y vacunaciones) y cursos de educación sanitaria (higiene doméstica, personal, prevención de accidentes domésticos) (Gomes, 2016: 86-88).

Durante los años sesenta, los conjuntos aparecieron como una estructura arquitectónica predilecta para la “comunidad” como grupo socialmente integrado. Ahora bien, ¿por qué se optó por dicho diseño arquitectónico? Hubo otros conjuntos proyectados por el estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly (MSGSS) entre 1966 y 1969 como Acoyte, Barracas, Las Heras y Rioja en los que se utilizaron técnicas de integración urbana para conjuntos de alta densidad en áreas ya consolidadas. En cambio, los conjuntos del Barrio General de División Manuel Nicolás Savio, popularmente conocido como Lugano I (1970) y Lugano II (1970-1973) fueron localizados en el Parque Almirante Brown, un lugar sin ocupación, rodeado por sectores urbanos de poca densidad, “creaba imágenes de fuerte densidad urbana donde ella no existía. Antes que en una adaptación al entorno, la propuesta consistía en ‘crear ciudad’” (Ballent, 2004: 145). Allí se dispuso la creación de dos grandes conjuntos urbanos: el conjunto Soldati (1972-1978) y Lugano I y II, destinado a sectores de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Justamente este tipo de diseño apuntó a albergar a poblaciones marginales, pero socialmente interrelacionadas. En el Plan Regulador de la ciudad de Buenos Aires se determinó disponer de esa área para aplicar técnicas modernas de planeamiento urbano y programas habitacionales de interés social. En esta apuesta por “construir una ciudad dentro de la ciudad”, las nuevas viviendas se tornaron un dispositivo que sirvió para desarticular dichos grupos y normalizar su vida cotidiana. Este tipo de viviendas fue utilizado con fines propagandísticos, al mostrar la imagen de un gobierno que no se “olvidaba de los pobres” y que seguía los patrones arquitectónicos de

la vanguardia internacional en materia habitacional (Gomes, 2018).³⁰ Si bien estos conjuntos dan cuenta de uno de los momentos de mayor producción de vivienda masiva por parte del Estado, también significaron rentas extraordinarias para el sector concentrado de la construcción (Yujnovsky, 1984). Su construcción, de inédita envergadura, demandó la mano de obra de cuatro mil obreros, aproximadamente.³¹ En Lugano I y II se proyectaron doce mil unidades para sesenta mil personas.³² El diseño del conjunto contempló la incorporación de locales comerciales (270, aproximadamente) al pie de las tiras de las viviendas y una serie de servicios, como porterías, salas de primeros auxilios y guarderías infantiles. Su diseño arquitectónico incluyó puentes peatonales que cruzaban la Avenida Soldado de la Frontera y vinculaban las viviendas entre sí.

Lugano I y II fueron proyectados por un equipo interdisciplinario integrado por varios arquitectos, ingenieros, algunos sociólogos y técnicos que trabajaron para la Sección de Proyectos de la CMV a cargo del arquitecto César Ferrari.³³ Su tipología arquitectónica expresó una transcripción directa del modelo urbanístico inglés Park Hill (Sheffield) y Robin Hood Gardens (Tower Hamlets). En Lugano I y II, predominó un estilo arquitectónico moderno con influencia funcionalista, basado en líneas rectas y diseños geométricos, construidos en altura a base de acero, hierro, hormigón armado y concentraron alta densidad de población (Girola, 2007: 136).

³⁰ Ministerio de Bienestar Social (1969). *Imágenes de vivienda*. Buenos Aires: Secretaría de Estado de Vivienda.

³¹ Del total de las empresas que intervinieron en la construcción de dichos conjuntos urbanos se destacaron las que representaban al sector concentrado de la industria de la construcción: Bauman y Kadishevich S.A y Ecove SCA; Casa S. en C. p. A.; De Caro, Sturla, Leggiero SACICE; ODISA Obras de Ingeniería SACC; Pascual Bevacqua; Seidman y Bonder SCA; Solel Boneh's Overseas and Harbour Works Company LTDA y Kocourek S.A. de Construcciones CIFI. Revista *Summa*, n° 19, septiembre de 1969, p. 53.

³² Originalmente, el Conjunto fue proyectado en 1965 por un total de 10.700 viviendas. En la primera etapa que concluyó en 1969 se terminaron 3.808 viviendas con capacidad para alojar a veinte mil personas. Las viviendas fueron distribuidas en 68 edificios en tira, con 56 unidades por edificios de 14 pisos de altura, (2.464 de dos dormitorios y 1.344 de tres dormitorios, el baño y la cocina). La segunda etapa de construcción previó 115 edificios en tira y 25 edificios en torre compuestos por 160 a 200 departamentos, un total de 2640 viviendas. Sobre los problemas en la construcción del conjunto referido a la deficiente calidad del suelo y sus estrategias de relleno, ver Cámara Argentina de la Construcción, *Revista Construcciones*, n° 227, 1971, p. 364.

³³ César Ferrari fue jefe de la Sección de Proyectos de la CMV desde 1965 y en 1971 fue designado jefe de la División Estudios y Proyectos.

Figura 1. Conjunto habitacional Lugano I y II, Parque Almirante Brown, Buenos Aires. Primera etapa: 3800 viviendas. Segunda etapa: 2640 viviendas



Fuente: Comisión Municipal de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, 1968-1971. *Revista Summa*, n° 85, enero de 1975, p. 55.

La compleja infraestructura de Lugano se gestionó con fondos provenientes de la CMV (58%), préstamos del BID (14%) y entidades públicas (10%). Los adquirentes aportaron el 18% con el abono de cuotas mensuales –incluidos los costos de amortización– durante un plazo de hasta 25 años, con un interés anual del 6%. Participaron nueve empresas contratistas y 110 subcontratistas. Simultáneamente a la ejecución del plan habitacional, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires realizó convenios con múltiples empresas estatales de servicios públicos: Obras Sanitarias de la Nación, Servicios Electrónicos del Gran Buenos Aires, Gas del Estado, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de La Matanza. Estos dos últimos para las obras de la ciudad General Belgrano. Dichas empresas aportaron recursos para el entubamiento del arroyo Cildáñez, provisión de instalaciones de agua potable, iluminación en la vía pública, desagües cloacales y pluviales, redes eléctricas, de gas, teléfono, parquización, alumbrado y equipamiento social. El convenio firmado con el Consejo Nacional de Educación brindó equipamiento social para el Centro Urbano, donde se construyeron cuatro edificios escolares para la enseñanza primaria y jardines de infantes, comedores escolares y salas para trabajos manuales y clases especiales. La Dirección Nacional de Vialidad se hizo cargo de la pavimentación de importantes arterias (Avenidas Coronel Roca, Escalada, Larrazábal) que conectaban al Parque Almirante Brown con la

Capital Federal y el Gran Buenos Aires.³⁴ En esos conjuntos, la CMV participaba como comitente y llevaba adelante un conjunto de programas de desarrollo comunitario a cargo de trabajadores sociales que se dividían en dos programas: el de Promoción Económica y Laboral y el de Promoción Sociocomunitaria y Recreativa (Catenazzi, 1991: 55). Recordemos que la CMV existió desde 1956 y en 1961 pasó a la órbita de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Su actividad se intensificó en mayo de 1965 cuando se le encargó la promoción de proyectos de vivienda social. La CMV centralizó las políticas estatales respecto a las villas de emergencia de la Capital Federal, donde se ubicaban buena parte de los asentamientos (Dávalos, Jabbaz y Molina, 1987: 13-17). En 1967, por Ley N° 17174, se estableció su funcionamiento autárquico y amplió su dominio legal fuera de la Capital Federal, principalmente hacia el Gran Buenos Aires y pasó a funcionar de forma descentralizada. La CMV continuó con sus funciones iniciales y se le agregó la de prestar apoyo técnico, financiero y de planeamiento a la Secretaría de Vivienda para la promoción de viviendas de interés social destinadas a familias de bajos ingresos de la CABA y en los partidos que integraban el Gran Buenos Aires, de acuerdo a las directrices de la política habitacional formulada por el gobierno nacional desde el MBS.³⁵ En el caso de Lugano I y II, la CMV se abocó a la urbanización de las tierras y a la promoción del desarrollo de la vida comunitaria.

En 1972 debía iniciarse la segunda etapa de construcción del Parque Almirante Brown, pero el BID no renovó su crédito y la CMV no contaba con los fondos suficientes ni fondos propios para encarar una obra de tal envergadura. Por tanto, se abocó al emprender algunas obras de mejoramiento en las *villas miseria* de la CABA y al trabajo conjunto con algunas comisiones vecinales.³⁶ Paralelamente, el gobierno continuaba con los desalojos de familias en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Fue un período marcado por las erradicaciones extremadamente violentas en términos físicos y simbólicos y trastornos psicoemocionales debido a la pérdida de sus pertenencias materiales y de sus lazos comunitarios, los que sostuvieron el tejido social de la vida cotidiana de los pobladores. Un ejemplo de ello fue el 15 de agosto de 1968: la CMV erradicó a

³⁴ Cámara Argentina de la Construcción, *Revista Construcciones*, n° 227, 1971, pp. 361-366.

³⁵ *Boletín Oficial de la República Argentina*, Ley N° 17174, artículo 3, 24/2/1967.

³⁶ Inicialmente, mediante el PEVE se había contemplado la construcción de 56.000 viviendas definitivas en siete años, es decir que por cada año se ubicarían ocho mil familias que habitaban los NHT. Sin embargo, en cuatro años se construyeron unas 3.500 unidades de las 32.000 programadas. En 1972 se terminaron en el AMBA 3500 viviendas y había 5.043 en ejecución (Schteingart y Broide, 1974: 271).

489 personas que habitaban en las 72 viviendas de la Villa de Emergencia N° 4 de la Capital Federal (ubicada en Perito Moreno y Dellepiane).³⁷ En 1969 se erradicaron 4.034 personas de distintas villas, siendo la N° 5 la más poblada, con 2.773 personas, y que fue erradicada el 27 de septiembre de 1969. En 1971 se desalojaron 270 habitantes de la Villa N° 18 para la construcción de las viviendas del conjunto habitacional Parque Almirante Brown “C”.

Durante el onganiato, varios de los dirigentes de la Federación de Barrios habían estrechado lazos con la CGT de los Argentinos y el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. La dictadura buscó su desintegración por la fuerza, ya que consideraba legítimas únicamente a las organizaciones vecinales que avalaban las acciones del MBS. Posteriormente, se acercaron a los sectores más radicalizados del peronismo, que dio lugar al Frente Villero de Liberación Nacional en 1972 y luego, al Movimiento Villero Peronista (Bellardi y De Paula, 1986: 64-76). Durante el gobierno de Lanusse continuaron las erradicaciones. El 22 de septiembre de 1972, se desalojó a 9.305 personas en la Villa N° 2 (De la Torre, 2008: 160-161). En ese escenario, la principal resistencia al avance de las erradicaciones provino de organizaciones como la Federación de Barrios y Villas de Emergencia de la Capital Federal lo que evitó, por ejemplo, el desalojo de la Villa de Retiro.

A modo de cierre

Hemos visto cómo la vivienda social se transformó en un problema político y científico transnacional en el marco de la Guerra Fría. Las agencias internacionales y las organizaciones privadas y su apuesta por el desarrollo urbano operaron como agentes modernizantes y productores del sentido de vida “moderna” para los países del “Tercer Mundo”. En torno a las utopías urbanas de desarrollo, se dio una circulación transnacional de saberes y expertos sobre la planificación urbana y las políticas de vivienda social, que fueron legitimados e incorporados por actores estatales y no estatales.

En este trabajo privilegiamos las potencialidades analíticas de la escala transnacional en relación con el tipo de política habitacional que la dictadura implementó en el barrio Villa Lugano, ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de estas páginas, defendimos la idea de que para los “largos años sesenta” –expresión de Devés Valdés (2003)–, resulta legítimo y productivo

³⁷ *Clarín*, 10/8/1968, p. 14.

explorar las políticas y los proyectos de vivienda social en clave transnacional, con el propósito de atender las múltiples formas de cooperación entre las agencias internacionales, profesionales y sus vínculos con los funcionarios de carteras nacionales. Dicha elección nos permitió desbordar los marcos estatales desde los que suelen estudiarse las políticas públicas. Como se sabe, la escala transnacional invita a prestar atención a las redes de actores que operaron en diferentes escalas y niveles, e interactuaron “con” el Estado y también desde sus “afueras”. Se rastrearon los espacios través de los que circularon ideas y saberes técnicos en torno a las estrategias de autoconstrucción popular, el desarrollo comunitario, la erradicación de asentamientos informales y la construcción de conjuntos de alta densidad que fueron presentados en clave modernizante por los funcionarios nacionales y los elencos provenientes de organizaciones no gubernamentales. Del mismo modo, se conformaron redes regionales financiadas por los organismos de Naciones Unidas y sus organismos derivados surgidos en América Latina. Todo ello nos permitió dar cuenta de las estrategias gubernamentales que simultáneamente buscaron dar respuesta al déficit habitacional y, a su vez, brindar respuesta a la demanda de los organismos internacionales que operaron como actores políticos globales.

En cuanto a la interacción con los actores sociales, el plan de erradicación que impulsó la “Revolución Argentina” se caracterizó por sus altos niveles de violencia y arbitrariedad, pese a la resistencia de sus habitantes. El PEVE se basó en principios de profilaxis urbana y tanto las viviendas definitivas como las transitorias fueron concebidas como un dispositivo de control social, que apuntó a normalizar los modos de habitar de los pobladores. Hemos visto cómo el régimen apuntó a normalizar los usos de los espacios a fin de evitar la superposición de funciones. Asimismo, convertirlos en propietarios era una forma de apostar a su “reeducación” y “readaptación” social. La vivienda individual suponía que evitaría la promiscuidad, pero no garantizaba la solución al problema de hacinamiento, ya que su tamaño era estándar y no se correspondía con el número de miembros de las familias. La dictadura encontró en las políticas de vivienda un instrumento para buscar apoyos sociales, principalmente entre los sectores empresariales. En el plano discursivo, la política del MBS estuvo orientada a reducir el déficit habitacional en los estratos más bajos de la sociedad urbana. Para ello, se abocó a la producción masiva de vivienda económica, que terminó favoreciendo a prestigiosos estudios de arquitectura y múltiples empresas asociadas a la CAC. Los instrumentos financieros del Estado apuntaron a fortalecer la industria de la construcción, los sectores concentrados de la economía vinculados a ella, a la banca privada y a los propietarios de suelo urbano.

En consonancia a las recomendaciones de los organismos multinacionales, ese tipo de iniciativas convivió con proyectos que apuntaron a fomentar la autoconstrucción y participación popular directa, e incluyó la conformación de cooperativas de viviendas fomentadas desde el propio MBS. Sin embargo, las cooperativas de viviendas y la arquitectura participativa no tuvieron la relevancia que adquirió en países vecinos, como en Chile. Del mismo modo, los resultados de la política de vivienda social no logró el “bienestar social” que preconizó la dictadura. Un ejemplo de ello es que en 1976 la población de las *villas miseria* superó ampliamente la censada en 1966 y hubo villas de emergencia que volvieron a radicarse (como la N° 23 y 30) y otras incrementaron su población (como la N° 31) (Gazzoli, 2007). Buena parte de las viviendas definitivas inicialmente planificadas nunca se construyeron y las familias quedaron alojadas en los NHT, algunos de los cuales aún subsisten. Por otro lado, los conjuntos construidos presentaron problemas en la construcción, ya que la búsqueda de reducir costos derivó en que, a corto plazo, demandaran reparaciones y mantenimiento. En el caso de Lugano, eso provocó tensiones entre los habitantes de los conjuntos y la CMV. Otro tipo de problemas fue de índole social. El traslado de habitantes provenientes de distintas villas de emergencias que fueron alojados en un mismo conjunto, dificultó la sociabilidad e integración entre sus habitantes. Ese fue un dilema que surgió producto de la nula participación de los usuarios en la proyección de los conjuntos, es decir se trató de una tipología arquitectónica no participativa.

Bibliografía

- Aboy, Rosa (2005). *Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en El Barrio Los Perales, 1946-1955*. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.
- Agudelo Villa, Hernando (1966). *La revolución del desarrollo. Origen y evolución de la Alianza para el Progreso*. México: Roble.
- Aguirre, Orlando (2010). “La Alianza para el Progreso y la promoción del desarrollo en América Latina”. *Revista Afuera*, n° 9, noviembre. Disponible en http://www.revistaafuera.com/autores_detalle.php?id=94, visitado el 5 de febrero de 2011.
- Armus, Diego y Bohoslavsky, Ernesto (2015). “Vivienda popular y asociacionismo en la conformación del Gran Buenos Aires”. En Kessler, Gabriel

- (ed.), *El Gran Buenos Aires. Historia de La Provincia de Buenos Aires*, pp. 493-520. Buenos Aires: UNIPE/EDHASA.
- Ballent, Anahí (2004). “Conjuntos habitacionales”. En Liernur, Jorge y Aliata, Fernando (eds.), *Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades*, pp. 143-147. Buenos Aires: Diario Clarín.
- (2005). *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires (1943-1955)*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Ballent, Anahí y Liernur, Jorge Francisco (2014). *La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Beigel, Fernanda (2011). *Misión Santiago. El mundo académico jesuita y los inicios de la cooperación internacional católica*. Santiago de Chile: LOM.
- Bellardi, Marta y De Paula, Aldo (1986). *Villas miseria: origen, erradicación y respuestas populares*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Bozza, Juan Alberto (2014). “Trabajo silencioso. Agencias anticomunistas en el sindicalismo latinoamericano durante la Guerra Fría”. *Conflicto Social*, vol. 2, n° 2, pp. 49-75.
- Calvo, Óscar (2013). *Urbanización y revolución. Técnica y política en Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México (1950-1980)*. Tesis de doctorado, ciudad de México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México.
- Casals, Marcelo Araya (2016). *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964*. Santiago de Chile: LOM.
- Castells, Manuel (1976). *Chile: movimiento de pobladores y lucha de clases*. Santiago de Chile: Universidad Católica.
- Catenazzi, Andrea (1991). “Informe de Investigación presentado a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires”. Buenos Aires: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA.
- Coraggio, José Luis (ed.) (1990). *La investigación urbana en América Latina. Caminos recorridos y por recorrer. Las ideas y su contexto*. Quito: Editorial Ciudad.

- Dávalos, Patricia; Jabbaz, Marcela y Molina, Estela (1987). *Movimiento villero y Estado, 1966-1976*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Del Pozo, José (2002). *Historia de América Latina y del Caribe (1825-2001)*. Santiago de Chile: LOM.
- De la Torre, Lidia (2008). *Buenos Aires. Del conventillo a la Villa Miseria (1869-1989)*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Católica Argentina.
- Devés Valdés, Eduardo (2003). *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. De la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990)*. Buenos Aires: Biblos.
- Díaz, Benito Díaz y Pacheco, César Jiménez (2008). “De los movimientos sociales en las postrimerías del franquismo en la provincia de Toledo”. En Heras, Manuel Ortiz (ed.), *Los movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición Castilla-La Mancha (1969-1979)*, pp. 220-275. Toledo: Almad.
- Escobar, Arturo (2007). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: Ministerio de Cultura.
- Fernández Wagner, Raúl (1995). “Políticas de vivienda en Argentina. Deuda social y urbana en la transición de los ‘90””. *Revista INVI*, vol. 10, n° 26, pp. 3-16.
- García Lupo, Rogelio (1985). *Mercenarios y monopolios en la Argentina*. Buenos Aires: Legasa.
- Gazzoli, Rubén (1991). *Inquilinatos y hoteles*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- (2007). *Vivienda social. Investigaciones, ensayos y entrevistas*. Buenos Aires: Nobuko.
- Girola, María Florencia (2007). “Procesos de apropiación del espacio y sociabilidad vecinal en un gran conjunto urbano situado en la ciudad de Buenos Aires”. *Anthropologica*, vol. 24, n° 25, pp. 131-155.
- Gomes, Gabriela (2011). “El Onganiato y los sectores populares: funcionarios, ideas y políticas de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (1966-1970)”. *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, vol. 11, n° 11, pp. 279-302.
- (2016). *Las políticas sociales de los regímenes dictatoriales en Argentina y Chile (1960-1970)*. La Plata-Posadas-Los Polvorines: FAHCE/UNLP-UNAM-UNGS.

- (2018). *Vivienda social en dictaduras. Actores, discursos, políticas públicas y usos propagandísticos en las Regiones Metropolitanas de Buenos Aires (1966-1983) y Santiago de Chile (1973-1989)*. Tesis de doctorado, ciudad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- González Duarte, Lucía Dominga (2015). *Villas miseria: la construcción del estigma en discursos y representaciones (1956-1957)*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Hardoy, Jorge Enrique (1990). “La investigación urbana en América Latina durante las últimas décadas”. En Coraggio, José Luis (ed.), *La investigación urbana en América Latina. Caminos recorridos y por recorrer. Las ideas y su contexto*, pp. 9-63. Quito: Editorial Ciudad.
- Kullock, David y Murillo, Fernando (2010). *Vivienda social en Argentina. Un siglo de estrategias espontáneas y respuestas institucionales 1907-2007*. Salta: Editorial Universidad Católica de Salta.
- Mendes Pereira, João Márcio (2010). *O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro (1944-200)*. Río de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Pozzi, Pablo (1990). “El sindicalismo norteamericano en América Latina y en la Argentina: el AIFLD entre 1961-1976”. *Herramienta*, vol. 10, pp. 163-184.
- Prebisch, Raúl (1955). “Informe económico ante la Junta Consultiva Nacional (18 de noviembre de 1955)”. En Altamirano, Carlos (2007), *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, pp. 178-184. Buenos Aires: Emecé.
- Puigbó, Raúl (1975). *La evolución del desarrollo de la comunidad*. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana.
- Schteingart, Martha y Broide, Beatriz (1974). “Procesos sociales, política de vivienda y desarrollo metropolitano. El caso de Buenos Aires”. En Castells, Manuel (ed.), *Estructura de clase y política urbana en América Latina*, pp. 235-286. Buenos Aires: Ediciones SIAP.
- Scirica, Elena (2010). “Visión religiosa y acción política. El caso de Ciudad Católica-Verbo en la Argentina de los años sesenta”. *PROHAL Monográfico, Revista del Programa de Historia de América Latina*, Primera Sección: Vitral Monográfico, n° 2, pp. 26-56.

- Segre, Roberto (1977). *Las estructuras ambientales en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Yujnovsky, Oscar (1984). *Las claves políticas del problema habitacional argentino*. Buenos Aires: Grupo Editor de América Latina.
- Ziccardi, Alicia (1977). *Políticas de vivienda y movimientos urbanos. 1963-1973. Documento de Trabajo*. Buenos Aires: Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella.

El rol del INTA en la conformación de la organización campesina en Formosa durante la década del sesenta

Cristian Eduardo Vázquez

El objetivo de este trabajo es describir el rol que desempeñó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la conformación de la organización campesina en la provincia de Formosa en los años sesenta. Para ello, se presentan las diversas iniciativas emprendidas por dicha institución que tenían como destinataria a la población rural. Sostenemos como hipótesis que las labores del INTA fueron un importante antecedente en la formación de una de las experiencias organizativas más importantes de la provincia, como lo fue la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF) en 1971.¹

Como veremos más adelante, desde los primeros trabajos sobre la experiencia liguista, se ha resaltado que la labor del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) fue el principal antecedente del conjunto de ellas. En los casos del Chaco, norte de Santa Fe y Misiones también se resalta el trabajo previo del Movimiento Cooperativista. Si bien coincidimos con esta visión en términos generales, consideramos que en los inicios de la organización rural participaron otras instituciones, como es el caso del INTA.

El INTA en los estudios sobre las ligas agrarias

Preguntarnos por el rol del INTA en la conformación de la ULICAF es atender a una doble vacancia historiográfica: temporal y temática. En relación con lo tem-

¹ El 14 de noviembre de 1970, el Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) y el Movimiento Juvenil Cooperativista –de la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitada– del Chaco organizaron el Primer Cabildo Abierto del Agro en Presidencia Roque Sáenz Peña. Este fue el hito que marcó la *emergencia* de las Ligas Agrarias Chaqueñas. La conformación de entidades semejantes se expandió al resto de las provincias del noreste: en agosto de 1971 en el norte de Santa Fe y Misiones; en diciembre en Formosa y en enero de 1972 en Corrientes.

poral, la irrupción de las ligas agrarias en la escena política provincial, regional y nacional llamó la atención tempranamente a militantes y académicos que se volcaron a su examen y comprensión. Los primeros trabajos se enfocaron, principalmente, en la década del setenta, período en el que se constituyen las ligas (Ferrara, 1973; Rozé, 1992; Archetti y Stölen, 1974; Bartolomé, 1975 y 1982).

Sin embargo, no podemos desconocer que la mayoría de las obras sobre las ligas brindan un espacio a los antecedentes, en consecuencia, a la década del sesenta. En este sentido, el libro de Francisco Ferrara (1973), *Qué son las ligas agrarias*, que aborda el conjunto de experiencias de la región del nordeste, dedica su primer capítulo al MRAC. En él se describe el surgimiento del Movimiento en 1958; su desarrollo, al presentar sus principales características: estructura organizativa, metodología de trabajo y objetivos; hasta su expulsión de la institución eclesial, en 1972, en un contexto de efervescencia social y de conformación de las ligas. Del mismo modo, Jorge Rozé (1992) recupera la experiencia del MRAC como precedente del surgimiento de las ligas.

En relación con la vacancia temática, podemos señalar que Ferrara (1973) y Rozé (1992), que se transformaron en citas ineludibles sobre la temática, no hacen referencia al INTA. Para el caso particular de Formosa, sostiene Ferrara: “El funcionamiento de los Centros Radiofónicos² fue[ron] objetivamente complementario del trabajo del Movimiento Rural en la constitución de los Consejos Campesinos[,] germen de las futuras Ligas” (1973: 231). En este mismo sentido, también en relación con Formosa, afirma Rozé: “A diferencia del Chaco, donde el Movimiento Rural debe compartir la conducción [de las Ligas] con las cooperativas, pues constituían dos instituciones integradoras de similar valor, aquí todo el papel le cabe a las organizaciones ligadas a la Iglesia” (1992: 95).

Consideramos que estas interpretaciones obedecen a que el desarrollo y despliegue del MRAC y, posteriormente, de las ligas fue tan espectacular que obturó la posibilidad de analizar otras experiencias análogas en el mismo espacio geográfico y temporal. La omisión del rol del INTA en los estudios sobre las ligas es notoria: no se encuentra mención a las labores del Instituto en las obras de Archetti (1975, 1977 y 1988), Archetti y Stölen, (1974 y 1975), Stölen (2004), Bartolomé, (1975 y 1982), Lasa (1989), Galafassi (2005) ni Adobato (2011).

² Resulta interesante la referencia de los Centros Radiofónicos, pertenecientes al Instituto de Cultura Popular (INCUPO), como germen de las ligas si se considera que la audición radial que da visibilidad a la entidad comenzó a ser emitida el 21 de septiembre de 1970. Es decir, la apertura del programa “Juntos Podemos”, de INCUPO, es contemporáneo a la creación de las ligas del Chaco y al importante grado de movilización que existía en toda la región.

Y si bien en su texto de 1975, *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*, Archetti y Stölen agradecen a los ingenieros de la Estación Experimental Reconquista del INTA por la información suministrada sobre las condiciones agronómicas de la región, la alusión se agota allí.

Aun así, existe un conjunto de investigaciones que reconocen la labor del INTA en relación con el MRAC y como marco de posibilidad del surgimiento de las ligas. El primero de ellos pertenece a Mercedes Moyano Walker (1991), que indaga el derrotero del MRAC a nivel nacional. En este marco, la autora reseña el desarrollo del INTA y describe un convenio celebrado entre esta entidad y el Movimiento Rural. El segundo corresponde a Ricardo Murtagh (2013) que examina un conjunto de iniciativas provenientes del campo católico para afrontar las condiciones de pobreza de la población rural del nordeste entre 1960 y 1983. Al igual que Moyano Walker, Murtagh destaca el trabajo asociado entre el INTA y el MRAC.

Otro trabajo que merece ser incluido en este recorrido es el de Cecilia Gárgano (2014). Si bien la investigadora no se ocupa del derrotero de las ligas, sí nos presenta un análisis del INTA entre 1973 y 1983. La importancia de esta pesquisa para nosotros radica en que analiza el rol que desempeñó el INTA en la conformación de la Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo de Herrera, en la provincia de Tucumán. De este modo, Gárgano nos invita a interrogarnos por las prácticas concretas del organismo en espacios geográficos extrapampeanos y con agricultores no capitalizados. Por último, vale referir la biografía de Ana Olivo (2013) y las entrevistas compiladas por Fernández (2016). Ambos son trabajos realizados a partir de fuentes orales, que se circunscriben a la provincia de Corrientes y contienen referencias a las funciones que cumplió el INTA (asesoramiento técnico y espacio de sociabilidad). Por lo dicho hasta aquí, el presente trabajo se inscribe dentro de estas últimas líneas de investigación.

La creación del INTA y su inserción en la provincia de Formosa

En 1955, el recientemente instaurado gobierno *de facto* autodefinido como Revolución Libertadora recibió las recomendaciones del economista Raúl Prebisch, secretario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),³ para hacer frente –entre otras cosas– al estancamiento de la producción agrícola.

³ La CEPAL se creó en 1948 como organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

En el estudio, presentado en noviembre de 1955 y bajo el nombre de *Informe económico ante la Junta Consultiva Nacional*, Prebisch sugirió que:

La revolución tecnológica que urge llevar a cabo en el campo argentino no podrá cumplirse sin dedicar esfuerzo considerable y persistente a la investigación agropecuaria, a las tareas de extensión y enseñanza, tanto para formar investigadores y divulgadores, como para proporcionar al agro hombres capaces de llevar a la práctica la nueva tecnología (Prebisch, 1959, en Durlach, s/f: 3).

La sugerencia de Prebisch encontró una pronta respuesta. Esto fue posible porque desde fines del siglo XIX y principios del XX fueron creadas en el país distintas entidades de investigación vinculadas a la actividad agropecuaria: en 1909 el gobierno de la provincia de Tucumán creó la primera estación experimental del país; dos años más tarde, el Ministerio de Agricultura de la Nación puso en funcionamiento la Oficina de Estaciones Experimentales; y, durante la década del treinta, la creación de juntas reguladoras también representó una forma de intervención técnica y de producción de conocimiento en relación con la actividad agropecuaria.

Por lo tanto, como sostienen León y Losada (2002), el “Informe Prebisch” de algún modo subvaloró los niveles que existían en el país en materia de ciencia y tecnología agropecuarias. De este modo, agregan los autores, la creación de una entidad con las características previstas por el secretario de la CEPAL fue viable en la medida que heredó una estructura organizativa y, fundamentalmente, la inteligencia y capacidad de trabajo de un conjunto de profesionales.

La propuesta de Prebisch se tradujo en la creación del INTA. Ello se concretó el 4 de diciembre de 1956 mediante el Decreto-Ley N° 21680.⁴ Sin embargo, recién el 6 de mayo del año siguiente este fue puesto en marcha mediante el Decreto Reglamentario N° 4644/57. El proceso de institucionalización del INTA concluyó en 1958 cuando el gobierno de Arturo Frondizi ratificó el decreto en el Congreso Nacional, por Ley N° 14467.

La creación del INTA formó parte de un intenso proceso de conformación de instituciones científicas y tecnológicas en el país: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) (León y Losada, 2002). Se trató, por cierto, de un

⁴ El decreto fue firmado por el entonces presidente provisional, Pedro Eugenio Aramburu, el vicepresidente provisional, Isaac Rojas y el ministro de Agricultura, Alberto Mercier, entre otros.

proceso regional, en el que la lógica desarrollista imprimía una institucionalización tecnocrática y cientificista al conjunto de los Estados latinoamericanos.

El Decreto-Ley que dio origen al INTA estaba constituido por 29 artículos. El primero de ellos condensaba los principios y objetivos que perseguía el organismo, esto es: “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.⁵

En referencia a la organización del flamante Instituto, se destacaba la novedosa integración entre investigación y extensión.⁶ En ese momento, el INTA era la única institución agraria en Latinoamérica en la que investigación y extensión estaban fusionadas para lograr una mayor efectividad en su labor (Alemany, 2012). Para lograr dicho propósito, el INTA se organizó, desde su creación, en Estaciones Experimentales Agronómicas y Agencias de Extensión Rural repartidas a lo largo del territorio nacional. Esta distribución territorial buscaba que el Instituto diera respuestas a las demandas específicas que se presentaban en cada región.

Otra característica de la institución fue la autarquía financiera y administrativa. La autarquía financiera estaba garantizada mediante el gravamen del 1,5% *ad valorem* a los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exportaran. Además, engrosaron los fondos las subvenciones de la industria, el comercio y el agro, como así también los aportes de gobiernos provinciales, legados y donaciones. Por la autarquía administrativa, el INTA se regía por las disposiciones emanadas de su Consejo Directivo.

En referencia a las corrientes de pensamiento que influyeron y configuraron la práctica de extensión del INTA durante los primeros veinte años de existencia, Carlos Alemany (2002) afirma que la más significativa fue la teoría del desarrollo sustentado en el pensamiento estructuralista latinoamericano. Desde esta concepción, el deterioro de los términos de intercambio de los países exportadores de materias primas, como la Argentina, explicaba gran parte del atraso, la pobreza y el subdesarrollo.⁷

⁵ Decreto-Ley N° 21680, 1956, en Durlach (s/f: 4).

⁶ Siguiendo Gárgano, entendemos por “extensión rural” a las “actividades de promoción y producción de un conjunto de prácticas y de conocimientos heterogéneos (de índole técnica, social y cultural), vinculados a la producción agropecuaria y destinados a la población rural” (2017: 3).

⁷ Desde este pensamiento, se propuso una variedad de políticas para contrarrestar la tendencia negativa en los términos de intercambio. En este sentido, se pregonó como principal estrategia el desarrollo industrialista basado en la sustitución de importaciones. Para esto, Prebisch y la

Según Alemany, la otra corriente de pensamiento que tuvo gran influencia sobre la extensión rural que practicó el INTA fue la sociología rural estadounidense. El surgimiento de esta disciplina estuvo tradicionalmente asociado al modelo teórico de la dicotomía estructural entre sociedad moderna-sociedad tradicional. Desde este enfoque, en palabras de Alemany, se “consideraba al ‘tradicionalismo rural’ como el principal responsable de los bajos niveles de vida y la limitada producción rural” (2002: 5). A partir de este pensamiento, el desarrollo era concebido como la transformación de una sociedad “tradicional” en una “moderna”. En este pasaje, la innovación tecnológica en la agricultura era central.

Desde las posturas reseñadas, se sostenía que el desarrollo agrícola y el consecuente aumento de la producción “dependía de soluciones de naturaleza diferenciada: una de orden técnico [...] y otra de orden educacional, vinculada al cambio en la mentalidad del hombre rural para tornarlo apto para una vida moderna” (Alemany, 2002: 5). En consecuencia, el autor consultado afirma que la confluencia entre la teoría del desarrollo y la sociología rural estadounidense dio como resultado el “paradigma educativo”⁸ que guio la extensión en el INTA en sus primeras dos décadas.

Al respecto, Flora Losada afirma que desde estas corrientes de pensamiento se puso “énfasis en la incorporación de tecnología para mejorar las condiciones de vida de la población rural” (2003: 34). Sin embargo, agrega la autora, se “dejaba de lado los principales problemas del agro latinoamericano: la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, caracterizada por la alta concentración del suelo”. Además, no había una problematización referente a “la existencia de una enorme masa de pequeños productores y trabajadores sin recursos” (Losada, 2003: 34).

Esta concepción sobre el ámbito y el desarrollo rural tuvo, al menos, dos consecuencias en las prácticas institucionales del INTA. Por un lado, como analiza Gárgano, el INTA, en sus inicios, no se dirigió “en forma prioritaria a los agricultores ‘de menores recursos’, sino que más bien concentró sus esfuerzos en los productores medianos y, en menor medida, grandes” (2014: 161). Por otro lado, como afirma Obschatko, y en consonancia con lo anterior, hasta la

CEPAL eran partidarios de mantener un nivel adecuado de protección de las nuevas producciones respecto a la competencia externa, por medio de barreras tarifarias y no tarifarias aplicadas a las exportaciones (González, 2001).

⁸ Carballo (2007) abona esta interpretación al sostener que entre 1956-1975 los proyectos institucionales del INTA estuvieron orientados por el “paradigma educativo”, “desarrollista” o del “desarrollo”.

década del ochenta “los programas del INTA incluye[ro]n una buena cantidad de innovaciones en condiciones de ser aplicadas, pero no est[aba]n evaluadas económicamente en las condiciones particulares del minifundio” (1983: 119).⁹

Sin embargo, como demostró Gárgano (2014), los agentes pertenecientes al INTA encontraron diferentes canales para entablar contacto y relacionarse con los así llamados pequeños productores, minifundistas o campesinos. En este sentido, la autora afirma que desde la creación del INTA y, particularmente, a través de sus Agencias de Extensión Rural, diseminadas a lo largo del país, se pudo concretar la idea de “llevar el Ministerio al campo”. Esto facilitó el contacto entre los extensionistas y la población rural, a partir del que se tejieron distintas vinculaciones. Esto tendría una particular relevancia en el caso de Formosa, una provincia con una marcada estructura minifundista.

En Formosa, como en otras jurisdicciones, el INTA inició sus labores absorbiendo otras experiencias, como el caso de la Chacra Experimental del kilómetro 193, en la cercanía de El Colorado. Esta chacra fue fundada el 24 de febrero de 1939 por la Junta Nacional del Algodón. Allí se instaló una desmotadora de algodón que afianzó la colonización e impulsó el cultivo de este producto en la zona. En 1946, el control administrativo del establecimiento se dividió en dos: la desmotadora quedó a disposición de la Junta Nacional del Algodón, y el Campo y la Estación Experimental pasaron a depender del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Con la creación del INTA, en 1956, el Campo y la Estación Experimental pasaron a formar parte del Instituto. Con esta transferencia se modificó el nombre a Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, denominación que mantiene hasta la actualidad. A su vez, esta Estación pasó a depender de la Estación Experimental Regional Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz Peña, que condujo los programas de investigación y extensión para toda la región.

Toda la labor de investigación y extensión agropecuaria en la provincia de Formosa durante el período estudiado estuvo a cargo de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado. Además, para extender su actividad, el INTA contó con Agencias de Extensión Rural en Formosa, Laguna Blanca, El

⁹La autora referida escribe como parte del Programa de Desarrollo Rural Integrado del Minifundio (Programa DRI). Es el primer programa que estuvo focalizado en los campesinos o minifundistas; dentro de los diferentes diagnósticos y documentos elaborados en el contexto del programa, utilizan indistintamente los términos. Esto constituyó un hecho inédito en el INTA que, hasta entonces, como expresamos anteriormente, se centraba en el asesoramiento y la asistencia técnica a productores medianos y grandes, realidad diferente a la del minifundista.

Colorado, Pirané e Ibarreta¹⁰ (ver mapa en la imagen 1). En este contexto, el Instituto impulsó la atención de la cuestión rural en la provincia.

Imagen 1. Agencias de extensión rural del INTA



Fuente: elaboración propia.

Nota: lo sombreado es el área donde tuvo presencia la ULICAF.

El inicio de la actividad del Instituto en Formosa contó con una condición paradójica. Por un lado, la alta proporción de la población rural suponía una situación favorable para su inserción. Según el censo de población, en 1960, el 66,4% de los habitantes de la provincial vivía en zonas rurales.¹¹ Por otro lado, el marcado predominio entre los productores de los minifundistas y campesinos,

¹⁰ Por razones de ubicación, la Estación Experimental Agropecuaria radicada en el departamento General San Martín (provincia del Chaco), depende de la Estación de El Colorado, aunque trabajó con los productores chaqueños.

¹¹ Los censos nacionales, de acuerdo a una práctica muy generalizada, consideran rural a la población que no supera los dos mil habitantes, y urbanas, a las que superan esta cantidad. En 1960 la provincia contaba con 118.578 habitantes.

distantes del agricultor capitalizado que la entidad tenía como prioridad. Para dar cuenta de las condiciones de producción de los agricultores formoseños, podemos decir que para 1960 las pequeñas explotaciones de hasta 25 hectáreas representaban el 59% del total.¹² Para el mismo año, podemos agregar que el 64% de las explotaciones estaban radicadas en tierras fiscales bajo el régimen de tenencia de ocupantes o arrendatarios, y que el algodón abarcaba el 74% de la superficie cultivada, lo que indica su carácter de monocultivo.

Frente a esta situación, los agentes del INTA debieron conciliar en la práctica los fines institucionales y las problemáticas locales. De todos modos, podemos afirmar que durante la década del sesenta fue preeminente el paradigma educativo que hacia fines del período fue incorporando las problemáticas, principalmente la cuestión de la tierra.

Es así que un folleto, que circuló por la provincia a mediados de la década del sesenta, informaba que la finalidad del INTA era contribuir a mejorar las condiciones de vida del productor rural y su familia mediante la “tecnificación de la explotación agropecuaria y la educación de la familia rural”. Además, agregaba el folleto, que entre los objetivos del Instituto se contaban el “asesoramiento técnico al productor”; la “investigación agraria”; el “desarrollo técnico y cultural de la juventud rural”; y la “capacitación integral del ama de casa”.¹³

Para cumplir los variados objetivos, era ineludible la integración y coordinación de las labores entre los investigadores y los extensionistas. Además, como sugiere el referido folleto, los objetivos del INTA no se agotaron en atender las necesidades del productor, sino que también otorgó un importante lugar a las actividades en torno a la familia rural, sobre todo a las orientadas a las mujeres y los jóvenes. Para ocuparse de estos actores específicos, el Instituto contaba con dos mecanismos, constitutivos de la extensión, el Hogar Rural y los Clubes 4-A.¹⁴ Uno y otro órgano comenzaron a funcionar a mediados de la década

¹² La investigación de Horacio Stagno (1970) sobre la producción algodonera en el Chaco demostró que las explotaciones que poseen hasta 25 hectáreas de superficie cultivada utilizan una tecnología rudimentaria basada en la tracción animal. Según el autor referido, si se supera el umbral de 25 hectáreas sembradas, cobra importancia la mecanización y el uso de tractores. La dificultad de la modernización tecnológica excluía aún más a los productores formoseños del arquetipo que tenía el INTA del sujeto que era objeto de su intervención.

¹³ “Qué es el INTA”, folleto, s/f.

¹⁴ Santiago Bilbao (1968) indica que los Clubes 4-A son organizados a partir del modelo de los Clubes 4-H de los Estados Unidos. Su emblema es el trébol de cuatro hojas, cada una con la letra “H” que simboliza el desenvolvimiento armónico de la cabeza (*Head*), el corazón (*Heart*), las manos (*Hands*) y la salud (*Health*). En el caso argentino, adoptaron el trébol de cuatro hojas y cada una con una letra “A” denominación ilustrativa de Acción, Adiestramiento, Amistad y Ayuda.

del cincuenta y dependían de la Dirección de Agronomías Regionales; con la creación del INTA, pasaron a formar parte de dicho organismo.

El programa Hogar Rural, destinado a las esposas e hijas de los productores, tenía como principal objetivo “ayudar a las amas de casa a mejorar los aspectos sociales, económicos y sanitarios del hogar y la vida familiar”.¹⁵ Las prácticas del Hogar Rural estaban orientadas por la división de *género*, según la que la mujer desempeñaba labores orientadas a las actividades del cuidado, como “mejorar la salud rural; elevar el estado de nutrición de las familias rurales y las condiciones sanitarias del hogar”.¹⁶ En este sentido, las mujeres y las labores que ellas desempeñaban se restringían al ámbito del hogar, a la vez que se excluía de las tareas referidas a la administración o gestión de la explotación rural. Para 1966, en la Argentina, funcionaban 407 Hogares Rurales en los que participaban 7.640 mujeres. Este programa fue, según Tiscornia y Alonso, “el primer trabajo institucional con mujeres ejecutado por un sistema nacional del Estado en el ámbito rural” (2013: 5).

Durante la década del sesenta, desde el INTA se fueron constituyendo diferentes Hogares Rurales en Formosa. Funcionaban bajo la atención de los asesores técnicos pertenecientes a las Agencias de Extensión. En este sentido, en mayo de 1964, los asesores del INTA en Laguna Blanca emprendieron una campaña de difusión de las labores del Hogar Rural en la zona. El matutino provincial informó que las integrantes de dicha organización se habían entrevistado con comerciantes de esa localidad “para intercambiar opiniones sobre las actividades que se despliegan en bien de los hogares y la comunidad”.¹⁷ Nada dice la nota citada respecto de las actividades efectuadas, sin embargo, basta para considerar el temprano desarrollo que el Hogar Rural supo tener en la provincia.

Durante ese mismo año, 1964, el INTA otorgó veintiséis becas a agentes de Extensión de los distintos Centros Regionales. Al Centro Regional Chaqueño —que comprendía el Chaco y Formosa— le correspondieron cuatro de esas becas. Estas fueron aplicadas para el cuarto Curso de Capacitación para Extensionistas que se realizó entre enero y octubre de 1964. La parte teórica del curso se dictó en Castelar (Buenos Aires) y la práctica en áreas de Pergamino (Buenos Aires) y El Sombrerito (Corrientes). Por Formosa, participaron la asesora del Hogar Rural de la Agencia de Extensión de Laguna Blanca y la asesora del Hogar Rural de Ibarreta.¹⁸

¹⁵ *La Mañana*, 11/1/1967.

¹⁶ *Ídem*.

¹⁷ *La Mañana*, 15/5/1964.

¹⁸ *Ibidem*, 18/11/1964.

A medida que avanzaba la década del sesenta, los Hogares Rurales se fueron extendiendo en las zonas de influencia de las Agencias de Extensión Rural. Así, en 1965, se concretó la creación de un Hogar Rural en Ibarreta. Según se informó, esta entidad tenía como fin “capacitar a la mujer de campo para mejorar el nivel de vida familiar”.¹⁹ En 1967 tuvo lugar la creación de otro ente similar en la colonia Campo Hardy, en las cercanías de El Colorado. Se lo denominó “Amistad Vecinal” y estaba integrado, según el diario *La Mañana*, por “jóvenes y amas de casa, deseosas de mejorar su hogar y la comunidad donde viven”.²⁰ En su conjunto, estas cuestiones brindan un panorama de los quehaceres efectuados por el Hogar Rural y su expansión en la provincia.

Imagen 2. Hogar Rural Camino del Saber, localidad de Siete Palmas (1967)



Fuente: Archivo personal de Isabel Arguello.

Por otra parte, los Clubes 4-A estaban orientados a los jóvenes, varones y mujeres, mayores de diez años.²¹ Su objetivo era “formar hombres y mujeres sanos

¹⁹ *Ibidem*, 17/4/1965.

²⁰ *Ibidem*, 28/10/1967.

²¹ Existe un acuerdo generalizado de que se podía formar parte de los clubes desde los diez años; no sucede lo mismo con la permanencia. En este sentido, Gárgano (2014) sostiene que las mujeres podían pertenecer en los clubes hasta cumplir los dieciocho años y, según Bilbao (1968), para los varones no estaba reglamentado, aunque en la práctica no agrupaban a mayores de veintiún años. Por otro lado, Torriglia (1960), al hacer referencia a los Clubes 4-A, sostiene que sus socios tienen entre diez y veinticinco años.

y fuertes, honrados y capaces, rectos y laboriosos, útiles a la comunidad y a la patria” (INTA, 1969). Para el primer semestre de 1967, en la Argentina, existían 454 Clubes 4-A que englobaban 11.628 socios, en promedio algo más de 25 participantes por club. Cada club, al igual que el Hogar Rural, contaba con el acompañamiento y asesoramiento de un extensionista del INTA.²²

En los clubes no había una cuota por membresía. Sin embargo, los aspirantes debían expresar por escrito su deseo de pertenecer a la asociación y contar con la conformidad de su padre o tutor. Este requisito era una barrera para una gran cantidad de jóvenes, sobre todo de los sectores más carenciados, por los altos índices de analfabetismo.²³ Según el ingeniero agrónomo Alberto Schaller,²⁴ en Formosa, este limitante no se aplicó: “La única exigencia era ser joven rural. No había ningún tipo de discriminación [...] si algún chico era analfabeto, si él lo deseaba, se buscaba la forma de que acceda a la información escrita”.²⁵

En Formosa, al igual que aconteció con el Hogar Rural, los Clubes 4-A tuvieron su principal despliegue en las zonas donde el INTA contaba con Agencias de Extensión Rural y, sobre todo, en El Colorado. Tan es así que, en una extensa entrevista, Schaller señaló que en ese momento, 1967, en El Colorado funcionaban “cinco de estos clubes” que se reunían “dos veces al mes [para] dialogar sobre distintos aspectos de la técnica agropecuaria”.²⁶ En ese mismo período, según Santiago Bilbao (1968), la provincia de Formosa contaba con diez clubes. Estos funcionaron como un importante espacio de capacitación y socialización.

Además de sus objetivos específicos, los clubes desempeñaron un papel importante en la identificación y formación de líderes. Desde la perspectiva imperante y los lineamientos institucionales, los líderes locales tendrían un carácter

²² En 1966 había en la Argentina noventa asesores para 426 clubes, que en su conjunto contaban con 10.927 socios. Según estos datos, cada asesor tenía bajo su responsabilidad cinco clubes y un total de 121 socios (Bilbao, 1968).

²³ En la provincia de Formosa, el índice de analfabetismo de la población mayor de 14 años, en 1960, representaba el 19,5% y una década después esta cifra descendió a 18,6%; esta proporción se agrava en las áreas rurales.

²⁴ Schaller fue extensionista de Juventudes Rurales y Familia Rural durante veinte años en el INTA El Colorado.

²⁵ Schaller, 12/7/2015, comunicación con el autor vía Messenger.

²⁶ La entrevista se realizó en la ciudad de Formosa aprovechando que “el ingeniero Schaller dictó una serie de charlas en un cursillo para campesinos” que organizó “Misiones Rurales en Formosa” (*La Mañana*, 10/1/1967). Producto de la entrevista, el diario *La Mañana* publicó dos notas consecutivas sobre el INTA; una se denominó “¿Qué es el INTA?” y la otra “INTA y comunidad rural”. En ellas, hacían un recuento de la vida institucional del Instituto (*La Mañana*, 10 y 11/1/1967).

ejemplificador y demostrativo para sus coterráneos; de la misma manera se los pensaba como agentes de difusión de conocimientos y futuros dirigentes. En este sentido, una cartilla del INTA indicaba que “la tarea de los Clubes permite detectar a los futuros líderes locales, a quienes prepara para la responsabilidad que han de asumir” (1970: 8).

En la tarea de reconocer futuros líderes, los maestros rurales fueron una fuente de consulta respecto de quiénes eran los jóvenes con mayor potencialidad. A los señalados se les brindaba cursos, becas, pasantías y otras facilidades de capacitación con el fin de que aumentaran “sus conocimientos técnicos y de manejo de grupo” (Bilbao, 1968: 31). Tanto énfasis puso el INTA en esta tarea que, a fin de trabajar de forma metódica, impulsó la conformación de “clubes de Líderes” (Bilbao, 1968: 31).²⁷

Aparte de lo referido, para cumplir con sus objetivos el INTA coordinó actividades con otras entidades avocadas al medio rural. Entre ellas se destacan aquellas de filiación católica. De hecho, en enero de 1967, las Misiones Rurales Argentinas organizaron un cursillo para campesinos en la ciudad de Formosa, que contó con la presencia del ingeniero Schaller, como ya referimos previamente.

Del mismo modo, aunque de manera más institucional y sistematizada, el Instituto realizó junto a las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia²⁸ cursos para comunidades rurales en capillas, escuelas e incluso en casas de familia. Se trataba de cursos para mujeres diagramados en encuentros diarios, de dos horas, durante aproximadamente veinte días. Se abordaban cuestiones religiosas, técnicas y sociales. Según Oscar Ortíz,²⁹ dirigente del MRAC en Formosa, el horario indicado era “la siesta [...] momento más oportuno para que se reúnan las ama de casa” (1972: 9).

²⁷ Hacia 1967 funcionaban seis clubes con estas características en el país.

²⁸ Esta congregación de religiosas llegó a la provincia en 1966. Su objetivo era *realizar la acción social de la mujer*. Para lograr su objetivo construyeron el Centro de Orientación, Formación y Acción Social (COFAS). Las Hermanas Cruzadas cumplieron una función muy dinámica en todo el período y el COFAS fue un símbolo de su labor pastoral. Fue tanta su importancia que el Segundo Congreso Campesino, el 11 de diciembre de 1971, en el que se decidió la creación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, se realizó en el edificio del COFAS. Sin embargo, hasta la actualidad no hay trabajos sobre esta congregación.

²⁹ Desde 1966, Ortíz se desempeñó en el MRAC como *permanente* (es la definición usada para definir a las personas que trabajaban de forma rentada y *full time* para la organización). Desde fines de la década del sesenta, participó en la creación de INCUPO. En 1972, Ortíz se trasladó a Reconquista para pasar a ocupar un lugar en el Centro de Capacitación de Líderes (CECAL) que el Instituto tenía en esa ciudad.

Un importante apoyo en las actividades del Instituto fue su programa radiofónico el “INTA Ayuda al Hombre de Campo”, que era transmitido por Radio Nacional Formosa desde 1965.³⁰ Las audiciones brindaban asesoramiento sobre las actividades agrícolas e informaban sobre las realizaciones de la entidad.

Este programa, como otros que salieron al aire posteriormente, fue una extraordinaria herramienta de información, ya que logró superar la distancia, la dispersión y el aislamiento de la familia rural. La importancia de las audiciones radiales cobra mayor relevancia cuando se considera que la prensa escrita contaba con el limitante del alto índice de analfabetismo de la población rural y la televisión todavía no había llegado a la provincia. Así se comprende que, con el paso del tiempo, se haya convertido en un medio de formación, concientización y organización del sector campesino.³¹

El rol del INTA en el desarrollo del MRAC y en la conformación de la organización campesina

En la segunda mitad de los años sesenta, las labores del INTA persistieron y se ampliaron. Dicha institución llegó a ser la de mayor reconocimiento y presencia en el medio rural formoseño, por lo menos hasta los últimos años de la década referida. En este contexto, el INTA fue un elemento de suma importancia en la inserción y desarrollo del MRAC y, posteriormente, en la formación de la organización campesina en la provincia.

De acuerdo a lo referido, el INTA le permitió al MRAC contar con una estructura organizativa al momento de iniciar sus actividades en la provincia.³² Este punto es central para entender el desarrollo del Movimiento Rural en Formosa y, después, el surgimiento de la ULICAF.

En este sentido, desde 1964 hasta 1966, el MRAC se abocó principalmente a la tarea de instruir y formar militantes del medio rural que asumieran la

³⁰ *La Mañana*, 8/2/1965.

³¹ A mediados de 1967, el MRAC dio inicio a las audiciones radiales del programa “Siguiendo la Huella”, las primeras audiciones dirigidas a Formosa fueron emitidas desde Z.P. 13 Radio Boquerón ubicada en Alberdi, Departamento de Ñeembucú, Paraguay. El 21 de septiembre de 1970 por LRA 8 Radio Nacional Formosa y por Radio Universidad de Santa Fe salió la primera audición del programa “Juntos Podemos” de INCUPO. Este modelo se inspiró en la radio educativa creada por el sacerdote José Salcedo Guarín en 1947, en Sutatenza, valle de Tenza, Colombia.

³² Si bien el MRAC se creó a nivel nacional en 1958, recién a mediados de 1964 logró comenzar sus actividades en Formosa; para ver un análisis detallado de este proceso, ver Vázquez (2017).

responsabilidad organizativa y de difusión de la entidad. Con esta finalidad, se realizaron encuentros en diferentes puntos de la geografía provincial. En dichas actividades, el rol del INTA fue sumamente importante porque, por un lado, proporcionó sus técnicos y extensionistas para dictar los talleres y, por otro lado, los participantes de los primeros cursos eran, en su mayoría, miembros de los Clubes 4-A y Hogar Rural.³³

Además, desde 1966, el Movimiento se planteó como objetivo la constitución de grupos rurales,³⁴ que era su núcleo básico organizativo. En la concreción de dicho fin, el INTA fue de vital importancia, principalmente en las zonas donde funcionaban la Estación Experimental y las Agencias de Extensión. En esta dirección, un documento interno del Movimiento Rural de Formosa, correspondiente a 1966, manifiesta:

Entrevistamos a los encargados de la agencia de extinción del INTA [El Colorado, con quienes] se habló sobre la posibilidad de crear en esa zona grupos rurales, ya que es un ambiente muy propicio por la densidad de los agricultores.

[Agrega] la Señora Lidia, asesora de los hogares rurales, dijo que en la zona hay muchos jóvenes y necesitan orientación. Ingenieros y agrónomos se ofrecieron gentilmente para un trabajo en coordinación.³⁵

En esta línea, otro documento del Movimiento, pero de 1968, sostiene:

En la Colonia el Gato, el Movimiento Rural trabajará con las mismas personas que se hallan nucleadas en los clubes juveniles rurales [del INTA]. Lo mismo se realizará en el km 128, es decir el INTA, intensificará la parte técnica y el movimiento tratará de impulsarlo por la parte de formación humana.³⁶

En este contexto, el MRAC creó cinco grupos rurales entre 1966 y 1968. Todos ellos se hallaban situados en zonas donde el INTA venía desplegando sus actividades con anterioridad. Esta característica, nos permite sostener que el INTA,

³³ El primer curso de formación del MRAC en Formosa que tenemos documentado se realizó en Laguna Blanca durante el mes de octubre de 1964 y tuvo una duración de diez días (*La Mañana*, 7/10/1964). En él participaron personas pertenecientes al INTA.

³⁴ Según el *Reglamento del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina* (1963), los grupos rurales se encontraban integrados por “personas que viven y/o trabajan en el campo y están dispuestos a reunirse y trabajar en cumplimiento de las finalidades del Movimiento Rural” (art. 21).

³⁵ Diócesis de Formosa. Informe diario correspondiente al mes de septiembre de 1966, p. 3.

³⁶ Diócesis de Formosa. Informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 1968, p. 2.

por sus actividades pretéritas como por su colaboración, cumplió un rol central en el desarrollo de la rama rural de la Acción Católica en Formosa.

El hecho de que el INTA haya creado las condiciones para la inserción y desarrollo del Movimiento Rural –principal antecedente de las ligas– ya le permite ser calificado como un precedente de la organización campesina en la provincia. Sin embargo, consideramos que su rol no se agota allí y que hay otros factores, en relación con el INTA, que nos permiten entender la emergencia de la ULICAF.

Entre ellos, podemos destacar que los Clubes 4-A y los Hogares Rurales se constituyeron en importantes espacios de sociabilidad –en algunos casos, los primeros–, donde los jóvenes y mujeres podían encontrarse y comenzar a debatir sobre las diferentes problemáticas que los involucraban. En esta línea argumental, podemos agregar que, el INTA se desempeñó como una tribuna desde la que los productores podían plantear sus inquietudes a las autoridades. Esto sucedió en marzo de 1968, cuando desde el INTA de El Colorado se organizó una reunión de productores que contó con la presencia del gobernador *de facto* Augusto Sosa Laprida. En ese marco, los representantes de varias colonias presentaron sus inquietudes: “Las mismas se refirieron principalmente al problema de la tierra”.³⁷

En segundo lugar, hay que destacar la labor del INTA en la conformación de líderes rurales. Esto les permitió, primero, al MRAC y, después, a las ligas, contar con un importante número de personas, principalmente jóvenes, formadas tanto en temas técnicos como organizativos.

En algunos casos, los jóvenes que atravesaron los espacios formativos y de sociabilidad del INTA llegaron a ocupar importantes cargos dentro de la estructura organizativa de la ULICAF. Uno de esos casos es el de Isabel Arguello, quien durante la segunda mitad de la década del sesenta formó parte del Club 4-A en la zona de influencia de Laguna Blanca. Con el arribo del Movimiento Rural a la provincia, Arguello pasó a engrosar sus filas de militantes. La trayectoria de Arguello continuó hasta llegar a ocupar un cargo en la Comisión Central de las Ligas Campesinas en Formosa.³⁸

Otro derrotero semejante fue el de Guillermo Duré. Él, al igual que Arguello, inició su actividad formativa en un Club 4-A que pertenecía a la Agencia de Extensión de El Colorado. Duré se sumó al MRAC en los últimos años de la década del sesenta. Dentro de esta organización, cumplió funciones a nivel regional. Avanzado los años setenta, llegó a ocupar el puesto de secretario general

³⁷ *La Mañana*, 14/3/1968.

³⁸ Arguello, 10/2/2013, entrevista con el autor.

de la ULICAF.³⁹ Tomando estos casos como referencia, podemos concluir que el INTA no solo creó una importante estructura organizativa, sino que, también, tuvo una importante función en la formación de dirigentes rurales que tendrán un rol destacado en la conformación y desarrollo del MRAC y la ULICAF.

A modo de conclusión

En definitiva, a lo largo la década del sesenta las prácticas que el INTA desarrolló en el medio rural dieron lugar a la generación de un intrincado espacio de sociabilidad y redes interpersonales que le permitieron adquirir un significativo reconocimiento social. Mediante sus acciones se hicieron posibles labores entre comunidades rurales caracterizadas por la dispersión y la atomización. El rol que el INTA desempeñó en la identificación y formación de líderes rurales fue central en ese sentido.

Consecuentemente, la población rural encontró en el INTA un marco de coordinación y fortalecimiento de los mecanismos para exponer sus necesidades y defender sus intereses. La organización de los productores rurales en la provincia y la construcción de canales institucionales para expresar sus demandas hacia el poder político difícilmente podrían explicarse de forma cabal sin atender a las labores del INTA. Pero a su vez, estas intervenciones no podrían comprenderse si no se atiende a la importancia que las iniciativas eclesíásticas y pastorales tuvieron en la población campesina de la provincia. Las diferentes iniciativas a las que hemos hecho mención, eclesíásticas y del INTA, permitieron el desarrollo del Movimiento Rural de Acción Católica, desde mediados de la década del sesenta, y la emergencia de la organización campesina con posterioridad.

En otro orden de ideas, es pertinente realizar una reflexión sobre la elección de la escala de observación y análisis. En este sentido, el estudio de un espacio local nos permitió complejizar la visión preponderante sobre la emergencia de las ligas agrarias. De este modo, al reducir el foco de indagación no solo podemos ver más nítidamente el rol del INTA en la conformación de la organización campesina, sino, también, llegar a afirmar que su labor generó las condiciones para la inserción y desarrollo del MRAC.

Del mismo modo, la elección de la escala nos posibilitó dar cuenta de la trayectoria de actores que iniciaron su formación y militancia en el INTA, pasaron por el MRAC, y llegaron a formar parte de la ULICAF. En este sentido, dos

³⁹ Duré, 2/3/2018, entrevista con el autor.

cuestiones quedaron visibilizadas: por un lado, la circulación de los militantes por diferentes espacios de sociabilidad y, por otro lado, la articulación entre las diferentes instituciones.

Finalmente, presentamos un conjunto de interrogantes que consideramos oportuno abordar en otros trabajos. Primero, el análisis de las trayectorias de miembros de los Clubes 4-A, los Hogares Rurales, los técnicos y extensionistas del INTA, el que nos permitiría conocer las diferentes opciones políticas que realizaron estos actores en un contexto de efervescencia social. También, merece ser objeto de indagación los dispositivos institucionales que tenían como sujeto de intervención a las mujeres y los jóvenes. Otra cuestión que amerita ser abordada en profundidad es la relación entre el INTA y las ligas agrarias en los marcos provinciales: consideramos que esto posibilitaría complejizar el análisis sobre la experiencia liguista y confrontar el accionar del INTA en las diferentes provincias donde se desplegó esta organización rural.

Bibliografía

- Adobato, María (2011). *Historias que ligaron. Aproximación histórica a las Ligas Agrarias del Norte Santafesino*. Reconquista: Fondo Editorial de la Municipalidad de Reconquista.
- Alemany, Carlos (2002). “Los cambios de la extensión del INTA y su relación con los paradigmas del desarrollo”. En XI Jornadas Nacionales de Extensión Rural y III Jornadas de Extensión del Mercosur.
- (2012). “Elementos para el estudio de la dinámica y evolución histórica de la extensión rural en Argentina”. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, España.
- Archetti, Eduardo (1975). “Viabilidad estructural y participación gremial en explotaciones familiares. Explotaciones agrícolas y tambeas de Santa Fe”. *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 59, pp. 399-419.
- (1977). “El proceso de capitalización de campesinos argentinos”. *Caravelle-Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, vol. 1, n° 28, pp. 123-140.
- (1988). “Ideología y organización sindical: las ligas agrarias del norte de Santa Fe”. *Desarrollo Económico*, vol. 28, n° 111, pp. 447-461.

- Archetti, Eduardo y Stölen, Kristi (1974). “Tipos de economía, obstáculos al desarrollo capitalista y orientaciones generales de los colonos del norte de Santa Fe”. *Desarrollo Económico*, vol. 14, n° 53, pp. 151-179.
- (1975). *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bartolomé, Leopoldo (1975). “Colonos, plantadores y agroindustria. La explotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones”. *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 58, pp. 239-264.
- (1982). “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975”. *Desarrollo Económico*, vol. 22, n° 85, pp. 25-56.
- Bilbao, Santiago (1968). *Cinco movimientos juveniles rurales, reseña comparativa*. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Mimeo.
- Carballo, Carlos (2007). “Cincuenta años de agricultura familiar y desarrollo rural en el INTA”. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n° 26 y 27, pp. 63-93.
- Durlach, Augusto (s/f). *El INTA en la bibliografía*. Documento inédito. Disponible en <http://www.biblioteca.org.ar/libros/150463.pdf> (consultado el 25/8/18).
- Fernández, Mabel (2016). *Historia Chiquitas. Que cuentan la historia grande*. Goya: Arandú.
- Ferrara, Francisco (1973). *Qué son las ligas agrarias. Historia y documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Galafassi, Guido (2005). “Rebelión en el campo. Las Ligas Agrarias de la región Chaqueña y la discusión del modelo dominante de desarrollo rural (1970-1976)”. En Lázaro, Silvia y Galafassi, Guido (comp.), *Sujetos, política y representación del mundo rural. Argentina 1930-1975*, pp. 237-295. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Gárgano, Cecilia (2014). “Ciencia, tecnología y dictadura Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983)”. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.

- (2017). “Rupturas y continuidades de la extensión rural en Argentina (1973-1983)”. *Quinto Sol*, vol. 21, n° 2, pp. 1-23.
- González, Norberto (2001). “Las ideas motrices de tres procesos de industrialización”. *Revista de la Cepal*, n° 75, pp. 107-113.
- Lasa, Claudio (1989). “Un proceso de mediación política: Movimiento Rural y las Ligas Agrarias Chaqueñas”. *Sociedad y Religión*, n° 7, pp. 55-64.
- León, Carlos y Losada, Flora (2002). “Ciencia y tecnología agropecuarias antes de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n° 16, pp. 35-90.
- Losada, Flora (2003). “La institucionalización de la extensión rural con la creación del INTA (1957)”. *Documentos del CIEA*, n° 1, pp. 27-35.
- Moyano Walker, Mercedes (1991). “Organización popular y conciencia cristiana: el Movimiento Rural de Acción Católica Argentina”. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Luján. Mimeo.
- Murtagh, Ricardo (2013). “Experiencias y realizaciones de origen cristiano para afrontar a pobreza rural en el noreste argentino, 1960-1983”. Tesis de doctorado, Universidad Católica Argentina.
- Obschatko, Edith (1983). *Determinación de las posibilidades de desarrollo tecnológico y de conservación de los recursos naturales*. Buenos Aires: CFI.
- Olivo, Ana (2013). *Anita desde las Ligas Agrarias. Tierra, trabajo y dignidad*. Buenos Aires: Fundación CICCUS.
- Ortiz, Oscar (1972). “Situación pastoral de la Diócesis de Formosa”. En Büntig, Aldo y Chiesa, Carlos, *El catolicismo popular en la Argentina*, Cuaderno 6, pp. 85-106. Buenos Aires: Bonum.
- Rozé, Próspero (1992). *Conflictos agrarios en la Argentina 1 y 2. El proceso liguista*. Buenos Aires: Centro Editor América Latina.
- Stagno, Horacio (1970). *Organización de las explotaciones algodoneras costos de producción de algodón en Comandante Fernández, Chaco, Argentina*. Presidencia Roque Sáenz Peña: INTA-Centro Regional Chaqueño.
- Stölen, Kristi (2004). *La decencia de la desigualdad. Género y poder en el campo argentino*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Tiscornia, Luis y Alonso, Graciela (2013). “El desarrollo de las perspectivas de género en las políticas públicas de Extensión Rural y/o Desarrollo

Rural en la Argentina”. VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires.

Torriglia, Raúl (1960). “Escuelas rurales: necesidad de su reestructuración”. *El Monitor de la educación común*, n° 933-935, pp. 186-196.

Vázquez, Cristian (2017). “La emergencia de la organización campesina en Formosa durante la década del sesenta”. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico y Social.

Las ciencias sociales y los estudios de opinión pública en la llamada “Revolución Argentina”

Daniel Lvovich

La indagación que presentamos aquí forma parte de una preocupación intelectual más amplia, que reside en intentar comprender los modos en que los regímenes autoritarios se vinculan con las sociedades, las maneras en que buscan construir consensos y adhesiones y los instrumentos a través de los que buscan no solo conocer la opinión de la población, sino también influir sobre la construcción de esa opinión.

Para abordar esta problemática, en este texto buscamos dar cuenta de dos cuestiones íntimamente vinculadas. Por un lado, consideraremos la incorporación por parte de ciertas agencias del Estado argentino, bajo un gobierno dictatorial, del uso de las encuestas de opinión pública, resultado a su vez de la renovación de las ciencias sociales desplegada desde la década de 1950; y por otro, el modo en que, en esos instrumentos, se considera la aceptación o el rechazo de las políticas desplegadas por el gobierno militar instalado desde junio de 1966. Necesariamente, ello nos conduce a los modos en que son construidos e interpretados los datos obtenidos con esos métodos, tanto en su época cuanto en los análisis posteriores.

Abordamos parte de estas cuestiones al encontrarnos, gracias a la generosidad de dos colegas que lo hallaron en el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, con un documento excepcional.¹ Nos referimos al análisis de la encuesta piloto de opinión pública desarrollada en junio de 1970 en Rosario y Santa Fe, respectivamente la principal ciudad y la capital de la provincia del mismo nombre, realizada por el Servicio de Encuestas de Opinión Pública.

¹ Agradezco la generosidad de Laura Schenquer y Julia Risler. El Archivo Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y creado en 2006, está compuesto principalmente por la documentación perteneciente a la ex Dirección General de Informaciones, un organismo de inteligencia que funcionó entre 1966 y principios de la década de 1990 en la órbita del Gobierno de Santa Fe.

Este documento nos permite aproximarnos a las problemáticas señaladas, con más dudas que certezas, pero sobre la base de una información empírica hasta ahora desconocida. Se trata, además, de uno de los documentos de esta naturaleza más completos de los que se disponen en la Argentina, que nos permite reconstruir en parte el modo en que se diseñó la encuesta y cuáles eran sus objetivos. Sabemos, gracias a este documento, el papel que cumplió la Secretaría de Informaciones del Estado en su impulso y desarrollo, la articulación que pretendía lograr con las distintas áreas del Estado nacional, la confirmación de que el conocimiento de la opinión de la población resultaba un insumo necesario para la orientación de las políticas, incluso en aquel período dictatorial. También podemos confirmar, a través de ese texto, la vinculación que se buscó desde las áreas del Estado –que pretendían conocer e influir sobre la opinión pública– con las instituciones universitarias dedicadas a la investigación social. En este sentido, este caso contribuye a mostrar un vínculo no demasiado advertido hasta el momento entre la modernización de las ciencias sociales y el empleo de sus procedimientos, métodos y resultados por agencias del Estado en períodos dictatoriales.

Realizaremos el abordaje de estos objetos a través de la articulación de diversas capas de indagación, que hacen a su vez necesario emplear diversas escalas espaciales y temporales de observación. La historia de las ciencias sociales aplicadas a las encuestas de opinión y la de su articulación con agencias estatales no puede sino observarse en una temporalidad de varias décadas y en una escala nacional que se articula con el desarrollo de la sociología en los principales centros académicos de Occidente. Por su lado, la encuesta santafesina nos lleva a considerar un acontecimiento temporalmente acotado, en una escala local, que se vincula necesariamente con la nacional.

Nuestro trabajo se dedica a una relación específica entre el Estado y la sociedad: la del despliegue de una voluntad estatal de conocimiento sobre lo social, no ya dependiente del espionaje o las delaciones, sino de la aplicación de los métodos de las modernas ciencias sociales a la generación de ese saber. Entre estos métodos, las encuestas de opinión pública han recibido fuertes críticas, ya que se presentaron objeciones a la toma descontextualizada de datos en los que se basan y a que generan una apariencia de agregación de opiniones individuales que, en realidad, solo existe como resultado de las operaciones de los encuestadores. También se ha destacado la influencia del modo en que son formuladas las preguntas y las opciones para condicionar las repuestas y, particularmente, Pierre Bourdieu (2000) dedicó a la misma noción de *opinión*

pública una crítica fundamental, que considera, entre otras cosas, el modo en que su vez las encuestas configuran la opinión de la población.

Aun compartiendo buena parte de estas críticas y observaciones, entendemos que estos trabajos brindan orientaciones importantes para una comprensión –siempre aproximativa– de los fenómenos de la opinión pública por parte del historiador. Debe ser esta una comprensión que, a partir de la idea de que en las encuestas opera necesariamente la orientación y tendencias de los que las diseñan y desarrollan, considere estos elementos como un dato que debe ser conocido y sometido a crítica, pero que no invalida el método en su totalidad. Es tarea del historiador que analiza estos instrumentos considerar siempre los elementos contextuales, así como las disparidades regionales, de clase y género que se expresan en diferencias, en ocasiones, muy profundas. Pero a la vez, se debe tener en cuenta que cierta regularidad y persistencia de los datos –como los que encontraremos en el conjunto de los casos considerados– aporta robustez para la construcción del conocimiento

Las encuestas de opinión pública: una breve introducción a su historia en la Argentina

Frente a la rápida expansión de la encuesta como método de investigación social en Europa, en las décadas de 1950 y 1960, la evolución de los estudios de opinión pública en América Latina resultó algo más tardía, ya que se desarrolló en un momento “en que la innovación técnica alcanza el grado de solidez y estandarización suficiente para industrializarse y orientarse a fines comerciales.” (Daniel, 2013: 11).

Desde comienzos de la década de 1940, miembros del Instituto de Sociología de la UBA se vincularon con el Instituto Americano de la Opinión Pública, dirigido por George Gallup (Morales, 2013). En el primer número del *Boletín del Instituto de Sociología* de la UBA, en 1942, se manifestó la idea de crear un Instituto de Opinión Pública adaptando el modelo de Gallup a la realidad argentina, iniciativa que no llegó a plasmarse. Para 1956 se registra la existencia, en el ámbito privado, de un Instituto Argentino de Opinión Pública, dirigido por Alfredo Infante, que en 1957 desarrolló una investigación sobre hábitos y preferencias de los porteños en relación con los diarios, con una muestra de más de seis mil casos. En 1960, el Instituto desarrolló estudios sobre las elecciones realizadas ese año en los Estados Unidos y en la Argentina (Shoai, 2011: 1-2).

El uso de esta herramienta se expandió a lo largo de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, proliferación que se debió al interés profesional y comercial de abrir un mercado de encuestas de opinión pública, que tenía como antecedente a las empresas de investigación de mercado (Daniel, 2013: 111; Vommaro, 2008: 72). En 1959, se creó en Buenos Aires el Instituto de Psicología Social Aplicada (IPSA), empresa de estudios de mercado, y en la década siguiente, se desarrollaron nuevas empresas de marketing como A&C –que hizo encuestas políticas para el gobierno militar establecido en 1966– y una filial del Instituto Gallup, aunque dedicado a los estudios de mercado.

De modo simultáneo, se desarrollaron instituciones e iniciativas destinadas a auscultar específicamente la opinión pública. José Miguens, sociólogo católico de larga trayectoria intelectual y política, creador y primer director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina, tuvo un rol destacadísimo en este aspecto. Miguens trabajó en la primera encuesta de opinión pública de 1958, que inauguraría una serie de estudios realizados por el sociólogo para la Secretaría de Informaciones del Estado de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Miguens ejecutó estos trabajos desde el Centro de Investigaciones Motivacionales, el Centro Argentino de Encuestas y el Instituto Lanús. Sin embargo, según recordaba Manuel Mora y Araujo –uno de los más destacados encuestadores del período, sociólogo por la UBA de importante trayectoria académica y como consultor– no había un real interés en el Estado durante los años del desarrollismo por construir un conocimiento empíricamente informado de la opinión pública, por lo que las investigaciones de Miguens resultaron más un producto de sus vinculaciones con funcionarios de la Secretaría de Informaciones que de un interés estatal sostenido (Shoai, 2011: 4 y 8).

Junto a esto, diversos intelectuales realizaron, en ocasiones, encuestas de opinión desde la década de 1960. Justamente, Manuel Mora y Araujo realizó su primera encuesta política en 1965 para el dirigente peronista Antonio Cafiero, aunque se trató de un trabajo puntual y no de una investigación sistemática. También el sociólogo, militante de la nueva izquierda y experto en comunicación, Heriberto Muraro, recordaba haber realizado encuestas de opinión pública en la época del presidente Arturo Illia (1963-1966), pero cuando el golpe militar de 1966 clausuró las vías democráticas, volvió a dedicarse a las encuestas comerciales (Vommaro, 2008).²

² Sobre la figura de Muraro puede consultarse Zarowsky (2016).

Los trabajos y el rol institucional de Gino Germani también resultaron determinantes para la extensión de la aplicación sistemática de encuestas de opinión. Tras el golpe de Estado de 1955, Germani se desempeñó como director de la carrera de Sociología y del Departamento de Sociología de la UBA, creados en 1957. En tales funciones, Germani fue una figura clave del pronunciado proceso de modernización cultural y académico que atravesó la Argentina entre 1955 y 1966 (Blanco, 2006; Terán, 1991: 3 y ss.). Desde 1957, Germani dirigió, entre otros, el proyecto de investigación “Etnocentrismo y actitudes autoritarias”, basado en un muy extenso trabajo de campo. Sin embargo, a Germani le importaba menos dar cuenta de las fluctuaciones de la opinión pública que explicar las actitudes autoritarias y, en definitiva, intentar exponer los rasgos básicos de la estructura misma de la sociedad argentina (Shoai, 2011: 5).

Se ha señalado que la asociación de las encuestas de opinión pública con los principios democráticos y las libertades individuales pertenece al momento mismo de la emergencia pública de los sondeos como una innovación técnica, en la defensa y justificación de la herramienta que hizo su primer promotor, George Gallup (Daniel, 2013: 109). Sin embargo, podemos sostener que, para el caso argentino, la ampliación del uso de estas técnicas y, sobre todo, la vocación estatal de recoger datos de opinión a través de este medio se verificará en el contexto de la autodenominada “Revolución Argentina”, dictadura militar que, con distintas etapas y liderazgos, se desarrolló entre 1966 y 1973. De hecho, la primera gran experiencia de la firma A&C fue una compulsiva efectuada el 30 de junio de 1966, para calibrar el apoyo de la población al régimen militar recientemente instaurado (Vommaro, 2008: 45).

Guillermo O’Donnell ha considerado esa encuesta en uno de sus textos principales, gracias a lo que podemos acceder a un conocimiento, aunque somero, de ella. Las respuestas a esta encuesta muestran que el 66% de los encuestados aprobaban el régimen militar explícitamente y solo el 6% se oponía a él. En la misma encuesta, el 73% expresó que creía que la situación mejoraría, el 17% que seguiría igual y solo el 9% que empeoraría. Por el pequeño número de encuestados y la imprecisa información sobre el método empleado, O’Donnell (1996: 65-66) sugería tomar estos datos con cautela.³

Exactamente dos años más tarde, y cuando las transformaciones sociales y económicas introducidas por la dictadura habían generado un malestar no siempre visible, la revista *Primera Plana* le encargó a la misma empresa A&C

³ Según otra encuesta, 77% de los entrevistados respondió afirmativamente a la pregunta “¿Cree usted que la revolución del 28 de junio fue necesaria?”, *Correo de la tarde*, 6-12/6/1967 (mil entrevistados en la ciudad de Buenos Aires, metodología no informada).

un sondeo de opinión pública sobre el régimen de Onganía.⁴ La metodología de la encuesta, la zona geográfica en que se aplicó y el tamaño de la muestra no fueron informados. Los resultados publicados daban cuenta del desgaste del régimen dictatorial: el 60% de los consultados no asignaba “nada bueno” al gobierno de Onganía y para el 70% de los consultados Onganía era “igual o peor” que el derrocado Illia. El análisis segmentado por clases sociales muestra que el régimen contaba con un pronunciado apoyo en las clases altas, motivado fundamentalmente en la valoración positiva de la “estabilidad económica”, aun cuando en ese mismo sector un 54 % se muestra insatisfecho con la situación económica, insatisfacción que alcanza al 80 % entre los encuestados de clase media y al 86% entre los obreros consultados. Respondieron que el gobierno no había hecho “Nada bueno” el 14, 41 y 80% de los consultados de clase alta, media y baja, respectivamente. Todo ello contribuye a fortalecer la idea del marcado carácter clasista del régimen, y de la existencia de una oposición obrera muy amplia, aun cuando la conflictividad social no se había manifestado con toda su virulencia en aquel momento.

La integración de científicos sociales a elencos estatales durante la “Revolución Argentina”

De modo simultáneo al proceso de desarrollo de las encuestas de opinión y a su incorporación por parte de agencias estatales, conocemos la trayectoria de los profesionales de las ciencias sociales que se incorporaron al Estado durante el régimen de Onganía, menos por sus competencias técnicas que por su afinidad política. En la primera mitad de los años sesenta, algunos sociólogos se habían incorporado a organismos estatales —como el Consejo Nacional de Desarrollo— o articularon su actividad en la universidad con la acción de agencias estatales como el INTA (Agulla *et al.*, 1966).

Con el golpe militar de 1966 y la intervención a las universidades, buena parte de los sociólogos fueron expulsados de sus cátedras o decidieron renunciar a sus posiciones académicas:

De 28 profesores del Departamento de Sociología de Filosofía y Letras (UNBA), quedan 4 en marzo de 1967. El Instituto de Sociología, en el que había 15 proyectos de investigación en marcha, cerró sus puertas por casi

⁴ *Primera Plana*, 25/6 al 1º/7/1968, Buenos Aires, año VI, nº 287, pp. 20-22.

un año [...] En la Universidad Católica Argentina (UCA) una declaración que rechazó la violencia desatada en la Universidad Nacional condujo a una crisis entre el rectorado y el departamento de sociología. Su director, José E. Miguens, y 33 docentes y auxiliares renunciaron hasta marzo de 1967, quedando 5 personas [...] También se interrumpieron las actividades de los sociólogos en el Instituto de Sociología de la Universidad del Litoral y Tucumán (Kratochwil, 1969, citado en Rubinich, 2017: 56).

Un sector de los científicos sociales se opuso al régimen militar y participó activamente de actividades contestatarias y, en algunos casos, participaron de procesos de radicalización política. En otros casos, en cambio, un número significativo de sociólogos, politólogos, economistas, abogados y otros profesionales se sumarán a la experiencia de la “Revolución Argentina” en distintas posiciones: como militantes, en universidades y *think tanks*, y ocupando cargos en el Estado. Entre ellos se destacaron especialmente los individuos insertos en redes y organizaciones del catolicismo de derecha argentino, que formaron parte del proyecto de modernización autoritaria del onganiano (Giorgi, 2010: 54; Zanca, 2006, cap. 4; Blois, 2018: 117-127).⁵

Probablemente, uno de los casos más notorios sea el de José Luis de Imaz, quien se incorporó por un período breve como funcionario de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Mario Díaz Colodrero, para instrumentar políticas comunitaristas, en una breve experiencia finalizada cuando el Cordobazo de mayo de 1969 provocó la renuncia de todo el gabinete de Onganía.⁶ Más allá de este breve paso por la función pública, su tesis acerca de la ausencia de una élite dirigente en la Argentina y su propuesta de que la Iglesia sería el factor aglutinador para construirla sería gravitante a lo largo de los años de Onganía (De Imaz, 1964; Giorgi, 2010).

⁵Vicente (2017) ha señalado que lejos de las dinámicas que fueron llevando a sacerdotes, militantes e intelectuales católicos hacia posiciones en “la constelación tercermundista” como en grupos integristas de posturas cada vez más reaccionarias, el grupo nucleado en *Criterio* se distinguió por el claro impacto que sobre sus figuras tuvo la modernización cultural y académica tanto internacional como local.

⁶José Luis De Imaz fue discípulo de Germani. Nacido en 1928, desde joven adhirió al nacionalismo católico. Cursó sus estudios secundarios en un colegio de la más alta elite, y tras recibirse de abogado en la UBA, cursó estudios de posgrado en la España franquista. Desde 1954 se volcó a la sociología. En 1958 defendió su tesis doctoral y en 1959 integró la primera camada de becarios de Conicet. En 1966 se incorporó al Conicet como investigador y comenzó a desempeñarse como profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina (Giorgi, 2014 y 2016).

Guido Giorgi (2016) ha estudiado al respecto la trayectoria de Miguens, una de las figuras que aunó sus competencias profesionales con su participación en la vida política. Profesor de Sociología en el curso de coroneles de la Escuela Superior de Guerra desde 1958, se unió al bando legalista –los llamados “Azules”– en el conflicto interno del Ejército, en 1962. Se sumó en esa coyuntura a la sección de Acción Psicológica y redactó, aprovechando su experticia como sociólogo de la opinión, los comunicados de esa facción que se emitían por radio. Desde 1966 se desempeñó como asesor de algunos militares entre los que asumieron el gobierno, y desde 1968 participó de un grupo de trabajo interdisciplinario, con una fuerte presencia de especialistas en ciencias sociales de pertenencia católica, en la órbita del Consejo de Seguridad Nacional, que redactó los *Lineamientos de un nuevo proyecto nacional* (Conade-Conase, 1970). Este libro se presentaba como un diagnóstico de la crisis argentina y ofrecía artículos de especialistas en distintas áreas (Educación, Ciencia y Técnica, Política Internacional, entre otras). Miguens redactó el capítulo del área social, en el que destacó el rol de la opinión pública. A lo largo de estos años, Miguens realizaría, además, tareas de consultoría para distintas áreas del gobierno.

Más allá de estas figuras, es preciso avanzar en el conocimiento de los sujetos de mucha menor visibilidad que contribuyeron a la introducción de las ciencias sociales empíricas como un instrumento empleado por el Estado. Un ejemplo en este sentido es el de Adolfo Antonio Critto, estudiado por Florencia Osuna (2017). Critto estaba ligado a los sociólogos católicos de la UCA, era abogado (Universidad Nacional de Tucumán), magíster en Política Social (Institute of Social Studies, Holanda) y doctor en Sociología (Universidad de Columbia, con una beca del programa de la fundación Eisenhower Exchange Fellowships). En 1963, cuando regresó a la Argentina, su formación especializada en métodos cuantitativos de investigación social le permitió acceder a las cátedras de Psicología Social y Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Grisendi, 2014).⁷

⁷ Critto realizó una investigación en el marco del Instituto de Sociología (UNC) en la que se concentró en el trabajo de campo en un barrio popular de la ciudad: Maldonado. Allí, investigó sobre las condiciones sociales de la construcción del “curanderismo” y de fenómenos similares en el impacto de la salud pública. Luego, dirigió un estudio sobre movilidad social y estructura ocupacional en un sector urbano de Córdoba, en el que rastreó las “disposiciones sociales al cambio” en variados grupos sociales. Luego, realizó la reconstrucción de las poblaciones de una “zona deprimida” socialmente de Córdoba, en torno a las ciudades de Cruz del Eje y Dean Funes. Mostró cómo estas áreas carecían de un “cambio social verdadero” y adjudicó a su aislamiento las razones de su atraso o “subdesarrollo”.

Durante cuatro años, Critto se desempeñó como funcionario del “onganiato” y ocupó los cargos de subsecretario de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (1967-1968), asesor del ministro de Bienestar Social de la Nación (1968-1969), asesor del Conade (1969-1970) y jefe del Departamento de Asuntos Sociales del Consejo Federal de Inversiones (1970).

La encuesta santafesina

Aunque es sabido, a través de diversos indicios, que tanto la dictadura militar instaurada en 1966 cuanto la que tomó el poder una década más tarde emplearon diversos instrumentos para auscultar la opinión pública, es poco lo que sabemos al respecto como para que nos permita dar marco al caso que aquí analizamos. Contamos con incipientes trabajos que se basan en fragmentos de estudios sobre la opinión pública desarrollados por agencias estatales. Uno de ellos es el estudio sobre la encuesta desarrollada a fines de 1976 en la provincia de Tucumán, que –pese a las dificultades para su abordaje, pues el material al que se logró acceder resulta incompleto– muestra altos niveles de aceptación del régimen militar y, a la vez, mayores porcentajes de adhesión cuanto más alto se ubicaban los entrevistados en la escala social (Crenzel, 2009/2010). El segundo es el análisis de las encuestas de opinión desplegadas en 1981 durante la presidencia *de facto* del general Viola, realizado por Julia Risler y Laura Schenquer (2017). Se trata de materiales producidos por tres agencias estatales: la Secretaría de Información Pública dependiente de la Junta Militar, el Ministerio del Interior y la SIDE, que, en la hipótesis de las autoras, sirvieron para medir el clima social con el propósito de utilizar esa información para el diseño de campañas de propaganda y de comunicación mediante las que se buscó modelar o conducir a la población siguiendo estrategias de acción psicológica.⁸

⁸ Los informes sobre la situación psicosocial elaborados a partir de esas encuestas y sondeos mostraban que, pese a existir una oposición al régimen cercana al 58%, el apoyo personal a la gestión presidencial del general Viola era más favorable que adversa. Dado que el Estado intentó influir y moldear las orientaciones de la población, resultan sumamente relevantes los recientes aportes sobre las estrategias y prácticas de acción psicológica que se desplegaron sobre la población a lo largo de la existencia de dicho régimen (Risler, 2015; Aguila, 2014). También resultan incipientes, aunque cuentan con apoyos empíricos más sistemáticos, los trabajos que estudian a la opinión pública de Brasil frente a la dictadura militar. Se puede consultar al respecto a Patto Sa Motta (2014). El artículo analiza los sondeos de opinión realizados por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) con el objetivo de evaluar el apoyo al golpe y a la dictadura. Los datos señalan un contraste entre el apoyo previo a João Goulart y los números recogidos después

Los trabajos que han dado cuenta de la producción de un conocimiento social sobre la Argentina y de su empleo en ámbitos estatales (Neiburg y Plotkin, 2004; Morresi y Vommaro, 2012) no han reparado de modo sistemático en el vínculo entre la modernización de las ciencias sociales argentinas y el empleo de sus procedimientos y saberes por el Estado en etapas dictatoriales. El caso que aquí consideramos muestra la evidencia de un uso instrumental de las ciencias sociales por parte de agencias estatales en el marco de un régimen dictatorial, que combinaba perspectivas conservadoras y comunitaristas, y prácticas altamente represivas, con utopías modernizadoras de la sociedad y del Estado que, podemos hipotetizar, contribuyen a explicar la acogida de las modernas técnicas de recolección de datos. Con sus clivajes internos entre civiles y militares, liberales y nacionalistas, socialcristianos y tecnócratas, el régimen instaurado en 1966 hizo de la idea del desarrollo y la modernización del país un objetivo común que orientó tanto su acción como su utopía reaccionaria de la erradicación de la política (Osuna, 2017: 74 y ss.).⁹

El expediente que usamos como fuente da cuenta de la voluntad de desarrollar una gran encuesta nacional en 1971, bajo la dirección de un “Sistema Oficial de Encuestas de Opinión Pública”. La encuesta, realizada en Santa Fe y Rosario, resulta un estudio piloto previo, que probablemente se sumó a otros trabajos preliminares en otras regiones. No sabemos si, finalmente, la encuesta nacional se pudo desarrollar, ni nada conocemos todavía de los impulsores de esta iniciativa estatal ni de los funcionarios involucrados en su desarrollo. Sin embargo, podemos reconstruir buena parte de la lógica de la generación de este instrumento y de las intenciones de los que lo impulsaron. No se trataba de una encuesta destinada a ser difundida públicamente, aunque eso no la libraba de la parcialidad y de los aspectos manipulatorios de aquellas orientadas a tales fines. En esta encuesta, como en todas, no pueden dejar de tener lugar los intereses personales, políticos o de otra índole de sus orientadores e impulsores, intere-

de la victoria golpista, que indican la buena aceptación de las medidas autoritarias. El análisis de los registros insinúa que el apoyo al régimen autoritario se caracterizó por la inestabilidad y fluctuó durante los primeros años.

⁹ Simultáneamente, tras la feroz represión de 1966, a medida que avanzaba la década, crecerían las instituciones que ofertaban la carrera de Sociología y la cantidad de alumnos: “En 1969 alrededor de 4000 estudiantes (aproximadamente el 1,6% del total de estudiantes universitarios) sigue la carrera de Sociología en nueve lugares; tres universidades agrupan aproximadamente el 90% del alumnado. El resto concurre a las instituciones que iniciaron sus actividades luego de 1966. A estos lugares de grado se les debe agregar el posgrado de “las escuelas de sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba” (Kratochwil, 1969, citado en Rubinich, 2017: 52).

sados en apoyar a una u otra facción o en fortalecer una salida determinada en un escenario político muy complejo.

El documento preveía que las finalidades y objetivos de la encuesta se realizarían bajo la guía y centralización de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El cronograma establecía que se desarrollarían diversas encuestas y trabajos entre 1971 y 1974. Se preveía que el Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se encargaría de elaborar los indicadores sociológicos en septiembre de 1971, y la sección metodológica del documento expresaba la búsqueda de garantizar la representatividad geográfica con la administración de la muestra en ciudades de distintas dimensiones.¹⁰ El Instituto de Sociología había sido dirigido hasta 1966 por Héctor Bonaparte. Tras la renuncia en masa de sus investigadores como resultado del golpe de junio de ese año, el Instituto pasó a ser orientado por el decano interventor de la Facultad de Filosofía –primero de la Universidad Nacional del Litoral y luego de la Universidad Nacional de Rosario– el filósofo tomista y sociólogo Roberto José Brie.¹¹ En 1971, Brie seguía desempeñándose en el Instituto de Sociología, mientras el decano de la facultad rosarina era el profesor de Letras Luis Arturo Castellanos, a quien acompañaba como secretario Académico el pedagogo Ricardo Pedro Bruera, quien a lo largo de la dictadura inaugurada en 1966 se desempeñó en distintos cargos en el Ministerio de Educación, para asumir como ministro de esa cartera con la dictadura de 1976.¹²

Según la SIDE, la finalidad de la encuesta era:

- Captar la actitud mental ante los problemas nacionales y regionales.
- Proyección de conductas frente a alternativas sugeridas.
- Medir la influencia de los distintos medios de difusión y comunicación en cada uno de los públicos.

¹⁰ En la metodología propuesta se preveía administrar la muestra del siguiente modo: Capital Federal y Gran Buenos Aires: 6.000 casos; Rosario y Córdoba: 850 casos; Tucumán, Resistencia, Posadas, Salta, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia: 400 casos; Catamarca, Esquina, Mercedes y Santa Rosa: 100 casos.

¹¹ Entrevista a Elida Sonsogni, Rosario, 11 de septiembre de 2018. Sobre la trayectoria de Brie, ver Rodríguez (2016).

¹² Agradezco la información sobre las autoridades de la Facultad a la doctora Laura Luciani. Sobre la trayectoria de Bruera, ver Rodríguez (2011). En 1971 se editaron una serie de trabajos de investigación bajo el título de *Documentos de Trabajo del Instituto de Sociología de la UNR*. Entre los autores de esos textos se encontraban Roberto Brie, Sonia Bengoechea, D. Maquirrian, C. Boasso y A. Fernández. Agradezco esta información a la profesora Anahí Pagnoni, de la UNR.

A estas finalidades se sumarían otras, que se estimaba que proveerían la Presidencia de la Nación, los ministerios de Bienestar Social, de Hacienda y Finanzas, del Interior, de Defensa, de Cultura y Educación, de Trabajo; el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Desarrollo. De esas finalidades se derivaban objetivos a investigar que fijarían los distintos organismos teniendo en cuenta los siguientes objetivos tentativos postulados por la SIDE:

- Determinar los problemas que crean o pueden crear apoyo a la subversión.
- Detectar el gradiente de apoyo popular a la salida electoral.
- Detectar el porcentaje de influencia del factor económico sobre lo social, cultural y político.
- Detectar cuáles son las necesidades según la opinión pública, en obras y gestiones de gobierno.
- Conocer las tendencias regionales ante el regreso de Perón y a una fórmula encabezada por él.
- Conocer la opinión pública ante la alternativa de ampliar el plazo de la entrega a un gobierno constitucional de 3 a 5 años.
- Conocer las preferencias hacia un determinado partido político o plataforma política.
- Conocer la audiencia de los distintos medios de comunicación en las diferentes ciudades a encuestar, en qué forma impactan en los distintos públicos la publicidad o propaganda y cuáles son los medios más efectivos; y detectar cómo se informa el público del interior del país acerca de los problemas nacionales.

El cuestionario final se formularía en función de los requerimientos de los distintos organismos. El orden de las preguntas, su elaboración y la elección de las respuestas estaría “a cargo del equipo asesor compuesto por sociólogos, sicólogos, doctor en ciencias políticas, sociólogo prospectivo, doctores en ciencias económicas, estadísticos, matemáticos y abogado especialista en derecho laboral”. Una vez confeccionado el cuestionario, que tendría 45 preguntas, el Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario realizaría el trabajo de estructurar los indicadores sociológicos por edad, sexo, grupo familiar, ingresos, vivienda, escolaridad, profesión, educación y otras variables. En relación con el muestreo, el documento sostiene: “Dada la importancia de esta parte de la encuesta, la misma se encomendará a un equipo dirigido por

la profesora titular de la materia Teoría de las Muestras de la única escuela de estadística que funciona en el país”.

Como se puede apreciar, la presencia de profesionales de las ciencias sociales, de académicos y de institutos universitarios en este plan de trabajo no deja duda alguna acerca de la aceptación, por parte de las agencias del Estado dictatorial involucradas, de los métodos provistos por la modernizada sociología argentina, y de la disposición de algunos intelectuales de sumarse a esta iniciativa estatal.

La encuesta fue realizada por una empresa privada, el “Servicio de Encuestas de Opinión Pública” con sede en Rosario, para el Servicio de Informaciones del Estado. La encuesta piloto se ejecutó sobre la base del muestreo 1/1000 en Rosario y 1/580 en Santa Fe. En ambos casos, se tomó como referencia para la representatividad de la muestra la aplicación según las secciones electorales de ambas ciudades. En Rosario, considerando una población de 705.000 habitantes según el censo 1970 y con un muestreo de 1:1000, se debían tomar 705 entrevistas personales, y en la ciudad de Santa Fe, considerando una población de 231.000 habitantes, se debían realizar 396 entrevistas para obtener una muestra representativa según la relación 1:580. Finalmente, fueron sometidas a muestra 707 personas en Rosario (356 varones y 351 mujeres) y 392 en Santa Fe (154 varones y 244 mujeres). El margen de error para Rosario fue de 1,87% y para Santa Fe del 1,45%.

La encuesta se administró entre los días 18 y 22 de junio de 1970 en Rosario y entre los días 25 y 31 de junio en Santa Fe capital. La precisión cronológica es aquí clave: el 1° de junio de 1970 la organización Montoneros mató al expresidente *de facto* Pedro Eugenio Aramburu, lo que no solo colocó en el primer plano el debate sobre la violencia política, sino que precipitó además una crisis que dio como resultado el desplazamiento de la presidencia del general Onganía y su reemplazo por el general Levingston, el día 8 de junio.

El cuestionario constaba de 33 preguntas. Muchas se centraban en la situación económica y otras, en la vida política, en particular en la valoración del régimen y de la protesta política y social.¹³ En un apartado que solo lleva el

¹³ Presentamos como ejemplos siete preguntas que resultan particularmente significativas:

13: ¿Considera que vive bien actualmente o debería vivir mejor?

16: ¿Cuándo considera que debe hacerse un llamado a elecciones?: Enseguida, en un año, en dos años, en 3, en 5, de 5 a 10, cuando se den las condiciones, más de 10 años, nunca

19: ¿Opina Ud. que la acción de las Fuerzas del orden en contra de la subversión es excesiva o débil? Excesiva- débil-correcta

25: ¿Qué opina sobre la conducta estudiantil en la ocupación de las casas de estudio? Es repudiable – es oportuna – representa descontento y es justa – es buena

título de “Encuesta piloto”, pero con la leyenda “reservado”, se presentan más de 120 objetivos de la encuesta, desgranados en 45 elementos económicos, 35 políticos y 44 sociales.

Entre ellos, resulta pertinente destacar los siguientes objetivos, que son los que ayudan de manera más clara a comprender las opiniones frente al régimen militar y a sus opositores: pulsar la reacción estudiantil por las versiones sobre desnacionalización de empresas y la falta de apoyo a la Universidad estatal por parte del gobierno; considerar si el público opina que vive bien actualmente, constatar las principales críticas a la conducción económica, consideración sobre los partidos políticos que aumentan su caudal, predicamento y prestigio en el ámbito político, considerar la posibilidad de sistemas corporativistas (representación laboral o gremial) en reemplazo de los partidos políticos, considerar la aceptación del régimen de facto, analizar la imagen de autoridad de las Fuerzas de Seguridad ante la opinión pública, dar cuenta de la repercusión de la actitud de enfrentamiento de un sector de la Iglesia, considerar la repercusión social de la pérdida del poder de la autoridad como consecuencia de los recientemente ocurridos Cordobazo y Rosariazo, “consideración sobre el grado de apoyo a las actividades subversivas de índole estudiantil-gremial”, por parte de diversos sectores, comprobar en qué forma es incrementada la proporción de sacerdotes adeptos al “Tercer Mundo” o “progresistas”, considerar la posibilidad de ubicar a los grupos más virulentos “del sector que propicia la violencia y el acceso de las masas al poder”, tratar de pulsar las actividades y repercusión efectiva del accionar de los sacerdotes tercermundistas, considerar el apoyo activo y pasivo de los sectores populares a los hechos de violencia y “comprobar la imagen popular de los movimientos subversivos”. Probablemente, debido a que los objetivos se redactaron con anterioridad al asesinato de Aramburu, no hay entre ellos referencias a ese acontecimiento ni a sus consecuencias en el recambio de los gobernantes al frente del régimen dictatorial.

No contamos en el material disponible con los resultados cuantitativos en bruto de la encuesta, sino con el análisis realizado por dos o más anónimos

27: ¿Cree Ud. o no que los sacerdotes del “Tercer Mundo” están vinculados con el comunismo?
Si – No

29: ¿Considera Ud. o no, que la violencia y los movimientos subversivos pueden traer alguna solución a los problemas del país? Ninguna solución- alguna solución – puede solucionarlo todo

32: ¿Cree Ud. o no que las Fuerzas de Seguridad están capacitadas para mantener el orden público ante cualquier eventualidad? Si – No

También se hacen preguntas de investigación de mercado, referidas a consumos de alcohol, tv, radio, diarios y revistas, pero el análisis de las respuestas no consta en el documento.

funcionarios, a los que no hemos podido identificar. A la vez, el grado de detalle y penetración del análisis es mayor en el caso de Rosario que en el de Santa Fe, ya que en este caso el análisis es más sucinto.

Aunque en la mayor parte de los casos las respuestas se distribuyen de una manera homogénea entre la población, en ocasiones resultan más claras las variables etaria y de género que las sociales, como criterios para agrupar las respuestas en conjuntos consistentes. A la vez, se observan matices regionales entre las respuestas de los habitantes de Santa Fe –más pequeña, burocrática y con fuerte peso de la Iglesia católica– y los de Rosario, ciudad tres veces mayor, con amplio desarrollo industrial y menor peso eclesiástico.

Las posiciones mayoritarias en ambas ciudades son de disconformidad con las políticas económicas del gobierno militar. Se trataba de unas políticas que habían favorecido la expansión de la infraestructura y de las inversiones directas de capital extranjero, y había disminuido la participación de los trabajadores en la apropiación de la riqueza nacional. Solo en un 6% de la muestra rosarina y un 4,7% de la santafesina consideraban que el control de precios de primera necesidad era adecuado. En respuesta a la pregunta “¿Considera que vive bien actualmente o debería vivir mejor?”, un tercio de las respuestas en el caso de Rosario y un 18,5% en el de Santa Fe señalaban cierta conformidad, menos del 5% en ambos casos decía vivir mal o muy mal, y un 66,5% en el caso de Rosario y un 77% en el de Santa Fe manifiestan la aspiración a vivir mejor.

Esa disconformidad se manifestaba también en el plano político. En el caso de Rosario, un 50% se manifestó a favor de un pronto llamado a elecciones, un 20,8% a favor de una convocatoria en el plazo de un año, un 9,8% en dos años, un 3,9 % en tres años, un 2,7% en un lapso de 5 a 10 años y un 12,7% para cuando estuvieran dadas las condiciones; hubo más respuestas femeninas a favor de elecciones prontas. Entre los santafesinos, un 45,5% se inclinaba por un inmediato llamado a elecciones; un 25% acordaba en que debían realizarse dentro de determinados plazos (la mitad de ellos en un año), la otra cuarta parte cuando se dieran condiciones favorables. Un sorprendente 4,4% –atribuido a sectores medios y bajos– se inclinaba por que nunca se realizaran elecciones. Si consideramos que la demanda de elecciones inmediatas o dentro de plazos breves puede considerarse un indicador de oposición al régimen militar, podemos ubicar dentro de esa clasificación a casi el 71% de los rosarinos y al 58% de los santafesinos.

Sin embargo, esta apreciación respecto al régimen militar no se transfería inmediatamente a la valoración de los elementos estrictamente represivos, como se deriva del análisis de las respuestas a la pregunta “¿Qué opina usted, la acción

de las Fuerzas del Orden contra la subversión es excesiva o débil?” En el caso de Rosario, el 58,2% de los encuestados manifestó que la acción represiva era excesiva, y entre ellos predominaba el grupo etario de 31 a 50 años. Quienes consideraban correcta la represión eran el 23,8% de los encuestados, entre los que predominan los mayores de 50 años. El grupo que califica como débil la represión es el 18%, con ligera superioridad masculina. Para el caso de la ciudad de Santa Fe, la opinión favorable a las fuerzas represivas abarca un 41,5% de los encuestados, con predominio femenino. A ellos se agregan las respuestas de quienes consideran que la acción de las fuerzas del orden era débil (24,6%). Quienes calificaban la represión como excesiva son el 33,9 % de los encuestados, con ligero predominio femenino. En el caso de las respuestas a esta pregunta en particular, para el caso de Santa Fe, los datos resultan muy confusos, ya que en distintas secciones del análisis de la encuesta se reiteran errores matemáticos e interpretaciones contradictorias. Pese a ello, observamos que en ambas ciudades existía una proporción considerable (más del 40% en Rosario y más del 60%, en Santa Fe) que avalaba la represión o la consideraba insuficiente, cifras que exceden en mucho al de aquellos grupos que avalaban al régimen en el poder.

La respuesta a la pregunta “¿Cree Ud. o no que las FF de seguridad están capacitadas para mantener el orden público ante cualquier eventualidad?”, que entendemos permite valorar la opinión sobre las capacidades profesionales de militares y policías, muestra sin embargo resultados poco consistentes en relación con el aspecto anterior, especialmente en el caso de Rosario, en el que el 53,5% de las respuestas fueron positivas, mientras la respuesta aprobatoria en Santa Fe alcanzó un 60%.

¿Qué ocurre si observamos, en cambio, la actitud frente a los movimientos contestatarios? En relación con la pregunta sobre las ocupaciones de escuelas y universidades por parte de los estudiantes, una modalidad de creciente importancia en el período y que implica sin dudas la adopción de una postura de radical crítica al régimen y al sistema, en Rosario, un 47% de los encuestados manifestó su aprobación. Ese porcentaje incluye un 30,8% que manifestaba que esa práctica representaba descontento y era justa. Predominan en ese grupo las mujeres de 31 a 50 años y entre los varones el pico está en el rango etario de 18 a 30 años, y está muy representado el nivel educativo superior. En Santa Fe, un 51% acepta la conducta estudiantil (con amplio predominio femenino) y 41% lo consideran repudiable. Las respuestas a la pregunta por el vínculo entre los sacerdotes del Tercer Mundo y el comunismo resulta abrumadora: en Rosario un 74% y un 83% en Santa Fe desvinculaban a los sacerdotes tercermundistas

del comunismo, lo que implicaba en la coyuntura argentina de 1970 otorgarles una amplia legitimidad.

La pregunta sobre la valoración de la violencia revolucionaria se realizaba a través de una formulación de la pregunta que dista mucho de ser neutra: “¿Considera Ud o no que la violencia y los movimientos subversivos pueden traer alguna solución a los problemas del país?”¹⁴ Así y todo, en el caso de Rosario, las valoraciones positivas distan de resultar ínfimas. El análisis sostiene que el 75% de la población repele categóricamente los procedimientos violentos, pero que:

Las respuestas de tendencia negativa abarcan el otro cuarto de la población encuestada y solo un 2,5% evidencian una tesis de neto corte subversivo (puede solucionarlo todo), la que está integrada por un neto dominio de varones en su mayoría jóvenes. Este grupo en la escala de muestreo equivale a 13.000 personas y por los índices bajo en cuanto a cultura, niveles ocupacionales, ingresos y propiedad automotor pueden coincidir con la tipología de la población marginal de Rosario.

En el caso de Santa Fe, un 85% de los encuestados respondió que la violencia no podía traer ninguna solución y un 14,8% respondió que la violencia podía traer alguna solución a los problemas del país. Solo un 0,2% se inclinaba hacia la violencia como solución radical, grupo en el que predominaba el nivel educativo primario.

De este modo, el análisis de la encuesta muestra un ánimo predominantemente opositor al gobierno en las dos ciudades. Sin embargo, dentro de este talante general, la evaluación de los elementos económicos y políticos no resulta siempre congruente, mientras el repudio al régimen podía coexistir con una valoración positiva de las fuerzas represivas por porciones considerables de la población de ambas ciudades. De tal modo, y más allá de la subjetividad y hasta de la voluntad manipuladora de los analistas que redactaron los informes que dan cuenta de los resultados en ambas ciudades, la encuesta muestra la amplia heterogeneidad de las opiniones y la imposibilidad –aun para el caso de una dictadura en crisis– de reducir esta multiplicidad a categorías aprehensibles en esquemas dicotómicos.

¹⁴ El modo en que se interroga sobre la violencia, un valor negativo si se la presenta de manera aislada, y la recurrencia a un término de fuerte connotación negativa, como “subversivo”, se suman a una ligazón directa con la solución de los problemas del país que no toma en cuenta las múltiples mediaciones entre las prácticas de violencia revolucionaria y sus objetivos políticos de largo plazo.

Conclusiones

Las encuestas de opinión pública distan de ser instrumentos neutrales para el conocimiento del modo en que se configuran las subjetividades políticas de la población. Esto no se debe solamente a las críticas señaladas sobre la noción de “opinión pública”, ni al modo y contexto en que son formuladas las preguntas –cuestiones ambas señaladas anteriormente–, sino a que en su estructuración y desarrollo confluyen los métodos más sofisticados de las ciencias sociales con una variedad de intereses políticos, profesionales, sectoriales, que explican que se privilegie un aspecto u otro en sus interpretaciones y usos. Sin embargo, en este trabajo hemos considerado que, teniendo en cuenta dichos elementos, las encuestas resultan instrumentos necesarios y útiles para dar cuenta del estado de fragmentación de la opinión pública y, como tales, en fuentes que los historiadores podemos emplear con provecho para aproximarnos a tan elusivos fenómenos.

En nuestro trabajo hemos demostrado que las ciencias sociales argentinas y, en particular, las encuestas sobre la opinión pública fueron herramientas empleadas por agencias del Estado en un período dictatorial, matizando dos imágenes persistentes: la de unas ciencias sociales que se construyeron y desarrollaron básicamente en oposición a las dictaduras y la de un instrumento de indagación social que solo encontró su desarrollo en consonancia con la democracia. En este sentido, nuestro trabajo contribuye a mostrar el vínculo que se dio entre la modernización de las ciencias sociales y el empleo de sus procedimientos, métodos y resultados por parte de agencias del Estado en períodos dictatoriales. La encuesta aplicada en la provincia de Santa Fe en 1970 nos permite documentar de manera firme esta “voluntad de saber” de las agencias estatales en dictadura, su consecución a través de los métodos más modernos provistos por las ciencias sociales y el tejido de una trama que vinculó a esas agencias estatales con intelectuales y académicos.

La segunda constatación de este trabajo nos permite observar las transformaciones de la opinión pública frente a la llamada “Revolución Argentina”. Pese a que las fuentes con que contamos son fragmentarias y las encuestas se realizaron en distintas zonas geográficas, es posible advertir la evolución de la opinión desde un difuso apoyo mayoritario hasta una creciente oposición, y de la existencia de un marcado respaldo de las clases altas al régimen que se contrapone a un más amplio y creciente rechazo de los sectores medios y bajos, en consonancia con lo que señalan las diversas indagaciones historiográficas sobre el período.

Bibliografía

- Aguila, Gabriela (2014). “Disciplinamiento, control social y acción psicológica en la dictadura argentina. Una mirada a escala local. Rosario, 1976-1981”. *Revista Binacional Brasil-Argentina*, vol. 3, n° 1, junio.
- Agulla, Juan Carlos; Andújar, Gerardo y otros, (1966). *Del sociólogo y su compromiso*. Buenos Aires: Libera.
- Blanco, Alejandro (2006). *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Blois, Juan Pedro (2018). *Medio Siglo de Sociología en la Argentina. Ciencia, profesión y política (1957-2007)*. Buenos Aires: Eudeba.
- Bourdieu, Pierre (2000). “La opinión pública no existe”. En *Cuestiones de sociología*, Madrid: Akal.
- Consejo Nacional de Seguridad-Consejo Nacional de Desarrollo (1970). *Lineamientos para un nuevo proyecto Nacional*. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Crenzel, Emilio (2009/2010). “Una encuesta de opinión pública en Tucumán bajo la dictadura. Una aproximación indicial”. *Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos*, Tucumán, año VI, n° 7-8.
- Daniel, Claudia (2013). *Números públicos. Las estadísticas en Argentina (1990-2010)*. Buenos Aires: FCE.
- De Imaz, José Luis (1964). *Los que mandan*. Buenos Aires: Eudeba.
- Giorgi, Guido (2010). “Redes católicas y Estado en la Revolución Argentina”. *Ciencias Sociales y Religión*, Porto Alegre, año 12, n° 12, octubre. Disponible en <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CienciasSociaisReligiao/article/view/12646>
- (2014) “Refundar la sociedad. El comunitarismo como política de Estado en el gobierno de Onganía”. En Osuna, Florencia y Galván, Valeria (comps.), *Nuevas perspectivas para la investigación del gobierno de Juan Carlos Onganía*. Rosario: Prohistoria.
- (2016). “José Luis de Ímaz. Episodios de una trayectoria pública de Onganía a Béliz”. *Trayectorias de intelectuales en el Estado. Actas de jornadas de discusión*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Grisendi, Ezequiel (2014). “Del barrio a la región: Adolfo Critto y la investigación social aplicada en Córdoba (1963-1975)”. Actas de las VIII Jornadas de Sociología, diciembre de 2014, Universidad Nacional de La Plata.
- Morales, Juan (2013). “Entrecruzamientos en el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (1955-1965) y sus derivaciones: movilidad académica y Latin American Studies”. Primeras Jornadas de Sociología. “La sociología frente a los nuevos paradigmas en la construcción social y política”, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.
- Morresi, Sergio y Vommaro, Gabriel (comps.) (2012). *Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina*. Los Polvorines-Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo.
- Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comps.) (2004). *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina*. Paidós: Buenos Aires.
- O’Donnell, Guillermo (1996). *El Estado burocrático autoritario*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Osuna, Florencia (2017). *La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar Social entre dos dictaduras. Argentina, 1966 -1983*. Rosario: Prohistoria.
- Patto Sá Motta, Rodrigo (2014). “O golpe de 1964 e a ditadura nas pesquisas de opinião”. *Tempo*, vol. 20.
- Risler, Julia (2015). *Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última dictadura argentina (1976-1983)*. Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Risler, Julia y Schenquer, Laura (2017). “Viola en los comienzos de la transición (1981). La utilización de encuestas y sondeos de opinión pública para la construcción de consenso”. Ponencia presentada en el Simposio Interdisciplinario Sobre Actores Políticos y Políticas Públicas en las Transiciones Democráticas, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL, 5 y 6 de Junio.
- Rodríguez, Laura Graciela (2011). *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983)*. Rosario: Prohistoria.

- (2016). “Elites académicas durante la última dictadura: sociólogos e investigadores enciencias sociales”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016, Ensenada, Argentina. En *Memoria Académica*. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8832/ev.8832.pdf
- Rubinich, Lucas (2017). “Los sociólogos intelectuales: cuatro notas sobre la sociología en los años 1960”. *e-l@tina*, vol. 15, n° 60, Buenos Aires, julio-septiembre.
- Shoai, Andrés (2011). “La estratificación social en los orígenes de las encuestas de opinión pública en Argentina”. IX Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en cgsa.aacademica.org/000-034/591.pdf
- Terán, Oscar (1991). *Nuestros años sesenta*. Buenos Aires: Punto Sur.
- Vicente, Martín (2017). “Un claro signo de los tiempos. Industrias culturales y teorías de la Comunicación Social en *Criterio*: sobre sociedad, cultura y política desde una clave modernizadora (1966-1973)”. IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión, “La institución como proceso”, Buenos Aires.
- Vommaro, Gabriel (2008). “*Lo que quiere la gente*”. *Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en la Argentina (1983-1999)*. Buenos Aires: Prometeo.
- Zanca, José (2006). *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, 1955-1966*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Zarowsky, Mariano (2016). “Nueva izquierda, sociología y medios de comunicación: itinerario de Heriberto Muraro en los años sesenta y setenta”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre, Ensenada, Argentina. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8888/ev.8888.pdf

Segunda parte
Tradiciones políticas e intelectuales
de las derechas

Los congresos anticomunistas en la Argentina: redes y sociabilidades latinoamericanas y globales en los años sesenta*

Ernesto Bohoslavsky

La historiografía de América Latina ha mostrado que el anticomunismo tuvo un lugar destacado a lo largo de la Guerra Fría, y adoptó múltiples rostros tanto a nivel nacional como internacional (Bozza, 2008; Parto Sá Motta, 2002; Casals Araya, 2016). Su diversidad se expresa en las variadas pertenencias ideológicas (entre ellas, catolicismo, liberalismo proempresarial o securitismo militar), pero sobre todo en las prácticas desarrolladas, que incluían numerosas actividades de naturaleza editorial, fílmica, periodística, sindical, cultural y política (Calandra y Franco 2012). Los anticomunistas tenían múltiples identidades políticas y se comprometieron con la realización de actividades y con la promoción de discursos que no eran (solo) reactivos respecto de las izquierdas. El anticomunismo abarcó a autoridades, militares, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales, políticos y a un conjunto de movimientos culturales y sociales cuya capacidad de reclutamiento y de generar adhesión política y emocional escapaba a los sectores privilegiados; para decirlo rápidamente: el anticomunismo sudamericano durante la Guerra Fría no estaba compuesto solo por las Fuerzas Armadas adoctrinadas en la panameña The School of the Americas ni por bandas de matones financiados por Washington o el gran empresariado local, aunque desde ya que incluía a estos.

La bibliografía nos permite ver cada vez más y con mayor precisión la dimensión transnacional de las ideas y las prácticas anticomunistas en América Latina: ese hecho no debería sorprendernos dada la naturaleza hemisférica y

* Hago público mi agradecimiento a Magdalena Broquetas por sus comentarios a este texto y por sus aportes documentales. Versiones preliminares fueron discutidas en eventos académicos en los que recibí excelentes sugerencias de Gabriela Aguila, Guadalupe Ballester, Marina Franco y Valeria Manzano, a quienes también les hago llegar mi agradecimiento.

global de la “amenaza” comunista denunciada. La circulación transnacional del anticomunismo se evidenciaba en la existencia de redes –a veces formalizadas– que articulaban planes, discursos, identidades, prácticas e intercambios entre actores ubicados en distintos puntos del planeta (Van Dungen *et al.* 2014; Nállim, 2015; López Macedonio, 2010). Uno de los dispositivos que fomentaba la dimensión transnacional eran los congresos y los ámbitos formales de sociabilidad de las organizaciones anticomunistas, una tradición que se inició en la década de 1950 y se extendió por lo menos hasta 1980. En los congresos, los delegados trazaban agendas compartidas, analizaban las respectivas situaciones nacionales y regionales, intercambiaban publicaciones e ideas, y cimentaban identidades políticas transnacionales. En esas reuniones, se hacían públicos los argumentos por los que se debía combatir al comunismo y los espacios en los que se evidenciaba la “infiltración” roja, y, a la vez, se mostraban –en un nivel menos explícito– las alianzas y recursos locales, hemisféricos y globales con los que contaban los anticomunistas. La organización de los congresos anticomunistas era una oportunidad para concitar redes y para incrementar el nivel de conocimiento público de sus promotores. La recepción de adhesiones, la presencia de delegaciones de las provincias y del exterior, la cantidad de asistentes y el impacto en la prensa eran algunas de las variables que se ponían en juego para medir la relevancia del congreso en cuestión y el peso de los organizadores dentro del campo anticomunista nacional, hemisférico y global.

Este artículo se concentra en el estudio de la realización de congresos anticomunistas en Buenos Aires, organizados por la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA) en la década de 1960. A través de la consulta a la prensa comercial de Buenos Aires y a la información contenida en legajos producidos por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), aquí se ofrece una primera caracterización de dos congresos llevados a cabo en 1963 y 1965. La primera sección da cuenta de algunos de los rasgos de los congresos anticomunistas desarrollados en América Latina en las décadas de 1950 y 1970. La segunda sección muestra algunas de las filiaciones ideológicas y alianzas internacionales de FAEDA. En la siguiente sección se revisan los dos congresos anticomunistas realizados en Buenos Aires, así como el origen y expectativas de los organizadores, los discursos proferidos y las prácticas allí desarrolladas. En las conclusiones se esbozan algunas ideas sobre tres ejes: a) una identificación de las diversas escalas en las que se movieron los actores estudiados, que podían participar de manera simultánea de redes latinoamericanas (la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, CIDC; la Confederación Anticomunista Latinoamericana, CAL), transnacionales

(World Anti-communist League, WAL) o de índole nacional (FAEDA); b) una percepción de las ambiguas relaciones establecidas entre organismos públicos y organizaciones anticomunistas en la Argentina de los años sesenta: esas relaciones se expresaban en ámbitos públicos de sociabilidad como eran los congresos y los actos, pero también en espacios clandestinizados y en reuniones secretas, en las que autoridades y funcionarios intercambiaban información y recursos con organizaciones “civiles”, formalmente autónomas; c) una discusión sobre las posibles periodizaciones de una historia del anticomunismo en la Argentina y de las relaciones de esa cronología con la política nacional y con procesos hemisféricos.

Sociabilidad y redes internacionales anticomunistas durante la Guerra Fría

La más prestigiosa de las redes anticomunistas fue, sin dudas, el Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), un organismo internacional que nucleó a destacados intelectuales europeos y estadounidenses entre 1950 y 1966. Ese año, el *New York Times* hizo pública la financiación que el CLC recibía de la CIA y esto le impidió seguir funcionando como hasta entonces (Janello, 2012 y 2013-2014; Nállim, 2014). Hasta 1966, el CLC funcionó como una organización de alcance mundial, que producía frecuentes congresos internacionales, en los que sostenía un combate en sede cultural contra el marxismo. Tuvo filiales en diversas ciudades de América Latina durante las décadas de 1950 y 1960, que funcionaron como nodos de distribución de literatura antitotalitaria. Sin embargo, los encuentros del CLC no fueron los únicos en los que se trataron temas vinculados a la amenaza soviética en tierras americanas. De acuerdo al registro que hemos realizado, hay al menos dos series de congresos anticomunistas continentales que tuvieron lugar en América Latina a lo largo de la Guerra Fría. Dado que las entidades convocantes, los participantes y las intenciones de sus organizadores variaron a lo largo del tiempo, vale la pena dar a conocer algunos de sus rasgos.

El primer grupo de congresos tuvo lugar varios años antes de que los “barbudos” ingresaran en La Habana y tenía como uno de sus organizadores a la CIDC (Bohoslavsky y Broquetas, 2018). Entre 1954 y 1958 la Confederación realizó cuatro congresos anticomunistas en países latinoamericanos: en México, en mayo de 1954; en Río de Janeiro, en mayo de 1956; en Lima, en abril de 1957 y en Antigua (Guatemala), en octubre de 1958. Si bien el nombre del

congreso tuvo variaciones (las dos primeras ediciones se denominaron “Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina” y las dos últimas “Congreso Continental Anticomunista”), se trata de una misma serie, en la que los congresos se enumeraban correlativamente y hubo una importante continuidad en los planteles de las delegaciones y las autoridades. En esos cuatro congresos participaron representantes de decenas de países de todo el continente americano, pero también de países asiáticos y europeos. Dos eran las figuras organizadoras más destacadas: por un lado, el mexicano Jorge Prieto Laurens y por el otro, el almirante brasileño Carlos Penna Botto. Gracias a la publicación de las actas de dichos congresos, contamos con información sobre algunos de sus rasgos organizativos, así como sobre los discursos y los debates allí expresados. Por ejemplo, se percibe que en esos cuatro congresos la URSS está definida como el enemigo principal. La República Popular China es mencionada con menos frecuencia como una posible inspiración negativa para los campesinos. En todo caso, eran años en los que Fidel Castro aún era un joven sobre quien podían mostrar esperanzas los que deseaban la consolidación de las democracias caribeñas y centroamericanas: la Cuba de entonces era la Guatemala bajo las presidencias de Arévalo y de Arbenz (1944-1954).

El segundo grupo de congresos se desarrolló en la década de 1970 y su *alma mater* fue la CAL. La CAL fue constituida en Guadalajara (México) en 1972 y funcionó por lo menos hasta 1983. Fue creada en el marco de la realización de otro congreso anticomunista, pero de alcance mundial, el VI Congreso de la WAL, el primero que se realizaba fuera del continente asiático. La WAL era una organización anticomunista de alcance global fundada en 1967, que estaba controlada por los taiwaneses y los surcoreanos como parte de su política exterior no oficial de contención de la República Popular China y de Corea del Norte, respectivamente (Anderson y Anderson, 1986: 47 y ss.). La WAL nucleaba a organizaciones europeas y asiáticas preocupadas por la expansión del comunismo, principalmente del gobierno chino. De allí el peso que tuviera el continente asiático (y en particular, los taiwaneses) en su organización y financiación desde sus orígenes.¹ La conexión entre organizaciones ultracatólicas mexicanas y el

¹ El congreso fundacional fue en Taiwan, pero a ese le siguieron el 2° (1968, Saigón), el 3° (1969, Bangkok), el 4° (1970, Kyoto) y el 5° (1971, Manila). A partir de entonces, las sedes del Congreso dejaron de ser ciudades asiáticas y la WAL alcanzó estatus global: el 6° congreso se realizó en 1972, en Guadalajara, como ya se señaló; el 7° fue en 1974, en Washington; el 8°, en 1975 en Río de Janeiro y luego volvió a Asia: el 9° fue en Seúl, en 1976, y el 10° en Taipéi, en 1977. La antorcha del anticomunismo de la Liga volvió a Sudamérica en abril de 1979 cuando el dictador Stroessner convocó al 12° Congreso en Asunción (Rostica, 2016).

gobierno taiwanés a inicios de los años setenta explica la incorporación de preocupaciones geopolíticas globales a las discusiones mantenidas en los congresos de la CAL (López Macedonio, 2010).

A diferencia de la red de la CIDC, que funcionó durante los años cincuenta principalmente por el accionar de organizaciones políticas, la CAL descansó en buena medida en la colaboración entre organismos de seguridad e inteligencia militar. Según ha escrito Julieta Rostica, la CAL y sus congresos “constituyeron una red latinoamericana de derecha que [...] apoyó y se articuló estrechamente con las Fuerzas Armadas de cada uno de los países en los que se ejercían sendas dictaduras o gobiernos militares para la represión interna” (Rostica, 2016). La CAL participó de manera clandestina en el armado y la ejecución de las estrategias antisubversivas en América Central a fines de los años setenta y en los ochenta, y se considera que es responsable del funcionamiento de escuadrones de la muerte en Guatemala y El Salvador (Anderson y Anderson, 1986). Los congresos anticomunistas fueron una de las actividades públicas más importantes de la CAL: Guadalajara, en 1972; Río de Janeiro, en 1974; Asunción, en 1977² y Buenos Aires, en 1980 (Cersósimo, 2015). A esos congresos públicos se le sumaban los clandestinos, que también llevó a cabo la CAL, y en los que se intercambiaba información de inteligencia y se planificaban actividades represivas conjuntas, como fueron las reuniones de Asunción, en 1973, y de Brasilia, en 1974.³

Los cuatro congresos públicos desarrollados de 1972 a 1980 fueron apoyados explícitamente por distintas dictaduras sudamericanas y centroamericanas: su *tempo* claramente ya no era el de los años cincuenta y la visión optimista sobre las posibilidades de la ayuda al desarrollo, sino el de las dictaduras y la doctrina de la seguridad nacional. De allí que las reuniones de la CAL congregaron a integrantes o líderes de los escuadrones de la muerte, jefes de dictaduras, agentes de la CIA y hombres de la Secta Moon (Rostica, 2016). La imagen del general Carlos Suárez Mason dando el discurso inaugural del IV Congreso en el Teatro General San Martín, en Buenos Aires, parece ser una postal clara.⁴

Esta primera caracterización da cuenta de la existencia de dos series de congresos con rasgos diferenciados en lo que se refiere a los participantes, su

² Hubo delegaciones de 18 países latinoamericanos. Según Rostica (2016), también se hicieron presentes Ku Cheng-kang, presidente honorario de la WAL; Gustavo Leigh, jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar de Gobierno de Chile y figuras de Corea del Sur y los Estados Unidos.

³ Hubo delegaciones de Paraguay, México, Brasil, Chile, Guatemala y El Salvador (Rostica, 2016).

⁴ “Suárez Mason instó a la unión ante el comunismo”, *La Nación*, 4/9/1980, p. 1.

ubicación temporal, sus propósitos y la naturaleza de sus actividades. En lo que se asemejan es en el carácter internacional de su convocatoria, la regularidad de su realización y la multiplicidad de sedes. A continuación, presentaré otra serie de congresos, que se apartan de esos patrones por cuanto carecen de esos rasgos abiertamente internacionales, se realizan en una misma ciudad y no muestran una frecuencia en su realización.

Los anticomunistas argentinos de los años sesenta: el caso de FAEDA

Súbitamente, el anticomunismo se convirtió en un referente de la política argentina en los años sesenta, al punto de que el miedo a la expansión de la izquierda terminó superponiéndose –cuando no reemplazando– a la antaño dominante “cuestión peronista”. El giro de la Revolución cubana hacia el modelo marxista-leninista, la aparición de una improvisada actividad guerrillera en el norte argentino y la evidente capacidad de resistencia, organización y presión del movimiento obrero autoidentificado mayoritariamente como peronista colocaron en el centro del debate a la “amenaza roja”. Ese fenómeno cautivó y esperanzó a muchas personas identificadas con las izquierdas, pero a quienes tenían posiciones de derecha les generó temores intensos.

A lo largo de la década de 1960, en la Argentina, se crearon –y desaparecieron– varias organizaciones explícita y centralmente anticomunistas. Una de las más relevantes, por la cantidad de vinculaciones que tejió, fue la FAEDA, que agrupó por un decenio a organizaciones políticas y sociales que tenían por norte de su accionar la lucha contra el comunismo. De acuerdo con el espionaje policial bonaerense, FAEDA se constituyó en octubre de 1963 como resultado del “Primer Congreso Anticomunista” realizado en Buenos Aires.⁵ Según la inteligencia policial, entre las organizaciones que integraban formalmente FAEDA se contaban agrupaciones políticas (como la Acción Revolucionaria Anticomunista), sindicatos (como la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación o el Sindicato Democrático de Canillitas Libres), asociaciones de exiliados de Cuba (Directorio Magisterial Revolucionario Cubano) y Europa del Este (Asociación de los Albaneses 28 de noviembre Anticomunista). Había

⁵“Antecedentes sobre FAEDA (Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas)”, 1965, Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Informe Mesa A, Factor político, Carpeta 37, Legajo 75.

allí organizaciones situadas en la Capital Federal y en las provincias, como la Central Vecinal John F. Kennedy, de Córdoba.⁶

Distintas investigaciones sobre FAEDA han mostrado el perfil de sus directivos y sus vínculos con el empresariado y las fuerzas de seguridad y defensa (Bohoslavsky, 2018; Plotinsky, 2008). Su financiación declarada provenía del centenar de organizaciones que la conformaban, aunque es probable que haya recibido asistencia financiera de fuentes privadas. El presidente de la institución, Apeles Márquez, fue durante mucho tiempo autoridad del Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires y en 1962 presidía el Frente de Entidades Democráticas Revolucionarias,⁷ que postulaba la defensa “de la línea auténtica de la argentinidad forjada por los próceres de Mayo y la Revolución Libertadora”.⁸ Sobre el vicepresidente de FAEDA, Francisco Antonio Rizzuto (h), hay más información dada su longeva carrera en el *lobby* del empresariado periodístico⁹ y en organizaciones filantrópicas.¹⁰

Durante sus primeros años de vida, FAEDA tuvo a bien organizar distintas actividades: actos de homenaje, proyección de películas, declaraciones en los periódicos, visitas a autoridades, conferencias, etcétera. En 1965, en el marco de la celebración del “Día del Anticomunismo”, FAEDA comenzó una impactante campaña de solicitadas aparecidas en diversos medios de prensa porteños en las que acusaba a decenas de personas y de organizaciones sociales, estudiantiles y políticas de ser títeres del comunismo internacional (Padrón, 2012: 167).¹¹ Una de las actividades que parece haber contribuido más significativamente a que se ampliara y consolidara su red fue la realización de dos congresos anticomunistas en Buenos Aires, en 1963 y 1965. Si esos congresos se pudieron llevar a cabo

⁶ En el informe citado, en la nota 3, se encuentra el listado de las organizaciones y sus direcciones postales, pero están tachados los nombres de los delegados.

⁷ “Antecedentes sobre FAEDA”, *op. cit.*

⁸ “La línea de Mayo”, *Noticias Gráficas*, 22/8/1962. En esa nota, Márquez señaló que el “pueblo derribará el andamiaje del frondizismo-frigerismo que al amparo de la ilegalidad existente han pactado un contubernio con la alianza peronista-comunista confesada en Moscú”.

⁹ Según informaba la DIPBA, en 1965, Rizzuto era un “viejo luchador de la prensa democrática” y actuaba en FAEDA como delegado del Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales, institución que fundó su padre en 1946. Estuvo vinculado por décadas a la Sociedad Interamericana de Prensa, la Academia Nacional de Periodismo, el Consejo Publicitario Argentino, la Asociación Argentina de Editores de Revistas, el International Press Institute y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Bohoslavsky, 2018).

¹⁰ Los “Decálogos de la buena conducta” redactados por el propio Rizzuto eran distribuidos por la Liga Pro Comportamiento Humano (Bohoslavsky, 2018; Moreno, 2004).

¹¹ Por ejemplo, la solicitada n° 5 puede verse en *La Nación*, 15/10/1965, p. 13.

fue porque FAEDA se vinculaba con redes anticomunistas de alcance nacional e internacional. Tuvo vínculos con la Sociedad para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, la organización del catolicismo integrista creada por Plinio Corrêa de Oliveira y que tuvo filiales en la Argentina y en Chile, entre otros países (Ruderer, 2012). Corrêa de Oliveira visitó la ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 1964, para dictar un conjunto de conferencias en el Colegio Lasalle, por invitación de la FAEDA.¹² Junto con esa red del catolicismo anticonciliar, FAEDA tenía vínculos con figuras y organizaciones anticomunistas sudamericanas, como el ruralismo uruguayo, el conservadurismo chileno y el “nacionalismo” argentino. Y además, como se verá, desde fines de los años sesenta, FAEDA tuvo conexiones con la WAL.

Los congresos de FAEDA (1963-1965)

El primer congreso anticomunista organizado por FAEDA se inició el 7 de octubre de 1963, en Buenos Aires y fue mencionado por la prensa como “Primer Congreso Argentino Contra el Comunismo” o como “Jornadas de Estudio Contra el Comunismo”.¹³ A lo largo de dos días, se realizaron diversas actividades en el salón de actos del Colegio La Salle, que se convirtió en un hogar recurrente para reuniones de grupos anticomunistas en los años siguientes.¹⁴ Contrariamente a lo que postula el informe de la inteligencia policial bonaerense de 1965, FAEDA no fue el resultado del congreso, sino que el congreso parece haber sido organizado por FAEDA como muestra de su existencia.¹⁵ Entre quienes asistieron a las deliberaciones se contaron representantes de las Fuerzas Armadas y de áreas de Inteligencia, autoridades nacionales y dirigentes de entidades anticomunistas locales y extranjeras, y “expertos” en anticomunismo del país y Sudamérica.¹⁶

¹² “Occidente y su lucha contra el comunismo”, *La Prensa*, 2/11/1964, p. 8.

¹³ “Acción común anticomunista”, *Correo de la Tarde*, 9/10/1963. “Finalizó un Congreso contra el comunismo”, *La Prensa*, 8/10/1963, p. 5. Otras redes anticomunistas funcionaban de manera paralela a FAEDA y tenían sus propios congresos, como la Asamblea General de la Unión Mundial de la Juventud Croata. Ver: “II Asamblea de la Unión Mundial de Juventud Croata”, *La Nación*, 4/11/1964, p. 12.

¹⁴ “Acción común anticomunista”, *Correo de la Tarde*, 9/10/1963.

¹⁵ Es interesante observar que la DIPBA no envió a agentes a vigilar el evento. Su informe consiste básicamente en una recopilación de noticias periodísticas aparecidas durante los días del congreso y en las semanas previas.

¹⁶ “Finalizó un Congreso contra el comunismo”, *La Prensa*, 8/10/1963, p. 5.

Era el caso del uruguayo José Pedro Martínez Bersetche,¹⁷ presidente del Comité de Naciones en Lucha Contra el Comunismo y otras organizaciones anticomunistas de su país, y de Alberto Faleroni, delegado permanente en la Argentina de la CIDC.¹⁸ Faleroni era un viejo combatiente del anticomunismo: había formado parte de los congresos de la CIDC en 1956, 1957 y 1958 y daba clases en la Escuela Superior de Guerra.¹⁹ Asimismo, también estuvieron presentes representantes de algunas de las decenas de organizaciones que formaban la FAEDA. El discurso de cierre estuvo a cargo del presidente de esa Federación, Apeles Márquez, quien puso de manifiesto la presencia activa de los jóvenes en el congreso. Esa “juventud brillante”, sostuvo el presidente de FAEDA, “nos ha acompañado con la limpieza de sus voces y mentes no corrompidas”. Ante ella debían “jurar, desde el fondo del corazón, que no la defraudaremos y sabremos corresponderle y guardar para ello, sus hijos y los hijos de éstos, los dones preciados del vivir occidentalista y cristiano y de la libertad”.²⁰

Antes de pasar a la cena de camaradería, el Dr. Alberto Martín Bor, coordinador del congreso de FAEDA, dio lectura a las conclusiones producidas con el propósito de “oponerse al imperialismo soviético”, divididas en cuatro apartados. En lo referido a “defensa exterior”, fijaba los siguientes lineamientos tendientes a combinar actividad diplomática y militar:

- 1) Perfeccionar el sistema de defensa militar interamericano y mantener una apropiada preparación de las fuerzas armadas nacionales, en colaboración con

¹⁷ Según Broquetas (2015), Martínez Bersetche presidía en realidad la CIDC. En Montevideo, editaba *La voz de la libertad*, que era apoyada por el Comité de Naciones en Lucha contra el Comunismo. Martínez Bersetche ofrecía frecuentemente charlas y actividades en el Ateneo de Montevideo, donde estaban radicados el Movimiento Antitotalitario del Uruguay y la Liga Oriental Anticomunista.

¹⁸ “Acción común anticomunista”, *Correo de la Tarde*, 9/10/1963.

¹⁹ Según Sessa (2013: 172), Faleroni se inició en el periodismo en publicaciones menores de Rosario. Tras su paso por el gobierno peronista en la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación y la “Agencia Telenoticiosa Americana” (Télam), Faleroni se sumó a organizaciones anticomunistas. Entre 1953 y 1958 elaboró materiales para presentar en congresos anticomunistas como el “Informe sobre el comunismo en la Argentina y su infiltración en el peronismo” y “Denuncias sobre el contrabando de drogas para financiar la infiltración comunista en el mundo libre”. En la década de 1960 se sumó a la Acción Cristiana Ecuménica (España), fue asesor de la Escuela Nacional de Guerra, del Ministerio de Defensa y autor recurrente en la *Revista Defensa Nacional* y la *Revista del Circulo Militar*. Esta institución editó, en 1969, su libro *De Rusia a Vietnam. (Gran estrategia Soviético-China)*.

²⁰ “Conclusiones de unas jornadas de estudio contra el comunismo”, *La Nación*, 8/10/1963, p. 5.

la acción civil adecuada; 2) mantener alejado del continente a dicho imperialismo y/o expulsarlo de los países en que se haya infiltrado o instalado.²¹

En “defensa interior” presentaba tres ámbitos de acción. El primero de ellos era volver a imponer valores y perspectivas morales para preservar el “patrimonio espiritual del país” e impedir el ingreso del comunismo:

Difusión actualizada de la cosmovisión cristiana, la tradición histórica de nuestros próceres nacionales y la proscripción de la propaganda y literatura tendenciosa o licenciosa, el tráfico de alcaloides y demás medios con que se corrompe la moral del pueblo y en especial de la juventud.

El segundo ámbito de acción de la “defensa interior” remitía a la necesidad de mantener el orden a través del mantenimiento de la prohibición legal de las actividades comunistas y del “perfeccionamiento de los organismos de represión interna”. La dimensión más propositiva era abarcada por la “movilización de la opinión pública mediante la difusión amplia de las actividades comunistas” y la “creación de los órganos de información necesarios para asegurar dicha movilización”.

Finalmente, el tercer ámbito de acción, la “defensa del orden institucional” también combinaba una dimensión propositiva (“creación de escuelas de cuadros sindicales”) con una más abiertamente represiva (“eliminación de cuadros comunistas y cripto-comunistas de los cargos y funciones rentados por el Estado”).

El tercer aspecto presentado por Bor (“reforma y desarrollo económico-social”) se mostraba más breve e inespecífico, lo que nos permite apreciar el peso más represivo que reformista de las conclusiones del Congreso:

- 1) Desarrollar práctica y progresivamente todas las medidas que propugnen un aumento y mejor distribución de la producción nacional tomando en cuenta los principios de las encíclicas *Mater et Magistra* y *Pacem in Terris*;
- 2) Incrementar la expansión y comprensión de estas medidas por el pueblo con el fin de crear una verdadera “presión popular” en la exigencia y obligatoriedad de efectuar esta reforma.

²¹ “Acción común anticomunista”, *Correo de la Tarde*, 9/10/1963. “Conclusiones de unas jornadas de estudio contra el comunismo”, *La Nación*, 8/10/1963, p. 5.

El último apartado, “en el plano internacional”, proponía “mantener un estrecho enlace informativo-técnico-científico con las instituciones y/o países democráticos del mundo libre cuya colaboración sea necesaria y/o conveniente para la materialización del esfuerzo nacional”. El congreso parece haber animado a los participantes lo suficiente como para votar que el 7 de octubre fuera declarado “Día del Anticomunismo”.

A pesar de que las repercusiones del Congreso no parecen haber sido demasiadas, FAEDA decidió realizar una segunda edición en 1965, que coincidiera con la celebración del “Día del Anticomunismo”. La aparición de las solicitadas de FAEDA en octubre de ese año formó parte de una estrategia de comunicación destinada a promover la asistencia al segundo Congreso y a obtener impacto mediático. Por ser Rizzuto un hombre muy conocedor de los medios de comunicación y de la producción de información clave, no resulta inverosímil esa hipótesis. A inicios de ese mes, *La Nación* dio a conocer algunos de los preparativos del congreso que organizaba FAEDA junto con Unitas Argentina (“Unidos en Cristo Frente al Comunismo”) y que era denominado “II Congreso Juvenil Argentino Frente al Comunismo”. En esa ocasión, se difundió que el evento serviría de preparación para la realización de un “futuro congreso interamericano”.²² Se anunciaba la presencia de una delegación uruguaya y de otra en representación de los universitarios. El temario propuesto era amplio y muestra cuánto se había ampliado la supuesta presencia comunista en el país según la perspectiva de FAEDA. Se proponía discutir la penetración del comunismo “dentro del nacionalismo”, “los partidos políticos”, “las cooperativas”, “lo asistencial”, las “Universidades y colegios secundarios” así como la “utilización del psicoanálisis”.

En lo que refiere a aspectos propositivos, se contaba la provisión de “facilidades económicas para estudiantes pobres”, destacar la “bondad” de las cooperativas y brindar “instrucción gremial desde la escuela primaria”. Sobre cuestiones religiosas, la convocatoria se concentraba en la situación de la Iglesia en Europa del Este y advertía sobre la infiltración de la “izquierda cristiana” que debía ser respondida con un “cristianismo militante” y no vergonzante. Proponía la libre agremiación y la renovación de los partidos políticos y sus dirigentes. De cualquier manera, ya en el temario del segundo congreso, predominaban las preocupaciones y las propuestas de orden más represivo: “abolición de la política partidaria en la universidad”, “abolición de la política en los gremios”

²² “Un Congreso Juvenil Frente al Comunismo ha convocado Unitas”, *La Nación*, 13/10/1965, p. 13.

y “necesidad de un reequipamiento de las Fuerzas Armadas y del orden”. Entre los temas se citaba “infiltración (¿espionaje?), terrorismo, guerrillas”.²³

La actividad se inauguró formalmente el 29 de octubre de 1965 en la Iglesia del Carmelo, en el Barrio Norte de Buenos Aires, especialmente engalanada para la ocasión. Las sesiones de presentación de ponencias y de intercambio de ideas se realizaron en el Colegio La Salle. El programa de las dos jornadas era el siguiente: el primer día por la mañana comenzaron las exposiciones y a la noche se ofreció una recepción a los delegados junto con proyección de películas. Al día siguiente se contemplaba la realización a las 11 de la mañana de una “misa por las víctimas del Comunismo”; a las 18 horas, la lectura de las conclusiones, y a la noche una cena de despedida en una iglesia ubicada en La Boca.²⁴ El salón en el que se efectuaron las deliberaciones estaba decorado con emblemas vaticanos, argentinos, uruguayos “y de los países cautivos”.

Al evento asistieron cerca de sesenta representantes provenientes de la Capital Federal y de las provincias del Chaco y Corrientes, a los que se sumaron –siempre según la prensa– una delegación llegada desde Uruguay, presidida por Olga Clerici, viuda del dirigente ruralista Benito Nardone.²⁵ La viuda de Nardone “recordó a su marido, con tono emocionado, cuando luchaba por la libertad y contra el comunismo en su patria” y terminó por “exaltar la hermandad y la capacidad de trabajo de las juventudes argentina y uruguaya”. Se hicieron presentes, al igual que en el congreso de 1963, altos oficiales de las Fuerzas Armadas como el general Federico Toranzo Montero y dirigentes de organizaciones anticomunistas nacionales y continentales como el Frente Anticomunista Latinoamericano y el Centro Anticomunista Democrático Argentino, FAEDA y la Asamblea de las Naciones Cautivas, la “señorita Nelly Collo” –representante de asociaciones anticomunistas– y el ya conocido Alberto Faleroni.²⁶

En la mesa de cabecera se ubicaron el titular de la Federación Argentina de Estudiantes Anticomunistas (Patricio Asencio), el presidente de Unitas (Washington Blanco Correa) y su vicepresidenta (la “señorita” Magdalena Antonia Paganini). Atensio lamentó que en un país de 22 millones y en una

²³ Ídem. Finalmente, el temario incluía el detalle de algunos de los problemas sociales que permitían la expansión del comunismo: “Falta de vivienda, desocupación, delincuencia, resentimiento social. Desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil. Regiones subdesarrolladas. El trabajo en la mujer. Inmigración del campo a la ciudad”.

²⁴ “Se inicia hoy un Congreso Juvenil anticomunista”, *La Nación*, 29/10/1965, p. 5.

²⁵ “Congreso juvenil anticomunista”, *Clarín*, 30/10/1965. Sobre Nardone y el ruralismo, ver Jacob (2006).

²⁶ “Se inicia hoy un Congreso Juvenil anticomunista”, *La Nación*, 29/10/1965, p. 5.

ciudad de tres millones de habitantes “solo se reúnan 100 jóvenes ante el llamado frente al peligro comunista”. A pesar de este autoreconocimiento del fracaso de su convocatoria, pidió no desmoralizarse: “No importa: Cristo con doce apóstoles pudo cambiar el mundo. Nosotros también lo intentaremos”. Indicó que mantenía su confianza en la adhesión juvenil a una “acción constructiva, americanista y cristiana” para realizar la “revolución en libertad”²⁷ en lugar de la “revolución por el comunismo”. Señaló que era necesario unificar las aspiraciones de América y constituir un solo bloque para concretar el verdadero destino de los pueblos de este continente que tienen una raíz histórica y una misma religión. El presidente de Unitas, por su parte, puso el acento en el daño que generaba sobre la juventud la adopción de un estilo de vida liberal y anticristiano, que ya el Papa había denunciado. Según refiere el cronista de *Clarín* que cubrió el congreso, Correa Blanco “instó a los congresistas a tratar todos los problemas que aquejan al país, sin defender los intereses de nadie, solo pensando en la doctrina de Cristo y en la Patria. Para ello recordó, era necesario tener presente las palabras de monseñor De Andrea, que decía que ‘las manos del Señor se abren hacia la izquierda y la derecha, porque en su corazón une a todos’”.²⁸

La vicepresidenta de Unitas se refirió “al avance del materialismo ateo en el mundo actual y destacó la importancia del papel de la juventud cristiana para contrarrestar esa tendencia”. En su carácter de “asistente social”, la señorita Paganini “instó a las mujeres a luchar para que sus hijos no se formen en la escuela marxista, anteponiéndoles la doctrina de Cristo”. El segundo congreso parece haber sido más exitoso que el primero en términos de convocatoria, asistencia e impacto (aunque no contó con la presencia de ninguna autoridad nacional).

En 1967 FAEDA convocó a otro congreso, cuya organización y desarrollo tuvo algunos rasgos particulares. No se trató del tercer congreso según podría pensarse, sino del “Primer Congreso Internacional de Entidades Democráticas Anticomunistas Representativas”, un evento que debía de realizarse entre el 24 y 25 de noviembre en Buenos Aires. La organización del evento estuvo a cargo de FAEDA (en la figura de su presidente, Apeles Marquez) y de UNITAS Argentina (con Washington Blanco Correa a la cabeza). Según informaba el titular de FAEDA, “ha sido asegurada la participación de sesenta y cinco entidades

²⁷ El término “Revolución en libertad” remite directamente a la serie de reformas que en esos años estaba llevando adelante en Chile el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Con esa noción se hacía referencia a un programa económico y político que se decía capaz de generar cambios estructurales en la propiedad agraria, la distribución del ingreso y la relación con el exterior, sin abrazar un modelo de Estado soviético.

²⁸ “Congreso juvenil anticomunista”, *Clarín*, 30/10/1965.

anticomunistas” gracias a la gira que había realizado por países americanos para promocionar al congreso.²⁹ Sin que se aprecien las razones, la fecha de realización del congreso se pospuso de noviembre a diciembre de 1967. El titular de las Juventudes de FAEDA, Luis Dragani, convocó a participar de lo que llamó la “Primera Conferencia de las Juventudes de la Liga Anticomunista Mundial de la República Argentina”.³⁰ El presidente de FAEDA, Apeles Marquez, era miembro de la WAL desde 1967 y al año siguiente se incorporó al Buró Político de la WAL, por cuanto fungía como secretario general de la Liga Anticomunista Latinoamericana (World Anti-Communist League, 1967: 2).³¹ En el programa quedaba en evidencia la pertenencia y subordinación de FAEDA respecto de la WAL o Liga Anticomunista Mundial:

- i) Análisis de las resoluciones del primer congreso de la Liga Anticomunista Mundial;
- ii) Análisis de la situación política, económica, cultural y social del mundial actual y la actitud de las juventudes anticomunistas [...];
- iii) La organización de las juventudes anticomunistas democráticas en la Argentina y América Latina y su colaboración con la LAM;
- iv) Promover el apoyo a los que lucha por la libertad de los pueblos sojuzgados por el comunismo.³²

Por el programa del evento, la organización de esa actividad parece haber sido una decisión tomada por la WAL y asignada a FAEDA. Dirigentes de esta organización se reunieron a inicios de 1968 con Guillermo Borda, ministro del Interior, al efecto de “dar a conocer las actividades, señalar las intervenciones de las autoridades de la entidad en diversos congresos y conferencias anticomunistas internacionales” y, en particular, para solicitar el “apoyo económico y oficial del gobierno nacional para la realización en la Argentina de un congreso a nivel americano”. Pese al evidente perfil anticomunista de la dictadura de Onganía, su lucha contra la “amenaza roja” parece haberse orientado en otros sentidos distintos de los que FAEDA solicitaba financiar. En todo caso, es claro que el inicio de la “Revolución Argentina”, a mediados de 1966, había generado nuevas condiciones políticas, así como nuevos desafíos y oportunidades para FAEDA.

²⁹ “Reuniránse entidades anticomunistas en un congreso internacional”, *La Nación*, 8/11/1967.

³⁰ “Congreso anticomunista mundial y los ‘hippies’”, *La Nación*, 12/12/1967.

³¹ “¿Será posible?”, *La Razón*, 12/1/1968. “Anticomunistas”, *Clarín*, 27/1/1969.

³² “Habrá una conferencia juvenil anticomunista”, *El Día*, 15/12/1967.

Tras el golpe de Estado, FAEDA reorientó sus actividades políticas. Si hasta entonces se había concentrado en la realización de congresos, en la publicación de solicitadas y la realización de misas en homenaje a las víctimas del comunismo en Europa oriental, tras la entronización de la “Revolución Argentina” decidió darle a su lucha contra el comunismo un sentido evidentemente menos cultural y público: incluyó la persecución, secuestro y golpiza a *hippies* en Buenos Aires y en la costa atlántica, entrenamiento militar, manejo de armas, vigilancia a embajadas de países socialistas y atentados a instituciones como el Instituto Di Tella en 1967 y 1968 (Oteiza, 1997: 98).³³ FAEDA desarrolló formas de colaboración con la dictadura de Onganía dado su común interés en la vigilancia y la represión de las disidencias culturales y políticas al régimen. La cooperación asumía formas muy terrenales como provisión de armas y de entrenamiento militar a los faedistas. El ministro del Interior, Enrique Martínez Paz, en noviembre de 1966,³⁴ manifestó que esperaba que FAEDA pudiera señalar a “personas de distintas nacionalidades de sus filas de miembros de confianza” para que fueran incorporados como “conserjes, porteros, jardineros, etcétera” en sedes diplomáticas de los países del bloque soviético de manera de mejorar las actividades de espionaje (Yofre, 2015).

Conclusiones

Este artículo intentó acercarse a un aspecto poco estudiado de los años sesenta como fueron los congresos anticomunistas. Esta serie de reuniones, si bien parecen haber tenido escaso impacto político en su época, constituyeron el embrión de posteriores redes anticomunistas de alcance internacional, como la CAL. Asimismo, ilustra sobre algunas fuentes ideológicas del autoritarismo que escapaban a la corporación castrense y a la doctrina de la seguridad nacional dado que remiten a otras tradiciones ideológicas, en algunos casos también de orden transnacional. Los congresos funcionaron como laboratorios de ideas en los que se testearon, perfeccionaron y difundieron nociones de “enemigo

³³ “Reacciones”, *Primera Plana*, 27/8/1968, p. 15.

³⁴ En esa fecha, el espionaje soviético con sede en Buenos Aires reportó que el presidente y el secretario de FAEDA se habían reunido con Martínez Paz, quien les habría avisado que el gobierno iba a intervenir la Confederación General del Trabajo y a perseguir a integrantes del Partido Comunista Argentino y del ala izquierdista de Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista, tareas para las que iba a requerir la colaboración de miembros de FAEDA (Yofre, 2015: nota al pie 275).

interno” que fueron usadas contemporánea o posteriormente en la represión a fuerzas de izquierda y sindicales.

En los congresos latinoamericanos de la CIDC producidos en la década de 1950, participaron los promotores de una lucha cultural y propagandística de alcance americano contra los comunistas, que incluía una vigilancia a los sospechosos de serlo. En esos congresos, participaban “periodistas”, “soviétólogos” y personajes de escasa relevancia política nacional, salvo el almirante Penna Botto, de Brasil. En los discursos allí producidos, predomina un tono americanista, empresarial y antisoviético. Su gran miedo parece haber sido la posibilidad de que se replicara una experiencia como la guatemalteca. Por el contrario, en los congresos de los años setenta había actores más preocupados por darle a la lucha contra el comunismo un sentido menos cultural y más bélico, paraestatal, clandestino y global. Esa red está vinculada a la WAL y la CAL, y fue apoyada explícitamente por dictaduras sudamericanas y centroamericanas, especialmente tras el triunfo presidencial de Jimmy Carter. La CAL estuvo integrada en buena medida por aparatos de inteligencia y miembros de las Fuerzas Armadas, integrantes de escuadrones de la muerte, altas autoridades de las dictaduras e incluso hombres de la Secta Moon; sus congresos funcionaron como un espacio de colaboración e intercambio de información que sirvió de inspiración para el Plan Cóndor.

Los dos encuentros realizados por FAEDA en Buenos Aires, en 1963 y 1965, parecen ser un eslabón entre los congresos organizados por la CIDC en los años cincuenta y los organizados por la CAL en los setenta. De los congresos de FAEDA, hay varios rasgos que vale la pena señalar. En primer lugar, que fue constante la presencia católica, expresada en la incorporación de algunas figuras así identificadas en los debates, en la cesión de sedes para la realización de los eventos y en la definición de los temas a discutir. En segundo lugar, estudiar a los congresos nos permite aproximarnos a actores y actividades del período que no son reducibles a una historia política que percibe que el enfrentamiento central del período era el que se libraba entre las diversas fracciones que se identificaban con el peronismo y el antiperonismo (Cavarozzi, 1983; De Riz, 2000 y Smulovitz, 1991). Una característica particular de los congresos de FAEDA fue la recurrente preocupación por incluir el tratamiento de la “cuestión peronista” como un problema que debía ser entendido y resuelto como parte de uno de mayor gravedad y extensión, como era el comunismo. La decisión de subsumir la “cuestión peronista” (la llamada “infiltración al nacionalismo”) al problema del comunismo expresa un proceso de convergencia de FAEDA con preocupaciones y temáticas del anticomunismo de alcance hemisférico, que

trataba como un drama específico del continente a los gobiernos nacionalistas o “rosas”, término con el que hacían referencia a los gobiernos de Getúlio Vargas, de Víctor Paz Estensoro o los del PRI en México (Bohoslavsky y Broquetas, 2018). Ese ejercicio de traducción da cuenta de las múltiples redes en que se movían los dirigentes del anticomunismo de la Argentina en los años sesenta y setenta. Muchos de ellos formaban parte de organizaciones bastante pequeñas y de base local, pero a la vez se vinculaban con sus pares de otros países sudamericanos, y en los casos de los más encumbrados, conseguían participar formalmente de las asociaciones anticomunistas hemisféricas o globales, como la CIDC, la CAL o la WAL.

Como mostró este artículo, entre 1963 y 1966 FAEDA se concentró en el desarrollo de diversas actividades públicas destinadas a denunciar la gravedad de la amenaza comunista en la Argentina a través de intervenciones en la prensa, conferencias en diversas instituciones, actos callejeros y, también, congresos anticomunistas. Pero desde mediados de 1966 su agenda se encaminó hacia formas más terrenales y violentas de persecución a lo que denunciaba como comunistas (*hippies*, artistas de vanguardia, estudiantes, etcétera). Fue a partir de ese momento que se evidencia mayor cantidad de conexiones entre la FAEDA y los organismos públicos: si hasta entonces las autoridades políticas del país habían estado ausentes de las actividades de FAEDA, luego de ello la Federación consiguió entrevistas públicas y secretas con ministros para intercambiar información, obtener suministros financieros y pertrechos para la represión a los así señalados como comunistas. Paradójicamente, ese mayor nivel de cooperación entre las organizaciones anticomunistas y la dictadura terminaron por impedir –o quizás tornar inútil o innecesaria– la realización del previsto tercer congreso anticomunista en 1967. La lucha contra el comunismo no incluía la organización de nuevos congresos, sino el despliegue de la acción directa en las calles, maniobras clandestinas y anónimas contra los objetivos identificados previamente en los congresos. Esa perspectiva parece ir en sintonía con tres aspectos que algunos investigadores han encontrado respecto de los crecientes niveles de autoritarismo y de legitimación de la represión entre los años cincuenta y setenta: a) las doctrinas que circulaban dentro del Ejército argentino fueron dejando de lado las perspectivas más reformistas y desarrollistas, para abrazar las más explícita y exclusivamente represivas (Pontoriero, 2015); b) la imposición de patrones represivos “excedía a la división entre gobiernos civiles y militares, democráticos o golpistas” (Felitti, 2009: 7) y más bien respondía a lógicas políticas y de cultura política que no equivalían a una periodización basada en criterios legales; c) esos crecientes niveles de represión fueron el

resultado de la convergencia entre actores civiles y autoridades estatales con objetivos y diagnósticos compartidos, como fueron los casos de los vínculos de la “Revolución Argentina” con FAEDA, la Liga de Madres y Padres y la Organización Americana de Salvaguarda Moral (Eidelman, 2015; Felitti, 2009; Manzano, 2010) y del “Proceso de Reorganización Nacional” con la Liga Pro Comportamiento humano.

Un último aspecto que vale la pena destacar en estas conclusiones tiene que ver con la necesidad de combinar las escalas de análisis para una comprensión más ajustada de las dinámicas de la Guerra Fría en América Latina. Así, un uso de la escala transnacional o global permite apreciar los intereses y los recursos que ponen en juego los actores más poderosos, como eran el gobierno de los Estados Unidos o, en mucha menor medida, la WAL. Estas entidades desplegaban estrategias y discursos anticomunistas que tenían mayor nivel de abstracción, por cuanto esperaban ser pasibles de usos propagandísticos casi universales. Aquí se pueden usar perspectivas de análisis que tomen en consideración los aspectos más geopolíticos de la Guerra Fría. En las escalas nacionales, es posible encontrar actores menos poderosos, como era el caso de FAEDA en la Argentina o de ALERTA en Uruguay (Broquetas, 2015). Esas organizaciones motorizaban perspectivas anticomunistas que troncaban con problemáticas más específicas (el peronismo en la Argentina, la reforma agraria en Chile, las actividades de los Tupamaros en Uruguay) y, por lo tanto, de traducción más difícil a otras agendas nacionales. Por último, el uso de una escala de orden más local permite ver los niveles de superposición entre agentes estatales y organizaciones “civiles”: un relevamiento a ras del piso desdeña rápidamente toda tentativa de distinguir muy tajantemente cuánto hay de estatal y cuánto de social en los procesos de crecimiento de la intolerancia a la diversidad ideológica en las décadas de 1960 y 1970.

Bibliografía

- Anderson, Scott y Anderson, Jon Lee (1986). *Inside the League. The shocking exposé of how Terrorists, Nazis and Latin American death squads have infiltrated the World Anti-Communist League*. Nueva York: Dodd, Mead & Company.
- Bohoslavsky, Ernesto (2018). “Contra el dexamil, las camisas naranjas y el comunismo. La Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (1963-1969)”. En Levín, Florencia (ed.), *Tramas del*

pasado reciente argentino. Historia, memoria y transmisión, pp. 45-64.
Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Bohoslavsky, Ernesto y Broquetas, Magdalena (2018). “Los congresos anticomunistas de América Latina (1954-1958): redes, sentidos y tensiones en la primera guerra fría”. Ponencia presentada en el Tercer Coloquio “Pensar las derechas en América Latina en el siglo xx”, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais, 20 al 22 de agosto.
- Bozza, Juan Alberto (2008). “El anticomunismo en los sesenta. Huellas y razones de una obstinación”. Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5905/ev.5905.pdf
- Broquetas, Magdalena (2015). “Una lucha sin fronteras: la derecha ‘demócrata’ y la embestida anticomunista en Uruguay de finales de la década de 1950”. *Cahiers des Amériques latines*, n° 79, pp. 75-96.
- Calandra, Benedetta y Franco, Marina (eds.) (2012). *La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas*. Buenos Aires: Biblos.
- Casals Araya, Marcelo (2016). *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964*. Santiago de Chile: LOM.
- Cavarozzi, Marcelo (1983). *Autoritarismo y democracia, 1955-1983*. Buenos Aires: CEAL.
- Cersósimo, Facundo (2015). “‘El Proceso fue liberal’. Los tradicionalistas católicos argentinos y el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)”. Tesis del Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- De Riz, Liliana (2000). *La política en suspenso, 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.
- Eidelman, Ariel (2015). “Moral católica y censura municipal de las revistas eróticas en la ciudad de Buenos Aires durante la década del sesenta”. En D’Antonio, Débora (ed.), *Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la historia argentina reciente*, pp. 1-20. Buenos Aires: Imago Mundi.

- Felitti, Karina (2009). “Difundir y controlar. Iniciativas de educación sexual en los años sesenta”. *Revista Argentina de Estudios de Juventud*, n° 1, pp. 1-19.
- Jacob, Raúl (2006). *Brevísima historia del Partido Ruralista*. Montevideo: Arpoador.
- Janello, Karina (2012). “El Congreso por la Libertad de la Cultura: el caso chileno y la disputa por las ‘ideas fuerza’ de la Guerra Fría”. *Revista Izquierdas*, n° 14, pp. 14-52.
- (2013-2014). “Los intelectuales de la Guerra Fría. Una cartografía latinoamericana (1952-1962)”. *Políticas de la Memoria*, n° 14, pp. 79-105.
- López Macedonio, Mónica Nymich (2010). “Historia de una colaboración anticomunista transnacional. Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el gobierno de Chiang Kai-Shek a principios de los años setenta”. *Revista Contemporánea. Historia y problemas del siglo xx*, n° 1, pp. 133-158.
- Manzano, Valeria (2010). “Juventud y modernización sociocultural en la Argentina de los sesenta”. *Desarrollo Económico*, vol. 50, n° 199, pp. 363-390.
- Moreno, Silvana (2004). “Cuando 95 años no son tantos. Francisco Rizzuto, periodista récord”. *La Nación*, 18 de febrero.
- Nállim, Jorge (2014). “Intelectuales y guerra fría. El Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina y Chile, 1950-1964”. *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, n° 14, pp. 1-25.
- (2015). “Local Struggles, Transnational Connections: Latin American Intellectuals and the Congress for Cultural Freedom”. En Chen, Tina Mai y Churchill, David (eds.), *The Material of World History*, pp. 106-133. Londres: Routledge.
- Oteiza, Enrique (1997). “El cierre de los centros de arte del Instituto Torcuato Di Tella”. En Oteiza, Enrique (coord.), *Cultura y política en los años 60*, pp. 77-108. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Padrón, Juan Manuel (2012). “Anticomunismo, política y cultura en los años sesenta. Los casos de Argentina y Brasil”. *Estudios del ISHiR*, vol. 2, n° 4, pp. 157-73.

- Patto Sá Motta, Rodrigo (2002). *Em guarda contra perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)*. San Pablo: Perspectiva.
- Plotinsky, Daniel (2008). “Banco Central de la República Argentina y cooperativismo de crédito. Una relación conflictiva (1958-1969)”. Ponencia presentada en las XXI Jornadas de Historia Económica, Buenos Aires.
- Pontoriero, Esteban (2015). “La seguridad interna como teatro bélico: legislación de defensa y contrainsurgencia en la Argentina (1966-1973)”. *A Contracorriente*, vol. 13, pp. 150-170.
- Rostica, Julieta (2016). “La Confederación Anticomunista Latinoamericana y las Fuerzas Armadas. Guatemala y los años setenta”. Ponencia presentada en el Segundo Coloquio “Pensar las derechas en América Latina en el siglo xx”, Universidad Nacional de General Sarmiento, 13 al 15 de julio.
- Ruderer, Stephan (2012). “Cruzada contra el comunismo: Tradición, Familia y Propiedad (TFP) en Chile y Argentina”. *Sociedad y religión*, vol. 22, n° 38, pp. 77-106.
- Santiago Jiménez, Mario (2016). “Entre ‘hispanistas’ y ‘pro-yanquis’. El Primer Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina, México, mayo de 1954”. Ponencia presentada en el Segundo Coloquio “Pensar las derechas en América Latina en el siglo xx”, Universidad Nacional de General Sarmiento, 13 al 15 de julio.
- Sessa, Leandro (2013). “Aprismo y apristas en Argentina: Derivas de una experiencia antiimperialista en la ‘encrucijada’ ideológica y política de los años treinta”. Tesis del Doctorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
- Smulovitz, Catalina (1991). “En búsqueda de la fórmula perdida: Argentina, 1955-1966”. *Desarrollo Económico*, vol. 31, n° 121, pp. 113-124.
- Van Dungen, Luc; Roulin, Stéphanie y Scott-Smith, Giles (eds.) (2014). *Transnational Anti-communism and the Cold war. Agents, activities, and networks*. Londres: Palgrave Macmillan.
- World Anti-Communist League (1967). *Proceedings. The First Conference of the World Anti-communist League, September 25-29, 1967*, Taiwan.
- Yofre, Juan Bautista (2015). *Puerta de Hierro: Los documentos inéditos y los encuentros secretos de Perón*. Buenos Aires: Sudamericana.

Violencia paraestatal en el Gran La Plata (1973-1976): el caso de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)

Juan Luis Besoky

Introducción

Por lo general, la violencia paraestatal en la Argentina es particularmente conocida, durante el tercer gobierno peronista, por el accionar de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), sobre la que la bibliografía que existe es considerable: Paino (1984), Janzen (1986), Larraquy (2007), Gasparini (2005), Bufano (2015), entre otros.¹ Los primeros trabajos sostienen la responsabilidad del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y de la Policía Federal a cargo del comisario Alberto Villar en el accionar paraestatal, mientras que los dos últimos han destacado, además, la responsabilidad de Perón.

La visión de la Triple A como una “federación de grupos de derecha” subordinada a López Rega presenta algunos problemas que, a mi criterio y como también ha sostenido Merele (2015), terminan desconociendo el accionar de varias organizaciones políticas que formaban parte de la violencia contra la izquierda, pero no tenían una dependencia directa con López Rega o con la Policía Federal. Es decir, no eran actores paraestatales, sino organizaciones políticas de la sociedad con intereses propios y no simplemente escuadrones de la muerte. Para comprender su accionar, es necesario pensarlos en el contexto de las medidas de carácter intrapartidario iniciadas con el *Documento Reservado*, el que fue dado a conocer a los gobernadores peronistas en octubre de 1973, y que contenía una serie de directivas para combatir y desplazar a los sectores “marxistas infiltrados” en el peronismo. A partir de allí y en cada distrito del

¹ La paraestatalidad surge cuando el Estado descentraliza la represión o la deja en manos de grupos con cierta autonomía con el fin de preservar de mejor manera sus intereses. Sobre esta cuestión ver Besoky (2016a)

país, fueron las propias estructuras políticas del Movimiento Peronista las que se encargaron de ejercer la “depuración” del gobierno y el combate contra la izquierda. Según ha señalado Merele:

Es posible establecer la participación de: agrupaciones políticas de derecha peronista (cdeo, Agrupación 20 de noviembre, JSP, JPRA, CNU, entre otras), agrupaciones nacionalistas ligadas al peronismo (Alianza Libertadora Nacionalista, Movimiento Nueva Argentina), y distintas patotas sindicales (en especial de la UOM). Las cuales actuaron al amparo del Estado, de modo tal que en cada distrito formaron parte de un complejo entramado represivo que articuló organismos estatales de seguridad con organizaciones civiles que, por afinidad ideológica o intereses particulares, colaboraron activamente en la identificación y represión de los “infiltrados” (2014: 21).

Estas organizaciones de derecha, que no formaban parte del aparato estatal, pero contribuían y colaboraban con el accionar represivo, tuvieron un lugar destacado que no puede ser subsumido simplemente como parte de la Triple A, sino como organizaciones de militantes políticos que, en determinados momentos, recurrían al uso de la violencia política para resolver conflictos. De esta manera, la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), la Juventud Sindical Peronista (JSP), la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), el Comando de Organización (cdeo) y la CNU, así como también otros militantes provenientes del nacionalismo de derecha, sumaron su accionar a la lucha contra la izquierda peronista en un primer momento y luego hacia toda la izquierda. Tuvieron un papel importante en la lucha para desplazar a los gobernadores e intendentes afines a la llamada Tendencia Revolucionaria del Peronismo, y para perseguir y hostigar a la izquierda en el resto de la administración pública, en las universidades, colegios, fábricas y en los enfrentamientos callejeros.

Por otro lado, es necesario repensar a la Triple A como una federación de grupos de derecha vinculados al Estado, pero no necesariamente subordinados a López Rega. Por ejemplo, para 1974, al menos una de esas organizaciones peronistas, la CNU, terminó vinculándose directamente con el aparato represivo clandestino y actuó, a la postre, como un escuadrón de la muerte con vínculos con la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El derrotero de esta organización es bastante particular, ya que de ser una agrupación estudiantil de extrema derecha con fuerte presencia en la ciudad de La Plata y Mar del Plata, reconocida por su propensión a la acción directa y al enfrentamiento con la izquierda, terminó vinculándose a la Triple

A. La pregunta clave es en qué momento y de qué manera se fue dando este desplazamiento en el accionar de la CNU. Teniendo presente este interrogante, la reducción de la escala de análisis busca, a partir de una cronología de los hechos represivos, responder los siguientes cuestiones: ¿qué tipo de relación se detecta entre aparatos del Estado y organizaciones políticas?, ¿dónde y cómo se puede percibir la vinculación entre las organizaciones de derecha y la represión estatal?

La escala local

El Gran La Plata abarca el partido de La Plata más los partidos de Berisso y Ensenada, los que hasta 1957 eran parte del primero. En total, para los años setenta, la región poseía 485.939 habitantes. Hacia 1971, el área del Gran La Plata era considerada un polo provincial con identidad y dinámica propia. Como rasgo general del conjunto se destacaba una nítida diferenciación e interacción entre sus zonas urbanas y rurales dedicadas principalmente a la horticultura. Las funciones de gobierno (municipal y provincial) y la localización de instituciones de prestigio internacional, como la Universidad Nacional y el Museo de Ciencias Naturales, se hallaban centralizadas en la ciudad de La Plata; también contaba con una infraestructura industrial muy significativa de grandes establecimientos, como el Astillero Naval Río Santiago, las plantas frigoríficas, la destilería de YPF, la siderúrgica y la textil Petroquímica Sudamericana ubicadas, a excepción de la última, en el cordón productivo de Berisso y Ensenada.² No es casualidad, entonces, que la dinámica política y la conflictividad social transcurriesen en estos diferentes ámbitos de la región. Por un lado, en el sector administrativo y educacional, con epicentro en la Universidad Nacional, y por el otro, en los grandes establecimientos fabriles.

El período que analizamos, entre septiembre de 1973, a partir del proceso de depuración del peronismo dado a conocer a través del *Documento Reservado*, y el 24 de marzo de 1976, con el golpe de Estado, abarca el enfrentamiento entre los dos sectores del movimiento peronista.³ Esta disputa entre, por un lado, la izquierda del peronismo, representada por la Tendencia Revolucionaria (hegemonizada por Montoneros) y por el otro, sectores de la ortodoxia y la derecha del peronismo⁴ (diversas agrupaciones y dirigencias sindicales entre las que sobresale la CNU) tuvo su correlato en varios ámbitos. Uno fue la ad-

² Para una caracterización general de la región, ver Robles (2009) y Romá (2008).

³ Para una descripción general del período, ver Franco (2012).

⁴ Sobre el concepto de derecha peronista, ver Besoky (2013).

ministración provincial, en la que el gobernador Pedro Bidegain, con mayor cercanía a la Tendencia, terminó siendo desplazado para asumir en su lugar el vicegobernador Victorio Calabró, con estrechos contactos con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la ortodoxia del movimiento peronista. Otro ámbito fue la Universidad Nacional de La Plata, en la que se produjo el desplazamiento de los sectores de izquierda (a través de la cesantía de los docentes, la persecución política, los atentados y el hostigamiento constante) realizado por los rectores interventores designados por el Poder Ejecutivo y por el accionar de organizaciones derechistas como la CNU y la ALN.⁵ Por último, los grandes establecimientos fabriles mostraron el enfrentamiento entre las dos alas del movimiento peronista (aunque no únicamente) a través de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), por un lado, y la JSP, por el otro. Esto, sin dejar de mencionar el accionar de otros partidos de izquierda, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores/Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, en los diversos ámbitos.⁶

Los orígenes de la Concentración Nacional Universitaria

El antecedente inmediato de la CNU había sido la filial platense de la organización nacionalista de derecha Tacuara.⁷ Fue precisamente durante el conflicto entre la educación “laica o libre” de 1958 que se reunió un grupo de estudiantes vinculados al nacionalismo y al catolicismo, y partidarios de la “educación libre” (Pis Diez, 2016). Como dirigente del Comando Tacuara La Plata, figuraba el estudiante universitario Félix Navazo, junto a Néstor F. Beroch y Manuel Segura.⁸ Por ese entonces, la agrupación ni siquiera se identificaba con el peronismo y mantenía su referencia ideológica con un nacionalismo derechista más bien falangista.⁹ Sus principales intervenciones durante la década de 1960 se dieron

⁵ Sobre esta cuestión, ver Rodríguez (2014).

⁶ Sobre la presencia de activistas en las fábricas de la región, ver Werner y Aguir (2007).

⁷ Sobre Tacuara, ver los trabajos de Galván (2008), Orlandini (2008), Padrón (2017), Lvovich (2009) y Gutman (2012).

⁸ Otros integrantes eran Jorge Guitegui, Bernardino Vicente Acosta, Hernán Arturo Addiechi Odriozola y Raúl Zuccoli. CPM-DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo N° 10.411, folio 47.

⁹ Según el informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Tacuara La Plata: “No acepta el nacionalismo nazi alemán, ni al fascismo italiano y sigue más bien una línea concordante con la falange española, aceptando solo el resurgimiento argentino a través de una dictadura depuradora especialmente en el campo gremial donde sería

en el ámbito universitario, y estaban ligadas a la defensa del catolicismo y en contra de la izquierda universitaria.

Por esos años, el impacto de la cuestión peronista, que se hacía sentir en la organización Tacuara, también repercutió en la filial platense, en la que produjo una ruptura entre quienes comenzaban a adherir al peronismo como movimiento nacional y cristiano, y quienes lo rechazaban.¹⁰ Según señala Carnagui (2013), entre los primeros estaban: “Félix Navazo junto con los más jóvenes entre los integrantes del grupo, como Martín Sala y Patricio Fernández Rivero”.¹¹ Esta fracción peronizada comenzó a reunirse con asiduidad en el Instituto Cardenal Cisneros, cuyo principal referente era el profesor y filósofo peronista Carlos Disandro.¹² Fue precisamente en las reuniones del Instituto que se conformó un nuevo espacio de articulación y sociabilidad que dio origen, a partir de 1964, a la Concentración Nacional Universitaria.

Los primeros pasos de la organización se enfocaron en las distintas iniciativas del Instituto Cisneros, fundamentalmente en la realización de conferencias, la publicación de la revista *La Hostería Volante*¹³ y en el acompañamiento a las charlas que realizaba Disandro por el país. Justamente, en uno de esos recorridos, los integrantes de la CNU entraron en contacto con un pequeño grupo de jóvenes nacionalistas de la ciudad de Mar del Plata, escindido de Tacuara en 1967. Producto de estos frecuentes contactos, en agosto de 1971, en el teatro

de aplicación un Régimen Nacional Sindicalista. [...] La posición actual del Movimiento ‘Tacuara’ sería de franca oposición al Gobierno Nacional y al partido oficial (UCRI); al peronismo o justicialismo, a la Alianza Libertadora Nacionalista y a las líneas democráticas. [...] En la ciudad de La Plata, no cuentan con sede social, tendrían su lugar de reunión en la conocida ‘Confitería París’” (CPM-DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo N° 75, folio 5).

¹⁰ Sobre la peronización de la organización Tacuara ver Goebel (2007), Galván (2013) y Besoky (2016a).

¹¹ El resto de los dirigentes, como Horacio Ponce de León, Jorge Guitogui, Hernán Arturo Ad-diechi Odriozola y Bernardino Vicente Acosta, mayores en edad a los primeros, mantenía un antiperonismo intransigente. En mayo de 1961, este grupo fue expulsado de la organización.

¹² Sobre la trayectoria intelectual de Carlos Disandro, ver Ladeuix (2007) y Axat (2011).

¹³ La revista *La Hostería Volante*, dirigida por Disandro, era publicada por el Centro Platense de Estudios Universitarios y tuvo un total de 51 números entre junio de 1959 y marzo de 2003. Comenzó a salir de forma bimestral, pero luego salió de forma irregular. Escribían además de Disandro, bajo el seudónimo de “El Bodeguero”, Nimio de Anquín, Leonardo Castellani, Enrique Díaz Araujo, Juan José Alonso y el comisario general Jorge Vicente Schoo. La publicación estaba claramente identificada con el nacionalismo de la derecha católica y eran fervientes opositores a todas las reformas del Concilio Vaticano II. Como principales enemigos señalaban a la subversión marxista y la judeomasonería, a las que englobaban dentro del concepto de sinarquía.

Alberdi de Mar del Plata, fue presentada públicamente la CNU.¹⁴ En el acto de cierre, hicieron uso de la palabra Carlos Disandro y el entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. En diciembre de ese año, la CNU apareció en todos los medios periodísticos cuando militantes marplatenses de la organización asesinaron a la estudiante Silvia Filler, en una asamblea de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial de Mar del Plata (Celesia y Waisberg, 2016).

Sin embargo, desde unos años antes, la DIPPBA ya conocía las actividades de la CNU platense. En 1967, había detectado el organismo un panfleto que había circulado dentro del ambiente universitario platense en el que la CNU brindaba su apoyo al Operativo Cóndor realizado por el Movimiento Nueva Argentina en las islas Malvinas. Además, el informe de la DIPPBA advertía que la CNU agrupaba a profesionales y a universitarios, que desplegaban una amplia actividad en las ciudades de Mar del Plata y La Plata.

Si algo caracterizó a la organización, eran sus acciones directas en el ámbito universitario, donde se hizo célebre por romper asambleas y enfrentarse a la izquierda estudiantil. Un ejemplo de esto fue, en septiembre de 1968, cuando se conmemoraba el segundo año del asesinato de Santiago Pampillón y la Federación Universitaria Platense había convocado a un paro con movilización para impedir el dictado de clases. En ese momento, se presentaron algunos miembros de la CNU y se produjo un enfrentamiento de considerables dimensiones que incluyó el uso de armas de fuego.

El 25 de mayo de 1972 la policía de la provincia detuvo en La Plata a varios miembros de la Concentración Nacional de Estudiantes (CNES), rama estudiantil secundaria de la CNU, por realizar pintadas políticas. Entre los detenidos se encontraban Juan José Pomares, Néstor Omar Causa, Gerónimo Jorge Gualla, Juan Carlos Gomila, Alberto Belisario Arana Maderna y Alberto Lampugano.¹⁵

En 1973, en el marco de la reapertura democrática, la CNU estrechó sus lazos con la rama sindical y especialmente con la dirigencia de la CGT y la UOM. Estos lazos llevaron a Carnagui (2016) a hablar del *cartel político-sindical*, cuyo punto de unión era la oposición a los crecientes sectores de izquierda en el peronismo. De hecho, ya desde 1972, la CNU había hecho un pacto con los metalúrgicos y varios militantes de la organización, como Patricio Fernández Rivero, formaban

¹⁴ Los integrantes de esta agrupación fueron: Ernesto Piantoni, Juan Carlos Gómez, Federico y Ricardo Delgado, Raúl Viglizzo, Carlos González, Gustavo Demarchi, Eduardo Cincotta, Héctor Corres, José Luis Piatti, Marcelo Arenaza y Eduardo Salvador Ullúa.

¹⁵ CPM-DIPBA, Mesa "A" Estudiantil "Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios-La Plata".

parte de la custodia de Lorenzo Miguel, dirigente de la UOM.¹⁶ El 20 de junio de 1973, durante la movilización a Ezeiza, la CNU volvió a hacerse visible cuando algunos cuadros de la organización, como Felix Navazo, Martín Salas y Carlos Ernesto Castillo,¹⁷ fueron fotografiados por varios medios de comunicación con armas de fuego y ubicados en el palco central (Verbitsky, 1986). Por ese entonces, la organización junto con la JSP, la ALN y el CdeO formaban parte del conglomerado de la derecha peronista enfrentado a la Tendencia Revolucionaria o lo que Carnagui denominó el *cartel político-sindical*.

Violencia represiva en el Gran La Plata entre septiembre de 1973 y 1976

El enfrentamiento entre las dos alas del movimiento peronista ya se había hecho presente, como dijimos anteriormente, desde principios de 1973, con las disputas por el armado de las candidaturas, luego con los hechos de Ezeiza en junio y, finalmente, con el desplazamiento de Cámpora y Solano Lima el 13 de julio. Un punto álgido del enfrentamiento se dio, tanto a nivel nacional como local, a partir del 25 de septiembre de 1973 con el asesinato de José Ignacio Rucci por parte de Montoneros. La respuesta de Perón fue el documento, de carácter reservado, que presentó como presidente electo a los gobernadores, junto con el Consejo Superior, y que se filtró a la prensa a través del diario *La Opinión*, el 3 de octubre de 1974. La importancia de este documento radicaba en que hablaba de una guerra abierta contra el marxismo y la infiltración en el Movimiento y marcaba la profundización y aceleración (aunque no el inicio) del proceso de “depuración”. Luego de hacer un cuadro de situación de lo que el asesinato de Rucci significó –“Este estado de guerra que se nos impone”–, el documento establecía una serie de directivas tendientes a: 1) decretar el estado de alerta y movilización; 2) realizar una campaña de reafirmación doctrinaria esclareciendo las diferencias fundamentales con el marxismo; 3) informar y comunicar a todos los dirigentes la posición del Movimiento con respecto al marxismo y convocarlos a la lucha; 4) exigir a todos los grupos o sectores del peronismo que se expidieran públicamente en esta situación de guerra contra el marxismo; 5) consolidar la unidad del Movimiento para lo cual se deberían

¹⁶ Al respecto, ver el testimonio de Virgilio José Fernández Mutilva en la causa 6511 “Triple A”, Juzgado Nacional Federal N° 3, cuerpo 7, foja 169.

¹⁷ Sobre la presencia de Castillo en Ezeiza, ver “Un hombre de armas llevar desde siempre”, *La Nación*, 24/3/2000.

tomar una serie de medidas, entre ellas: excluir de los locales partidarios a todos aquellos que se manifesten de cualquier modo vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus actos, e impedir por todos los medios que en las manifestaciones o en los actos públicos participen las fracciones vinculadas al marxismo.¹⁸

A este documento se le sumaron toda una serie de medidas tendientes a aumentar la represión legal e ilegal. En la definición de Franco, las dos presidencias, la de Perón y la de Martínez de Perón, constituyeron un “entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras cuya legalidad solo procedimental se amparaba en la ‘excepcionalidad’ de la situación, otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de gobierno” (2012: 179). Entre las medidas legales, figuraban las modificaciones al Código Penal, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el empleo de la Gendarmería para custodiar las fábricas, la Ley de Prescindibilidad y la Ley de Asociaciones Profesionales. Los objetivos finales de estas medidas eran, según advierte Seretto, “la depuración ideológica, la desmovilización política y el disciplinamiento de los actores sociales” (2010: 196). Este disciplinamiento buscaba erradicar también a los sectores más combativos y clasistas de la clase obrera, y extinguir el descontento social. Para lograrlo, según ha señalado Schneider (2015), Perón buscó proteger a la dirigencia sindical nucleada en torno a la conducción de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas de toda impugnación por parte de sectores clasistas.

Estas medidas se complementaron con la aparición de una represión ilegal a través de grupos de choque que, a partir de esa fecha, incrementaron su accionar. Muchos de esos grupos, como advirtió el diario *La Opinión* el 28 de septiembre, pertenecían a fracciones internas del peronismo. Entre ellos, el cdeo, la ALN y la CNU. También la JSP participó de varios enfrentamientos. Ya desde octubre, es posible apreciar en los diarios los asesinatos de militantes peronistas como los casos del periodista José Colombo, secretario de la Redacción de *El Norte*, de San Nicolás, y del dirigente peronista Constantino Razzettien Rosario.¹⁹ En el caso de La Plata, el 17 de septiembre, un explosivo a base de gelinita o trotyl destrozaba por la madrugada el comedor universitario de La Plata. La explosión provocó la voladura de un amplio sector de losa, dañó la caldera y provocó fisuras en la mampostería. Además, por efecto de la onda expansiva, resultaron destruidos casi la totalidad de los vidrios del establecimiento así como de los

¹⁸ Tomado de Baschetti (1999: 66-69) y publicado originalmente en *La Opinión* del 3/10/1974.

¹⁹ *El Día*, 4/10/1973 y *El Día*, 15/10/1973.

edificios vecinos, dejando el comedor universitario prácticamente inutilizable durante varias semanas. Al día siguiente, la ALN se atribuyó la responsabilidad del atentado a través de un comunicado que se hizo llegar al vespertino *La Gaceta*.²⁰ El 26 de septiembre, en respuesta al asesinato de Rucci, la CNU realizó una ruidosa manifestación por el centro platense dejando varias pintadas en las paredes de la UNLP y el Banco Nación. En ellas se leía: “Perón-Isabel”, “Guerrilla traidora ya te llegó la hora” y “Rucci leal te vamos a vengar”. Por otro lado, el 28 de septiembre, una manifestación de trabajadores de la UOCRA por un conflicto que llevaba ya varios meses fue dispersada violentamente por la policía y, al día siguiente, Eduardo Luís García, delegado de la construcción, sufría un atentado del que responsabiliza a los matones de la UOCRA.

Los meses de octubre y noviembre trajeron también la aparición de varias publicaciones alineadas con la derecha peronista: la revista *Alianza*, vocera de la ALN, en octubre, y en noviembre dos publicaciones más: *Primicia Argentina* y *El Caudillo de la Tercera Posición*, esta última dirigida por Felipe Romeo y presentada como vocera del Consejo Superior (Besoky, 2010). En ambas publicaciones, eran frecuentes los ataques, denuncias y amenazas a figuras de la izquierda peronista. El mismo día que salió a la calle *El Caudillo*, el 16 de noviembre, la JPRA organizó, a través del Consejo Superior, un acto en la cancha del club Ferrocarril Oeste para conmemorar el primer aniversario del regreso de Perón a la Argentina (17 de noviembre de 1972) y el aniversario del combate de la Vuelta de Obligado (20 de noviembre de 1845). Este acto contó con la presencia de las organizaciones: cdeo, ALN, JSP, CNU, Brigadas de la Juventud, Movimiento Federal, Escuela Superior de Conducción Peronista y Comando Evita. Por su magnitud, constituyó el acto más masivo logrado por la derecha peronista y abiertamente identificada como contraria a la Tendencia

²⁰ El documento había sido dejado en un baño del Hospital de Niños para que fuera recogido por los periodistas luego de un aviso telefónico. Sin embargo, dos días después, sectores del comando provincial de la ALN emitían una declaración pública en la que negaban cualquier responsabilidad en el atentado y consideraban al comunicado anterior como “una burda maniobra para encubrir la verdadera autoría que corresponde, sin duda, a los promotores de la violencia, pertenecientes a grupos de la ultraizquierda que con tanta soltura actúan en el orden universitario”. La declaración continuaba dando su opinión sobre el comedor universitario, en el que “se realizan descaradamente, al amparo de una mal interpretada libertad de expresión, actos de adoctrinamiento, enseñanza y propaganda de activistas de ultraizquierda, como también promueven actos de menosprecio al quehacer nacional argentino”. “Prueba de lo expuesto, son las leyendas, epítetos y todo tipo de manifestaciones escritas que se advierten sobre sus interiores, muros y vidrios, como, si acaso, se pretendiera desde allí sembrar entre los argentinos una meta de angustia, de caos y de anarquía social” (*El Día*, 21/9/1973).

y a la izquierda en general, como lo atestiguan algunas consignas cantadas por los militantes: “Con las tripas de Santucho/ vamos a hacer un horquita/para colgar a los trotskos/disfrazados de peronistas” y “Vamos a hacer la patria/ que sea libre;/ vamos a hacerla/ con todos los calibres”.

En La Plata, la CNU se mostró bastante activa acompañando las directivas del *Documento Reservado* a tal punto que su accionar violento contra el movimiento estudiantil radicalizado generó la convocatoria a una asamblea estudiantil que formase “grupos de autodefensa”.²¹ La asamblea, que contó con la presencia de más de cien personas, tuvo lugar en el aula magna de Humanidades, pero no pudo desarrollarse por la irrupción de militantes de la CNU. Como señala el informe de un agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) infiltrado en la asamblea:

En la puerta de entrada al Aula Magna se había ubicado un grupo de alrededor de 10 personas a quienes reconocieron como de la CNU, de inmediato tres de esas (a quien no fue dable identificar) se dirigieron hacia el orador y uno de ellos le aplicó un golpe de puño, esto motivó momentos de confusión donde menudearon los golpes y los insultos; el tumulto duró alrededor de 5 minutos copando la situación 10 integrantes de la CNU y retirándose el resto de las personas.²²

El balance no podría haber sido más desalentador. Más de cien estudiantes reunidos con el firme propósito de formar grupos de autodefensa contra la CNU no pudieron llevar a cabo la asamblea (que, dicho sea de paso, se encontraba infiltrada por la policía) por el accionar violento de diez integrantes de la organización. Pero este no fue el único hecho. Al mes siguiente, en el marco

²¹ El cartel mural firmado por el Grupo Revolucionario de Bases, que convocaba a la asamblea y se hallaba pegado en las paredes exteriores del comedor universitario decía: “Compañeros: vemos una vez más las reacciones de la derecha fascista que sigue adelante con su accionar y no se da cuenta que el pueblo quiere paz después del 11 de marzo; hemos visto como éstas bandas han atacado el comedor universitario del Chaco, sus acciones asesinas en Ezeiza dirigidas por los matones, vemos también como se quiere detener el accionar de las fuerzas progresistas en los sindicatos, éstas bandas han atacado también S.M.A.T.A., local de la Juventud Peronista de la Plata, éstos ataques se realizaron con el aval del ministro Otero y Calabré. También vemos como nuestras facultades han sido atacadas, no nos debemos llevar a engaños pues este es el principio de su accionar, llamamos a todas las tendencias para poder defendernos y romper el accionar de éstas fuerzas retrógradas. Se invita a todos a una asamblea en la facultad de Humanidades el jueves 4 a las 18 horas. También repudiamos a las bandas del C.N.U., Tacuaras Peronistas y Juventud Sindical Peronista” (DIPPBA, mesa A, legajo N° 216).

²² Ídem.

de las elecciones universitarias del 26 de noviembre, la CNU volvió a irrumpir en el patio de la Facultad de Arquitectura a los tiros y al grito de “ni yanquis ni marxistas, peronistas”. Una solicitada, publicada días después de los hechos por la CNU, señalaba:

Por eso CNU enfrentará con todos los medios legítimos a los apátridas castristas, guevaristas, trozkistas, comunistas, chinoistas, etc. [...] Hace responsable al rector y decanos del espectáculo innoble de una Universidad sucia, maloliente, cabecera del puente del enemigo yanqui-marxista, refugio de baleadores cobardes. ESTO TIENE QUE TERMINAR Y TERMINARÁ.²³

No solo en la universidad actuaba la CNU. El mismo día que asesinaban en San Miguel al militante peronista Miguel Deleroni (Merele, 2017), eran detenidos Félix Alberto Navazo y Antonio Arturo Mazzotta, quienes merodeaban en el interior de Petroquímica General Mosconi, en Ensenada, con armas en la mano y con la probable intención de cometer un atentado. Denunciados por los trabajadores del complejo, fueron capturados y entregados a la policía. El primero declaró pertenecer a la CNU y el segundo a la Concentración de la Juventud Peronista (Bufano y Teixidó, 2015: 195).

El desplazamiento del gobernador Bidegain

En el comienzo de 1974, se intensificaron los conflictos en el interior del peronismo cordobés y los intentos de modificación del Código Penal por parte del Ejecutivo. El 19 de enero, la guerrilla marxista del PRT-ERP atacó un cuartel militar en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. La respuesta del gobierno y de la derecha peronista no se hizo esperar. Perón dio un comunicado, vestido con su uniforme de militar, en el que llamaba a “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal” y en el que convocaba al Movimiento Justicialista a movilizar sus efectivos. El discurso terminaba diciendo: “Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo”. Como señala Lapolla: “La ultraderecha fascista aprovechó la provocación de Azul para cambiar el discurso y el accionar, pasando abiertamente al ataque, los hechos se lo permitían al descolocar a los sectores populares que aparecían divididos y culpables ante el accionar guerrillero” (2005: 312).

²³ “Concentración Nacional Universitaria advierte”, *Las Bases*, 5/12/1973, p. 45, mayúsculas del original.

Así es como *El Caudillo* habló de salir a enfrentar abiertamente a los infiltrados y a defender a Perón. Gabriel Cigna, secretario general de la JPRA de la provincia de Buenos Aires, convocó a una conferencia de prensa en la que además de caracterizar a la Tendencia y a sus dirigentes como “gorilas” provenientes de la clase media intelectualizada del Partido Comunista o de sectores trotskistas, los trató de “traidores” y “enemigos”, y señaló el pase a la clandestinidad de su organización.²⁴

Por su parte, la mesa nacional de la CNU y la Concentración de Juventudes Peronistas (CJP), junto con un “Comando Nacional 17 de Octubre”, solicitó la “inmediata expulsión del seno del movimiento peronista” del gobernador bonaerense, a quienes describían como un “tenebroso personaje al servicio de la Internacional Roja”.²⁵ De todas formas, no hizo falta más presión ni pase a la clandestinidad. Desmoralizado por el discurso de Perón que planteaba que no era casual que esos hechos ocurrieran en determinadas jurisdicciones, Bidegain renunció y dejó la gobernación en manos de su vicegobernador, Victorio Calabró. Al descalabro que significó el hecho de Azul para la izquierda en general, se sumó, como señala Franco (2012), la aceleración de los tiempos legislativos para reformular el Código Penal con un carácter aún más represivo que en los tiempos de Onganía. En disconformidad con esta reforma y luego de una reprimenda de Perón —“El que no esté de acuerdo se va”, les dijo—, ocho diputados de la Tendencia renunciaron a sus bancas. Posteriormente, fueron expulsados del Movimiento por el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ) (Svampa, 2007).

Durante todo el mes de enero ya se habían producido varios atentados en la ciudad de La Plata que demostraban el alto grado de conflictividad. El 6 de enero estalló una bomba molotov contra la persiana del local partidario del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la policía comprobó que también se habían efectuado disparos con armas de fuego. Al mismo tiempo, fue colocada una bomba incendiaria en el frente del domicilio del abogado Baldomero Juan

²⁴ Basándose en la acusación que hiciera Perón al gobernador Bidegain (habló de “tolerancia culposa”) difundió el siguiente comunicado: “Ante los hechos por todos conocidos se resuelve: 1) cumplir a sangre y fuego la orden del jefe del Movimiento en cuanto a que debemos movilizarnos y ponernos decididamente al servicio del orden; 2) volver a la clandestinidad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires e iniciar todo tipo de hostilidades hasta derrumbar a la camarilla marxista y a su títere Bidegain; 3) declarar asimismo zonas conflictivas a los territorios de Córdoba y Mendoza; 4) considerar bajo el delito de traición a todo aquel integrante del Movimiento que no colabore en esta lucha y actuar en consecuencia. ¡Perón o muerte! ¡viva la patria!” (“Creer, obedecer y combatir por Perón”, en *El Caudillo*, año 2, nº 11, 25/1/1974, p. 19).

²⁵ “JPRA anuncia la pena de muerte”, *Noticias*, 23/1/1974, p. 13.

Valera, apoderado del Partido Comunista. Al mes siguiente, cuando Calabró ya se encontraba a cargo de la gobernación, aumentó el accionar de la Policía Federal en tareas represivas, allanamientos y detenciones contra la izquierda en general.

La gobernación de Calabró significó un impulso para los sectores de derecha del peronismo y, especialmente, para la CNU. Según señala Carnagui:

El nuevo gobernador necesitaba gente dispuesta a realizar un trabajo para el cual no podía contar si quiera con el aparato policial. Calabró tenía la aspiración de controlar el caudal de recursos que se generaba en el Hipódromo y necesitaba “disciplinar” a un sector combativo de sus trabajadores. Con su apoyo y, especialmente, con el del titular de la Agrería de Profesionales del Turf de La Plata y concejal municipal, Juan Pedro Brun, un nutrido grupo de integrantes de la organización comenzaron a trabajar en el Hipódromo platense. Por su parte la CNU, logró así contar con la contención y el amparo que solo puede garantizar la estructura del Estado (2016: 214).

Para marzo, la CNU volvió a ser noticia cuando el día 18 realizó, en lo que se puede considerar una medida novedosa, la toma del Rectorado de la UNLP. El motivo era el repudio a los Cursos de Realidad Nacional instrumentados por la Juventud Peronista (JP). Entre los volantes que arrojaron, uno de ellos decía: “CNU. Dijo Perón: ‘Ante el peligro público todo hombre es beligerante’. Al peligro público (Agoglia, Achem y sus alcahuetes de JUP, ERP, etc.) le advierte al pueblo que cuando se acaba trueno el escarmiento”,²⁶ mientras que en otro acusaba a las autoridades y especialmente a Agoglia, como rector normalizador, de “sirvientes de la sinarquía internacional”. La toma se resolvió pacíficamente gracias a la intervención del profesor Carlos Disandro, quien entró escoltado por la Policía Federal y convenció a los presentes de deponer su actitud. En los meses siguientes, la violencia represiva continuó vigente. El primero de mayo fue tiroteado en dos oportunidades el local de la JTP platense y dos de los responsables, integrantes de la CNU, resultaron heridos.²⁷ Otra activista de la JTP fue tiroteada desde un auto sin ser alcanzada. Los delegados de la Regional VIII de la JP denunciaron la presencia de autos sin chapa en las inmediaciones de su sede y reconocieron en su interior a miembros de la CNU. El día 22, la Regional VIII de JP y otras agrupaciones de esa tendencia denunciaron que el 17 de

²⁶ CPM-DIPBA, mesa A, Legajo 225.

²⁷ Ver Causa 122.671 “Gomila, Juan Carlos; Piechocki, Jacek s/ Intimidación pública, abuso de armas y lesiones leves”. Juzgado en lo Penal N° 2, La Plata, 1974.

mayo un grupo de desconocidos que portaba ametralladoras raptó, torturó y simuló fusilar a Raúl Antonio Pineiro, miembro de la JP de la Plata. Asimismo, denunciaron que Julio D. Abrigo, Ramón B. Abrigo, Antonio Gambelli y Juan Carrizo fueron detenidos cuando trataban de apagar el fuego en una Unidad Básica, fuego producido por un ataque de desconocidos.

El 20 de junio sucede un hecho que va a repercutir negativamente en la propia CNU. En un accidente automovilístico, producto de la alta velocidad a la que se desplazaban, resultaron heridos Patricio Fernández Rivero, dirigente de la CNU, su novia Hilda Disandro, sobrina de Carlos Disandro, y Juan José Pomares. Otros dos militantes que viajaban en el vehículo, Carlos Iriarte y Alejandro Fiscina, fallecieron. A raíz del accidente, Fernández Rivero sufrió la amputación de su brazo izquierdo. Los policías que concurrieron al lugar del accidente no solo hallaron en el baúl del Torino varias armas largas y explosivos, sino que constataron que el vehículo circulaba con la patente de otro denunciado como robado.²⁸ Según señala Carnagui: “El accidente asestó un duro golpe a la CNU pues, desde entonces, Fernández Rivero se alejó de la conducción del grupo. A pesar de ello, la presencia de dos históricos dirigentes como Martín Sala y Félix Navazo ayudaron a amortiguar el impacto de su ausencia” (2016: 215).

La CNU como parte de la Triple A

El fallecimiento de Perón el 1 de julio de 1974 marcó un punto de clivaje en la lógica de la violencia represiva. A partir de allí, la lucha entre quienes reclaman su pertenencia al peronismo se intensificó y adquirió ribetes cada vez más violentos. El mismo día que fallecía Perón, fue asesinado, al volver a su casa, el dirigente de la CNU Félix Navazo. Se supuso que la agupación Montoneros fue responsable del asesinato, aunque esta organización no se atribuyó el hecho. Sin embargo, el diario de dicha organización, *Noticias*, reprodujo una nota en la que mostraba fotografías del militante de la CNU en los hechos de Ezeiza con una itaka y apuntando, cuerpo a tierra, a la multitud. El mes siguiente sería particularmente violento en la región.

El 2 de agosto, en Ensenada, desde dos automóviles, se abrió fuego contra los obreros de Propulsora Siderúrgica al finalizar un paro parcial que los trabajadores realizaban en apoyo a 36 obreros despedidos. El atentado dejó un saldo de dos heridos. Al mismo tiempo, la Policía Federal allanaba sistemáticamente los domicilios de varios de los funcionarios de la administración provincial

²⁸ “El extraño caso del Torino gris”, *Noticias*, 22/6/1974.

durante la gestión de Bidegain ligados a la Tendencia. El 5 de agosto, dos sujetos no identificados se dirigieron a la boletería del Cine 8, donde trabajaba el dirigente de la CNU, Martín Salas, y lo asesinaron de varios disparos. En respuesta a este hecho, la revista *El Caudillo* señaló: “La CNU perdió a uno de sus mejores hombres, pero los perros mercenarios de la sinarquía deben saber que aquí no termina la guerra, no terminará hasta que no quede sobre la faz de la tierra ni uno solo de esa raza de víboras ponzoñosas”.²⁹

En respuesta al asesinato de Salas y bajo la consigna del “cinco por uno”, el 6 y 7 de agosto se produjeron una serie de asesinatos que conmocionaron a La Plata y al resto del país. La CNU emprendió un raid delictivo que acabó con la vida de cuatro militantes peronistas ligados a la Tendencia Revolucionaria: Luis Macor, Horacio Irineo Chávez y su hijo Rolando, y Carlos Pierini. Los integrantes de la patota habían intentado también secuestrar a Perla Reina Diez, la decana de Humanidades, quien al no estar en la casa salvó milagrosamente su vida.

La muerte de estos reconocidos militantes del peronismo platense no solo marcó el inicio de un nuevo período en el accionar represivo, sino que también ejemplificó las transformaciones producidas en la CNU. Según advierte Carnagui (2016), la ausencia de los históricos dirigentes de la CNU como Fernández Rivero, Salas y Navazo fue suplida por una camada más joven compuesta por Juan José Pomares, Antonio Agustín Jesús, Néstor Omar Causa, Gustavo Fernández Supera y el más joven, que terminaría comandando la organización, Carlos Ernesto Castillo. A partir de allí, la CNU aceleró un proceso en el que articuló con otras organizaciones encargadas de la represión paraestatal. Como una consecuencia lógica, los meses siguientes vieron incrementarse el número de asesinatos cometidos por esta organización.

De hecho, la investigación de Cecchini y Elizalde Leal (2016: 267) demostró que el operativo “cinco por uno” contó con la colaboración de un grupo de tareas de la Triple A bajo las órdenes de Aníbal Gordon,³⁰ vinculado a la SIDE,

²⁹ *El Caudillo de la Tercera Posición*, n° 38, 9/8/1974, p. 18.

³⁰ Aníbal Gordon, quien para inicios de 1973 se encontraba detenido por delitos comunes, logró acogerse a la amnistía para presos políticos de mayo de ese año gracias a la amistad entablada con otro detenido peronista como Alejandro Giovenco. Al salir, se vinculó a la SIDE y desde fines de 1973 comenzó a llevar gente de esa dependencia como custodia de la UOM. Posteriormente, Gordon participó del grupo de tareas del centro clandestino de detención Automotores Orletti y fue finalmente detenido en 1984 luego de que Guillermo Patricio Kelly lo denunciara como responsable de su secuestro. Las imágenes de la detención de Gordon permitieron a la viuda de Pierini reconocer a Gordon como uno de los responsables del secuestro de su marido el 8 de mayo de 1974.

y que en todos los casos actuaron en zonas liberadas con el apoyo de vehículos con identificación policial. En un comunicado del 18 de septiembre, la Triple A señalaba que con su “aprobación anterior o posterior” se habían ejecutado a esos “traidores a la Patria”.³¹ Para ese entonces, hacía ya tiempo que Gordon y su grupo formaban, junto con la CNU, parte de la custodia de Lorenzo Miguel. Según indicara varios años después Alberto Oscar Iuillerat, un exmilitante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) que conoció a Gordon en la cárcel,³² dentro de la UOM trabajaban tres grupos: uno ligado a la SIDE integrado por Aníbal Gordon, Víctor Gard, Rubén Moléon y César “Pino” Enciso; otro, vinculado a la CNU, conformado, luego del accidente de Fernández Rivero, por Carlos Ernesto Castillo, Antonio “Tony” de Jesús, Juan José Pomares, Gustavo Fernández, Marcelo López y Jorge Raúl Dubchack; y por último, uno directamente ligado a la UOM, compuesto por Alejandro Giovenco, Juan Carlos “el Gallego” Rodríguez, Eduardo Fromigué, Juan Carlos Acosta, Pedro Tursi, Celso García, Alberto Cuadrado y Vicente Carreño.

Estos grupos, junto con la custodia presidencial y personal reclutada por José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, conformaban la Triple A. A estos se sumaban, desde febrero de 1974, sectores de la Policía Federal conducidos por Alberto Villar y Luis Margaride. Este accionar clandestino acompañaba las medidas represivas de carácter legal que venía llevando a cabo el gobierno.

A nivel nacional, se habían intensificado las medidas tendientes a la “depuración” en las universidades. El 14 de agosto de 1974, Jorge Alberto Taiana fue obligado a renunciar al Ministerio de Cultura y Educación que conducía desde mayo de 1973. En su lugar fue nombrado Oscar Ivanissevich, quien en su discurso pronunciado el Día del Maestro, el 10 de septiembre de 1974, planteó la necesidad del “cierre de las universidades subvertidas para asearlas, ordenarlas y normalizarlas”. El nuevo ministro nombró a destacadas figuras de la derecha peronista; la más notable fue la de Alberto Ottalagano, como rector interventor de la UBA, y la de Pedro Arrighi en la UNLP, quien contó con la colaboración de sectores de la derecha peronista, predominantemente la CNU, quienes se dedicaron a romper asambleas y, en muchos casos, actuar como celadores (armados) en los colegios dependientes de la Universidad. En el caso de la UNLP, señalan Abbatista y Carnagui:

³¹ Ver un facsímil de este comunicado en la contratapa del libro de Canaletti y Barbano (2009).

³² Ver causa 6511 “Triple A”, Juzgado Nacional Federal N° 3, cuerpo 16, foja 291.

El 8 octubre de 1974, las amenazas que había vitoreado contra algunos de los dirigentes de la UNLP se cumplieron. Dos de los principales pilares del proyecto institucional generado al calor del documento Bases para una nueva Universidad, Rodolfo Achem y Carlos Miguel, fueron secuestrados y asesinados por un grupo en el que participaron militantes de la CNU. Luego de estos hechos, la UNLP fue cerrada e intervenida. Recién volvería a abrir sus puertas al año siguiente con un drástico cambio de orientación en sus políticas. La “Misión Ivanissevich” había triunfado. La CNU dejaba de ser una de las tantas organizaciones de derecha extrema dentro del peronismo para ocupar en adelante un lugar indiscutible dentro del creciente espacio de la represión paraestatal (2014: 18).

El resto de 1974 fue particularmente violento, con varios allanamientos realizados por la policía, y atentados y amenazas. El 14 de octubre fue asesinado Juan Carlos Leiva militante de la JTP y trabajador de Petroquímica Sudamericana. El 20 estalló una bomba en el local del Partido Socialista de los Trabajadores. Al mes siguiente, el 3 de noviembre, la patota de la CNU intentó secuestrar al decano de arquitectura, Tulio Fornari y, al no encontrarlo, arrojaron una bomba en el domicilio, de allí se dirigieron a la casa de Carlos Alberto de la Riva, docente de la Facultad de Arquitectura, de donde lo secuestran para arrojar su cadáver en el Parque Pereyra Iraola horas después. Entre el 7 y 18 de noviembre la policía realizó numerosos allanamientos de domicilios y detenciones de estudiantes y profesionales por supuestos vínculos con la guerrilla. El 7 de diciembre, fue asesinado en su casa de Tolosa Enrique Rusconi, destacado dirigente estudiantil de la ciudad y militante del Partido Comunista Revolucionario.

El accionar de la CNU durante 1975

Para 1975, la represión se hizo aún más frecuente y los asesinatos de militantes de diversas organizaciones de izquierda se multiplicaron. Gracias a la investigación de Cecchini y Elizalde Leal (2016) sabemos que la CNU, bajo la conducción del Indio Castillo, fue responsable de los siguientes asesinatos: en enero secuestraron y asesinaron a Guillermo Savloff, docente de la Universidad. El mes siguiente y en distintas acciones fueron asesinados Rodolfo Ivanovich, Mirta Aguilar y Roberto Basile, militantes de la Tendencia Revolucionaria, y Hernán Roca, militante de la Fracción Roja del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En abril, la CNU, en un comando conjunto con la Triple

A, asesinó al médico Mario Gershanik, quien vivía a una cuadra de la Jefatura de la Policía. En distintas acciones, secuestraron y asesinaron a Luisa Marta Córica, militante de la JTP y empleada en el Hipódromo platense, a Nélida Villarino y Julio Urtubey, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), a Enrique Rodríguez Rossi, militante de las Frente Argentino de Liberación (FAL) que había logrado infiltrarse en la CNU, y a Marcelo Adrián Sastre, amigo de aquel. Varias de las víctimas, como Luisa Córica, trabajaban en el Hipódromo, lo que revela el interés del gobernador Calabro por eliminar los conflictos en ese organismo.³³

En mayo de 1975, fueron asesinados, en ocasión de encontrarse haciendo pintadas callejeras: Ana María Cameira, Carlos Polari, David Lesser y Herminia Ruiz, militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR), mientras pedían por la liberación de otro compañero. Secuestrados por la patota del Indio Castillo, en conjunto con Aníbal Gordon, los cuerpos acribillados aparecieron en el balneario La Balandra, en Berisso. Una semana después, otro militante del PCR, Guillermo Guerini, fue asesinado en Puente Roma, localidad de Berisso. Para esa fecha el Comité central del PCR mantenía la consigna de “Defendamos al gobierno democrático de Isabel contra el golpe ruso o yanqui”, lo que en la práctica colocaba al partido en la oposición al gobernador Calabro, quien, para entonces, ya estaba enfrentado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Para mediados de 1975, la CNU prácticamente había desaparecido como organización política de cualquiera de los espacios universitarios o sociales donde accionaba, mientras predominaba su faceta clandestina como organización meramente represiva. Un informe de la DIPPBA explica las razones de su decadencia en el siguiente análisis:

Desde mediados de 1975 se observa que la actividad tanto de la CNU y de la CJP ha entrado en un franco período de decadencia, esto se puede justificar a raíz de que su prédica no ha logrado el eco que sus dirigentes y/o ideólogos pretendían obtener en los diversos medios donde desarrollaban sus actividades. Por esto últimamente no se ha registrado ningún tipo de manifestaciones como las que anteriormente solía realizar esta agrupación. Probablemente también haya influenciado para que este sector disminuya su accionar el hecho de no haber conseguido por parte de las autoridades del

³³ En enero de 1976, por orden de Calabro, la CNU asesina a Carlos Domínguez, dirigente justicialista platense y gremialista del Hipódromo, y en marzo de ese año a Eduardo Julio Giaccio, Enrique Rojas y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, también trabajadores del Hipódromo.

Partido Justicialista, se los reconociera como parte activa del Partido [...] A estos elementos debe agregarse otro hecho que justifica esta disminución del accionar de la CNU, es la pérdida por diversos motivos (atentados, accidentes, etc.) de sus principales dirigentes e ideólogos, que impactaron anímicamente en los seguidores de esta corriente política.³⁴

Es probable, como vimos anteriormente, que el desplazamiento por diversos motivos de sus históricos dirigentes haya profundizado el matiz represivo de la organización en desmedro de su accionar político. Sumado a esto, su adhesión al complejo represivo de la Triple A convirtió a la CNU en una organización paraestatal haciendo desaparecer su militancia universitaria que siempre había sido minoritaria. El asesinato de sus principales dirigentes parece haber ocasionado un profundo cambio en la organización al permitir el ascenso de militantes más jóvenes y más decididos a desempeñarse como un escuadrón de la muerte. Este accionar tenía la particularidad de ser clandestino, pero la identidad de las víctimas y el cuerpo del delito eran expuestos públicamente. Sostiene Cano (2001) que el objetivo de los escuadrones de la muerte era eliminar físicamente a los opositores, e instaurar un clima de terror que disuadiese a la población de colaborar en alguna medida con la oposición. Por eso, en el caso de los escuadrones, sus asesinatos fueron particularmente crueles, precedidos a menudo por torturas, y los cadáveres eran expuestos o arrojados en lugares donde pudiesen ser hallados. En los asesinatos cometidos en la región, hemos visto que todos los cuerpos son hallados en descampados, con signos de haber sido torturados y ultimados por varios disparos ejercidos por varias personas simultáneamente.

Este accionar se vio intensificado también, bajo la forma de represalias, en el mes de julio, cuando la CNU asesinó a los militantes de la JUP: Mario Cédola, Pablo del Rivera y Jorge Rivas, a los militantes del Grupo Universitario Socialista: Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Rolando, y al estudiante Guillermo Osvaldo Codino. Estas muertes fueron una respuesta denominada “Once por Ponce”, por el asesinato del militante de la CNU Gastón Ponce Varela, ejecutado por Montoneros días antes. A fin de ese mes, otro grupo de la CNU asesinó a Ricardo Carrera y Eduardo Lescano, integrantes de la organización espiritualista Silo, a la que la derecha peronista ubicaba como parte de la sinarquía.³⁵

³⁴ CPM-DIPBA, mesa A, Legajo N° 154, p. 64.

³⁵ Sobre el concepto de sinarquía y la cultura política de la derecha peronista, ver Besoky (2016b).

La Triple A se desarma y la CNU se reacomoda

Para mediados de 1975, comenzó a hacerse evidente la ruptura dentro del peronismo entre, por un lado, el gobernador Calabró, englobado en el sector antiverticalista y con buenos vínculos con las Fuerzas Armadas, y por el otro, el gobierno nacional presidido por María Estela Martínez de Perón (Antúnez, 2015). Este enfrentamiento, que terminaría con la expulsión de Calabró del Partido Justicialista, repercutió en todo el peronismo. En la región, como consecuencia de esta ruptura, el 14 de julio se produjo el asesinato del intendente de La Plata, Rubén Cartier, junto con Manuel Balverde, director de Tránsito de la Comuna, en momentos que se desplazaban junto a su secretario privado y su chofer en un vehículo. Iban rumbo a Capital Federal, para reunirse con el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, cuando fueron interceptados y tiroteados por la CNU. El motivo de la reunión era la elaboración de un documento en apoyo a la gestión de la presidenta Martínez. De ese documento participaban todos los gobernadores menos Calabró, quien para ese año se había acercado a los militares que estaban preparando el golpe de Estado y se enfrentaba a la presidenta abriendo un bloque antiverticalista. En palabras de un concejal peronista platense: “Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto” (Cecchini y Elizalde Leal, 2016: 186).

Pocos días después, el 19 de julio de 1975, luego del desplazamiento de López Rega por el Ejército,³⁶ en el marco de una importante movilización popular, las Fuerzas Armadas pasaron a adquirir mayor influencia sobre el gobierno de Isabel. Con la desaparición de López Rega del escenario, da la impresión que la Triple A, o lo que quedaba de ella, pasó a ser reorganizada por los militares.³⁷ Paino señala que, para esa fecha. “la Triple A había pasado a manos del General Harguindeguy como Jefe figurativo y a las del hoy General Jorge Suárez Mason (sic) como Jefe electivo” (1984: 162).

³⁶ El día 19 de julio de 1975, el cuerpo de granaderos al mando del coronel Jorge Felipe Sosa Molina desarmó a la custodia del Ministerio de Bienestar Social que lo protegía y sugirió a Isabel que lo desplazara del gobierno. Destituido de sus cargos, López Rega abandonó el país el 28 de julio de 1975 junto a Juan Ramón Morales, Rodolfo Eduardo Almirón y Miguel Ángel Rovira rumbo a España (“El día que cayó López Rega”, *Clarín*, 28/6/1998).

³⁷ Paino señala: “¿Qué pasó cuando se fue López Rega? Creo que lo sé. Alguien tomó la posta, retiró momentáneamente a la Triple A del ‘frente de batalla’, la reagrupó, la reorganizó y nuevamente fue lanzada a la lucha...” (1984: 113).

La desaparición de López Rega, junto con el enfrentamiento entre quienes apoyaban al gobernador Calabró y quienes defendían a Estela Martínez de Perón, repercutió en el seno de la UOM. Lorenzo Miguel, alineado con el gobierno nacional, decidió que había llegado el momento de desprenderse de aquellos miembros de la custodia que respondían a la CNU y, por ende, al gobernador Calabró. El primero en caer fue el polaco Dubchak, integrante de la banda de Castillo, que el 24 de julio fue asesinado, desmembrado e incinerado en una de las calderas de la UOM. A eso, le siguió el intento de asesinato sobre Alejandro “Pino” Enciso. Ambos hechos fueron realizados por la patota de la UOM conducida por el Gallego Rodríguez. La gente de Lorenzo Miguel intentó atribuir los asesinatos a Montoneros, pero la CNU descubrió la maniobra, en parte porque el mismo Enciso reveló, aún malherido, quiénes habían sido sus atacantes. La respuesta de la CNU, junto con la banda de Gordon, no se hizo esperar. El 14 de octubre descubrieron a los dos custodios de Miguel, Acosta y Fromigué, cuando cenaban con sus parejas en una parrilla de Florencio Varela³⁸ (Gasparini, 2011; Juvenal, 1994). Posteriormente, el Gallego Juan Carlos Rodríguez, Alberto Cuadrado y Vicente Carreño también resultaron asesinados. Según Gasparini (2011), el desguace de las patotas de la UOM por parte de la SIDE, capitaneada por Aníbal Gordon, fue una decisión orgánica de las Fuerzas Armadas para centralizar la represión y deshacerse de aquellos sectores que no les respondían directamente.

De todas formas, la violencia contra la izquierda siguió vigente. En septiembre de 1975, en lo que se conoció como “la masacre de La Plata”, fueron secuestrados y asesinados ocho militantes del PST: Adrian Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner, Lidia Agostini, Carlos Povedano, Oscar Lucatti y Patricia Claverie. Para diciembre de 1975, la CNU asesinó a Jorge Lopeire y al militante de la JP Jorge Ruda. En la noche del 24, fue secuestrado y asesinado el militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Arturo *Patulo* Rave, cuando la patota que llegó a su casa no encontró a su hermano militante de Montoneros.

En el mes de octubre, una batería de decretos del gobierno nacional delegaron en las Fuerzas Armadas la ejecución de operaciones militares y de seguridad necesarias para, según Franco, “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (2012: 152). Las consecuencias de estos decretos fueron que, al hacerse cargo de la policía, las Fuerzas Armadas

³⁸ Silvia Liliana Rodríguez, mujer de Fromigué, sobrevivió con múltiples heridas e identificó en el grupo agresor a Aníbal Gordon, César Enciso, Osvaldo Forese, Carlos Alberto Castillo, Carlos Alberto Miranda y Víctor Grad.

también pasaron a controlar las organizaciones parapoliciales. En el caso de La Plata, la CNU parece haber pasado a depender directamente del Ejército. En 1984, Orestes Estanislao Vaello, un suboficial del Batallón 601 de Inteligencia, declaró ante la Conadep que, a fines de 1975, la superioridad le ordenó contactar al coordinador general de Prensa y Difusión del Ministerio de Bienestar Social, Miguel Ángel Tarquini, quien también era jefe de la Zona Sur de la CNU, para informarle que la banda parapolicial pasaría a depender, a partir de ese momento, del Batallón de Inteligencia y que debía cumplir con las órdenes del Ejército que les transmitiría el propio Vaello. Según este, hasta octubre de 1975, “toda la cobertura operativa de los Comandos Quilmes y La Plata de la CNU era el Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la organización Tres A”, a cargo de Aníbal Gordon. “Después de esa fecha es cuando Ejército arregla directamente con los citados Tarquini y Fernández Rivero (a) El Manco, jefe de la CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército”. Según señalan Cecchini y Elizalde Leal:

De acuerdo con la nueva cadena de mandos, el grupo de tareas capitaneado por el Indio Castillo, cuyo accionar se desarrollaba fundamentalmente en La Plata, Berisso, Ensenada y City Bell, debería operar en coordinación no solo con la Policía de la provincia de Buenos Aires (Infantería y Brigadas Policiales), sino también con el Ejército (Regimiento 7 y Distrito Militar La Plata, este último a cargo del teniente coronel Mario Sila López Osornio) y la Marina (Batallón de Infantería de Marina 3). Para coordinar las acciones de la CNU con esta última fuerza, Vaello, Castillo, Arias Duval y el Mono Pacheco mantuvieron una reunión con “el contraalmirante Martínez Zuviría”. En su declaración, Vaello destaca que “ese vínculo establecido con Marina por parte de la CNU significó buenos frutos para dicha organización, pues recibieron de Marina armamento y municiones, y comenzaron a operar (mediante enlace) en el desprendimiento de cuerpos tirados en medio del Río de La Plata, por intermedio de una lancha de Prefectura N° 48, que en la jerga de la Marina se llamaba Gold Charlie” (2016: 146).

En enero de 1976, por orden del Batallón de Infantería de Marina 3, un grupo de tareas de la CNU secuestra de sus casas y asesina a los delegados de Propulsora Siderúrgica Carlos Scafide (integrante del PST) y Salvador “Pampa” Delaturri (militante del frente gremial del PRT). En otra acción, secuestran y asesinan al militante de la JUP Sergio García. En marzo de 1976 asesinan al hijo de del interventor de la UNLP: Máximo Leonardo Agoglia.

El inicio del golpe de estado del 24 de marzo pareció, en principio, no alterar el desempeño de la CNU que, para abril de 1976, secuestró y asesinó a dos delegados gremiales de Propulsora Siderúrgica, Guillermo Miceli y Carlos Satich, y al activista gremial del Ministerio de Economía de la provincia, Horacio Urrera. Posteriormente, en otra acción, fueron asesinados los militantes peronistas Graciela Martini y Néstor Di Notto. Sin embargo, la última acción de la CNU fue el intento de secuestro del militante peronista Juan Carlos “el Vaca” Arias, el 29 de abril de 1976, que no pudo realizarse al ser detenidos los miembros de la organización por efectivos del Ejército. Según Cecchini y Elizalde Leal: “Esa noche, el coronel Roque Carlos Presti, comandante del área de Operaciones 113, decidió terminar con las andanzas de una patota paramilitar que se le estaba escapando de las manos y, coordinadamente con la Bonaerense bajo sus órdenes, les tendió una cama a Castillo y sus secuaces” (2016: 37). A partir de allí el Ejército consideró que la CNU, como organización, ya no era útil. Sus integrantes fueron detenidos y encarcelados, proceso que culminó con un decreto del Poder Ejecutivo disolviendo la organización.³⁹ De ahora en más serían las Fuerzas Armadas como institución las que se encargarían de ejercer la represión sin intermediarios.⁴⁰

Conclusión

El estudio del Gran La Plata, a partir de los hechos analizados y la cronología de acciones represivas descritas hasta aquí, nos permite, en principio, establecer diferentes periodizaciones. Hay una primera etapa, desde la apertura democrática hasta mediados de 1974, en la que no se registran detenciones, allanamientos ni asesinatos, aunque sí atentados y amenazas enmarcadas dentro de la disputa

³⁹ Ley N° 21325 “Decláranse disueltas diversas organizaciones”. Publicada en el *Boletín Oficial* N° 23422 del 9/6/1976.

⁴⁰ De todas formas, existen diversos testimonios que advierten sobre las condiciones especiales de detención que tenían los integrantes de la CNU dentro de la cárcel, donde contaban con diversos beneficios. Asimismo, el Indio Castillo parece haber continuado su colaboración con la dictadura más allá de verse detenido. Así lo señala, por ejemplo, Pablo Díaz, sobreviviente de la llamada “Noche de los Lápices”, al recordar su propia detención: “En este caso, estaba Carlos Castillo, ‘el Indio’, al que llevaban por problemas de exceso en los distintos institutos penales de la provincia de Buenos Aires, llámese Olmos o Unidad 9, de La Plata, en carácter de detenido, pero con posibilidad de salir sobre la noche en el accionar de los grupos de tareas y entrante y saliente de los distintos campos como Arana y La Cacha” (Testimonio en el Juicio por la Verdad, La Plata, 2 de diciembre de 1998).

intraperonista y, especialmente, como consecuencia del *Documento Reservado*. En este momento, la CNU junto al resto de las organizaciones de la derecha peronista (JSP, JPRA, Cdeo, ALN) se enfrentan políticamente por la conducción de los diversos ámbitos de poder.

La segunda etapa se abre con los asesinatos de militantes políticos por grupos no identificados públicamente (aunque sabemos ahora que se trató de la CNU y la SIDE) en agosto de 1974. Esto en el marco del creciente enfrentamiento intraperonista como consecuencia de la desaparición física del líder y la disputa por la conducción del peronismo. Es evidente que, por lo menos en la región, el enfrentamiento pasó a adquirir un carácter marcadamente violento, en el que los asesinatos clandestinos fueron la norma. Hemos visto que, para la realización de estos secuestros y ejecuciones, la CNU contó con el apoyo del gobierno provincial y nacional, a través de los vínculos que estableció la organización con Aníbal Gordon y la SIDE, por un lado, y con el gobernador Calabro, por el otro. Resta aún profundizar las razones que llevaron a la CNU a desempeñarse como parte del aparato represivo paraestatal (Triple A) y los vínculos (de qué tipo, cuándo, cómo y a través de quién) que estableció la SIDE con el gobierno peronista, tanto a nivel nacional como local.

Una tercera etapa en el accionar represivo se inicia a partir de julio de 1975 cuando, por presiones del sindicalismo y las Fuerzas Armadas, López Rega y sus secuaces son obligados a partir al exterior. La desaparición del lopezreguismo dio lugar al enfrentamiento entre sectores del mismo gobierno que habían actuado mancomunadamente en su lucha contra “la subversión”. La división entre verticalistas y antiverticalistas, colocó a Calabro y la CNU en lugares opuestos a Lorenzo Miguel y a Estela Martínez de Perón. Fue así que, finalmente, en octubre de 1975, la CNU parece subordinarse a las Fuerzas Armadas, y especialmente a la Inteligencia del Ejército. Si bien las formas y los vínculos en que se dio esta cooperación aún necesitan ser profundizados, sabemos que el accionar violento de la organización continuó hasta su disolución, un mes después del golpe de Estado.

En este sentido, el caso de la CNU en La Plata resulta bastante particular al pasar de ser una organización estudiantil de derecha a un escuadrón de la muerte, dentro de una estructura represiva paraestatal más grande como la Triple A. Justamente, son los vínculos locales, provinciales y nacionales que establece esta organización con las diferentes autoridades las que nos ayudan a entender la manera en que se efectivizó este pasaje.

Otro aspecto a destacar es que la reducción de la escala de análisis nos ha permitido cuestionar ciertas visiones demasiado generales sobre el funcionamiento

de la Triple A. En nuestro caso, hemos podido observar que, en sus inicios, el ejercicio de la represión en el Gran La Plata estaba vinculado a organizaciones locales del peronismo de derecha y, específicamente, a la CNU. Luego de la desaparición de Perón, se produjo un acercamiento entre esta organización y la SIDE, junto con la protección del gobernador Calabró. En este esquema, la figura de López Rega, y las de Villar y Margaride de la Policía Federal, centrales en la explicación más difundida sobre la Triple A, no se corrobora, al menos, en el Gran La Plata. Asimismo, el inicio del accionar de la Triple A se da aquí recién para mediados de 1974, a diferencia de lo sucedido en la Capital Federal con el atentado a Solari Yrigoyen en noviembre de 1973. Todo esto nos obliga a matizar la visión demasiado *porteñocéntrica* que explica la represión durante el tercer gobierno peronista a partir de lo sucedido en la Capital Federal y alrededores, proyectándolo al resto del país. En este sentido, la explicación de la represión paraestatal en este período requerirá de más investigaciones que tengan en cuenta las diferentes regiones del país y que analicen la violencia política en una escala más reducida.

Bibliografía

- Abbatista, María Lucía y Carnagui, Juan Luis (2014). “La ‘depuración oficial’ en las políticas educativas: la gestión Ivanissevich en el Ministerio de Educación de la Nación y su impacto en la UNLP”. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata.
- Antúnez, Damián (2015). *Caras extrañas. La Tendencia Revolucionaria del Peronismo en los gobiernos provinciales. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta 1973-1974*. Buenos Aires: Prohistoria.
- Axat, Julián (2011). “Poesía y política”. Recuperado el 21 de agosto de 2017, de *La historia de Carlos A. Disandro, mentor espiritual de la CNU*. Disponible en <http://poesiaypolitica.blogspot.com.ar/2011/07/la-historia-de-carlos-disandro-mentor.html>
- Bardini, Roberto (2002). *Tacuara. La pólvora y la sangre*. México: Océano.
- Baschetti, Roberto (ed.) (1999). *Documentos 1973-1976. Volumen II. De la ruptura al golpe*. La Plata: De la Campana.

- Besoky, Juan Luis (2010). “La revista *El Caudillo de la Tercera Posición*: órgano de expresión de la extrema derecha”. *Conflicto Social*, vol. 3, n° 3, pp. 7-28.
- (2013). “La derecha peronista en perspectiva”. *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Questions du Temps Présent*. Disponible en <http://journals.openedition.org/nuevomundo/65374>
- (2016a). *La derecha peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- (2016b). “En la patria de Perón, ni judío ni masón’. Aproximaciones a la cultura política de la derecha peronista en los años setenta”. *Historia e Cultura*, vol. 5, pp. 199-223.
- Bufano, Sergio y Teixidó, Lucrecia (2015). *Perón y la Triple A*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Canaletti, Ricardo y Barbano, Rolando (2009). *Todos mataron: génesis de la Triple A: el pacto siniestro entre la federal, el gobierno y la muerte*. Buenos Aires: Planeta.
- Cano, Igmacio (2001). “Policía, paramilitares y escuadrones de la muerte en América Latina”. En Bodemer, Klaus, *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*, pp. 219-325. Caracas: Nueva Sociedad.
- Carnagui, Juan Luis (2013). “El nacionalismo juvenil platense y la formación de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), 1960-1971”. *Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. Questions du Temps Présent*.
- (2016). *Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la Concentración Nacional universitaria (CNU) La Plata, 1955-1974*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Cecchini, Daniel, y Elizalde Leal, Alberto (2016). *La CNU: el terrorismo de Estado antes del golpe*. Buenos Aires: Daniel Cecchini.
- Celesia, Felipe, y Waisberg, Pablo (2016). *La noche de las corbatas*. Buenos Aires: Aguilar.
- Franco, Marina (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Galván, Valeria (2008). *El Movimiento Nacionalista Tacuara y sus agrupaciones derivadas: una aproximación desde la historia cultural*. IDAES. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.

- (2013). “Militancia nacionalista en la era posperonista: las organizaciones Tacuara y sus vínculos con el peronismo”. *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Questions du Temps Présent*.
- Gasparini, Juan (2011). *López Rega. La fuga del Brujo*. Buenos Aires: Norma.
- Goebel, Michael (2007). “A movement from Right to Left in Argentine Nationalism? The Alianza Libertadora Nacionalista and Tacuara as Stages of Militancy”. *Bulletin of Latin American Research*, vol. 26, n° 3, pp. 356-377.
- Gutman, Daniel (2012). *Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Janzen, Ignacio González (1986). *La Triple A*. Buenos Aires: Contrapunto.
- Juvenal, Carlos (1994). *Buenos muchachos. La industria del secuestro en la Argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Ladeuix, Juan Iván (2007). “El General frente a la Sinarquía. El discurso de Carlos Disandro en la formación de la Concentración Nacionalista Universitaria y su impacto en el peronismo”. XI Jornadas Interescuelas, Departamentos de Historia, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán.
- Lapolla, Alberto (2005). *La esperanza rota (1972-1974)* (vol. II). La Plata: De la Campana.
- Larraquy, Marcelo (2007). *López Rega. El peronismo y la Triple A*. Buenos Aires: Punto de Lectura.
- Lvovich, Daniel (2009). “La extrema derecha en la Argentina posperonista entre la sacristía y la revolución: el caso de Tacuara”. Congress of the Latin American Studies Association, Río de Janeiro.
- Merele, Hernán (2015). *La depuración ideológica del peronismo en el partido de General Sarmiento (1973-1974). Una aproximación al proceso represivo durante los años setenta constitucionales a partir del caso de Antonio Tito Deleroni*. La Plata-Los Povorines-Posadas: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de General Sarmiento-Universidad Nacional de Misiones.

- Orlandini, Juan Esteban (2008). *Tacuara hasta que la muerte nos separe en la lucha: historia del Movimiento Nacionalista Tacuara 1957-1972*. Buenos Aires: Centro Editor Argentino.
- Padrón, Juan Manuel (2017). “*¡Ni yanquis, ni marxistas! Nacionalistas*”. *Nacionalismo, militancia y violencia política. El caso del Movimiento Nacionalista Tacuara en la Argentina (1955-1966)*. La Plata-Posadas-Los Polvorines: Universidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de Misiones-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Paino, Horacio (1984). *Historia de la Triple A*. Montevideo: Platense S.A.
- Pis Diez, Nayla (2016). “‘Es hora de jugar la Universidad’. Una reconstrucción de las luchas reformistas en las calles platenses durante la ‘Laica o Libre’ (septiembre-octubre de 1958)”. *Conflicto Social*, 9, 15, enero, pp. 130-157.
- Robles, Horacio (2009). “La Plata en las vísperas montoneras: una reconstrucción de las condiciones sociales y políticas de la masificación y radicalización política de la JP platense y su articulación con Montoneros (1970-72)”. *Cuestiones de Sociología*, n° 5-6, pp. 339-368.
- Rodríguez, Laura Graciela (2014). “La Universidad Nacional de La Plata entre 1973 y 1983”. *PolHis*, año 7, n° 14, pp. 259-279.
- Romá, Pablo (2008). “Condiciones de posibilidad histórica para un proceso de semi-insurrección obrera y popular en La Plata, Berisso y Ensenada: mayo-setiembre de 1969”. Ponencia presentada en las Quintas Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional La Plata, La Plata.
- Schneider, Alejandro (2015). “Cuando se hizo tronar el escarmiento. La política laboral de Juan D. Perón para disciplinar el movimiento obrero”. En Ghigliani, Pablo y Schneider, Alejandro, *Sobre trabajadores y el mundo del trabajo en Argentina*, pp. 109-130. Buenos Aires: Imago mundi.
- Servetto, Alicia (2010). *73/76: El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Verbitsky, Horacio (1986). *Ezeiza*. Buenos Aires: Contrapunto.
- Werner, Ruth y Aguirre, Facundo (2007). *Insurgencia obrera en la Argentina. 1969-1976. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda*. Buenos Aires: Instituto de Pensamiento Socialista.

Los rostros del liberalismo-conservador: polémicas en torno de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía procesista

Sergio Daniel Morresi y Martín Vicente

Este trabajo propone un análisis centrado en las polémicas en torno al liberalismo en el período en el que José Alfredo Martínez de Hoz estuvo al frente del Ministerio de Economía, durante la última dictadura argentina, el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN). Durante la etapa 1976-1981, el término “liberalismo” fue depositario de diversas conceptualizaciones, en tanto el debate sobre los sentidos del concepto no se limitó a una pugna entre los que se sentían cercanos a él y aquellos que lo combatían, ni fue un claro divisor de aguas entre partidarios y opositores al régimen. En efecto, varios intelectuales y líderes políticos cercanos a la dictadura y que se autodefinían como liberales (aunque, como veremos, correspondería llamarlos liberal-conservadores) fueron severos críticos de su política económica: en torno a esta experiencia ministerial, se expresaron disidencias que previamente habían estado soterradas dentro del espacio de las derechas argentinas y que volverían tras el final de la experiencia dictatorial. Esta cuestión queda más clara cuando se amplía la escala de análisis temporal y se consideran las controversias con respecto a la política económica del PRN luego de 1983: como veremos, las claves de la polémica iniciada en 1976 siguieron marcando la agenda de las discusiones décadas después.

En las páginas que siguen explicamos por qué creemos que es importante hacer una lectura política del plan económico de la dictadura. Luego, presentamos la figura de Martínez de Hoz y su equipo de trabajo, y repasamos la concepción de la política económica que tenían el ministro y sus colaboradores. A partir de allí, nos centramos en el debate en el interior del espacio liberal-conservador y abordamos las visiones retrospectivas de miembros del gabinete económico para discutir la intención y el impacto del esquema desarrollado entre 1976 y 1981.

Algo más que un plan económico: una lectura en clave política

Varios trabajos académicos y periodísticos publicados en los últimos años se han ocupado de subrayar la faceta civil del gobierno militar (Pucciarelli, 2004; Muleiro, 2011; Canelo, 2008a). El impacto de estos estudios ha servido para que conozcamos con mayor profundidad el entramado de intereses políticos y corporativos que dieron aliento al PRN (Verbitsky y Bohoslavsky, 2013), pero también para mostrar los modos y los mecanismos a través de los que las fuerzas armadas lograron obtener apoyos y consensos en amplios espacios sociales (Lvovich, 2007; Lvovich y Rodríguez, 2011) y la existencia de ciertas continuidades con respecto al período 1973-1976 (Franco, 2012).

El énfasis en lo civil es imprescindible para alcanzar una perspectiva más amplia y comprensiva del fenómeno dictatorial, pero no debe llevar a perder de vista la importancia de la trama militar ni la centralidad de los aspectos políticos del gobierno *de facto*. En este sentido, Canelo (2016) advierte, con razón, sobre las distorsiones de las interpretaciones economicistas que se han erigido en una suerte de “sentido común” para explicar la dinámica macropolítica de la dictadura. Dado que para las interpretaciones economicistas los objetivos económicos explican las medidas políticas, y en tanto que estos objetivos económicos son reducidos a la búsqueda de la satisfacción de intereses materiales de determinados sectores (el financiero, el agroexportador, los grandes grupos económicos transnacionalizados), las metas ético-políticas de los militares y los civiles que tuvieron un papel destacado durante el PRN quedan obturadas, fuera de foco o reducidas al rol de conceptos secundarios (Franco, 2016). Sin embargo, los presupuestos y los objetivos ético-políticos de algunos líderes políticos e intelectuales del amplio universo de las derechas locales resultan fundamentales para comprender tanto al régimen dictatorial como a sus iniciativas y su derrotero (Palermo y Novaro, 2003; Quiroga, 2004). No se trata de invertir los términos y sostener que la experiencia procesista *in toto* se explica por la política, sino de no perder de vista la potencia de esta dimensión y poner bajo escrutinio los ideales de sociedad civil y política que tenían los actores que apoyaron o criticaron (desde el propio campo de la derecha) la propuesta económica del PRN. Como se intenta mostrar en este trabajo, Martínez de Hoz y su equipo no tuvieron como meta principal hacer negocios, aun cuando algunos sectores del gabinete económico se dedicaran a esa tarea (AA. VV., 1981-1982), sino librar una “batalla cultural” para cambiar la estructura institucional de la Argentina, a fin de transformar la mentalidad de los argentinos (Martínez de Hoz, 1981).

En ese sentido, una serie de estudios de referencia marcaron, durante la propia etapa dictatorial, la centralidad de la pauta política expresada en el plan de Martínez de Hoz (Canitrot, 1980; Schvarzer, 1983), y es de interés recuperar esa idea para avanzar en los lineamientos de este trabajo.

Esa apuesta ético-política promovida por el ministro y su equipo, como veremos, estuvo signada por acuerdos generales en el espacio procesista, pero también se topó con límites para su completa implementación, críticas a las políticas efectivas e incluso impugnaciones en nombre del mismo liberalismo. Contamos con valiosos estudios sobre los disensos y las pugnas internas del PRN entre duros y politicistas e, incluso, a un nivel más amplio, entre los sectores a los que se denominó, genéricamente, nacionalistas y liberales (Palermo y Novaro, 2003; Canelo, 2008b); y, recientemente, se ha comenzado a indagar en el interior de cada uno de estos grupos (Morresi, 2010; Vicente, 2015; Canelo, 2016). Esperamos, en las páginas que siguen, contribuir al conocimiento acerca de las divergencias y las luchas en el interior del espacio liberal-conservador durante la dictadura al utilizar como prisma de análisis los modos en que fue interpretado el programa económico de Martínez de Hoz dentro de ese mapa más amplio de relaciones políticas.

Es necesario aclarar la lectura que aquí prima del ideario liberal-conservador. El término “liberal” alude a una tradición política ligada a la defensa de los derechos civiles (la propiedad privada, la libertad de conciencia y de prensa) y políticos (reunirse, peticionar a las autoridades, ser representado), cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XVII (Ryan, 1995). El conservadurismo es otra tradición política, nacida como reacción a la Revolución francesa, preocupada sobre todo por mantener el orden. Si bien es posible pensar en un conservadurismo reaccionario (ultramontano, con nostalgia por un mundo perdido), en general, los conservadores se caracterizan por su realismo, por observar a los cambios sociales con suspicacia y resignación a la vez. En este sentido, las transformaciones sociales más que combatidas deben ser encausadas, ralentizadas y políticamente tuteladas (Harbour, 1985).

En la Argentina, el liberalismo tuvo destacados impulsores políticos e intelectuales, aunque estos no alcanzaron la radicalidad doctrinaria de otros países de América Latina (como Uruguay), probablemente porque no se vieron en la necesidad de enfrentar a una facción conservadora organizada con apoyo social fuerte, y también porque otros clivajes, como el enfrentamiento de Buenos Aires y el interior, tuvieron una relevancia central. La ausencia de un temprano enfrentamiento entre liberales y conservadores ayuda a explicar que, ya desde finales del siglo XIX ambos tuvieran importantes convergencias (Botana, 1985;

Middlebrook, 2000), que se profundizaron aún más desde el surgimiento del peronismo (Nállim, 2014). Es en este sentido que, a partir de la década de 1930, es posible hablar del liberalismo-conservador como un movimiento político e intelectual distinto tanto del liberalismo como del conservadurismo, en línea con lo que Rémond (2007) llama la “derecha orleanista”.

A diferencia del conservadurismo, el liberalismo-conservador no tiene una perspectiva organicista ni teológica de la nación. Se basa en el ideario liberal clásico, partiendo de la noción de que una sociedad está compuesta por personas que tienen derechos (sobre todo el derecho a la propiedad privada) y que ellas progresan por el intercambio voluntario entre individuos (o sea, a través del mercado) que no están ordenados de un modo jerárquico perenne o naturalizado. Pero, a diferencia del liberalismo clásico, el liberalismo-conservador tiene una honda preocupación por mantener el orden social que lo orienta a estimular el respeto a las instituciones y valores culturales heredados. Esta pulsión hacia el orden y la tradición también distancia al liberalismo-conservador del proyecto democrático, pues la democracia pasa a ser vista como un modelo político riesgoso que debe controlarse o tutelarse a través de mecanismos republicanos o de actores que, bien guiados, puedan ponerle límites claros a una ciudadanía con demandas desmesuradas (Morresi, 2010; Vicente, 2014). Esta concepción liberal-conservadora, cuyos miembros llaman simplemente “liberal”, tiene claros lazos en común con el proyecto neoliberal (como señalaremos), pero debe observarse que en el neoliberalismo las ideas de orden y tradición cultural no ocupan un lugar destacado, y son subordinadas a una concepción negativa de libertad y a la necesidad de mercantilizar nuevos ámbitos (Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2005; Morresi, 2009).

La gran transformación: Martínez de Hoz, su equipo y su plan

José Alfredo Martínez de Hoz nació en 1925 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia acaudalada con amplia participación en política y en asociaciones empresarias. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó con medalla de honor en 1949. Allí fue uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA), un grupo antiperonista que editó la revista *Demos*, de la que fue director. Si bien tuvo relación con la Democracia Cristiana, a la que se acercó por convicciones religiosas, prontamente se desilusionó por considerarla una organización demasiado permeable

a los planteos izquierdistas y populistas, y terminó alejándose de ella, en línea a lo ocurrido con diversas figuras liberales próximas a este partido.

Una vez derrocado el segundo gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, la autodenominada Revolución Libertadora designó gobernadores militares en casi todas las provincias, pero en 1956 cambió de estrategia y nombró interventores federales civiles. Fue este cambio el que posibilitó que jóvenes que se habían destacado en las luchas universitarias contra el peronismo accedieran a gabinetes provinciales. En el caso de Salta, el interventor Alejandro Lastra llevó como ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas a Martínez de Hoz, quien al año siguiente fue promovido a presidente de la Junta Nacional de Granos.⁴¹ Sin embargo, luego de que el radical intransigente Arturo Frondizi fuera electo presidente en 1958 (en elecciones con el peronismo proscrito), Martínez de Hoz perdió su cargo y pasó a la actividad privada. En ese período, desplegó un intenso accionar en asociaciones profesionales y empresariales, muchas de ellas ligadas al espacio liberal-conservador, como el Colegio de Abogados de Buenos Aires (formó parte de su directorio entre 1958 y 1962), el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (al que presidió entre 1958 y 1976) y la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL, de la que fue vicepresidente entre 1958 y 1962).

En 1962, cuando un nuevo golpe expulsó al presidente Frondizi, se instaló un gobierno provisional fuertemente tutelado por las Fuerzas Armadas y presidido por el también radical intransigente José María Guido. Con Guido, Martínez de Hoz vuelve a la gestión pública, primero como secretario de Agricultura y Ganadería y luego, por un período muy breve, como ministro de Economía. En las elecciones de 1963, que mantenían la proscripción peronista, resultó electo el radical del pueblo Arturo Illia y Martínez de Hoz retornó al sector privado. En este período, pasó a formar parte de los directorios de empresas como Petrosur (que presidió entre 1964 y 1972), Acindar (que presidió entre 1968 y 1976) y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE, cuya estatización durante su gestión procesista originó una causa judicial). Fue miembro de los consejos asesores de empresas transnacionales como Westinghouse y el Chase Manhattan Bank. Además, tuvo un rol destacado en *think tanks* orientados al liberalismo y al neoliberalismo, como la Fundación de Investigaciones Económicas Latioamericanas (FIEL, de la que fue vicepresidente entre 1970 y 1974)

⁴¹ La pertenencia de Martínez de Hoz a la Junta Nacional de Granos (JNG) en este período figura en varias notas biográficas, incluso en libros del propio Martínez de Hoz. No obstante, la JNG fue creada a partir del antiguo Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) en 1963, cuando Martínez de Hoz se desempeñaba como secretario de Agricultura y Ganadería.

y la Sección Argentina del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (la que presidió entre 1964 y 1967), y mantuvo presencia en entidades como el Consejo Empresario Argentino (CEA, del que fue vicepresidente y presidente entre 1972 y 1976).

En 1976, tras sopesar otras alternativas, los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el poder en la Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el brigadier Orlando Ramón Agosti y el almirante Emilio Eduardo Massera, designaron a Martínez de Hoz como ministro de Economía. Desde el inicio, hubo especulaciones con respecto a por qué una dictadura que se caracterizó por su carácter pretoriano había elegido a este civil para estar al frente de una cartera tan sensible. Debe tenerse en cuenta que en la historia de los gobiernos militares argentinos los ministerios de Economía o Hacienda siempre recayeron en civiles, en general vinculados al mundo empresarial (incluso en la dictadura de 1943-1946, la más cabalmente militar, el ministro de Hacienda fue el abogado, empresario y exdiputado Jorge Santamarina). Por otro lado, para la Junta, Martínez de Hoz presentaba ciertas ventajas: tenía fluidas conexiones con las diferentes ramas del mundo económico (la agropecuaria, la industrial y la de servicios, tanto en la Argentina como en el exterior); había ejercido la función pública durante gobiernos *de facto* y esa experiencia era valorada por la ausencia de consecuencias relevantes: se consideraba positivo que sus gestiones no hubieran tenido resultados políticos dignos de ser resaltados. Así, si bien el plan que diseñó Martínez de Hoz no difería en esencia de los de otros posibles candidatos como Adalbert Krieger Vasena, Carlos María Moyano Llerena o Álvaro Alsogaray,⁴² su nombre fue el único que generó consenso entre los altos mandos de las tres fuerzas armadas (Schvarzer, 1983; Seoane y Muleiro, 2001; Martínez de Hoz, 2014).

⁴²No está del todo claro por qué la Junta desestimó a los otros candidatos. En su crónica, Yofre (2010) sostiene que fue la Armada la principal interesada en elegir a Martínez de Hoz, pues lo consideraban menos dependiente del Ejército. Seoane y Muleiro (2001) sostienen que Martínez de Hoz tenía una relación personal con Massera por compartir su afición al turf y con Videla por intermedio de los generales Hugo Miatello y Guillermo Suárez Mason, quienes habían participado de reuniones del grupo Perrioux en 1975, cuando se trazaban las líneas maestras de un plan económico a implementarse tras un golpe de Estado que se estimaba inevitable y necesario (Túrolo, 1996). Sí hay indicios de que Alsogaray fue resistido porque se lo veía demasiado relacionado a la política y porque su hermano era general del Ejército, y que a Krieger Vasena se lo percibió muy ligado a la experiencia de la dictadura que había encabezado Juan Carlos Onganía. Moyano Llerena, quien había sido brevemente ministro durante la presidencia *de facto* de Marcelo Levingston, fue luego nombrado embajador ante la Comunidad Económica Europea por la Junta.

De acuerdo con el relato de Martínez de Hoz, al momento de producirse el golpe, él ya sabía que su plan económico, elaborado a lo largo de varios meses y delineado frente a referentes civiles y militares algunos días antes, iba a ser implementado, pero no estaba al tanto que estaría al frente de la gestión. Por lo tanto, debió armar su equipo de trabajo de manera apresurada, aunque gozando de plena autonomía tanto para elegir a los secretarios como para designar a las autoridades del Banco Central (Martínez de Hoz, 2014). Los secretarios elegidos fueron: Juan Alemann (Hacienda); Guillermo Walter Klein (Programación y Coordinación),⁴³ Raymundo Podestá Wilmart (Industria), Mario Cadenas Madariaga (de Agricultura y Ganadería), Guillermo Zubarán (Energía), Alberto Fraguío (Comercio Exterior); Guillermo Bravo (Comercio Interior); Federico Camba (Obras Públicas), Fernando Puca Prota (Recursos Naturales) y el general Alberto Vicente Nieto (Comunicaciones). Por otra parte, Adolfo Diz quedó como presidente del BCRA y Manuel Solanet fue nombrado al frente del Instituto Nacional de Planificación Económica. Al igual que su nuevo jefe, muchos de ellos habían pasado por la función pública en anteriores gobiernos *de facto* (era el caso de Alemann, Klein, Fraguío, Camba, Puca Prota, Solanet y Diz), mientras que otros compartían con Martínez de Hoz su actividad en cámaras empresariales vinculadas a los ideales liberal-conservadores (era el caso de Cadenas Madariaga y Podestá Wilmart, de ACIEL). A casi todos, Martínez de Hoz los conocía desde décadas atrás, por haber compartido distintos espacios de socialización como la Democracia Cristiana, la Orden de Malta y su pertenencia común a círculos liberal-conservadores como AJDA, el grupo Azcuénaga y el grupo Perriau (Túrolo, 1996; Morresi, 2010; Vicente, 2015).

Los miembros del gabinete económico no respondían a una única línea y sus diferencias afloraron en más de una ocasión. Hasta cierto punto puede sostenerse que los desacuerdos se explicaban por cuestiones ideológicas, pero también influyeron, y mucho, las desavenencias basadas en intereses concretos (en particular entre las carteras de Industria, Agricultura y Comercio) y las pujas de poder (entre las diversas secretarías específicas y los titulares de Planificación y Hacienda que actuaban como viceministros con amplios poderes de decisión). No obstante, y pese a que las diferencias llegaron en algunos casos a renuncias obligadas (en Agricultura, Cadenas Madariaga fue reemplazado por Jorge Zorreguieta y en Comercio Interior Alejandro Manuel Estrada reemplazó

⁴³ En la práctica, Alemann y Klein oficiaron como viceministros. Ambos sufrieron atentados como parte de la interna procesista en momentos en que el plan económico estaba en su crisis final, en 1980 y 1979, respectivamente.

a Bravo), desde el inicio de la gestión se cultivó lo que los protagonistas llamaron un “espíritu de equipo”.

Como es natural, los enfoques y opiniones sobre muy arduos problemas no eran siempre coincidentes y unánimes, ni hubiera sido deseable que lo fueran. Lo que fue importante es que un grupo que debía proporcionar la orientación a la economía argentina en sus más diversos aspectos, pudo actuar en forma coherente y racional, deponiendo actitudes o posiciones inspiradas en puntos de vista sectoriales en aras del Bien Común [...] Se actuó con una unidad de orientación ideológica, que permitía lograr una verdadera acción de “equipo”, en cuyo seno el permanente intercambio de ideas y de iniciativas permitían finalmente llegar a las soluciones y decisiones consecuentes. Con seguridad estas últimas no siempre conformaban las aspiraciones de cada uno, pero representaban un común denominador que no desvirtuaba el objetivo principal, que hacía posible su aplicación práctica y que, aun cuando no lograr la perfección que se describe en la teoría, permitía avanzar sustancialmente en el sentido correcto (Martínez de Hoz, 1981: 11).

“El común denominador” implicaba un acuerdo sobre el diagnóstico negativo de aquello a lo que se venía a poner fin y sobre las metas principales del plan a desarrollar. Con respecto al diagnóstico de la situación, había un consenso interno (compartido incluso por distintos sectores civiles lejanos al régimen) sobre que el último gobierno peronista había desplegado sin éxito planes económicos contradictorios y que resultaba necesario ordenar una situación recesiva e hiperinflacionaria. Pero, se convenía, el nudo gordiano de la problemática argentina iba más allá del período de María Estela Martínez de Perón: era el sistema productivo de posguerra, caracterizado por una economía dual semicerrada, en la que el sector agrario producía bienes exportables y aportaba divisas que ayudaban al desarrollo del sector industrial orientado al mercado interno y protegido por tarifas preferenciales, subsidios y exenciones fiscales (Canitrot, 1980; Schwarzer, 1983). Martínez de Hoz lo explicaba así:

Consideramos que había causas muy profundas que habían llevado a la situación [de caos] descrita [...] fue en el período de posguerra (especialmente a partir de 1943) cuando se inició en el país un cambio profundo de política económica con una doble característica: una creciente intervención del Estado en la economía y una aplicación casi total del concepto de eco-

nomía cerrada, con una virtual desaparición de los principios de libertad económica (Martínez de Hoz, 1991: 16).

Para Martínez de Hoz, la excesiva intervención del Estado (mediante medidas arbitrarias o regulaciones innecesarias) había llevado las iniciativas productivas a un marco de ahogo e ineficiencia, cuyos incentivos para invertir y modernizarse se veían opacados por la necesidad de ganar el favor del gobierno de turno para funcionar. Así, se hacía un uso muy poco eficiente de los recursos materiales y humanos del país.⁴⁴ Por otro lado, el incremento del radio de acción estatal iba de la mano de un aumento del gasto público que, al no ser acompañado de una elevación de los recursos, causaba un desequilibrio fiscal creciente que se traducían en inflación. Pero, además, el mantenimiento del esquema de posguerra implicaba la permanencia de trabas al comercio exterior que produjeron “el estancamiento y retraso [...] En este aspecto el aislamiento resultó no solo material sino [...] también mental. Ello tuvo profundas derivaciones en las concepciones políticas, económicas y sociales imperantes desde entonces” (Martínez de Hoz, 1991: 17). Así, se requería un cambio estructural que prohiyese una profunda transformación cultural. El primer paso necesario era ordenar y estabilizar la situación económica, mejorando los ingresos públicos y poniendo un freno a la inflación. Luego, se podría avanzar sobre dos frentes: reformar el Estado para establecer las bases de una libertad económica que entroncase luego con una libertad política real, y abrir la economía para facilitar un proceso de competencia que resulte en una bajas en los costos y en mejoras en la productividad.

Para alcanzar estas metas, Martínez de Hoz negoció diversos préstamos que le permitiesen desplegar sus propuestas. Este respaldo financiero fue considerado en su momento un requisito indispensable, no solo por la precaria situación económica desde la que se partía, sino también porque representaba una señal de apoyo político externo a las nuevas autoridades y sus proyectos reorganizativos (Quiroga, 2004; Palermo y Novaro, 2003; Schvarzer, 1983). La llegada del dinero externo sumada al establecimiento de un desdoblamiento cambiario, el congelamiento de salarios y la indexación por inflación de los impuestos y tarifas de servicios públicos llevaron a una situación de relativa calma económica traducida en aumento del nivel de reservas, ralentización de la inflación y baja de la especulación cambiaria, pero también a una sensible pérdida de capacidad de compra de los sectores populares que, en un clima represivo que

⁴⁴ Vale la pena subrayar que este razonamiento es paralelo al análisis del *rent seeking* que, por la misma época, era impulsado desde la Teoría de la Elección Pública (Tullock, 1988).

impedía tanto la actividad política como la gremial, no pudieron hacer oír su disconformidad y tuvieron que asistir a cambios en la estructura de precios en beneficio de los agronegocios y las empresas de capital intensivo. Es por eso que Jorge Schvarzer sostuvo, atinadamente, que esos primeros resultados “se deducían casi directamente del nuevo marco político antes que del programa aplicado” (1983: 51).

Pese a esa situación de relativo “éxito”, al cabo de unos pocos meses las críticas hacia el ministro arreciaron y la prensa comenzó a hacerse eco de rumores sobre su supuesto recambio. En el diario *Clarín*, la línea editorial marcaba un apoyo general al PRN, pero subrayaba que en el ámbito económico se sucedían errores que imposibilitarían el necesario “cambio de estructuras” y se abogaba por nuevos planes y nombres (Borrelli, 2016). Bernardo Neustadt (1977) aseguraba que “en los labios de gente seria” se murmuraba que Martínez de Hoz podía ser reemplazado por el banquero José R. Trozzo (presidente del luego quebrado Banco de Intercambio Regional, hoy prófugo de la justicia residente en México) o por el presidente del BCRA, Adolfo Diz. Asimismo, señalaba que aunque había sectores que pugnaban por renuncias dentro del gabinete económico (“sustituir algunos de sus colaboradores más inmediatos [como] Juan Alemann, Klein, Zubarán, Bravo o Podestá”), Martínez de Hoz los había defendido firmemente. El rumbo económico y el propio Martínez de Hoz fueron satirizados en diversos medios, en lo que conformó la principal vía de crítica político-cultural de la etapa (Levín, 2013; Burkart, 2016). Incluso, se dio el fenómeno intermedio de la crítica especializada, pero bajo la pauta humorística, como fue la columna que publicó regularmente, bajo seudónimo, el economista Roberto Frenkel en la revista *Hum*[®] (Burkart, 2016).

Hasta cierto punto, las críticas a Martínez de Hoz reflejaban pugnas en el interior del gobierno. Estas internas fueron complejas y cambiantes, pero para los fines de este trabajo pueden ser simplificadas: de un lado, los sectores nacionalistas, industrialistas y dispuestos a apoyar una mayor intervención del Estado en la economía, y del otro, los sectores liberales, más inclinados a sostener la visión de “apertura al mundo” preconizada por el ministro.⁴⁵ La presencia de una oposición interna a la continuidad de Martínez de Hoz se tradujo en la institución de mecanismos de control que buscaban monitorear las decisiones

⁴⁵ Debe subrayarse que se trata de una simplificación por la óptica del artículo y que esta lucha interna se superpuso a otras tanto o más relevantes en términos de consecuencias, como la establecida entre sectores politicistas y militaristas, entre el Ejército y la Marina o entre las distintas promociones de militares. Al respecto, ver Jordán (1993); Palermo y Novaro (2003); Canelo (2008a).

del gabinete económico y recortar su capacidad para la toma de decisiones. El ministro estaba obligado a dar cuenta de sus actos de manera semanal a los miembros de la Junta y a someterse a la evaluación periódica de la Secretaría General de la Presidencia (cuyo titular era el general Rogelio Villareal, cercano a la fracción politicista liderada por el teniente general Roberto Eduardo Viola), de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) y a los cuadros superiores de las tres fuerzas armadas reunidos en consejos o asambleas (Canelo, 2008a). Pero, además, la oposición interna al ministro se hizo sentir por la resistencia de encumbrados hombres de armas a prestar apoyo a las medidas del ministro, como fue el caso de las Direcciones de Astilleros Navales o Fabricaciones Militares. En algunos casos, la resistencia fue tan fuerte que las críticas se hicieron públicas, como las de Massera y Agosti, quienes ya en 1976 explicitaron su desacuerdo con los resultados económicos y mostraron su preocupación con el descenso de los ingresos de los trabajadores (Suriano, 2005).

Fue en medio de esta situación de críticas, y ante la ausencia de los resultados presupuestos, que se inició una nueva etapa en el desarrollo del plan económico. Ya no se trataba de “estabilizar”, sino de “reformular”. Para ello, el ministro postuló necesario implementar medidas antiinflacionarias más activas. Desde su perspectiva, la reactivación económica ya había comenzado, pero se encontraba obliterada por la continuidad de la inflación, que era fruto de la “irresponsabilidad de algunos empresarios” obstinados en mantenerse dentro del esquema económico anterior (De Pablo, 1987). Fue por ello que en marzo de 1977 se implementó una “tregua de precios” que obligaba a 700 empresas líderes a retrotraer sus precios y mantenerlos por 120 días. La medida fue recibida con sorpresa y resquemor por diferentes sectores, e incluso en el gabinete hubo desacuerdos con respecto a esta intervención: el secretario de Comercio Interior hizo público su descontento y se vio obligado a renunciar.

Si bien la tregua de precios no tuvo resultados notables, en tanto la inflación solo bajó un punto de forma momentánea para “rebotar” a 4% en el mes de agosto, Martínez de Hoz se dio por satisfecho y anunció la llegada de un tercer momento en la implementación del plan. Su amplia capacidad de acción a pesar de los opacos resultados puede explicarse, al menos en parte, por el rol político que comenzó a jugar en 1977. Con la asunción del demócrata James Carter como presidente de los Estados Unidos, se produjo un profundo viraje en la política externa de ese país. Como parte de su política de guerra fría, Carter puso en primer plano los Derechos Humanos, dejando así en una situación difícil al régimen argentino, en particular a las facciones liberales y politicistas que habían puesto el acento en la importancia de mantener relaciones fluidas

con los Estados Unidos y ahora se veían doblemente asediadas por los reclamos internacionales y por los sectores nacionalistas y los “duros”. En este contexto, Martínez de Hoz, quien gozaba de importantes y fluidos contactos con distintos actores económicos y políticos estadounidenses, se convirtió en un actor clave. Para Maxwell Chaplin, a cargo de la representación estadounidense, el ministro era el canal de comunicación ideal: “Martínez de Hoz ha sido capaz de obtener respuestas aparentemente positivas del gobierno argentino en áreas sensibles de los derechos humanos (aunque lo haya hecho con el objetivo de obtener un voto favorable por parte de los Estados Unidos [para la aprobación de un crédito])” (citado en Avenburg, 2015: 453).

Para mediados de 1977, Martínez de Hoz se afirmó en su cargo y comenzó a desplegar las reformas centrales de su plan: había llegado el momento de la gran transformación planteada, de cambiar estructuras para mudar mentalidades. Para ello buscó apuntalar al sector financiero a través de medidas concretas que, al menos en teoría, tenían por objeto colaborar en la formación de un mercado de capitales interno que además sería beneficioso para el sector productivo. La reforma implicaba, en términos generales, la liberación de las tasas de interés y la desregulación del sistema financiero. La combinación resultó en una política monetaria restrictiva a través de una suba en las tasas de interés reales y de una merma en la emisión monetaria,⁴⁶ y en una recesión que impactó en los sectores productivos y en los consumidores que seguían enfrentando una sostenida inflación. En ese momento, la Iglesia católica levantó su voz contra el plan económico. Los obispos Justo Laguna y Jorge Casaretto (recién promovidos al cuerpo episcopal) señalaron que las medidas tomadas por el ministro minaban la armonía entre capital y trabajo por la que abogaba la doctrina social de la Iglesia. Con el tiempo, y en parte como fruto de cambios en la Iglesia a nivel político y doctrinario (la asunción del nuevo Papa Juan Pablo II, la Conferencia Episcopal de Puebla), pero también de ciertos movimientos en el seno del catolicismo argentino, el distanciamiento entre la institución eclesiástica y el gabinete económico procesista se iría profundizando (Obregón, 2005).

A comienzos de 1978, los agroexportadores consideraban que el ministro buscaba atraer capitales externos “atrasando” el tipo de cambio, lo que los perjudicaba. El secretario de Agricultura, Cadenas Madariaga, buscó un punto intermedio al anunciar la continuidad de la política general, pero también un precio sostén para algunos *commodities*. No obstante, la profundización del

⁴⁶ En aras de establecer paralelismos con el neoliberalismo, se nota aquí una similitud con los postulados monetaristas de la Escuela de Chicago (Friedman, 1985).

desequilibrio del tipo de cambio dejó en la nada la propuesta de intervención selectiva y terminó renunciando. Schwarzer (1983) caracterizó esta situación como la que acentuaba el avance de los grupos más ortodoxos en el interior del equipo. Sobre el final de ese año, y como vía de escape a un marco recesivo, se dio a conocer un esquema de preanuncio de tasas decrecientes del tipo de cambio nominal, basado en la experiencia chilena (la luego célebre “tablita”). Este esquema se emparejaba con un calendario de reducción de aranceles de importación y un programa de reforma del Estado que incluía cambios en los subsidios, que bajaron y pasaron a ser regionales en lugar de sectoriales, y una serie de privatizaciones periféricas. El conjunto de medidas dio lugar a un crecimiento de la actividad financiera y del sector servicios tanto como a la continuidad de la desindustrialización.

En 1979 se produjo una merma en el índice inflacionario que, en el contexto de protección del empleo que los comandantes habían impuesto a Martínez de Hoz, dio como resultado una mejora relativa en la situación económica: el país creció un 7% y el salario real aumentó sensiblemente con respecto al año anterior. Todo ello se reflejó en un trato más contemplativo con el ministro por parte de sus críticos. No obstante, el panorama volvió a cambiar en el último cuarto del año. Por un lado, la Iglesia católica, que, a través de la Pastoral Social, liderada por monseñor Ítalo Di Stefano, se había acercado a los sindicatos peronistas, elaboró un documento en oposición al proyecto de ley de asociaciones profesionales, uno de los pilares del programa de Martínez de Hoz (Ghio, 2007). Por otro lado, si bien la apertura comercial se había iniciado antes, a fines de 1979 comenzaron a sentirse los efectos de un ingreso creciente de bienes importados. Entre diciembre de 1979 y diciembre de 1980, el saldo de la balanza comercial bajó abruptamente de 1110 millones dólares positivos a 2520 negativos. Esto tuvo un claro impacto en la actividad industrial, cuyos representantes comenzaron a elevar sus críticas a través de documentos públicos que denunciaban un fuerte proceso de desindustrialización. Pero, además, este proceso colaboró con el “cambio de mentalidad” que pregona Martínez de Hoz: fue en ese momento que los comportamientos consumistas, individualistas y especulativos de una porción importante de la población, particularmente en las capas medias, comenzaron a desplegarse con fuerza (Heredia, 2015; Fridman, 2008; Adamovsky, 2009). Así, para 1980, la “gran transformación” había comenzado. Decía Martínez de Hoz:

El programa económico anunciado el 2 de abril de 1976 contenía un conjunto coherente de principios y medidas [...] estaba destinado no solo a hacer

frente a la crisis existente en ese momento, sino a revertir toda una tendencia que [...] había predominado en el manejo de la economía argentina desde la posguerra, [...] Para llevar a cabo este objetivo era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo; *no bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos privados y públicos.* [...] Para ello había ciertamente que adaptarse a las nuevas reglas de juego, aprender a comportarse en una economía de mercado abierto, con competencia, identificarse como consumidor y comenzar a ejercer sus derechos como tal, sea cual fuere su actividad económica, (ya sea productor agropecuario, industrial, trabajador manual o intelectual, profesional, técnico, artista o ama de casa) (Martínez de Hoz, 1981: 236-237, énfasis añadido).

Desde la óptica de Martínez de Hoz, lo que él y su equipo hicieron fue sentar las bases de una transformación social y económica. Para lograr su objetivo primordial, una economía libre, fue preciso “utilizar ciertos métodos o instrumentos que no fueran los idealmente propios”, pero que resultaban “necesarios para dominar las rigideces y reacciones que obstaculizaban el proceso de salir de una economía altamente estatizada y distorsionada”. Las medidas intervencionistas fueron, entonces, ineludibles para generar el cambio, si bien su uso podía haber llevado a la opinión pública a confundir “situaciones o instrumentos puramente circunstanciales con las bases o principios del sistema” al que consideraba liberal, humanista y dirigido al beneficio de toda la población (Martínez de Hoz, 1981: 238). En este sentido, Martínez de Hoz no solo resumía su gestión, sino que también respondía a las críticas que, desde su perspectiva, le habían lanzado los sectores a los que él mismo pertenecía y que a su entender eran injustas y no habían logrado comprender la enormidad de la tarea desarrollada.

Desde adentro: las críticas liberal-conservadoras a Martínez de Hoz

Las críticas a Martínez de Hoz durante 1976-1981 pueden dividirse en dos grupos. De un lado, aquellos que, tanto desde los partidos políticos tradicionales como desde la derecha nacionalista, se oponían de modo frontal al ministro, al rechazar tanto su figura como su plan económico y las consecuencias de este.

Del otro lado, aquellos que reconocían el valor (moral, intelectual o político) de Martínez de Hoz o bien creían que sus objetivos y sus métodos eran correctos y necesarios, pero también que, a pesar de ello, las medidas tomadas no eran adecuadas y que sus resultados podrían ser contraproducentes con respecto a los objetivos preconizados. Dentro de este segundo grupo, el del liberalismo-conservador, se apuntó hacia dos cuestiones centrales: las doctrinarias y las prácticas. En primer lugar, se señalaba que la política de Martínez de Hoz era “poco liberal”, pues cedía las bases ideológicas por un pragmatismo excesivo, moralmente inaceptable, políticamente innecesario y económicamente contradictorio. En segundo término, se subrayaba de modo crítico la preeminencia de la posición “gradualista” del gabinete económico en detrimento de las políticas de *shock* que se estimaban necesarias para prohiar el cambio estructural prometido.

En un comienzo, dentro del coro de voces liberal-conservadoras más notorias (medios, intelectuales, organizaciones) primó una lectura favorable tanto al proyecto del PRN como a las líneas maestras del plan económico. Dos días antes del golpe, Francisco Manrique, líder de la Alianza Federal que reunía a partidos liberal-conservadores provinciales, se había puesto “a disposición” para colaborar en la “gran transformación” que se avizoraba, “vía elecciones o vía revolución” (citado en Mansilla, 1983: 116). Al día siguiente del golpe, los diarios de circulación nacional publicaron una solicitada de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) y el Movimiento Línea Popular (MOLIPO) en apoyo explícito al gobierno dictatorial y sus objetivos, firmada entre otros por el propio Manrique e incluso por Carlos Sylvestre Begnis, recién removido como gobernador de Santa Fe.⁴⁷ Sin embargo, este intento de acercamiento no fue fructífero y el gobierno dictatorial estaba decidido a mantenerse militarizado tanto como le fuera posible (Palermo y Novaro, 2003; Quiroga, 2004). El estilo pretoriano que los militares consideraban necesario para desarrollar su gestión debía extenderse a todo el aparato estatal. Eso no quiere decir, como marcamos, que el PRN no contara con respaldos civiles, sino que los militares estaban preocupados por mostrar hacia la sociedad, pero sobre todo hacia dentro de las armas, que gobernarían prescindiendo de intercambios con la política de partidos. Pese a la indiferencia oficial, los liberal-conservadores de la Alianza Federal prosiguieron su apoyo, autodenominándose “amigos críticos del Proceso”. Con ello consiguieron que un importante número de intendentes de ciudades menores quedaran en sus puestos (en una proporción mayor a la de los grandes partidos) y, luego, se

⁴⁷ En *La Nación*, 25/3/1976.

posicionaron como los primeros “interlocutores válidos” reconocidos por el régimen, lo que les valió ser figuras en el período del Diálogo Político que el gobierno militar dio por iniciado a fines de 1978.

Pero más allá del acuerdo genérico con la dictadura, lo cierto es que desde el espacio liberal-conservador pronto comenzó a criticarse el rumbo económico. Así, pocos meses después del golpe, Álvaro Alsogaray (exministro de economía de Frondizi y Guido, y líder político de los sectores liberal-conservadores porteños) hizo saber su descontento por medio del diario *La Prensa*, basándose sobre todo en cuestiones de doctrina: para él Martínez de Hoz no era un “verdadero” liberal. De acuerdo con Alsogaray, si bien las intenciones del PRN debían ser acompañadas, el desarrollo del plan económico debía criticarse por “la extraordinaria creación de moneda, causa directa y única de la inflación, [...] y la ‘congelación’ del mercado de trabajo que, aparte de mantener en él una rigidez inaceptable, lleva en sí el germen de una explosión social”. En su opinión, el ministro se limitaba a “actuar de una manera pragmática y gradual” y no aplicaba un plan liberal real: era “evidente que el gobierno está siguiendo ‘en la práctica’, aunque tal vez ‘en teoría’ cree que no lo hace, un modelo estatista y dirigista”.⁴⁸

La creación del ministerio de Planeamiento, en setiembre de 1976, implicó un avance de los sectores nacionalistas. Los documentos elaborados en el ámbito de la nueva cartera dirigida por el general Genaro Díaz Bessone compartían ejes del diagnóstico liberal-conservador, como la crisis argentina como producto del agotamiento del proyecto Generación del 80 y el reclamo de recrear una elite conductora, pero expresaban posiciones corporativistas y fomentaban el intervencionismo estatal. Si, desde el desarrollismo industrialista, *Clarín* expresó su apoyo a la creación del ministerio (Borrelli, 2016; Sivak, 2013), en parte como una forma de mostrar su oposición a Martínez de Hoz, desde el liberalismo-conservador, las voces críticas apuntaron directamente sobre esta cartera, no ya por sus políticas sino por su mera existencia, que, entendían, denotaba una continuidad del estatismo y una mirada totalitaria sobre el orden socioeconómico. Así, un autor poco propenso a la intervención sobre temas económicos, como el filósofo Jorge Luis García Venturini, señalaba que se trataba de un ministerio incongruente con las bases procesistas, “un ministerio del pasado”.⁴⁹ *La Nación*, por su parte, marcaba que la cartera implicaba una nueva vía para el intervencionismo estatal y el crecimiento de la burocracia, y

⁴⁸ En *La Prensa*, 22/8/1976.

⁴⁹ *Ibidem*, 5/11/1976.

enfaticaba que el planeamiento era parte de una filosofía totalitaria. “Un contrasentido total”, resumía en su página editorial el diario, que en lo posterior sería muy enfático en marcar la poca claridad de los proyectos económicos.⁵⁰ En esa dirección, el economista y empresario Alberto Benegas Lynch (mecenas de emprendimientos liberal-conservadores como el Centro de Estudios para la Libertad, CEDEL) asoció los planes de Díaz Bessone con la “hipertrofia” estatal, reiterando las amenazas “totalitarias” de la planificación y los riesgos de que un intento tercerista allanase el camino a la izquierda.⁵¹ Alsogaray lo resumió así: “[La] planificación económica [...] significa siempre avanzar hacia el totalitarismo colectivista. Creer lo contrario es lo mismo que pensar en un círculo cuadrado”.⁵² Por la falta de resultados, pero sobre todo por la oposición interna, en 1977 Díaz Bessone renunció.

Canelo (2012) ha analizado los documentos reservados en los que, desde diversos ámbitos gubernamentales, se criticaba el proyecto del ministerio de Planeamiento con argumentos consonantes con el espacio liberal-conservador. A principios de 1978, el general Carlos Laidlaw tomó el cargo de ministro, pero en la reformulación ministerial de octubre de ese año la cartera fue anulada. El liberalismo-conservador había ganado la batalla puntual, pero sus actores marcaban que debía aprovecharse esta circunstancia y que Martínez de Hoz no avanzaba ni del modo necesario ni con el ritmo aconsejable: para este sector la falta de resultados de las medidas económicas no tenía otro origen que la falta de claridad en el modelo. Desde la perspectiva de Benegas Lynch, en lugar de adherir sin más a la filosofía liberal, Martínez de Hoz insistía en buscar caminos intermedios que desembocaban sistemáticamente en malos resultados: la falta de apego a la teoría tenía consecuencias prácticas negativas. Justamente por ello, el referente del CEDEL se manifestaba preocupado por el uso equívoco e indiscriminado del concepto “liberalismo”. Sostenía que “no todos le asignan al liberalismo el significado que le corresponde. Por eso, algunos, injustificadamente, lo fustigan, pretendiendo hacerlo responsable de las funestas consecuencias de políticas a todas luces antiliberales”.⁵³

Para Alsogaray, el problema era aún más grave, porque, en su opinión, al liberalismo se oponían no solo los populistas, los desarrollistas y los nacionalistas, sino también un conjunto de tecnócratas que no terminaban de entender que

⁵⁰ Editorial, *La Nación*, 9/12/1976. Críticas del mismo tenor expresaba el matutino *Ámbito Financiero* (Ruíz, 2005).

⁵¹ En *La Prensa*, 31/7/1977.

⁵² *Ibidem*, 14/11/1976.

⁵³ *Ibidem*, 27/7/1977.

el “liberalismo moderno” (expresión que hoy podría traducirse sin mayores problemas como neoliberalismo)⁵⁴ debía ser distinto tanto del intervencionismo gradualista de Martínez de Hoz como de la ortodoxia dogmática influida por el monetarismo de la Escuela de Chicago. Decía Alsogaray en una entrevista realizada en 1977 que era “indispensable recordarles a quienes atacan genéricamente al liberalismo” que sus señalamientos solo se aplicaban a “las viejas fórmulas del siglo XIX” y no al liberalismo que él defendía, inspirado en pensadores como Ludwig Mises o Friedrich Hayek (en De Pablo, 1977: 35). Consideraba que los economistas debían “abandonar su torre de marfil” y entrar en la órbita política “para desenmascarar en ella a los políticos improvisados en pseudo-economistas, a los ‘expertos’ de su ‘ciencia infusa superior’ y a todos aquellos que se entrometen en los grandes problemas de la acción humana a la manera de los ‘curanderos’ de la medicina”. Solo así, marcaba, los verdaderos economistas “aumentarán su influencia sobre los asuntos del Estado, lo cual es efectivamente imprescindible” (en De Pablo, 1977: 42).

¿Quiénes eran los expertos dogmáticos denostados por Alsogaray? Básicamente, los funcionarios del ministerio de Economía (como Estrada y el subsecretario de precios, Martín Braun Lasala) y del BCRA (como Diz y el asesor Ricardo Arriazu, que era el enlace directo con Economía), quienes, basándose en la perspectiva de economistas como Arnold Haberger y Milton Friedman, insistían en enfrentar la inflación con controles de la política monetaria y cambiaria. Estos dirigentes, a los que la prensa denominaba “moyanistas” o “Chicago boys”⁵⁵ no eran ideológicamente homogéneos, pero sí compartían un *ethos* (la mayoría de ellos eran jóvenes y provenían de familias de elite) y un funcionamiento muy compacto, “un verdadero grupo dentro del grupo que era el equipo económico”, como sostiene Túrolo (1996: 230). De acuerdo con la visión de los liberal-conservadores que se encontraban fuera del ministerio, estos jóvenes no eran por sí mismos los causantes de los males, sino que era clave el modo en que su perspectiva se combinaba con la de los “políticos improvisados en pseudo-economistas”, una figura que hacía directa referencia al propio Martínez de Hoz, al que se acusaba de tratar de contemporizar entre las demandas de distintos sectores económicos (sobre todo el agro y la industria),

⁵⁴ Sobre esta cuestión, ver Morresi (2009).

⁵⁵ El mote de “moyanistas” hacía referencia a que algunos de ellos habían sido estudiantes de Carlos Moyano Llerena en la Universidad Católica Argentina. El apelativo de “Chicago Boys” era más bien una importación del caso chileno, ya que, con la excepción de Diz y algunos funcionarios de segunda línea, ni en el gabinete de Martínez de Hoz ni en el BCRA abundaban los profesionales formados en la escuela de Chicago.

las recetas puntuales (no integrales) de los chicaguinos y las demandas militares de mayor gasto público y mantenimiento del nivel de empleo (lo que llevaba incluso a estatizar empresas en lugar de privatizarlas). Al respecto, Horacio García Belsunce (abogado, especialista en derecho tributario y miembro directivo de diversas organizaciones empresariales e intelectuales) marcó el problema en un balance publicado unos años después:

No querer definirse doctrinariamente y afiliarse al pragmatismo que es el símbolo de la “antidefinición”, puede atribuirse a dos motivaciones: a no tener ideas definidas, supuesto descartable en este caso dadas las relevantes y poco comunes dotes intelectuales del doctor Martínez de Hoz o bien al deseo de no comprometer posiciones para poder encuadrarse, llegado el caso, en ciertas variantes, teorías o posiciones que vean con agrado quienes ejerzan el poder. [Por eso] Una política económica no adscripta a una doctrina clara y definida no es sino una más de las terceras posiciones, híbridas por principio.⁵⁶

Para estos actores, el pragmatismo de Martínez de Hoz y su disposición a actuar de modo gradual quedaron claros cuando, a fines de 1978, anunció la “tablita” que, en teoría, iba a permitir que todos los sectores estuvieran satisfechos, ya que permitiría controlar la política cambiaria e inflacionaria sin necesidad de “enfriar” la economía. No obstante, el esquema requería una rígida política fiscal y reducción del gasto, aspectos que no podían garantizarse en un contexto en el que el gobierno incrementaba el gasto para una posible guerra con Chile y la fragilidad del régimen requería que el desempleo no se disparase. Por eso, en un artículo titulado gráficamente “Se cierne la tormenta”, Alsogaray presagiaba una crisis que sería fruto de no haber querido enfrentar seriamente el problema de la inflación con un modelo liberal moderno integral. El modelo de pautas, vaticinaba, estaba condenado a provocar recesión y, a la postre, a herir la capacidad de acción del PRN (Alsogaray, 1993).

Frente a la continuidad de la “tablita” y la ausencia de resultados, García Belsunce proponía “atacar a la inflación en sus causas, no en sus efectos”, lo que implicaba contener la demanda y el gasto público, y “atacar el problema sindical”. Desde su perspectiva, el problema del PRN no era solo económico, sino político: el aumento de la inflación había permitido que los sindicatos volvieran a tener protagonismo y participar de la puja distributiva.⁵⁷ En con-

⁵⁶ En *La Prensa*, 18/3/1981.

⁵⁷ *Ibidem*, 23/3/1979.

sonancia, Alsogaray insistía en señalar que el problema era el propio gobierno que no reducía suficientemente el ritmo de emisión monetaria ni dejaba que los salarios descendieran. Frente a las explicaciones de Martínez de Hoz acerca de la necesidad de llegar a acuerdos, Alsogaray preguntaba sardónicamente: “¿Quién se opone? ¿O es que esas resistencias se suscitan en el seno del gobierno?”.⁵⁸

Hacia fines de 1979, la relación entre la emisión monetaria y la inflación se transformó en el principal tópico de invectivas del espacio liberal-conservador: Alsogaray, Benegas Lynch y García Belsunce, entre otros,⁵⁹ coincidían en que la situación era crítica. En el mismo sentido, al participar del Diálogo Político, los líderes políticos liberal-conservadores como Sylvestre Begnis y Manrique pusieron en claro que, aunque reconocían el valor de lo actuado por las Fuerzas Armadas, pensaban que debía cambiarse el rumbo económico (González Bombal, 1991).

Para los sectores más duros del liberalismo-conservador, el diálogo político y la rearticulación partidaria y corporativa eran analizados como el primer paso de un posible regreso a la situación de 1973; es decir, a un traspaso de poder a los civiles que volviera a abrir la puerta al populismo peronista y al crecimiento de la izquierda. Haciendo gala de la retórica anticomunista cara al régimen, pero apuntando por esa vía a la gestión económica, Benegas Lynch proponía que “si se quiere fortalecer el frente anticomunista [...] es necesario privatizar las empresas estatales y llevar a cabo una reforma monetaria y bancaria que contemple la vuelta al patrón oro clásico para independizar la moneda y el crédito del poder político”. Sobre una posible política redistributiva, daba una sentencia doctrinaria lapidaria: “Por cuanto todos los procesos que buscan una ‘mejor distribución de la riqueza’ compulsivamente, sea mediante ‘reformas agrarias y urbanas’, impuestos discriminatorios y progresivos o cualquier otro método que se adopte al efecto, conspiran contra la formación en el país de nuevos capitales y se opone a la atracción de inversiones extranjeras”.⁶⁰ Alsogaray insistía al poco tiempo con sus críticas axiales: “A esta altura de los acontecimientos es claro que el actual sistema económico no es liberal ni de mercado, sino crudamente dirigista e inflacionario, aparte de pragmático y gradualista [...] incompatible con un régimen jurídico liberal como el de nuestra Constitución”.⁶¹ Para peor, la confirmación de Videla de que no se cambiaría el plan económico al menos hasta el próximo turno presidencial, era entendida como el colmo de la necesidad:

⁵⁸ *Ibidem*, 22/4/1979.

⁵⁹ Para una visión más amplia, ver Vicente (2015) y Morresi (2011).

⁶⁰ En *La Prensa*, 21/4/1980.

⁶¹ *Ibidem*, 14/6/1980.

Alsogaray se rendía y señalaba que “los dados están echados”. Para él ya nada podía hacerse por enderezar el timón económico; por eso, desde mediados de 1980, la principal preocupación pasó por rescatar al liberalismo de lo que se entendía una injusta asociación con las medidas de Martínez de Hoz. Alsogaray sostenía, así, que aquellos sectores que criticaban “la política económica liberal que se está aplicando” cometían una “aberración que verdaderamente clama al cielo”. “Tal vez el reproche mayor que deba hacerse a las actuales autoridades, es el de haber dado ocasión y justificativos a esos personajes [que critican al liberalismo]”, enfatizaba.⁶²

Así, para diversos actores del espacio liberal-conservador, el problema central de la gestión de Martínez de Hoz era no solo haber fallado en obtener buenos resultados, sino haberlo hecho en nombre del liberalismo. Alsogaray lo señalaba con patetismo cuando trazaba un sugerente diagnóstico sobre las relaciones de las elites liberales con el PRN y su fracaso:

Las crisis anteriores al 24 de marzo de 1976 siempre pudieron ser atribuidas al fracaso de nuestros adversarios y a la mentalidad antiliberal que los dominaba. Pero, ¿y ahora? ¿A qué y a quiénes atribuir la crisis actual? ¿Cómo explicar este nuevo y doloroso fracaso? Este interrogante nos plantea una grave cuestión. Si supuestamente es el “capitalismo” conducido por sus mejores hombres el que ha imperado, ¿cómo enfrentar de aquí en adelante al socialismo y en general a la ya citada [en esta columna] mentalidad antiliberal? *Esta situación es inédita en los últimos 35 años*. Está llena de peligros y acechanzas. Si la libertad económica en manos de conspicuos representantes de la clase rectora y de los círculos sociales más elevados nos ha conducido a una crisis como la presente, ¿no habrá llegado la hora de renegar de ella y de volver a cualquiera de las formas del totalitarismo?⁶³

Para Alsogaray, el pecado de Martínez de Hoz era mayúsculo. A pesar de pertenecer a la “clase rectora” de aquellos que disponían de recursos económicos y simbólicos, de gozar del apoyo presidencial, de tener a su disposición los resortes del poder por un extraordinariamente largo período de tiempo, no había ofrecido más que medidas puntuales, parciales, graduales y de compromiso. Así, había herido las chances de que el propio PRN (o sus posibles herederos) lanzaran un plan económico y político auténticamente liberal: “Lo ilusorio, por no decir utópico, reside en insistir en estos momentos en la economía liberal como la

⁶² *Ibidem*, 13/7/1980.

⁶³ *Ibidem*, 1/3/1981.

solución verdadera, cuando buena parte de la opinión pública cree, inducida por falsos profetas, que esa es la economía que se ha estado practicando en la Argentina durante los últimos cinco años”.⁶⁴

Sobre el final del ciclo dictatorial, cuando preparaba el lanzamiento de un nuevo partido político de centro-derecha, Alsogaray lamentaba que, por culpa de Martínez de Hoz, la nueva organización no pudiera llamarse liberal. Finalmente, el partido fue bautizado como Unión del Centro Democrático (Ucede). A la ceremonia de lanzamiento de la Ucede asistieron varios de los funcionarios que habían acompañado a Martínez de Hoz con lo que, tras los desencuentros, se ensayó una reconciliación entre los liberal-conservadores que habían formado parte del PRN y aquellos que habían criticado su política económica y el impacto político de esta. No obstante, vale la pena resaltar que el distanciamiento de Alsogaray con respecto a Martínez de Hoz acabaría siendo una carta de triunfo avanzado el proceso de transición: cada vez que los líderes políticos radicales o peronistas lo acusaban de connivencia con la dictadura, Alsogaray sacaba a relucir sus artículos críticos del PRN y su defensa de un “verdadero” liberalismo, estrategia que formó parte del repertorio de los actores analizados.

Después de la tormenta: las miradas retrospectivas de los protagonistas

A casi cuarenta años de finalizado el ciclo de Martínez de Hoz, parece existir cierto consenso en considerar que el plan económico que se inició en 1976 se enmarcó dentro de la cosmovisión liberal-conservadora⁶⁵ y fue un parteaguas en la historia económica argentina.⁶⁶ Veremos aquí el modo en que el ciclo de Martínez de Hoz fue percibido retrospectivamente por sus propios protagonistas

⁶⁴ *Ibidem*, 15/3/1981.

⁶⁵ Resultan notorios los desacuerdos respecto a cómo caracterizar el plan de Martínez de Hoz. Así, De Pablo (1981) sostuvo que era “ortodoxo”, mientras que Schvarzer (1983) afirmó que representó una “nueva ortodoxia”; Canitrot (1981) lo consideró una expresión del “liberalismo económico” y O’Donnell (1997) leyó las medidas de Martínez de Hoz como propias de la “economía neoclásica”. Más recientemente, Pucciarelli (2004) lo catalogó como “liberal corporativo”, Galafassi (2004) como “neoliberal”, y Palermo y Novaro (2003) lo calificaron (con más precisión) como “híbrido”.

⁶⁶ Algunos estudios (Schvarzer, 1983; Basualdo, 2006) subrayan la redistribución regresiva del ingreso y el proceso de desindustrialización, otros trabajos (Morresi, 2008; Fridman, 2008) apuntan a los cambios culturales y de comportamientos prohibidos en ese período.

y por sus principales críticos liberal-conservadores: como expondremos, las claves del debate dado en tiempos del PRN se mantuvieron como ejes ordenadores.

Martínez de Hoz dedicó tres libros a reflexionar sobre su gestión ministerial. El primero de ellos fue editado a pocas semanas del cambio de gobierno dictatorial. Con un prólogo brevísimo y elogioso firmado por Videla (en el que destaca el coraje, la firmeza y la autoridad moral de su ministro), el volumen, de tono descriptivo, está basado en documentos oficiales, a modo de memoria de gestión. En este sentido, ofrece explicaciones justificativas más bien generalistas a las medidas tomadas en distintos momentos y en diferentes sectores de la economía, con dos objetivos claros. Por un lado, defender las políticas implementadas como pasos necesarios para el objetivo final: el cambio de estructuras y mentalidades. Por el otro, establecer que los frutos del esfuerzo realizado solo podrían verse si las nuevas autoridades continuaban en el camino allí abierto. Buena parte de los argumentos parecen, como marcamos, dirigidos a un grupo pequeño, el de los liberal-conservadores, más que a la población en general. Así, por ejemplo, dedica más espacio a defender la pertinencia de ciertas estatizaciones (a las que se considera inevitables, aunque no deseadas) que a la razón por la que la política de privatizaciones era preferible o necesaria (Martínez de Hoz, 1981: 48-53).

Diez años más tarde, el exministro publicó un segundo libro de tono levemente más analítico. Ante un contexto nacional e internacional favorable a sus ideas (el gobierno del peronista Carlos Menem impulsaba medidas neoliberales, al tiempo que los llamados “socialismos reales” se derrumbaban), Martínez de Hoz planteó justipreciar su gestión. A su entender, pese a no haber podido desplegar sus propuestas en la medida deseable, su etapa podía considerarse exitosa: “Quizás a nosotros nos tocó romper el hielo y la resistencia inicial sin alcanzar plenamente nuestros objetivos. Pero el cambio de mentalidad que predicamos se fue produciendo inexorablemente” (Martínez de Hoz, 1991: 9). El texto, para enfatizar la posición de su autor, contiene datos que no se habían publicado previamente (lo que su autor justificaba como necesario durante el PRN); en este sentido, se concentró en detallar los límites que enfrentó. De acuerdo con Martínez de Hoz, pese al consenso en su propio entorno, el gobierno que integró no contó con la legitimidad política suficiente para llevar adelante una transformación completa como la que se requería. Desde su perspectiva, la disidencia entre las fuerzas armadas (y dentro de cada una de ellas) fue lo que impidió implementar algunas políticas que hubieran obtenido mejores resultados. Lamentaba no haber podido contar con “herederos del Proceso” que continuaran con sus pautas, pero destacaba que gracias a su gestión la

propia sociedad fue transformándose hasta “reclamar” políticas que iban en la dirección de su proyecto (Martínez de Hoz, 1991: 244-246).

En 2014, en un contexto en el que imperaba una visión social crítica sobre la herencia económica y social del PRN y sobre el rol de los civiles en el régimen,⁶⁷ los hijos de Martínez de Hoz publicaron un tercer libro de memorias del exministro que había fallecido en 2013 mientras cumplía una prisión preventiva por su vinculación con la prisión ilegal del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel (que estuvieron a disposición del gobierno *de facto* entre 1976 y 1977). Con una prosa más ágil y cuidada que en los volúmenes anteriores, en este texto póstumo, Martínez de Hoz brindó precisiones sobre los objetivos políticos de algunas medidas concretas (como la tregua de precios y la reforma financiera) y se permitió una perspectiva más crítica con respecto a los actores económicos de mayor peso quienes, a su entender, no se comportaron a la altura de las circunstancias.⁶⁸ El autor también abordó la autocrítica, al reconocer que las políticas adoptadas generaron ganadores y perdedores en un marco no equilibrado (Martínez de Hoz, 2014: 335-339). Varias de las claves señaladas por el exministro en este volumen ya habían sido expuestas por exmiembros de su gabinete en distintas ocasiones. Por ejemplo, en una extensa nota en *La Nación*, Juan Alemann sostuvo que el legado del período había sido altamente positivo, tanto en términos de infraestructura (rutas, usinas de energía), como en lo atinente a la política social (escuelas, hospitales). Para el economista, lo destacable de la gestión de Martínez de Hoz fue su capacidad de modernizar las industrias básicas y preparar al sector agrario para el crecimiento futuro. La falta de resultados inmediatos debía achacarse a la “recesión mundial” y a la resistencia de los militares (que se oponían a las privatizaciones).⁶⁹ Por su parte, Cadenas Madariaga sostuvo que los resultados magros del plan de Martínez de Hoz se debieron a decisiones equivocadas, que a su vez fueron el resultado de combates internos en el gabinete (Muleiro, 2001).

Pero si los protagonistas tuvieron una visión revisionista y en parte autocrítica de su gestión, los intelectuales y políticos del liberalismo conservador que habían estado fuera del ministerio de Economía durante el período 1976-

⁶⁷ Durante el período kirchnerista (2003-2015), esta visión más crítica no solo fue impulsada por los organismos de Derechos Humanos, sino también por el propio Poder Ejecutivo Nacional.

⁶⁸ En una nota concedida varios años antes, Martínez de Hoz había sido aún más gráfico: “Los agentes económicos, las instituciones del mundo financiero no estaban preparados para recibir esa libertad de acción que impusimos de golpe. Así se produjeron una gran cantidad de consecuencias no previstas que estropearon los propósitos originales” (*La Nación*, 29/7/1988).

⁶⁹ En *La Nación*, 7/4/1996.

1981 no tuvieron una actitud similar. Para García Belsunce (1982), Benegas Lynch (1989) y Alsogaray (1993), el accionar de Martínez de Hoz y sus colaboradores no admitía justificación, porque su pragmatismo y su gradualismo habían malogrado el modelo liberal y traicionado los objetivos del PRN. En este sentido, los liberal-conservadores mantuvieron su posición: continuaron justificando el accionar de los militares en el plano represivo (al sostener que las Fuerzas Armadas debían ser reconocidas por haber impedido que la Argentina cayera en el comunismo o continuara en la debacle populista), pero criticaron a Martínez de Hoz por no haber sabido o podido implementar un cambio económico cabalmente liberal, mientras el mismo exfuncionario aseguraba haber sentado las bases para una transformación cultural de largo plazo. En este punto, vistas las defensas y las críticas, a modo de interrogación final (y como línea de apertura para futuros trabajos), cabe preguntarse si lo que distingue al liberalismo-conservador argentino no es el ordenancismo político antes que una perspectiva económica clásicamente liberal, y si no fueron las consecuencias de esa relación las que explican los modos en que se planteó, en este espacio, la polémica sobre el plan de Martínez de Hoz y su implementación efectiva.

Una breve conclusión

En este artículo mostramos cómo el programa de Martínez de Hoz tuvo una recepción dispar en el espacio liberal-conservador: apoyo a sus planteos básicos, entendidos como puntos clave del proyecto del PRN, y críticas de diverso tono a las medidas tomadas. El eje de los cuestionamientos apuntó a desnudar el carácter escasamente liberal (o iliberal) de lo actuado desde el ministerio. A medida que el ciclo de Martínez de Hoz se cerraba, la preocupación se centró en desligar a su gestión del liberalismo. En todo momento, empero, sus críticos liberal-conservadores enfatizaron la necesidad de apoyar los puntos basales del “Proceso” y marcaron la necesidad de que la política económica se ajustase a ellos. Así, las desavenencias entre los liberal-conservadores dentro y fuera del gobierno (o en su interior) no deberían leerse como una simple puja de poder —leyendo las críticas apenas como herramientas para encumbrar algunos nombres por encima de otros o como fruto del “principismo” ideológico de quienes no tenían responsabilidad política—, sino como debates doctrinarios (teoría versus pragmatismo), entre métodos (el *shock* contra el gradualismo), entre vertientes de un mismo proyecto general (austriacos frente a chicaguinos, ortodoxos contra heterodoxos) y distintos abordajes (economistas versus polí-

ticos versus intereses sectoriales). Por ello, más allá del momento procesista, el debate liberal-conservador prosiguió disputando conceptos y reiterando análisis: la transición, los años del menemismo y la etapa del kirchnerismo fueron contextos en los que, tanto Martínez de Hoz como algunos de sus antiguos colaboradores y críticos, se sintieron en la obligación de discutir lo actuado y reflexionar sobre su programa político.

Colocar el foco sobre los debates en el interior del liberalismo-conservador nos permitió conocer mejor este proyecto político, pero también ofrecer un acercamiento a los vínculos entre el Estado y la sociedad civil en tiempos dictatoriales. Como vimos de modo sumario en este artículo, los actores del ministerio de Economía compartían ideas, rasgos y trayectorias (pertenencia a las clases altas o medias altas, una formación intelectual y académica similar, pasajes por los directorios de empresas privadas y cámaras empresariales, participación en distintas instancias del Estado en gobiernos militares o civiles tutelados, presencia en fundaciones y *think tanks* de orientación derechista) con sus críticos liberal-conservadores. Este acervo común nos habla no solo de una comunidad (sí que en tensión), sino también de una imbricación entre el Estado y una parte de la sociedad que contaba con recursos materiales y simbólicos para influir de una manera destacada incluso en un momento en el que las Fuerzas Armadas habían militarizado la mayor parte de la estructura estatal.

Asimismo, en estas páginas ofrecimos algunos elementos para analizar la problemática de la construcción de elencos y el desarrollo de planes gubernamentales en tiempos de dictadura. Martínez de Hoz tuvo autonomía para nombrar su gabinete, pero en lugar de establecer un grupo monolítico, formó un espacio de unidad heterogénea no exento de polémicas internas. Esta heterogeneidad, debe subrayarse, no era un mero reflejo de las pugnas militares o las de estos y los civiles, sino que mostraba la existencia de desacuerdos en el interior del espacio liberal-conservador. En este sentido, algunos de los disensos dentro del Ministerio replicaban las pugnas y debates de aquella parte de la sociedad civil que estaba presente en el Estado. Pero más allá de los desacuerdos, el gabinete económico actuó de forma compacta en su proyecto refundacional. En la visión retrospectiva de Martínez de Hoz y su equipo (que, como vimos, fue mutando entre 1981 y 2014), las limitaciones en virtud de la presencia de nacionalistas y populistas en las Fuerzas Armadas y la falta de colaboración por parte del empresariado no impidieron alcanzar el objetivo central del plan, el cambio de mentalidades. Esta centralidad de la política en el posicionamiento económico, lúcidamente señalada por trabajos pioneros durante el propio PRN, marca tanto el sentido primario del plan del ministro como el núcleo polémico

de los debates en el espacio liberal-conservador: desde la perspectiva de Martínez de Hoz y su equipo, los ataques a la gestión por parte de miembros destacados del liberal-conservadurismo no tomaban en cuenta la envergadura de lo conseguido, ya que en ese ciclo se habían sentado las bases para una transformación económica, política y social de la Argentina.

Bibliografía

- AA. VV. (1981-1982). *Juicio de residencia a Martínez de Hoz* (2 vols.). Buenos Aires: El Cid.
- Adamovsky, Ezequiel (2009). *Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003*. Buenos Aires: Planeta.
- Alsogaray, Álvaro (1993). *Experiencias de cincuenta años de política y economía argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Avenburg, Alejandro (2015). “Una dictadura fragmentada: conflictos intramilitares y las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante la presidencia de Videla”. *Postdata*, vol. 20, n° 2, pp. 441-472.
- Basualdo, Eduardo (2006). *Estudios de historia económica argentina desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI-FLACSO.
- Benegas Lynch, Alberto (1989). *Por una Argentina mejor*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Borrelli, Marcelo (2016). *Por una dictadura desarrollista. Clarín frente a los años de Videla y Martínez de Hoz. 1976-1981*. Buenos Aires: Biblos.
- Botana, Natalio R. (1985). *El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Burkart, Mara (2016). *De Satiricón a Humor. Risa, cultura y política en los años setenta*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Canelo, Paula (2008a). *El proceso en su laberinto: La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- (2008b). “Las dos almas del Proceso. Nacionalistas y liberales durante la última dictadura militar”. IV° Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Rosario.

- (2012). “Los desarrollistas de la ‘dictadura liberal’. La experiencia del Ministerio de Planeamiento durante el Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina”. *Anos 90*, vol. 19, n° 35, pp. 169-190.
- (2016). *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983) a 40 años del golpe de Estado*. Buenos Aires: Edhasa.
- Canitrot, Adolfo (1980). “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”. *Desarrollo Económico*, vol. 19, n° 76, pp. 453-475.
- (1981). “Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981”. *Desarrollo Económico*, vol. 21, n° 82, pp. 131-189.
- De Pablo, Juan Carlos (1977). *Los economistas y la economía argentina*. Buenos Aires: Macchi.
- (1981). *El proceso económico: como lo vi y como lo veo*. Buenos Aires: Ediciones El Cronista Comercial.
- (1987). *Proceso a la economía del Proceso*. Actas de las Segundas Jornadas Anuales de Economía. Montevideo: Banco Central del Uruguay.
- Franco, Marina (2012). *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- (2016). “La noción de ‘dictadura cívico-militar’”. Flier, P (ed.), *Mesas de debate de las VII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*, pp. 69-90. La Plata: UNLP.
- Fridman, Daniel (2008). “La creación de los consumidores en la última dictadura argentina”. *Apuntes de Investigación del CECYP*, n° 14, pp. 71-92.
- Friedman, Milton (1985). *Capitalismo e Libertad*. San Pablo: Nova Cultural.
- Galafassi, Guido (2004). “Argentina: Neoliberalismo, utilitarismo y crisis del Estado-Nación capitalista”. *Herramientas*, n° 26.
- García Belsunce, Horacio A. (1982). *Política y economía en años críticos*. Buenos Aires: Troquel.
- Ghio, José María (2007). *La Iglesia católica en la política argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- González Bombal, Inés (1991). *El diálogo político: la transición que no fue*. Buenos Aires: CEDES (mimeo).

- Harbour, William R. (1985). *El pensamiento conservador*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Heredia, Mariana (2015). *Cuando los economistas alcanzaron el poder (o cómo se gestó la confianza en los expertos)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Jordán, Alberto R. (1993). *El Proceso 1976/1983*. Buenos Aires: Emecé.
- Levín, Florencia (2013). *Humor político en tiempos de represión. Clarín, 1973-1983*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lvovich, Daniel (2007). “Actitudes sociales durante la dictadura militar argentina: Las organizaciones sociales y el diálogo político de 1980”. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional “Problemas de historia reciente en el Cono Sur”, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Lvovich, Daniel, y Rodríguez, Laura G. (2011). “La Gendarmería Infantil durante la última dictadura”. *Quinto Sol*, vol. 15, n° 1, pp. 1-21.
- Mansilla, César L. (1983). *Las fuerzas de centro* (29). Buenos Aires: CEAL.
- Martínez de Hoz, José Alfredo (1981). *Bases para una argentina moderna (1976-1980)*. Buenos Aires: Emecé.
- (1991). *Quince años después*. Buenos Aires: Emecé.
- (2014). *Más allá de los mitos. Memorias y revelaciones del ministro más polémico de la historia argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Middlebrook, Kevin J. (2000). “Introduction: Conservative Parties, Elite Representation, and Democracy in Latin America”. *Conservative parties, the right, and democracy in Latin America*, pp. 1-50. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Morresi, Sergio D. (2008). *La nueva derecha argentina y la democracia sin política*. Buenos Aires-Los Polvorines: Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- (2009). “Neoliberales antes del Neoliberalismo”. En Soprano, Germán y Frederic, Sabrina (eds.), *Política y variaciones de escalas en el análisis de la Argentina*, pp. 321-350. Los Polvorines-Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo.
- (2010). “El liberalismo conservador y la ideología del Proceso de Reorganización Nacional”. *Sociohistórica*, n° 27, pp. 101-133.

- (2011). “Del MON a la Ucede. Las derechas liberales entre el Proceso de Reorganización Nacional y la transición a la democracia”. Ponencia presentada en las XIIIª Jornadas Interescuelas de Historia, San Fernando del Valle de Catamarca, UNCA.
- Muleiro, Vicente (2001). “Entre las vacas y el matadero (Entrevista a Mario Cadenas Madariaga)”, *Clarín*, 18/3/2001.
- (2011). *1976: El golpe civil*. Buenos Aires: Planeta.
- Nállim, Jorge (2014). *Transformación y crisis del liberalismo. Su desarrollo en la Argentina en el período 1930-1955*. Buenos Aires: Gedisa.
- Neustadt, Bernardo (1977). “El Poder: Un año más tarde”. *Revista Crecer*, año 2, n° 24, pp. 11-12.
- Obregón, Martín (2005). “La Iglesia argentina durante el ‘Proceso’ (1976-1983)”. *Prismas, Revista de historia intelectual*, n° 9, pp. 259-270.
- O’Donnell, Guillermo A. (1997). *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.
- Palermo, Vicente, y Novaro, Marcos (2003). *La dictadura militar, 1976-1983: del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.
- Plehwe, Dieter; Walpen, Bernhard y Neunhöffer, Gisela (eds.) (2005). *Neoliberal hegemony: a global critique*. Milton Park, Abingdon y Nueva York: Routledge.
- Pucciarelli, Alfredo R. (ed.) (2004). *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Quiroga, Hugo (2004). *El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens-Fundación Ross.
- Ruíz, Fernando J. (2005). *El señor de los mercados: Ámbito financiero, la City y el poder del periodismo económico de Martínez de Hoz a Cavallo*. Buenos Aires: El Ateneo.
- Rémond, René (2007). *Les droites aujourd’hui*. París: Éd. L. Audibert.
- Ryan, Alan (1995). “Liberalism”. En Goodin, R. y Pettit, P. (eds.), *A companion to contemporary political philosophy*, pp. 291-311. Cambridge, Mass: Blackwell Press.
- Schvarzer, Jorge (1983). *Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica*. Buenos Aires: CISEA.

- Seoane, María y Muleiro, Vicente (2001). *El dictador: la historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Sivak, Martín (2013). *Clarín, el Gran Diario Argentino. Una historia*. Buenos Aires: Plantea.
- Suriano, Juan (2005). *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Tullock, Gordon (1988). *Rent seeking*. Hampshire: Edward Elgar Publishing.
- Túrolo, C. M. (1996). *De Isabel a Videla: los pliegues del poder*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Verbitsky, Horacio, y Bohoslavsky, Juan Pablo (eds.) (2013). *Cuentas pendientes: los cómplices económicos de la dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Vicente, Martín A. (2011). “¿Tú también, Bruto?”. Críticas liberales a un programa liberal: el plan de Martínez de Hoz según Alsogaray, Benegas Lynch y García Belsunce en *La Prensa*”. *Question*, n° 32, pp. 1-14.
- (2014). *Una opción, en un lugar de un eco. Los intelectuales liberal-conservadores en la Argentina, 1955-1983*. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- (2015). *De la refundación al ocaso: los intelectuales liberal-conservadores ante la última dictadura*. La Plata-Los Polvorines: Universidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Yofre, Juan Bautista (2010). *Fuimos todos: cronología de un fracaso, 1976-1983*. Buenos Aires: Sudamericana.

Tercera parte
Sociabilidades, asociacionismos
y micropolítica

Un acercamiento a las dinámicas de subsidiariedad del Estado a escala local. General Sarmiento, 1973-1983

Guadalupe Ballester

En un libro pionero, publicado en 1988, Inés González Bombal analiza las protestas barriales acontecidas en el Gran Buenos Aires que fueron conocidas como “los vecinazos”. En esa publicación, explica los conflictivos vínculos que ligán asociacionismo y gobierno local, y ofrece una caracterización sobre la relación entre las organizaciones intermedias y los municipios:

En torno al poder municipal y bajo su tutela, gira el universo asociativo que forman a la sociedad local de los partidos suburbanos del Gran Buenos Aires. En la escena municipal adquieren gran significación estas instituciones. [...] un análisis de la política en la vida local debe tomarlas en cuenta [...] Son en extremo dependientes del Estado municipal en términos de regulación, reconocimiento legal, subsidios económicos (González Bombal, 1988: 34).

En este artículo nos interesa retomar esta caracterización más general sobre los partidos del Gran Buenos Aires, a fin de complejizarla a partir de un estudio acotado al caso concreto de General Sarmiento. Indagar las estrategias, procesos y actores de la micropolítica (Canelo, 2015a) permite desentrañar cómo se comportaron numerosos actores de la sociedad civil, particularmente las entidades intermedias del asociacionismo vecinal local, y cuál fue el nivel de participación de estos individuos o sus grupos en las decisiones de gobierno.

A partir desde estas primeras ideas, haremos foco en la relación establecida entre el municipio de General Sarmiento y la Asociación de Protección y Ayuda al Discapacitado (APAD), especialmente durante los primeros años de funcionamiento de la asociación (1973-1983). En particular, nos concentraremos en la implementación de políticas públicas de apoyo a la entidad y sus consecuencias en la relación con el municipio. Nos interesa analizar los vínculos institucionales y personales que se pusieron en juego en la relación entre APAD y el municipio

para examinar cómo y por qué el gobierno local alentó la acción vecinal en determinadas áreas y de qué manera el asociacionismo, a partir del ejemplo de APAD, se integró en esas políticas. Compartimos que esta aproximación a la vida política local anclada en el asociacionismo y en el gobierno municipal resulta particularmente interesante para analizar este período, ya que:

En la escena municipal adquieren gran significación estas instituciones. [...] estas asociaciones están atravesadas por los conflictos y los intereses contrapuestos que emergen de las diferentes posiciones que ocupan sus representados en las localidades suburbanas. Son en extremo dependientes del Estado municipal en términos de regulación, reconocimiento legal, subsidios económicos (González Bombal, 1988: 34).

La hipótesis que sostenemos es que en las políticas municipales ligadas al asociacionismo pesaron tanto los aspectos ideológicos como las preocupaciones coyunturales. A la vez, creemos que los vínculos institucionales y personales establecidos entre la dirigencia de la entidad y el municipio se mantuvieron más allá de los recambios de gobierno. Las asociaciones pusieron en juego estrategias y acciones que las vuelven sujetos activos y no meros receptores de las medidas municipales.

A partir del estudio del asociacionismo y el municipio, es posible introducirnos en una multiplicidad de temas y problemas: en primer lugar, ahondar en la idea del municipio como un espacio central en los planes políticos y en las políticas generales de la dictadura. Diversos autores han señalado que, para las Juntas Militares, la escala municipal era un punto de negociación y de actividad de suma relevancia por ser considerada germen, base y escuela de la “verdadera” democracia a construir (González Bombal 1988; Lvovich, 2010; Rodríguez, 2011 y 2012; Canelo, 2015 a y b). En segundo lugar, el asociacionismo fue un actor de especial importancia para la vida política local. Clausurados los espacios partidarios y las discusiones políticas abiertas, los espacios de sociabilidad se volvieron protagonistas de las luchas por el poder local (Sánchez, 2009; Ballester, 2016). Compartimos que en los “espacios vecinales se desplegaban los vínculos e intercambios sociales más significativos para la comunidad. [...] fueron instrumentos eficaces para concretar la mediación entre la sociedad y el Estado” (Gauto, 2018: 110). Incluso los intendentes nombrados por el régimen debían ostentar una estrecha vinculación con las asociaciones locales y un amplio reconocimiento de la comunidad o de sus voceros (Lvovich, 2010; Canelo 2015a; Ballester, 2016; Catoira, 2017). Esto nos lleva a discutir un tercer punto que

está presente en el trabajo de González Bombal (1988): si el asociacionismo funcionó también como una representación parcial y unidimensional del complejo entramado de la sociedad local entonces su estudio permite reconocer algunos de los comportamientos, reclamos y estrategias que se pusieron en marcha a lo largo de todo el período y, a la vez, reflexionar sobre cómo la sociedad local se adaptó, o no, a los cambiantes gobiernos y funcionarios.

Finalmente, nos interesa adentrarnos en uno de los aspectos que hasta ahora ha sido menos explorado en el marco de nuestra investigación mayor:¹ ¿cómo se pensaron e implementaron las políticas municipales vinculadas al asociacionismo?, ¿cuáles fueron sus características, posibilidades y límites?, ¿respondieron a diagramaciones más amplias?, ¿cuáles fueron sus bases ideológicas?

El caso de APAD permite indagar un tipo especial de asociación denominada “de ayuda social” (Devoto, 1985: 142) que, por sus propias características, se encuentra estrechamente ligada a las políticas públicas, especialmente en el nivel local. Como desarrollamos en otros trabajos, sostenemos que los lazos institucionales y personales entre la dirigencia de las entidades y el gobierno municipal en parte explican el derrotero de cada asociación (Ballester, 2016). Enfocarnos en APAD y en su relación con el ejecutivo local permite aproximarnos a la instauración de políticas de subsidiariedad del Estado a escala local. Las preguntas que orientan nuestra indagación son variadas: ¿por qué se creó una institución como APAD?, ¿cómo se desarrolló el vínculo entre APAD y el gobierno local?, ¿qué medidas tomó el Ejecutivo local en pos de esta entidad?

La periodización demarcada, 1973-1983, responde a dos intereses. Por un lado, analizar el funcionamiento y las medidas del gobierno municipal en dos contextos distintos, como la democracia y la dictadura, a fin de reflexionar sobre el impacto de la instauración del régimen militar, las continuidades y rupturas. El surgimiento, accionar y funcionamiento de las sociedades y asociaciones de beneficencia a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX ha sido objeto de estudio de la historiografía argentina de manera prolífica (a modo de ejemplo, es posible citar a Thompson *et al.*, 1995; Billorou y Rodríguez, 1996; Dalla-Corte *et al.*, 2014; Sosa, 2015; Toussounian, 2015). Sin embargo, el desarrollo, sostén y crecimiento de esas instituciones en el pasado reciente no ha sido indagado en profundidad. Por otro, nos proponemos aquí estudiar la primera década de funcionamiento de la entidad. Si bien 1983 es un momento

¹ Este artículo retoma algunas de las ideas que fueron discutidas en mi tesis de maestría defendida en 2016 y adelanta algunas de las líneas que desarrollaré en mi tesis doctoral actualmente en curso. Agradezco los comentarios que Ernesto Bohoslavsky, Daniel Lvovich y Valeria Manzano realizaron sobre las primeras versiones de este texto.

clave en lo que refiere a política nacional, provincial y municipal, en el caso específico de APAD, a inicios de 1984, se produce el recambio de la Comisión Directiva y una nueva diagramación de cargos y líderes, por lo que en 1983 cerró su primer ciclo de vida.

Sin desconocer los alcances y consecuencias de las políticas represivas y de la violencia que atravesó este período de la historia argentina, también es necesario pensar más allá del fenómeno puramente represivo. Estudiar otras políticas públicas permite complejizar el análisis sobre las medidas llevadas adelante tanto antes como durante la dictadura. A la vez, el estudio del asociacionismo posibilita conocer mejor a los actores no estatales que tuvieron injerencia en la diagramación de la agenda política y pública. En esta línea, la escala local nos adentra en un nivel del Estado que si bien responde a diagramaciones nacionales, también puso en juego objetivos y dinámicas que le son propias.

Además de pensar en cómo se estableció el vínculo político entre APAD y el municipio de General Sarmiento en líneas generales, nos interesa pensar aquí, en particular, la implementación de políticas en pos de la entidad. A la vez, el nivel municipal es la principal arena de conflicto entre las elites locales. Ese juego de intereses entre la sociedad y los funcionarios se pone de relevancia a partir de la mayor cercanía con la población, los lazos estrechos con las asociaciones comunales y las trayectorias cruzadas entre el mundo estatal y no estatal de muchos de los dirigentes, que tras su paso por “la escuela de funcionarios” (González Bombal, 1988) se volvían protagonistas de la ejecución de estrategias (Ballester, 2016 y 2018).

Utilizaremos un corpus variado de fuentes. En primer lugar, fuentes de la entidad tanto inéditas (estatutos y libros de actas) como editadas en conmemoración de diversos aniversarios. En segundo lugar, los digestos y resoluciones del gobierno municipal de General Sarmiento (Archivo Histórico de la Municipalidad de San Miguel). En tercer lugar, la prensa local (particularmente el periódico *Síntesis*). En cuarto lugar, entrevistas y testimonios de miembros de APAD, y de otras asociaciones y vecinos de la localidad.

El artículo se organiza en cuatro apartados. Primero, recapitularemos las principales definiciones y aportes en torno a la subsidiariedad del Estado. Segundo, haremos una breve referencia al proceso de creación de la asociación e indagaremos los vínculos establecidos entre la dirigencia de la entidad y el gobierno local. Tercero, enfocaremos en las medidas llevadas adelante por el municipio y las tareas de APAD a lo largo del período. Por último, ofreceremos algunas reflexiones finales.

Subsidiariedad del Estado: algunas ideas claves

La noción de subsidiariedad del Estado excede ampliamente las fronteras de nuestro país y se ha utilizado y resignificado desde perspectivas muy diversas. En este apartado nos proponemos desagregar algunas de las nociones básicas a fin de contextualizar nuestro estudio de caso en este entramado más amplio. El núcleo central de la subsidiariedad del Estado es la relevancia de la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas sociales y se remonta a diversas encíclicas como *Rerum Novarum* (1891), *Quadragesimo Anno* (1931), *Mater et Magistra* (1961) y *Pacem in Terris* (1963). Este principio de la Doctrina Social de la Iglesia, a partir de los años cincuenta, se convirtió en la nueva base sobre la que anclar las políticas públicas en la Argentina y en otros países de la región.²

Desde una primera aproximación general, la noción de subsidiariedad afirma que el Estado (especialmente en su nivel nacional, pero veremos que esto se amplió a todos los niveles) no debe intervenir en aquellos problemas que la comunidad (a través de sus organizaciones) puede resolver por sí misma. El Estado debe apoyar a las instituciones menores para resolver, atender y dar respuesta a todo aquello que la sociedad le demanda y sobre lo que puede ocuparse sin necesidad de una intervención directa.

Esta relación entre Estado y organizaciones (o, en nuestro caso, asociaciones) obliga a pensar un doble juego. Por un lado, el Estado brinda apoyo económico, legal e institucional a entidades sociales. Por otro, aleja al Estado del control y seguimiento de esas organizaciones. El principio de subsidiariedad del Estado se encuentra en el extremo opuesto del Estado asistencialista y permite reducir el aparato burocrático.

Este paradigma propone incentivar la participación de actores no estatales y fomentar la iniciativa privada para resolver las demandas de la comunidad. De este modo, dentro de la noción de subsidiariedad del Estado se articulan en realidad conceptos centrales que la política de la segunda mitad del siglo xx retomó de la Doctrina Social de la Iglesia: solidaridad, supletoriedad, subsidiariedad, entre otros. Sin embargo, esa primera mirada filosófica y eclesialista convivió después con otras perspectivas jurídicas y políticas.

A los fines de este trabajo, nos interesa resaltar dos momentos de la historia argentina en los que la noción de subsidiariedad, y sus conceptos asociados,

² Para un estudio en profundidad y comparativo recomendamos particularmente el trabajo de Gabriela Gomes (2016).

tuvieron un impacto directo en la diagramación de políticas públicas y en la concepción del Estado.

En primer lugar, la noción de subsidiariedad fue una premisa de relevancia durante la llamada “Revolución Argentina”. Una particularidad de la utilización del principio de subsidiariedad durante este período es que “funcionó como articulador entre los liberales y los nacional-corporativistas, ya que fue defendido por ambos sectores con fuentes doctrinarias distintas pero conciliables; eso permitió que no hubiera una oposición decisiva a las políticas económicas liberales” (Gomes, 2016: 31). A partir del uso de las encíclicas papales se vincularon los principios de solidaridad, participación y subsidiariedad. El Estado alentaba para que las organizaciones de la comunidad se encargaran de gestionar y resolver los problemas de manera autónoma. De este modo, las asociaciones intermedias se volvían las protagonistas de la vida social restándole espacio a la injerencia estatal, particularmente en su escala nacional (Giorgi, 2014; Gomes, 2016). En sintonía, otros proponen que “la subsidiariedad en el rol del Estado da lugar a la capacidad de autorregulación y organización de la sociedad civil. Esta opción –minoritaria y no hegemónica– se sustenta en la participación y el pluralismo comunitario” (Correa y Giovine, 2010: 3). Desde esta perspectiva, la subsidiariedad no es una opción para solucionar problemas de financiamiento o de mal funcionamiento, sino que permite que el Estado apoye económica e institucionalmente iniciativas que surgen de la población.

En el nivel municipal, la aplicación de este principio tuvo dos consecuencias claves: por un lado, reducir las funciones del Estado y, por otro, fortalecer las organizaciones comunitarias (Gomes 2016: 23 y 66). Durante el gobierno de Onganía y desde una mirada corporativista, se incentivó un Estado subsidiario que depositó en la “comunidad” y sus organizaciones buena parte de las tareas que debían garantizar el “bien común”. De allí que el vínculo entre Estado y organizaciones intermedias, como las asociaciones, se anclara en cinco principios interconectados:

El de la subsidiariedad social que le impone al Estado la obligación de abstenerse de actuar donde ya actúa un cuerpo social intermedio; el de la supletoriedad, que le impone al Estado la obligación de ayudar a los cuerpos sociales inferiores para que puedan cumplir con sus objetivos; el de la coordinación que reserva al Estado la función de coordinar la acción de los diversos niveles de realización de los servicios sociales; el de promoción y fomento de las asociaciones voluntarias que enriquecen la sociabilidad organizada y permiten una más plena realización de la personalidad humana; el

de controlador, para que se cumplan las disposiciones legales y estatutarias (Gomes, 2016: 93).

Por ello, las bases ideológicas de la Revolución Argentina combinaron una tradición católica, revitalizaron la importancia de la autorganización y basaron la descentralización en el principio de subsidiariedad combinándolo con la descentralización, regionalización y municipalización, de modo tal de “crear un nuevo orden centrado en los municipios” (Gomes, 2018: 79).

Durante la última dictadura, y en diálogo con propuestas de corte neoliberal, este principio dio paso a justificaciones para la reducción del aparato estatal y la privatización de servicios públicos. A partir de este sustento teórico, veremos que a lo largo de las décadas, y en particular en contextos liberales y neoliberales, la política argentina hizo uso de estas premisas a fin de lograr distintos objetivos, como una reducción del Estado y una prevalencia del mercado. En los años setenta y ochenta, el principio de subsidiariedad se conjugó con una política económica que también incentivaba la descentralización y la privatización. La subsidiariedad, en el marco de la política dictatorial y, especialmente, en la política económica de Martínez de Hoz:

Proclamaba la reducción del aparato productivo estatal y la promoción de la empresa privada. Aplicada a los municipios, se asumía que el Estado (nacional o provincial) debía “descentralizar” servicios y funciones [...] Si los gobiernos (provinciales o municipales) tenían dificultades para sostener económicamente los servicios transferidos, debían “privatizarlos” (Rodríguez, 2009: 371).

Durante la última dictadura, la subsidiariedad del Estado, junto con la apertura de la economía, fue uno de los principios básicos de la política económica, especialmente en la gestión de Martínez de Hoz (Schvarzer, 1986: 110). El principio de subsidiariedad abarcó entonces cuatro posibles medidas: desregulación, desresponsabilización, compensación/colaboración y privatización. En este nuevo uso del principio de subsidiariedad, el Estado toma un lugar secundario en pos del mercado, quien debe determinar qué iniciativas serán exitosas a lo largo del tiempo. En esta nueva concepción del Estado subsidiario se atravesaban distintas etapas. En primer lugar, los servicios fueron transferidos o descentralizados y, en segundo lugar, si no podían mantenerse se sugería que fueran privatizados. Esta descentralización funcionaba tanto desde el Estado nacional al provincial como desde el provincial al municipal: “El principio

de subsidiariedad imponía que el Estado provincial no realizara todo aquello que los municipios se encontraban en condiciones de resolver” (Rodríguez, 2010: 434). Paula Canelo (2015a) sostiene que estas políticas de municipalización fortalecieron el poder de los intendentes y alimentaron una dirigencia local adicta (Canelo, 2015a).

Durante el régimen militar iniciado en 1976, la noción de subsidiariedad operó en modo distinto a la etapa dictatorial previa. Desde una matriz económica liberal, anclada en la descentralización y la privatización, la subsidiariedad aplicada a los municipios “asumía que el Estado debía descentralizar servicios y funciones a las distintas jurisdicciones sin pasar los recursos correspondientes” (Rodríguez, 2012: 55). El “principio básico de la subsidiariedad” resaltaba un empoderamiento de la escala municipal, pero no aclaraba las fuertes consecuencias económicas que este traspaso, no siempre acompañado de recursos financieros, traería a los gobiernos locales. Esto se evidencia en el texto de la Ley N° 9300, publicada el 10 de abril de 1979, en la que se afirmaba: “El gobierno provincial promueve así una reforma [...] propendiendo simultáneamente a la concreción de su descentralización operativa en beneficio de un aumento del poder municipal [...] y afianzando el principio de subsidiariedad como pilar básico del accionar gubernamental”.³ Como ha señalado Inés González Bombal, hacia finales de la dictadura el incremento de la cantidad de cuotas de los impuestos municipales impulsó las manifestaciones de “los vecinazos”. En ese caso, la subsidiariedad, lejos de reducir los gastos, aumentó de manera considerable el déficit comunal (González Bombal, 1988: 30).

Esto, entonces, nos presenta otro problema, ya que además de definir si las políticas públicas y los vínculos entre asociacionismo refieren o no al principio de subsidiariedad también debemos identificar desde qué perspectiva lo hacen y en qué se basan. A fin de incluir las ideas que se nuclearon en torno al principio de subsidiariedad proponemos revisar las dinámicas de subsidiariedad que se pusieron en marcha en el gobierno municipal. Creemos que más allá de los principios y núcleos ideológicos que se organizaron en torno a la subsidiariedad también deben reconocerse las distintas perspectivas y opciones prácticas que se habilitaron. Revisar la subsidiariedad a partir de sus dinámicas nos permite evidenciar las negociaciones y estrategias que efectivamente existieron, más allá de lo normativo y lo discursivo. Esto resulta particularmente relevante en la escala en la que las políticas implementadas se vinculan mucho más con situa-

³Ley N° 9300, *Boletín oficial* N° 19011, 10/4/1979. Citado en Rodríguez (2012).

ciones coyunturales que con grandes proyectos de largo alcance. Volveremos sobre estas ideas a partir del caso que aquí nos interesa.

En este punto, entonces, el asociacionismo se vuelve un actor clave a la hora de entender el juego político en el contexto específico de la dictadura, en la que los partidos políticos e instancias democráticas estaban clausurados. Durante la dictadura, se dio “un modo particular de existencia política, cuando desaparecida esta de la escena pública su lugar es ocupado por un juego de intereses particulares de la sociedad y de los funcionarios gobernantes” (González Bombal, 1988: 49). Atender a las dinámicas de subsidiariedad del Estado en su escala local puede iluminar nuevas preguntas. Compartimos que “no resulta suficiente considerar las intenciones del régimen militar con relación a las asociaciones [...] sino que se deben analizar los distintos tipos de respuestas que estas dieron ante sus convocatorias” (Lvovich, 2010: 418). Nos proponemos aquí ver ambas caras de esta moneda. En los siguientes apartados, indagaremos, en primer lugar, la historia y funcionamiento de APAD durante la década analizada, y luego, las medidas municipales que incentivaron el desarrollo de APAD para satisfacer una demanda social y el uso que los dirigentes de la asociación hicieron de estas políticas.

Asociacionismo en General Sarmiento: el caso APAD

Antes de abocarnos de lleno a analizar los vínculos entre APAD y el gobierno municipal es necesario contextualizar el caso que hemos elegido en este trabajo. En primer lugar, General Sarmiento es un expartido⁴ del noroeste del Gran Buenos Aires ubicado a 35 km de la Capital Federal y a 88 km de La Plata (capital provincial). Se calcula que, a inicios de la década del ochenta, la población superaba el medio millón de personas, lo que representaba más del 5% del total del Gran Buenos Aires (GBA).

El asociacionismo fue un actor clave a lo largo de toda la historia del partido (Sánchez, 2009; Ballester, 2016). Si bien las asociaciones de carácter étnico (Devoto, 1985) fueron preeminentes, también se desarrollaron clubes deportivos, asociaciones de beneficencia y entidades de base de oficio (Munzón,

⁴ En 1994 el territorio de General Sarmiento se dividió en los actuales partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. La división obedeció, fundamentalmente, a motivos económicos (reducción de gasto público y reorganización de las partidas presupuestarias) y políticos (reorganización de la distribución de electores, conformación de nuevas alianzas políticas, etcétera). Para más detalles, ver Soria (2005).

2007). En ese mapa de asociaciones, en los años setenta, se insertó APAD. Nos interesa abocarnos a esta institución en particular ya que, debido a las características propias de las entidades de ayuda social, su vínculo con el municipio resulta vertebral, tanto en lo económico como en lo institucional. Además, APAD puso en marcha diversas estrategias, en su gran mayoría exitosas, para obtener recursos para la entidad. Esto ejemplifica lo que ya señalamos sobre un asociacionismo protagonista de las discusiones políticas y no mero receptor de ayuda municipal. La agencia de la entidad obliga a pensar que las políticas en pos del asociacionismo no fueron siempre implementadas “desde arriba”, sino que respondieron a fuertes acciones impulsadas “desde abajo”.

En 1973 se iniciaron las primeras reuniones y tratativas formales para crear APAD. En sus comienzos, se proponía continuar el trabajo que se había iniciado en 1958 con la creación y puesta en marcha de la escuela de educación especial “Mi encuentro”, la que, en los años setenta, era una institución muy importante en la zona a la que asistían más de setenta niños y adolescentes. Motivados por la necesidad de darle continuidad al trabajo con los estudiantes que por su edad debían abandonar la escuela, surgió la preocupación de crear otro tipo de asociación: “*Todo empezó por la necesidad de continuar con lo que hacían en Mi Encuentro que tenía distintos niveles de discapacitados. El tema era que terminaban la escuela y no tenían qué hacer con ellos*”.⁵ Durante los años cincuenta, la preocupación se centró en la educación de las personas con discapacidad; una vez alcanzado ese objetivo, surgieron nuevas demandas.

En 1976 se creó oficialmente la asociación y, como primera medida, se conformó una Comisión Municipal o Comisión Fundadora⁶ (en las actas es nombrada indistintamente) en la que se congregaron docentes de educación técnica, como Cesar Del Conte, y especial, como Adelma Molinari, empresarios y comerciantes de la localidad, como Jorge Trillini, y funcionarios municipales, como Susana Diz. Durante el lapso que actuó (se creó de manera informal en 1971 y se disolvió paulatinamente una vez que entraron en ejercicio las distintas comisiones directivas hacia fines de la década de 1970) fue presidida por la profesora Susana Diz, quien ocupó, luego del golpe de Estado, en junio de 1976, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Sarmiento: “Por el Decreto N° 822 se designa responsable de la Dirección de Cultura e Información pública a la profesora Susana Margarita Diz”.⁷ Esto permite entender

⁵ Entrevista a María Elena Fonsalido, 15 de abril de 2016, Los Polvorines.

⁶ A medida que se gestaron las Comisiones directivas y se desarrollaron elecciones de manera ordinaria esta comisión se disolvió.

⁷ *Síntesis*, año XIX, n° 2706, 22 de junio de 1976.

por qué el grupo fundador se reunía en un pequeño salón de esa Dirección. La propia Susana Diz escribió un artículo en *APAD 30 años*, en el que recuerda cómo surge “la idea de formar una Comisión municipal para la creación de un Taller protegido de producción de larga duración [...] que yo presidí” (APAD, 2007: 7). Del mismo modo, en la primera acta se aclara que “la Srta. Presidente profesora Susana Diz, Directora de Cultura de la Municipalidad de General Sarmiento, toma la información relevada”.⁸ De este modo, se combinan aportes individuales con otros lazos institucionales y ambos son claves para entender el surgimiento de la entidad en este momento particular luego de varios años de indecisiones. Además del apoyo institucional y la posibilidad de utilizar algunas dependencias para las reuniones de la Comisión Directiva, el municipio también apoyó económicamente al crecimiento de APAD.

Para desarrollar la gestión y sostenimiento de la entidad, además de la Comisión Fundadora, se organizaron otros dos grupos: el de padres⁹ y el de apoyo.¹⁰ Estos fueron liderados por dos mujeres claves de la asociación: Hebe Madrigal¹¹ y Enriqueta Pérez.¹² Ambos grupos se reunían en la misma oficina de la Dirección de Cultura municipal. En los inicios, parte de las tareas de APAD se desarrollaron en oficinas de la municipalidad y en el Salón Parroquial o de Actos (por ejemplo, la firma del acta de fundación, Acta N° 1, 15 de mayo de 1976). En junio de 1976, se determinaron los objetivos:

- a) Brindar apoyo espiritual a los padres de adultos discapacitados, colaborar junto a ellos en la solución de los problemas relacionados con la integración

⁸ Acta N° 1, 15 de mayo de 1976.

⁹ La tarea principal del grupo de padres era ser un nexo entre la Comisión Directiva y las familias de los jóvenes discapacitados. Resulta interesante señalar que si bien se llamó “de padres”, en las actas consta que las más involucradas fueron las madres. Su función principal fue convocar, incentivar la participación y plantear en la Comisión las dudas, temores y preguntas que pudieran surgir en las familias.

¹⁰ Su objetivo era proveer de mayores recursos económicos y de contactos a la incipiente asociación. Para esto se organizaban distintos eventos de recaudación de fondos, ventas de bonos y rifas, reuniones con comerciantes de la zona a fin de pedir donaciones, y reuniones con representantes de la municipalidad para obtener fondos, exenciones de impuestos, subsidios u otras ayudas.

¹¹ Además, ocupó distintos cargos: vicepresidente en dos oportunidades (diciembre 1976-noviembre 1977/ noviembre 1977-noviembre 1979), vocal durante un mandato (noviembre de 1979-agosto de 1981) e incluso presidenta de la Asociación (agosto 1981-septiembre 1982/ septiembre 1982-1983/ septiembre 1983-septiembre 1984).

¹² Además, también ocupó cargos en la Comisión Directiva como profesora (agosto 1981-septiembre 1982/ septiembre 1982-septiembre 1983/ septiembre 1983-septiembre 1984) y a partir de 1984, como vicepresidenta de la Asociación.

social, difundir entre los padres una orientación optimista afirmando que la vida del discapacitado no depende tanto de su propia discapacidad sino de cómo nos preocupamos de sus posibilidades [...] b) por todos los medios estimular una conciencia de asistencia a adultos y jóvenes deficitarios [...] c) gestionar ante los poderes públicos y las autoridades científicas el apoyo y asesoramiento necesario para el éxito de la asociación, d) mantener relaciones con otras entidades.¹³

El Taller, con el transcurso de los años, creció en número de operarios (nombre que reciben los empleados con pago a través de peculio) y en las actividades desarrolladas, y se lograron contratos con empresas como Easy, Sodimac, Colombraro y otras. Como parte de este proceso de crecimiento y expansión, en 1988 se creó el “Centro de Día” de APAD con el objeto de dar contención y apoyo a todas aquellas personas que, por diferentes motivos, no podían continuar integradas al taller de trabajo protegido. Si bien este centro comenzó a funcionar compartiendo edificio con el taller, en 1990 se independizó y se mudó a una quinta en Bella Vista. Estas dos aéreas de APAD permitieron a la entidad intentar cumplir su máxima de dar apoyo e igualdad de posibilidades a discapacitados leves o físicos, y ofrecer la alternativa laboral del taller, como así también a discapacitados graves o profundos, a partir del servicio integral diario brindado en el Centro (APAD, 2007).

El trabajo de APAD durante la década que aquí analizamos cristalizó en políticas municipales efectivas de alto alcance. En marzo de 1982, bajo el Decreto N° 225 se creó la Comisión Municipal Asesora Integral al Discapacitado (Decreto N° 225, Archivo histórico de la Municipalidad de San Miguel). La comisión estaba bajo la órbita de la Dirección de Cultura y su presidente se renovarían al cambiar los cargos ejecutivos. La secretaria general designada fue Adelma Molinari y su compañera de APAD, Hebe Madrigal, fue nombrada secretaria de Relaciones con la Comunidad. Aquí se evidencia la permeabilidad entre el trabajo en las asociaciones y la función pública, ya que, al igual que como lo hemos estudiado para otros casos, en el mismo período (Ballester, 2016) ambas continuaron formando parte de las comisiones directivas de la entidad de manera contemporánea a sus nuevas funciones municipales.

En este punto, ya resaltan los lazos entre APAD y el gobierno local. Resta indagar más íntimamente esta relación y examinar las políticas públicas que se impulsaron desde el Ejecutivo local en pos de la asociación.

¹³ Acta N° 3, 18 de junio de 1976.

APAD y gobierno local: ¿un vínculo de subsidiariedad estatal?

Hasta aquí hemos señalado algunas nociones sobre subsidiariedad del Estado y realizamos un breve recorrido por el surgimiento y funcionamiento de APAD. En esta sección, nos interesa analizar la relación entre el gobierno local y las políticas municipales implementadas que afectaron directamente a APAD. La relación entre APAD y el municipio debe ser analizada a partir de dos aspectos interrelacionados: los vínculos institucionales y los lazos personales.

Nuestro estudio ocupa una década y este recorte cronológico no es caprichoso. Ya señalamos que es posible reconocer una primera etapa en la vida de APAD que se delimita entre 1973 y 1983. A la vez, esta década también resulta significativa para el gobierno municipal. Cuando en 1973 las elecciones impulsaron la llegada de Héctor Campora a la presidencia, en General Sarmiento, la Unión Cívica Radical (UCR) resultó la ganadora de las elecciones. José Lombardo llegó al Ejecutivo local con un extenso recorrido partidario, pero sin demasiada experiencia en la localidad.¹⁴ Su candidatura a intendente en 1973 se debió a distintos motivos. Por un lado, la UCR preveía una derrota ante el justicialismo y, en ese escenario, los nombres más reconocidos de la localidad decidieron no presentarse a las elecciones internas. Por otro, el peronismo no pudo unificar sus facciones internas y no presentó una lista única completa (Gauto, 2018). A esto se sumó el amplio voto en blanco. Con estos resultados el radicalismo obtuvo la intendencia, 17 concejales y 5 concejeros con tan solo el 11,02% de los votos.¹⁵ La intendencia de Lombardo en General Sarmiento, entre 1973 y 1976, no fue su único mandato de gobierno. Como desarrollaremos más adelante, Lombardo volvió a ocupar la intendencia durante la dictadura.

Durante el septenio militar en General Sarmiento gobernaron cuatro intendentes:¹⁶ los dos primeros fueron militares mientras que los otros dos fueron civiles.¹⁷ Tras la asunción de Viola como presidente de la Nación, la

¹⁴ José Lombardo se afilió al partido radical en 1945; fue secretario de la Junta de la Juventud entre 1946 y 1948; fue convencional provincial durante seis mandatos; candidato a concejal en Vicente López en 1952 y suplente de la Convención Constituyente en 1957. Ocupó el cargo de director general del Ministerio de Trabajo desde 1963 a 1966. En 1969 se mudó con su familia a San Miguel y comenzó a militar en la UCR local.

¹⁵ Datos disponibles en <http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/resultados/poranio/1973.pdf> (consultado el 1 de octubre de 2018).

¹⁶ Para mayor detalle sobre los recambios de gobierno y la conformación de los equipos de gobierno recomendamos ver Catoira (2017).

¹⁷ Desde el 25 de marzo hasta el 28 de abril de 1976 se hizo cargo de la Intendencia el teniente coronel Héctor Hoffmann. El 29 de abril de 1976 asumió el segundo intendente de facto de

gobernación de Buenos Aires, en marzo de 1981, recayó en el general Oscar Gallino. Entre mayo y junio de 1981 asumieron los nuevos jefes comunales: “Se designaron intendentes con estrecha vinculación con las asociaciones locales y con amplio reconocimiento en la comunidad; en muchos casos los intendentes que habían sido electos en marzo de 1973 fueron confirmados luego por la dictadura” (Canelo, 2015b: 410). General Sarmiento no escapó a esta diagramación de la política local en la que, en 1981, un 90% de las intendencias fueron entregadas a dirigentes civiles radicales (tal nuestro caso), desarrollistas, intransigentes, justicialistas, federalistas, conservadores, entre otros (Canelo, 2015a: 190). Así retornó al municipio José Lombardo, desplazado en 1976.

Este contexto político es clave para comprender el desarrollo de APAD. Como ya señalamos, las primeras reuniones se realizaron durante la intendencia democrática de Lombardo y la asociación se fundó solo meses después de la instauración del gobierno militar. El trabajo de organizar las ideas, gestar al grupo fundador y realizar las primeras tratativas se dio durante la intendencia de Lombardo entre 1973-1976. A la vez, el momento de mayor expansión y desarrollo de la entidad se dio durante su segundo mandato, ya en dictadura (1981-1983). Esto es congruente con la cercanía, apoyo y diálogo que, según el recuento de nuestra entrevistada,¹⁸ existía entre APAD y Lombardo. Sin embargo, mostraremos que el apoyo municipal a APAD se mantuvo a lo largo de todo el período, por lo que ese recuerdo anclado en Lombardo como figura clave debe también matizarse y despersonalizarse. Esto ejemplifica que se combinaban relaciones personales, pero también vínculos institucionales.

Los lazos entre el Ejecutivo municipal y APAD fueron inmunes a los cambios de gobierno. Por nombrar algunas situaciones concretas, la asociación recibió ayuda económica directa del municipio durante los mandatos de Ortelli, de Mussano y de Lombardo. Por ejemplo, en 1977, en la reunión ordinaria del día 17 de diciembre, la Comisión directiva decidió “acordar un subsidio con la Municipalidad de General Sarmiento por 300.000 \$ ley para el corriente año y enviar un agradecimiento al Señor intendente por tal gesto”.¹⁹ El Decreto N° 5914, fechado el 27 de diciembre de 1977, indicaba que “visto que la entidad recurrente cumple una eficaz y meritoria labor en el ámbito de nuestro partido y que se cuenta con crédito presupuestario para atender a la erogación que se trata: se decreta otorgar un subsidio de 300.000 pesos para financiar la

General Sarmiento, el coronel Luis Ortelli. Su intendencia se prolongó hasta el 6 de noviembre de 1979. En noviembre de 1979 asumió el primer intendente civil Orlando Mussano.

¹⁸ Entrevista a Enriqueta Pérez del Cerro de Zúñiga, San Miguel, 7 de Abril de 2014.

¹⁹ Acta N° 21, diciembre de 1977.

iniciación de su taller escuela”.²⁰ Esta medida es congruente con los lineamientos que había marcado el intendente en su gestión, entre los cuales se incluía “estimular la actividad de las entidades locales de bien público como forma de dinamizar la participación vecinal en la solución de los problemas concretos de la comunidad”.²¹

Este fue el primer incentivo económico que recibió la asociación por parte del gobierno local. Recordemos que ya contaban con la posibilidad de utilizar oficinas y salones del palacio municipal mientras se terminara el proyecto de la sede propia. Luego de ese importante incentivo, en abril de 1978, el municipio le otorgó a APAD la posibilidad de instalar un kiosco en la Plaza San Miguel para continuar la recaudación de fondos.²²

Esta política de subsidios se mantuvo luego del recambio en el Ejecutivo municipal, en 1979. Bajo la intendencia de Mussano, en febrero de 1980, APAD fue beneficiaria de un subsidio de dos millones y medio de pesos. Además de ser un hecho relevante por el monto que otorgó el Ejecutivo municipal, también resulta interesante analizar los motivos que acompañaron la decisión:

Visto que: se trata de una asociación única en su género dentro del partido de General Sarmiento, que realiza una labor altamente humana y positiva, devolviendo a la comunidad seres rehabilitados y aptos para integrarse de una manera útil y digna a la sociedad; que hasta tanto se resuelva la forma en que esta Municipalidad realizará un aporte económico estable y periódico, este Departamento ejecutivo entiende que la entidad peticionante es merecedora de recibir ayuda oficial.²³

El texto del decreto, a pesar de seguir la lógica burocrática de este tipo de escritos, nos permite apreciar diversas cuestiones. En primer lugar, señala la importancia y novedad del trabajo de APAD en la zona. Luego, añade que esta medida extraordinaria busca proveer de recursos a la entidad hasta que se diagramen las medidas necesarias para volver el apoyo económico algo constante y reglamentado. Finalmente, retoma las nociones de subsidiariedad del Estado, quizás de manera implícita, sobre lo valioso de la labor para la comunidad y lo idóneo de la entidad, lo que la vuelve merecedora de esa ayuda oficial. Resulta evidente que APAD, al menos desde sus intenciones y propuestas, pretendió

²⁰ Decreto N° 5914, Archivo Histórico Municipal de San Miguel.

²¹ Decreto N° 5979, 28 de diciembre de 1977, Archivo Histórico Municipal de San Miguel.

²² Acta N° 26, abril de 1978.

²³ Decreto N° 225, Archivo Histórico de la Municipalidad de San Miguel.

dar respuesta a una carencia en la localidad, las opciones de salida laboral para personas discapacitadas, y que su responsabilidad sobre el tema era resolver el problema en calidad de organización intermedia.

Dos años después, ya bajo el segundo gobierno de Lombardo, se efectivizó esa propuesta de generar una ayuda constante. Con el retorno del exintendente al municipio, se agilizaron las reuniones entre la dirigencia de APAD y el Ejecutivo. En abril de 1982 se le otorgó a APAD una subvención derivada de la instalación de dársenas de estacionamiento pago en la zona céntrica de San Miguel. La concesión del 31% de la recaudación de la tarifa por estacionamiento fue un gran impulso para la entidad.²⁴ La relevancia de esta noticia obligó a la Comisión Directiva a llamar a una asamblea extraordinaria el día 26 de abril de 1982, para poner en tema a todos los miembros de la comisión y dejar asentados los detalles del acuerdo. La propuesta del municipio consistía en cederle a APAD parte de las ganancias de doce dársenas de estacionamiento ubicadas en el microcentro del partido; se prometía además que esa cantidad se ampliaría una vez estuvieran instaladas otras dársenas en distintas localidades. Resalta que, a diferencia de las actas vinculadas a los subsidios, en este caso no se detallan los pedidos realizados por la entidad. Por el contrario, se indica que las dársenas fueron “ofrecidas por la municipalidad de General Sarmiento” y que los señores Rodríguez y Trillini fueron los encargados de atender a las reuniones y “acordar el porcentaje ofrecido por dicha explotación”.²⁵ De este modo, luego de subsidios aislados y excepcionales, la municipalidad firmó un convenio de ayuda económica estable.

Esta diferencia con respecto a las ayudas que había ofrecido a APAD anteriormente creemos que se vincula con las dinámicas políticas del vínculo entre Estado provincial y gobierno municipal. Casi un año después de la implementación de este sistema de estacionamiento medido, *Síntesis* publicó en la tapa de su edición del 18 de febrero de 1983 una carta de APAD. El eje central del escrito lo desarrollaremos más adelante pero es interesante el recuento que hace la institución sobre cómo se implementó la estrategia del estacionamiento. Según se relata en esa misiva, APAD había solicitado un subsidio provincial en 1982 por haber sido el Año Internacional del Discapacitado. En principio, esto no fue registrado en las actas, pero según se relata en la nota en *Síntesis*, Jorge Aguado, el gobernador de la provincia, había negado tal solicitud por ser “imposible de otorgar”.²⁶ Esto ejemplifica que no siempre los reclamos de la

²⁴ Acta N° 90, abril de 1982.

²⁵ Ídem.

²⁶ *Síntesis*, 18/2/1983, p. 1.

entidad obtuvieron los resultados esperados. A fin de solucionar el conflicto, “el señor intendente municipal de General Sarmiento ofreció la posibilidad de dar recursos con lo que se obtuviese del estacionamiento medido que se implementaría inmediatamente en San Miguel”.²⁷ Esto demuestra también que la llegada de APAD hacia el municipio era más exitosa, lo que probablemente se deba a los vínculos personales e institucionales ya establecidos a lo largo de los años.

Esta información, que se publica en *Síntesis* al año siguiente de iniciado el usufructo de parte de las ganancias del estacionamiento, nos permite entender por qué el acta de abril de 1982 señalaba que el municipio había ofrecido esta ayuda, sin explicar que provenía de un pedido anterior realizado por APAD al gobierno provincial y que había sido rechazado. Entonces, si bien es correcto que la oferta provino desde el gobierno municipal, en las actas no se detalla el recorrido previo del pedido ni que la decisión de Lombardo fue en respuesta a la negativa de Aguado. Aquí se pone en juego cuánto de las medidas implementadas corresponden a políticas “desde arriba” y cómo se vincula con políticas demandadas “desde abajo”.

El trabajo efectivo de APAD con respecto a las dársenas de estacionamiento comenzó el 1° de julio de 1982. En un primer momento, del 30% que percibía APAD un 10% se entregaba a los playeros (encargados de vender las tarjetas de estacionamiento), el 3% al coordinador (tanto él como los playeros eran personas discapacitadas que formaban parte del taller de trabajo protegido de APAD), el 2% se destinaba a gastos administrativos y el 15% restante era para la institución. Con el correr del tiempo, y al hacer las evaluaciones mensuales que la Comisión había sugerido al aceptar la propuesta municipal, estos porcentajes variaron: 15% para los playeros, 5% al coordinador, 3% a la administración y el 7% restante para APAD.

Los problemas no tardaron en aparecer. En la nota de *Síntesis* de febrero de 1983 que ya hemos nombrado, APAD realizó un descargo sobre las dificultades que habían encontrado a la hora de sostener la gestión de los estacionamientos. Señalaban:

- 1) El control no es eficiente dado que los vecinos no pagan las tarjetas, estacionan en lugares prohibidos frente a dársenas habilitadas y como consecuencia se venden pocas tarjetas.
- 2) Se necesitan refugios y ropa adecuada para los días de lluvia. Se recibe de la municipalidad 15 pilotines, 15 pantalones y 15 camisas.

²⁷ Ídem.

3) El porcentaje otorgado a los playeros, la poca venta de tarjetas y la no incrementación de nuevas dárseas hace que el producido de las ventas sea insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de los que hombres que trabajan.²⁸

Ante esas críticas, APAD sostenía que intentó comunicarse con autoridades municipales a fin de realizar los cambios necesarios, pero no obtuvieron respuesta. Los propios playeros decidieron elevar una nota a la Comisión Directiva y, según sostiene APAD, esta fue avalada por la coordinación, la administración y la dirección de la institución, y enviada al intendente. Estos conflictos, ante los cuales no encontraron respuesta, llevaron a que los playeros solicitaran volver a trabajar en el taller.

Esta situación nos permite analizar diversos aspectos de las políticas ligadas al asociacionismo. La primera cuestión es que estas relaciones no están exentas de conflictos. Tanto el gobierno local como la entidad defienden su posición y ambos buscan los modos de obtener los mayores beneficios. Esto permite complejizar nuestra mirada en torno a las políticas de subsidiariedad del Estado al devolverle agencia a las asociaciones y actores involucrados. No se trata de una relación unidireccional en la que el municipio tiene el poder total. No hay dudas de que el poder del vínculo recae en el gobierno local, pero las entidades utilizan sus propios recursos para dar cuenta de sus posiciones, quejas y problemas. Que APAD decidiera publicar esa nota en *Síntesis*, que el periódico la colocara en la tapa y que no ahorrara en detalles sobre la situación da cuenta del impacto que se sabía tendría dar a conocer al público todas estas internas. Meses después, el proyecto del usufructo concluiría.

Las tensiones o discrepancias en torno a este vínculo contractual por las dárseas de estacionamiento no afectaron el diálogo con la municipalidad. Esto nos permite pensar que la relación entre la institución y el gobierno local era más amplia y se mantenía en términos cordiales. En el mes de mayo de 1983 se organizó en el Salón de Actos del Palacio Municipal el primer Encuentro de Dirigentes de Talleres Protegidos. La promoción del evento comenzó un mes antes, en abril, cuando *Síntesis* comentó la agenda que se iba a seguir.²⁹ Este fue el primer gran evento organizado por la flamante Comisión Asesora Integral al Discapacitado que, como ya señalamos, se creó en el municipio en 1983, dependiente de la Secretaría de Cultura, y que contó con muchos integrantes

²⁸ Ídem.

²⁹ *Síntesis*, 26/4/1983, p. 5.

de la dirigencia de APAD. De allí que no resulta extraño que la primera “presentación al público” de la comisión estuvo vinculada a los talleres de trabajo y fue coorganizada por APAD. El detalle de las actividades y los asistentes fue recapitulado en la edición de julio de *Síntesis*. A ese primer gran evento le siguió un seminario para dirigentes de talleres de trabajo protegido que tuvo lugar en el mes de septiembre en la sede de José C. Paz de la Universidad Tecnológica Nacional. Destacamos estos eventos ya que muestran cómo los apoyos económicos, incluso en momentos de disputa, se conjugaron siempre con apoyos institucionales. A pesar del conflicto en torno a las dársenas de estacionamiento, APAD mantuvo el diálogo con el municipio y continuó organizando eventos en conjunto.

Conclusiones

Los vínculos entre asociacionismo y gobierno municipal incluyen apoyos económicos, institucionales y de diversa índole. El impacto de estos lazos depende, en buena medida, del tipo de entidad y de los recursos con los que cuenta. En el caso de General Sarmiento, ya hemos demostrado en otros trabajos (Ballester, 2016 y 2018) que la ayuda municipal resultaba clave para el funcionamiento, sostén y crecimiento de las asociaciones. Creemos que esto se vuelve aún más relevante en aquellas entidades de escasa trayectoria y de alcance reducido. El caso de APAD es ejemplo de esta situación. En 1973 iniciaron las primeras reuniones metódicas y en 1976 se formalizó su creación. Los primeros años fueron dedicados a delimitar sus objetivos y tareas, concretar la compra del edificio propio y cimentar los vínculos con la sociedad local. Justamente, durante ese período, el apoyo del municipio jugó un rol clave. Esta primera etapa culminó a fines de 1983 con el cumplimiento del mandato de la Comisión Directiva, la que fue rearmada a inicios de 1984 con una nueva diagramación.

Como ya señalamos, al menos en la década estudiada, uno de los sostenes más relevantes para APAD fue la ayuda económica que brindó el gobierno local. Estas ayudas pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, los subsidios específicos, acotados y extraordinarios fueron la opción más accesible. Por otro lado, las ayudas estables y perdurables en el tiempo que se alcanzaron tras una consolidación de los reclamos. Estos apoyos económicos eran muy relevantes y solían ser el principal reclamo por parte de APAD, pero no fueron las únicas colaboraciones que realizó el municipio, sino que prestó su sede en diversas oportunidades.

Sumado a esto también son destacables los apoyos institucionales ofrecidos ante los eventos de recaudación de fondos, las reuniones nacionales con otros talleres y entidades, y ante actos institucionales que desarrollaba APAD y que contaron con la presencia o aval de todas las intendencias del período. Esto dialoga con el doble juego que establecieron los “notables”, en el que combinaron su poder en la sociedad gracias a su vínculo con el gobierno local y también su poder en el gobierno local gracias a su representatividad social. En la doble acción de “dominar para negociar y obtener servicios y obtener servicios para mantener la dominación” (González Bombal, 1988: 103) el asociacionismo es uno de los grandes jugadores.

Sin despreciar la ruptura que implicó el golpe de Estado y la implantación del gobierno dictatorial, también es posible reconocer continuidades. La relación entre la elite dirigente de APAD y el gobierno municipal se conservó sin grandes modificaciones a lo largo de todo el período 1973-1983. Las políticas para el asociacionismo local se mantuvieron y siguieron la misma lógica a lo largo de toda la década. Señalamos que todos los intendentes, fueran militares o civiles, sostuvieron lazos tanto personales como gubernamentales con la institución. En paralelo, los elencos de la dirigencia de APAD no se alteraron. Si bien es posible reconocer una rotación interna, no hubo una renovación de las comisiones directivas. Recién en 1984 ingresaron nuevas figuras a las comisiones directivas y varias de las líderes que ya trabajaban en la asociación ocuparon cargos más relevantes. Estas cuestiones parecen mantenerse a pesar de los quiebres institucionales y los recambios de gobierno. El caso puntual de Lombardo, como intendente democrático y luego *de facto*, es el ejemplo más extremo de las continuidades entre democracia y dictadura. La relación con la entidad no se alteró de modo significativo entre su gestión a inicios de los años setenta y su segunda intendencia *de facto*. En lo que refiere a los vínculos entre asociacionismo y gobierno municipal, es posible reconocer un hilo coherente que rompe la caracterización del período dictatorial como quiebre total.

Sostenemos que la política local dirigida al asociacionismo parece estar más ligada a decisiones prácticas, cotidianas y de corto alcance, y no a grandes proyectos ideológicos. Las grandes directrices ideológicas, sean comunitaristas, católicas o neoliberales, son uno de los ingredientes que se ponen en juego en el telón de fondo del período, pero no aparecen como una justificación teórica explícita que determine y organice la puesta en marcha de las políticas implementadas. La acción directa, lo inmediato y las políticas prácticas se tornan protagonistas y se vuelven la norma a lo largo de todos los gobiernos. Tanto los reclamos como sus resoluciones se basan en aspectos coyunturales locales.

Los usos se ubican por encima de los significados. Esto lleva a preguntarnos hasta qué punto es válido establecer un vínculo directo entre ideas o proyectos políticos de largo aliento y políticas públicas a escala local, y en qué medida debemos atender a otras estrategias a la hora de entender el funcionamiento del municipio. Este trabajo, lejos de ofrecer respuestas acabadas sobre este asunto, pretende mostrar una posible vía de indagación que debe ser continuada, ampliada y complejizada.

Nos propusimos responder si APAD y su vínculo con el municipio puede ser pensado como un caso de subsidiariedad del Estado a escala local. Ese interrogante llevó a revisar las actividades desarrolladas por APAD, los lazos establecidos con el gobierno local, las medidas municipales puestas en marcha y las justificaciones y motivos que se esgrimieron sobre ellas. En ese sentido, en todas las reglamentaciones vinculadas a ayudas económicas, sean en forma de subsidios o contratos, el municipio basaba la decisión en el trabajo novedoso y relevante que desarrollaba la entidad y en la obligación que recaía en el Estado municipal de apoyar la iniciativa vecinal. Resulta claro que este caso se aleja de la mirada liberal en torno al Estado subsidiario. En primer lugar, el municipio no derivó en APAD tareas que estuviera desarrollando el Estado. No existió una privatización que buscara prevenir o enmendar una desregulación estatal. Por el contrario, APAD surgió ante una vacancia en la localidad a partir de la iniciativa de los vecinos. La postura que tomó el gobierno local fue la de estimular la iniciativa vecinal, promover la organización de entidades intermedias, interceder ante otras escalas de gobierno (por ejemplo, el provincial) y proveer de recursos materiales y simbólicos a la asociación.

Las políticas públicas hacia APAD parecen responder a opciones coyunturales, definidas y acotadas más que a una perspectiva ideológica que coordinara y reglamentara el accionar estatal. En este sentido, es difícil entrever una preocupación específica y regulada por la subsidiariedad estatal. Entendemos que las nociones de subsidiariedad, supletoriedad y promoción parten de una concepción más general sobre el Estado y muchas veces fueron utilizadas de manera simultánea y contemporánea. Sin embargo, es posible concebir que, en el caso de APAD, el vínculo establecido con el municipio de General Sarmiento parece acercarse más a una supletoriedad del Estado. Un Estado que promueve, ordena y colabora con aquellas iniciativas de la comunidad, pero sin que estas sean absorbidas por el aparato estatal. Compartimos con Gabriela Gomes (2016) que todos estos principios que hemos nombrado se ponen en juego a la hora de pensar las políticas públicas ligadas al bienestar social, pero

consideramos que en el caso de APAD resultan particularmente relevantes los de supletoriedad y participación.

De allí que resulte interesante pensar la subsidiariedad como diversas dinámicas que se conjugan e interrelacionan, y no como un único principio cerrado. Esto nos permite complejizar nuestras respuestas. La pregunta ya no es si el vínculo entre municipio y asociacionismo es o no de subsidiariedad, sino cuáles fueron sus características propias, qué rol jugaron los distintos actores involucrados, cómo se pusieron en marcha las políticas y cómo se posicionaron las asociaciones ante los distintos gobiernos. En síntesis, se trata de dinamizar la vida política en dictadura en vez de darla por cerrada o negarla.

Las organizaciones intermedias como las asociaciones juegan un rol clave por ser canalizadoras de esos intereses de la población y tienen a su cargo la gestión, control y puesta en marcha de la solución a esos problemas. A la vez, las relaciones personales e institucionales que se ponen en juego con el municipio resultan claros ejemplos de la porosidad entre sociedad y Estado. A partir del caso aquí propuesto, es posible indagar los límites borrosos y casi inexistentes entre la iniciativa estatal y la iniciativa de la sociedad. ¿Dónde comienza y dónde termina la injerencia estatal y el reclamo social? ¿Quién impulsa a quién? ¿En qué medida los reclamos generan políticas públicas y la implementación de nuevas medidas da pie a nuevos reclamos?

Bibliografía

APAD (2007). *APAD 30 años*. Buenos Aires: s/d.

Ballester, Guadalupe (2016). “Las dirigencias del asociacionismo en la historia reciente argentina: el caso de General Sarmiento, 1973-1983”. Tesis para optar por el título de magíster en Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento.

— (2018). “Asociacionismo y poder local: trayectorias y vínculos entre las asociaciones de General Sarmiento y el gobierno municipal (1973-1983)”. En Lvovich, Daniel (comp.), *Historias del General Sarmiento*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Billorou, María José y Rodríguez, Ana María (1996). “Público-Privado: ¿Claridad o confusión para el estudio de las relaciones de género en la historia regional pampeana?”. *Clío & asociados-La historia enseñada*, n° 1, pp. 69-80.

- Canelo, Paula (2015a). *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)*. Buenos Aires: EDHASA.
- (2015b). “La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina. Un estudio a través de sus documentos reservados y secretos (1976-1983)”. *Historia*, vol. 48, n° 2, pp. 405-434.
- Catoira, Maximiliano (2017). “Gobierno municipal, reclutamiento de autoridades y políticas públicas durante la dictadura el caso de General Sarmiento (1976-1983)”. Tesis para optar por el título de magíster en Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Correa, Natalia y Giovine, Renata (2010). “¿De la subsidiariedad a la principalidad del Estado en la reforma educativa de este nuevo siglo?”. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Sociología de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata.
- Cravino, María Cristina (2011). *Organización territorial y conflictos urbanos del partido de General Sarmiento: una mirada desde la historia*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Dalla-Corte Caballero, Gabriela; Ulloque, Marcelo y Vaca, Rosana (2014). *La mano que da. 160 años de la Sociedad de Beneficencia de Rosario*. Rosario: Prohistoria.
- Devoto, Fernando (1985). “Participación y conflictos en las sociedades italianas de socorros mutuos”. En Devoto, Fernando y Rosoli, Gianfausto, *La inmigración italiana en la Argentina*, pp. 141-165. Buenos Aires: Biblos.
- Gauto, Blanca (2018). “El regreso de la democracia en General Sarmiento en 1973. Entre la unidad básica, el comité y las instituciones vecinales”. En Levín, Florencia (comp.), *Tramas del pasado reciente argentino. Historia, memoria y transmisión*, pp. 105-120. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Giorgi, Guido (2014). “Refundar la sociedad. El comunitarismo como política de Estado en el Gobierno de Onganía”. En Galván, María Valeria y Osuna, María Florencia, *Política y cultura durante el “Onganiato”. Nuevas perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966-1970)*, pp. 119-140. Rosario: Prohistoria.

- Gomes, Gabriela (2016). *La política social de los regímenes dictatoriales en Argentina y Chile, (1960-1970)*. La Plata-Los Polvorines-Misiones: Universidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de General Sarmiento-Universidad Nacional de Misiones.
- (2017). “El sistema de participación comunitaria y el bienestar social bajo el onganiano”. En Levín, Florencia (comp.), *Tramas del pasado reciente argentino. Historia, memoria y transmisión*, pp. 63-84. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- González Bombal, Inés (1985). *Los vecinazos. Las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-1983*. Buenos Aires: IDES.
- Lvovich, Daniel (2010). “Burócratas, amigos, ideólogos y vecinalistas: el reclutamiento de funcionarios municipales de Morón durante la Dictadura Militar (1976-1983)”. En Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán, *Un estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad)*, pp. 411-430. Buenos Aires-Los Polvorines: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Munzón, Eduardo Ismael (2007). *Historia de los pueblos del partido de General Sarmiento*. Buenos Aires: Municipalidad de San Miguel.
- Rodríguez, Laura (2009). “Descentralización municipal, intendentes y ‘fuerzas vivas’ durante el Proceso (1976-1983)”. *Cuestiones de Sociología*, n° 5 y 6, pp. 369-387.
- (2010). “Gobierno municipal, descentralización educativa y funcionarios en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura”. En Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán, *Un estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad)*, pp. 431-462. Buenos Aires-Los Polvorines: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- (2011). *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983)*. Rosario: Prohistoria.
- (2012). *Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983)*. Rosario: Prohistoria.
- Sánchez, Adriana (2009). *Donde nace la política. Política y sociedad en General Sarmiento (1900-1930)*. Tesis para optar por el título de máster en Investigación Histórica. Universidad de San Andrés.

- Schvarzer, Jorge (1986). *La política económica de Martínez de Hoz*. Buenos Aires: Hispanamérica.
- Soria, María (2005). “Área metropolitana de Buenos Aires: fragmentación y consolidación territorial del municipio durante la década del noventa”. Tesis para optar por el título de magíster en Políticas Ambientales y Territoriales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Disponible en http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui/bitstream/handle/filodigital/1819/uba_ffyl_t_2005_823351.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sosa, Antonela (2015). “Mujeres, asociacionismo y beneficencia: el caso de Villa Constitución 1895-1940”. En *Historia Regional*, Sección Historia, ISP n° 3, año XXVIII, n° 33, pp. 185-204.
- Thompson, Andrés (coord.) (1995). *Público y privado: las organizaciones sin fines de lucro en la Argentina*. Buenos Aires: Unicef-Losada.
- Tossounian, Cecilia (2015). “Las asociaciones femeninas y la emergencia de un Estado social: la protección a la maternidad y a la infancia (Buenos Aires, 1920-1940)”. *Estudios Sociales del Estado*, vol. 1, n° 2, pp. 58-93.

Escritores y dictadura: trayectorias, prácticas y sociabilidades. El caso de la revista literaria *El Ornitorrinco*, 1977-1983*

Federico Iglesias

Introducción

Este artículo explora los significados sociales y culturales del grupo de escritores que publicó la revista literaria *El Ornitorrinco* entre 1977 y 1983.¹ El análisis hace foco en la trayectoria de los sujetos que conformaron el grupo, en sus prácticas y en los ámbitos de sociabilidad que desarrollaron durante los años del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, nombre con el que se presentó en sociedad lo que resultaría ser la dictadura más feroz que vivió la Argentina durante el siglo xx. En ese contexto, los escritores de *El Ornitorrinco* afrontaron, como dice Saer en *Lo imborrable*:

Los riesgos económicos que supone la financiación de una revista literaria y también los riesgos físicos, ya que, en estos tiempos en que casi todos son todavía reptiles, aparecer en primera línea apadrinando alguna tentativa, por tímida que sea, de pensamiento independiente, puede llegar a ser de lo más peligroso (2003: 124).

* Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada en el marco de la Maestría en Historia Contemporánea de la UNGS, y retoma los temas y problemas trabajados en mi libro (Iglesias, 2019).

¹ Si bien *El Ornitorrinco* se publicó hasta 1986, de los catorce números editados, once se publicaron entre 1976 y 1983. Para un análisis de la revista ver Calabrese y De Llano (2006); Iglesias (2014 y 2016).

Desde esta perspectiva, resulta interesante analizar el caso de *El Ornitorrinco* no solo por la particularidad del contexto en el que se publica la revista, sino porque es precisamente en este último ejemplar en el que se observan las transformaciones más significativas de su especie, de esa “fauna fabulosa” de revistas publicadas por Abelardo Castillo entre 1959 y 1986, de la cual heredaba una tradición simbólica y material.²

Dicha tradición se había desarrollado como parte de un intenso proceso de lucha política durante los años sesenta y primeros setenta —que la dictadura vino a clausurar traumáticamente—, en el que los escritores y la literatura proveyeron de símbolos y artefactos culturales a diferentes corrientes. De esta manera, *El Ornitorrinco* forma parte de un proyecto literario, pero también político —como estrategia y medio de intervención en el espacio público—, anclado en un pasado configurativo como lo es el de las revistas literarias de los años sesenta y primeros setenta: “No somos milenarios, pero tenemos historia. La más reciente serían las revistas literarias de los años sesenta”.³

Esta permanencia nos permite pensar a la revista en tensión con los ejemplares anteriores y no como compartimentos estancos, puesto que entre ellas se produce una conexión vital entre pasado y presente —expresada en los propios cuerpos de los escritores—, en la que se utiliza una versión del pasado —en el caso de *El Escarabajo de Oro* es *El Grillo de Papel*, y en el caso de *El Ornitorrinco* son las dos anteriores— con el objeto de ratificar un posicionamiento en el presente y, a la vez, señalar direcciones a futuro: sea proyectado en un horizonte de revolución, atravesado en un espacio de dictadura o en la búsqueda de un lugar en una democracia incipiente.

Ahora bien, si toda especie biológica se desarrolla en un medio natural, es decir que se adapta a un medio ambiente determinado, las especies culturales, como la que aquí se analiza, se desarrollan en medios temporales, y por ello deben adaptar sus prácticas y relaciones sociales y políticas a las condiciones de

² Una especie se define como un grupo de organismos reproductivamente homogéneos, muy cambiantes a lo largo del tiempo y del espacio, pero capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Aplicando esta definición enciclopédica a la “biología literaria” de la segunda mitad del siglo xx argentino, puede observarse el nacimiento, desarrollo y extinción de una especie particular de bicho literario: un escarabajo de oro descendiente de un grillo de papel, que luego muta en ornitorrinco. Si se toman en cuenta los seis números de *El Grillo de Papel* entre octubre de 1959 y noviembre de 1960, los treinta y ocho números de *El Escarabajo de Oro* entre junio de 1961 y septiembre de 1974, y los catorce números de *El Ornitorrinco* entre octubre de 1977 y agosto de 1986, suman un total de 58 ejemplares que “cambiaron al interior de una permanencia” durante veintisiete años (Iglesias, 2016).

³ Editorial de *El Ornitorrinco*, n° 1. Abelardo Castillo, octubre 1977.

los diferentes momentos históricos que atraviesan. En este sentido, en *El Ornitorrinco* se verifican procesos político-culturales de rupturas y transformaciones en el contenido de sus páginas, en la conformación del grupo de escritores que la impulsó y en las prácticas desplegadas en torno a ella. Estos cambios le otorgan rasgos identitarios particulares a la revista, a la vez que articulan su existencia dentro de la especie en la que se filia.⁴

Para el diseño, armado y publicación de *El Ornitorrinco* era necesario poner en juego diversas prácticas y circuitos sociales que permitieran materializarla: desde la recepción de colaboraciones y notas para las diferentes secciones, las reuniones periódicas para la discusión de la revista, la búsqueda de anunciantes y suscriptores que la financien, de una imprenta, la búsqueda de puntos de venta en donde poder hacerla circular, etcétera. Algunas de estas actividades, en el contexto específico en el que se desarrollaron, implicaban, como decía Saer, cierto riesgo y peligrosidad. En este proceso se articularon prácticas y ámbitos de sociabilidad que procuraron preservarse de la represión y la censura, pero que no obstante mantuvieron cierta visibilidad a partir de las actividades que desarrollaron. Si bien no fueron acciones clandestinas de lucha contra la dictadura, estas formaban parte de una cultura y una tradición político-literaria que no encajaban en los cánones que la dictadura imponía en el espacio público y en el campo cultural a través de la represión, la vigilancia y la censura.

El análisis de este conjunto de prácticas y ámbitos de sociabilidad compartidos por el grupo de escritores permite observar las rupturas y continuidades producidas al calor del punto de inflexión que representaron los años del terrorismo de Estado en el terreno de la cultura y la vida literaria con respecto a la etapa anterior, en la que se habían gestado y desarrollado los especímenes que conformaron la tradición en la que se filia *El Ornitorrinco*. ¿Qué pasa con ese espacio urbano durante la dictadura? ¿Qué transformaciones se producen en el circuito por el que circulaban los escritores y las revistas literarias? ¿Qué impacto tienen estas transformaciones en la vida cultural porteña?

⁴ En cuanto a los cambios en el lenguaje y contenido de la revista, en *El Ornitorrinco* predomina el lenguaje elíptico, el empleo de la metáfora y la alusión muchas veces indirecta a problemas políticos de la coyuntura, que contrasta con el tono frontal y directo, y la discusión programática de la izquierda en torno a tópicos como el posicionamiento político del escritor frente a la revolución y/o al peronismo, característicos de *El Escarabajo de Oro* (Calabrese y De Llano, 2006; Iglesias, 2016).

***El Ornitorrinco*: las transformaciones de una formación cultural**

En su clásico trabajo sobre la “fracción Bloomsbury”, Raymond Williams advertía sobre las dificultades metodológicas de investigar pequeños grupos culturales, pero también sobre la necesidad de hacerlo. La importancia de analizar estos grupos, a los que Williams denomina *formaciones culturales*, que a veces pueden parecer demasiado marginales, pequeños o efímeros, es, como afirma este autor, enorme: “Por lo que han logrado, y por lo que sus modos de lograrlo pueden decirnos sobre las sociedades más amplias con las que mantuvieron relaciones tan inciertas” (Williams, 2012: 182). Como se mencionó en la introducción, la publicación de la revista formó parte de las actividades llevadas a cabo durante casi tres décadas por el grupo de escritores que acompañaron a Abelardo Castillo en cada uno los tres ejemplares de su “fauna fabulosa”, que dotaron a esta formación cultural de una identidad propia. Si bien podemos distinguir los principios que unen a un grupo como el que publicó la revista *El Ornitorrinco* a través del análisis de sus manifiestos y editoriales, existen además de este conjunto de principios compartidos, un cuerpo de prácticas o un *ethos* distinguible que otorgan al grupo una identidad y un significado cultural y social específico.

Ahora bien, ¿cómo se conforman estos grupos?, ¿de qué manera se vinculan sus integrantes? Según observa Raymond Williams:

Es un hecho central que muchos, aunque no todos, de estos grupos sean al principio, y en su desarrollo “grupos de amigos”. Lo que entonces debe preguntarse es si algunas ideas o actividades compartidas fueron elementos de su amistad y si contribuyeron directamente a su formación y diferenciación en tanto grupo (2012: 183).

En el caso de Abelardo Castillo, compartió una larga amistad con Liliana Heker, con quien tenía ideas y posiciones similares con respecto a la revista literaria, a la literatura y su relación con la política.⁵ En *El Ornitorrinco*, al núcleo duro que

⁵ Abelardo Castillo y Liliana Heker se habían identificado, desde los años sesenta, con la figura del escritor *comprometido a la Sartre*. Esta denominación aludía a la pertenencia profesional de los escritores como “grupo de sujetos parcialmente especializados en torno a un tipo de saber” —el manejo de la palabra escrita—, y concedía a los escritores una participación política que se fundaba más allá de su escritura literaria, y que, a su vez, definía a esta escritura como un trabajo siempre, y de suyo, político (Gilman, 2003). Esto significaba que el escritor, en paralelo a su

constituyeron Castillo y Heker, se integra también Sylvia Iparraguirre, quien por entonces era la esposa de Abelardo Castillo. Al respecto, Liliana Heker afirma que con muchos de los integrantes de las revistas eran grandes amigos y que lo que los unía era lo que tenían en común en cuanto a la literatura, a cierta idea del mundo y la amistad. Al momento de publicar *El Ornitorrinco*, Heker sostiene que no hubo discusiones porque no solo estaban de acuerdo en sacarla, sino que:

*Estábamos muy entusiasmados con sacar una revista porque siempre, por lo menos en el caso de Abelardo y el mío, nuestra manera de existir en la literatura no era solo a través de nuestros libros, sino a través de nuestras opiniones en una revista. El Ornitorrinco sin duda era un bicho raro dentro de la época en la que salía, incluso en algún sentido era raro también para nosotros.*⁶

Esto contribuye a delimitar un “adentro” —*nuestra* manera de estar en el mundo, *nuestros* libros, *nuestras opiniones*— y un “afuera” del grupo, según es percibido por sus integrantes, lo que les otorga, como formación cultural, una posición social precisa.

Tres años pasaron entre la publicación del último ejemplar de *El Escarabajo de Oro*, en septiembre de 1974, y la del primero de *El Ornitorrinco*, en octubre 1977.⁷ La importancia de este dato para comprender las transformaciones

producción literaria, asumía en el espacio público, un rol de intelectual al estilo *dreyfusard*. Según sostienen Castillo y Heker, el compromiso intelectual, como conciencia crítica, y la producción literaria del escritor, constituyen dos esferas relativamente autónomas, por no decir dos esferas separadas. Por consiguiente, la literatura de ficción —cuento, novela, poesía, teatro, etcétera— no debe necesariamente ser comprometida: lo es solo si el escritor que la encarna está dotado para desarrollar el “tema” político en dicha literatura. Pero el “tema” que elige un escritor, afirman ellos, no implica necesariamente una actitud crítica ante la realidad histórica, ni un compromiso político derivado de esta. Por eso, para estos escritores, el compromiso del intelectual, más que en una novela o en un poema, se expresa con un manifiesto, con una nota editorial, con un reportaje. En definitiva, se expresa más claramente en una revista que, además de literatura de ficción, publica textos no estrictamente literarios, como editoriales y entrevistas, a través de los cuales fija sus posicionamientos políticos (Iglesias, 2016).

⁶ Entrevista del autor a Liliana Heker, agosto 2013. Disponible en <http://proyectozorzal.org/fuentes/escritores-argentinos-y-dictadura/>

⁷ Según Abelardo Castillo, “*los motivos por los cuales se dejó de publicar El Escarabajo de Oro fueron esencialmente económicos, ignoro si hubiera podido seguir saliendo, porque era una época muy dura políticamente, una época muy sangrienta, y tal vez no hubiera podido seguir saliendo. Pero el hecho concreto es que hasta el momento que la sacamos podía seguir saliendo, a veces la retiraban de los kioscos, a veces teníamos amenazas, pero la revista salía. Dejó de salir porque hubo un momento en*

operadas en esta formación cultural no radica en la cantidad de años transcurridos, sino en el contexto que se desplegó en ellos. Tomados en conjunto, estos tres años constituyen, a partir de la muerte de Juan Domingo Perón, en julio de 1974, el período de mayor intensidad de la violencia en el accionar de los grupos parapoliciales y del terrorismo de Estado que se registra durante la década del setenta (Pittaluga, 2010; Franco, 2012; Calveiro, 1998; Levín, 2013). Es también durante esos años que se profundizan las transformaciones económicas que comienzan con el golpe inflacionario y de recesión que significó el Rodrigazo, y se acentúan con la profundización del giro liberal de Martínez de Hoz. Hay que tener en cuenta, además, que el contexto de la dictadura fue muy hostil para las pequeñas editoriales locales, no solo por la clausura y prohibición de muchas de ellas (Invernizzi y Gociol, 2002), sino también por la irrupción de los *best sellers* y los libros importados, que significaron el cierre de numerosas editoriales independientes (De Diego, 2009). En este sentido, el vínculo entre las editoriales y la revista aparece como una de las estrategias de supervivencia de ambos actores. A la revista, los avisos de las editoriales le sirven para sostenerse económicamente, a la vez que para estrechar lazos con quienes pudiesen publicar su obra; y a las editoriales, los vínculos con la revista les permiten llegar a más lectores en un contexto de crisis del mercado editorial.⁸

Entre estas variables, violencia estatal y paraestatal/censura y represión/crisis económica, hay que entender los cambios que se operan en la publicación de la revista. En una situación en la que las persecuciones, las intimidaciones, la censura, los asesinatos y las desapariciones dentro del campo cultural iban en aumento, el silencio era una estrategia de supervivencia. Si la finalización de *El Escarabajo de Oro* obedeció, como sostiene Castillo, a motivos “estrictamente económicos”, está claro que, una vez superadas esas dificultades, la revista ya no era posible en los términos en los que venía siendo concebida: “*Pretendíamos*

que ya no se podía pagar con la venta de la revista lo que salía la próxima edición del número, salía diez veces más de lo que nosotros habíamos recaudado. Entonces dijimos esta revista ya no puede salir, a menos que cambiara nuestra relación con el mundo editorial y el mundo de las empresas si saliéramos a pedir avisos. Pero eso, para una revista como El Escarabajo de Oro, significaba perder una cierta independencia” (Entrevista con el autor, junio 2013. Disponible en <http://proyectozorzal.org/fuentes/escritores-argentinos-y-dictadura/>)

⁸ “Si tomamos como referencia los años 1974 y 1979 puede advertirse claramente la debacle. En 1974 se produjeron cerca de 50 millones de libros, con una tirada promedio de 10.000 ejemplares; en 1979, se produjeron 17 millones de libros, con una tirada promedio de 3.800 ejemplares (Getino 1995: 56)” (De Diego, 2009: 51).

*una revista que saliera y fuera leída y que no desapareciera en el primer número junto con todos sus integrantes”.*⁹

De esta manera, en esos tres años de silencio y ausencia de la revista en la calle, se produjo, imperceptiblemente, la última y más importante mutación de la especie. Al respecto, Abelardo Castillo sostiene que, durante los años de la dictadura:

*Necesitaba sacar una revista con la gente que era posible de sacar una revista, y diferenciarla de El Escarabajo de Oro por una razón política y por una razón meramente moral. Entonces sacamos una revista nueva, con gente nueva, y al mismo tiempo unida a la otra, para que el lector se dé cuenta de que éramos los mismos, pero en una situación diferente.*¹⁰

¿Pero se podía seguir siendo el mismo en una situación que era bastante más que diferente? El sentido de la frase de Castillo apunta, sin embargo, a referenciar el “éramos los mismos” en términos personales, con su figura y la de Liliana Heker. Así, la revista perdía algo —no todo, evidentemente— del carácter fundamentalmente grupal de los dos primeros ejemplares. Lo propio hace Heker cuando se refiere a lo que implicaba la publicación de la revista: “*La dinámica es bastante compleja, los que manejábamos la revista éramos Abelardo y yo. Había gente que estaba cerca y que participaba de las reuniones, amigos que aportaban ideas, o nos traían cuentos, pero el que dirigió siempre la línea de la revista fue Abelardo*”.¹¹ Esta pérdida del carácter grupal con relación a sus antecesoras no significó, sin embargo, que la revista no involucrara, en un marco de informalidad, a un grupo de personas unidas por relaciones afectivas y de amistad, además de político-literarias. La revista aglutina a un conjunto de escritores que comparten, sino una misma ideología, al menos determinados valores y prácticas culturales y literarias.

Para el caso de la revista aquí analizada, y para entender las mutaciones que se plantean en la significación cultural que va adquiriendo la especie en su desarrollo, es necesario analizar por quiénes y de qué manera estaban constituidas esas redes sociales que hicieron posible las publicaciones de cada uno de los tres ejemplares que la constituyeron. Es decir, atender a los vínculos y las amistades que conforman al grupo, y que le otorgaron una significación social y cultural propia (Williams, 2012). Si bien el núcleo duro del grupo lo consti-

⁹ Entrevista del autor a Castillo, *op. cit.*

¹⁰ Ídem.

¹¹ Entrevista del autor a Heker, *op. cit.*

tuyeron siempre Abelardo Castillo y Liliana Heker, el resto de los integrantes de la formación no se mantuvo estable a lo largo de los años, y estas rupturas y nuevas incorporaciones incidieron, más allá de la autopercepción del “adentro”, en la significación cultural y, sobre todo, política del grupo.

Para comprender la naturaleza de estas transformaciones, hay que tener en cuenta en primer lugar, las diversas trayectorias de los escritores que integraron esta formación cultural y que, en distintos momentos, le otorgaron rasgos identitarios particulares a cada uno de los ejemplares de la especie.

Trayectorias: alejamientos, rupturas e incorporaciones

En el caso de las dos primeras revistas, *El Grillo de Papel* y *El Escarabajo de Oro*, junto a Castillo y Heker estuvieron, en distintos momentos, pero todos con una presencia importante en cuanto a colaboraciones y textos publicados: Arnoldo Liberman, Vicente Battista, Humberto Costantini, Víctor García Robles y Bernardo Jobson, entre otros. Según sostiene Abelardo Castillo: “En *El Escarabajo de Oro* teníamos todos más o menos un mismo pensamiento, con diversos matices: había comunistas, excomunistas, más o menos anárquicos, existencialistas como yo, locos sueltos como Bernardo Jobson, pero muy bien ubicado frente a determinados tipos de problemas”.¹² Sin embargo, pese a esta caracterización retrospectiva que realiza Castillo, el grupo sufrió, a través de los años, algunas rupturas y transformaciones significativas, que expresan la fragmentación creciente del campo literario e intelectual de los años sesenta y setenta (Gilman, 2003).

Si se sigue el planteo de Osvaldo Gallone (1999), pueden identificarse tres etapas en relación con la línea editorial y la conformación de los dos primeros ejemplares de la especie, desde 1959 hasta 1974. La primera etapa, 1959-1962, abarca los seis ejemplares de *El Grillo de Papel* y los seis primeros números de *El Escarabajo de Oro*. Gallone caracteriza esta etapa como la más estrictamente literaria, aunque no está desvinculada de su contexto histórico. La segunda etapa, 1962-1967, comienza a partir del séptimo ejemplar de *El Escarabajo de Oro*, que aparece en tapa con el número trece, puesto que la revista suma a su tiraje los seis ejemplares de *El Grillo de Papel* que la preceden. En esta etapa, se registra una mayor politización y, a su vez, una merma en la publicación de poesía que está en sintonía con el alejamiento de Arnoldo Liberman de la dirección de la revista y, paralelamente, el de Horacio Salas como colaborador. Hasta el momento de su alejamiento, Arnoldo Liberman había publicado catorce

¹² Entrevista del autor a Castillo, *op. cit.*

textos en *El Grillo de Papel*, y veintiuno en *El Escarabajo de Oro*, que incluían, en ambos casos, poemas, crítica literaria, de cine y de teatro, y notas diversas, muchas bibliográficas.¹³ La tercera etapa, 1967-1974, siguiendo a Gallone (1999), la inaugura el número 33 de *El Escarabajo de Oro*, en marzo de 1967. En esta etapa se acentúa el sesgo ideológico en relación con su preocupación por temáticas que atañen a la situación política local, como la relación entre los intelectuales y el peronismo, y los debates internacionales sobre la Revolución cubana, como lo demuestra en el editorial del número 35 de noviembre de 1967 en su abierta reivindicación del Che Guevara luego de su fusilamiento en Valle Grande. En este período, se produce la incorporación de Vicente Battista, quien publicó dieciséis textos en *El Escarabajo de Oro* entre 1965 y 1969, en su mayoría cuentos, crítica literaria y notas bibliográficas.

Ahora bien, a la clasificación propuesta por Gallone (1999) habría que sumar una cuarta etapa que comienza con la publicación del número 41, en septiembre de 1970, después de casi un año de ausencia de la revista en la calle y que tiene su correlato en el “Editorial para un número uno”, firmado por Liliana Heker. En ese año también se produce otra ruptura importante cuando Vicente Battista se aleja del grupo y funda, en 1971, la revista *Nuevos Aires*, que codirigió con Mario Goloboff y Edgardo Trilnick, hasta que se fue del país en 1973.

Durante esta cuarta y última etapa de *El Escarabajo de Oro*, en la primera mitad de la década del setenta, las relaciones de estos escritores excedían el ambiente estrictamente literario en torno a la publicación de libros y revistas, y las relaciones de amistad. Pese a que el grupo no tenía una inserción institucional, algunos de sus integrantes conformaron intentos por intervenir política y gremialmente en instituciones como la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Si bien desde su fundación en 1928, presidida por Leopoldo Lugones, la SADE había nucleado a los escritores provenientes de las élites y funcionaba más como una entidad civil que gremial, durante los años sesenta, la creciente politización de los escritores fue conformando intentos por transformar dicha institución y dotarla de un significado político en sintonía con las ideas de izquierda que predominaban en el campo literario. De esta manera, se desarrolló una intensa actividad gremial que nucleó a un grupo heterogéneo de

¹³ Luego su alejamiento, Arnoldo Liberman publicó la revista *Tiempos Modernos*, de la cual solo se editaron cuatro números, entre diciembre de 1964 y noviembre de 1965 (Romano, 1986). Su participación en *El Escarabajo de Oro* mermó de manera considerable, y publicó solo algunas poesías y una nota sobre cine en 1963, y nada más hasta su última participación con tres sonetos, que aparecieron en el número 30 de *El Escarabajo de Oro*, en julio de 1966.

escritores. Así, en 1973, Humberto Costantini se presentó como candidato a presidente en las elecciones de la SADE, por la lista opositora “Movimiento de Escritores por la liberación Nacional”, junto a Raúl Larra como vicepresidente y Juan José Manauta y Roberto Santoro, como secretarios (López Rodríguez, 2010). La lista que encabezaba María de Villarino, colaboradora del diario *La Nación* y de la revista *Sur*, ganó dichas elecciones y Villarino presidió la SADE entre 1973 y 1975. En este último año, varios de los escritores que habían sido colaboradores de *El Escarabajo...*, como Liliana Heker, Humberto Costantini e Isidoro Blaistein, formaron parte de la lista de la Agrupación Gremial de Escritores, un frente en el que confluían varias tendencias de izquierda, encabezado por Elías Castelnuovo, Bernardo Kordon, David Viñas y Roberto Santoro, entre otros. En esa oportunidad, la lista presidida por Horacio Esteban Ratti gana las elecciones de la SADE. Ratti será el presidente de dicha institución al momento del golpe, en 1976, y será quien participará del polémico almuerzo con el dictador Videla, junto a Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, y el cura y escritor Leonardo Castellani.

En el contexto de la dictadura, como vimos, algunos de los escritores que habían animado los ejemplares anteriores y los habían dotado de una identidad política y cultural particular, y que habían conformado además estas redes y agrupaciones políticas de escritores, ya no estarán en escena, por diferentes motivos. Asimismo, esas redes de escritores que se articulaban en torno de diferentes prácticas políticas y gremiales sufrirán un corte abrupto a partir de las persecuciones, secuestros y desapariciones de las que fue objeto el campo cultural durante los años del terrorismo de Estado.¹⁴

En este sentido, el caso de Humberto Costantini es paradigmático puesto que expresa claramente la “doble fractura” que la dictadura produjo en el campo literario argentino (Sarlo, 1984). El terrorismo de Estado había obligado a Costantini a partir al exilio debido a su militancia política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), lo que le impedía, de hecho, más allá de cualquier cuestión, integrar el comité de redacción de *El Ornitorrinco*. Y fue precisamente esa primera fractura violenta, la que sentó las bases para la siguiente: el distanciamiento posterior de Costantini respecto de Castillo y Heker, a partir de las discusiones generadas en torno a “los que se fueron y los que se quedaron”. Humberto Costantini había publicado quince textos, entre cuentos, poemas, teatro y notas bibliográficas: desde 1959 cuando publicó

¹⁴ La Agrupación Gremial de Escritores sufrirá la desaparición de seis de sus integrantes: Lucina Álvarez, Oscar Barros, Haroldo Conti, Juan Carlos Higa, Dardo Dorrnsoro y Roberto Santoro.

“Estimado Prócer” en el número 1 de *El Grillo de Papel*, hasta 1973, cuando publica “Testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew”, en el número 46 de *El Escarabajo de Oro*. Debido a su militancia política—había formado parte del Frente Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura (FATRA), y del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), ambos vinculados políticamente al PRT—, Costantini tuvo que abandonar el país en 1976 y se exilió en México hasta 1984. A Castillo lo había conocido en las reuniones de *La Gaceta Literaria*, revista en la que Costantini había participado durante cinco números, a partir del número 13, en el que publicó “El cielo entre los durmientes”. Luego, en el número 14, aparece como redactor y en el 15, de septiembre-octubre de 1958, como colaborador; en el número 16 integra el Consejo de Redacción, lugar que ocupó en el número siguiente, en el que se registra su última intervención en dicha revista.

Si se tiene en cuenta que los escritores que conformaban estas redes tuvieron distinto tipo de participación política—ya sea militancia en organizaciones, actividad gremial dentro de la SADE, entre otras—, resulta lógico constatar que la represión que se desató a mediados de la década del setenta y que, como se mencionó anteriormente, tuvo su paroxismo durante dictadura, destruyó cualquier posibilidad de que dicha red volviera a constituirse. De esta manera, la conformación de la nueva revista está estrechamente relacionada al contexto que la vuelve posible y esto impacta en su significación cultural y social, puesto que cambia, de alguna manera, el perfil de los escritores que colaboraban en ella, más allá de la permanencia de Castillo y Heker.

Para el caso del grupo que va a conformar *El Ornitorrinco*, los cambios más significativos, en cuanto a la composición de los escritores que la integraron, tienen que ver con el perfil profesional y político de algunos de ellos. En primer lugar, hay que destacar la incorporación de Sylvia Iparraguirre, quien si bien había participado en la revista anterior, tuvo en el nuevo ejemplar una sección a su cargo. Iparraguirre había conocido en 1969 a Abelardo Castillo, con quien se casaría en marzo de 1976. El perfil de Sylvia Iparraguirre era, sin dudas, de corte más académico y esto se reflejaba en la sección de “Ciencias humanas” y, más específicamente, de “Lingüística” que dirigía en la revista.¹⁵

¹⁵ En 1982 Sylvia Iparraguirre ingresa en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) como becaria. Allí trabaja en una investigación de campo que luego será su tesis doctoral en el área de la sociolingüística. En 1986 comienza a trabajar en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente pasa al Instituto de Lingüística de la misma facultad donde forma parte de diversos proyectos de investigación, tarea que desempeña hasta la actualidad.

Sylvia Iparraguirre publicó una sola nota en el número 46 de *El Escarabajo de Oro*, en 1973, y diecinueve notas bibliográficas y artículos en todos los números de *El Ornitorrinco*, salvo en los números 4, 6, 7 y 9.

La incorporación de Cristina Piña, una escritora que no provenía de la intelectualidad de izquierda, es quizás la que más contrasta con la tradición de la especie. Entre el número 1, de 1977, y el número 6, de 1979, Cristina Piña publicó dos poemas, y seis notas y artículos sobre poesía. Asimismo, Piña dirigió la sección de “Poesía” de la revista, hasta el número 7 en que esta pasa a manos de Daniel Freidemberg. Tanto este poeta, como Irene Gruss, provenían de una militancia en el Partido Comunista (PC) y habían formado parte, en 1970, del grupo de poetas fundadores del Taller Literario Mario Jorge De Lellis, en la SADE. Si bien ambos habían participado durante la última etapa de *El Escarabajo de Oro*, en el nuevo ejemplar su presencia cobró mayor peso de la mano del espacio más significativo que se le otorgó a la poesía en *El Ornitorrinco*. Daniel Freidemberg había publicado un poema en el número 46 de *El Escarabajo...*, mientras que en la nueva revista publicó tres poemas y siete textos, entre notas bibliográficas y artículos; por su parte, Irene Gruss, que había publicado un poema en el número 47 de *El Escarabajo*, en el nuevo ejemplar publicó dos poemas y participó de las entrevistas grupales que el *staff* de la revista realizó a diferentes escritores.

Asimismo, a *El Ornitorrinco* se incorporaron algunos escritores que formaban parte del primer taller literario de Abelardo Castillo, como Laura Nicastro, quien solo publicó un cuento en el número 3, en 1978; y otros que habían frecuentado las reuniones periódicas que la revista hacía en el café Tortoni, como Bernardo Jobson, quien había participado de *El Escarabajo de Oro* con cinco cuentos y un artículo entre 1961 y 1971. A ellos se sumaron otros escritores jóvenes, como Jorge Mirarchi, quien publicó un cuento, un poema y tres notas bibliográficas entre el número 5, de 1979, y el número 12, de 1985; Rodolfo Grandi, quien publicó un cuento y cuatro notas bibliográficas entre el número 6, de 1979, y el número 10, de 1981; y, en la etapa final, Juan Forn, quien publica una nota y un cuento en los números 13 y 14 de 1986.

En definitiva, este grupo de escritores que conformó *El Ornitorrinco*, “disimiles en edades, creencias y nivel de relación con las letras, (desde el especialista en lingüística y el crítico, al creador) coinciden en ‘poner lo estético, en literatura, por encima de cualquier otra valoración, pero hacer una revista para lectores y no una élite para iniciados’ (Editorial, n° 1)” (Romano, 1986: 175). La mayoría de estos escritores jóvenes que recién comenzaban a publicar sus primeras obras, empezaban también a frecuentar los ámbitos de sociabilidad y

las prácticas literarias que el grupo de *El Ornitorrinco* desarrolló durante los años de la última dictadura y que serán objeto de análisis en el próximo apartado.

***El Ornitorrinco* en su hábitat: sociabilidades y prácticas en tiempos de dictadura**

El estudio de las sociabilidades culturales ha sido muy poco frecuentado por la historiografía local.¹⁶ Sin embargo, dadas las notables relaciones entre ámbitos de sociabilidad y publicaciones periódicas (Bruno 2014), el estudio de las sociabilidades de los grupos culturales como el de la revista aquí analizada, permite identificar y analizar el rol social de los sujetos que las impulsaron, así como las formas de los vínculos interpersonales que se establecían entre sus miembros.

Este tipo de prácticas de escritores y artistas que frecuentaban ámbitos de sociabilidad, como bares y cafés, por lo general de noche y hasta bien entrada la madrugada, se asocian comúnmente con las de la “bohemia”. Este vocablo alude a ciertas formas de sociabilidad, principalmente artística e intelectual, que fue característica del momento de formación y consolidación del campo cultural y literario porteño, pero que para la época aquí analizada había sufrido cambios significativos. Como afirma Pablo Ansolabehere:

Si bien ese concepto complejo que recibe el nombre de bohemia se compone de una serie de elementos que parecen confluir únicamente en la capital francesa, y durante un período determinado, bohemia también designa un fenómeno de carácter internacional vinculado con el mundo intelectual, el arte y las letras, que se verifica más allá de los límites de París, y cuyos ecos resuenan incluso en regiones tan apartadas como Buenos Aires (2014: 155).

¹⁶ El empleo del término sociabilidad reconoce, según el planteo de Maurice Agulhon, dos definiciones: “Una muy general es la aptitud de la especie humana para vivir en sociedad. [...] La otra definición, se refiere a la aptitud del individuo de frecuentar agradablemente a sus semejantes [...] Pero es fácil ver que, para el historiador, la primera de esas aplicaciones del término es demasiado amplia y la otra, demasiado estrecha. Los objetos de la historia están, precisamente, entre ambas, más allá del individuo singular y más acá de la especie” (Agulhon, 2009: 31). Desde esta perspectiva, el concepto de sociabilidad está íntimamente relacionado con la categoría de “experiencia”, es decir, como un término medio necesario para comprender la interacción entre el ser social y la conciencia social, que permite distinguir las asimetrías y las disparidades entre determinación y autodeterminación en los comportamientos sociales de los sujetos en el pasado (Anderson, 2012).

Sin embargo, en el contexto de los años sesenta y setenta, esta vida bohemia estará signada por una creciente politización y radicalización de los escritores, lo que convertirá a aquellas reuniones y tertulias en verdaderas tribunas políticas. Si bien estos escritores no se definían a sí mismos como bohemios, en el sentido que ese vocablo adquirió en París a mediados del siglo XIX, referirse a sus prácticas con este término implica ubicar a estos escritores dentro de un sector social que, por lo particular de su modo de vida, disponen de tiempo para la escritura, las tertulias y reuniones en bares y cafés durante largas horas, ya que no se ven atados a horarios fijos.

Estas prácticas, como se vio, se articulan por fuera de los circuitos oficiales e institucionalizados, y reúnen a grupos independientes de artistas e intelectuales que, por la especificidad de sus actividades y modos de vida, frecuentan ámbitos que les permiten establecer relaciones con sus pares y, en el caso de los escritores, dar a conocer su propia obra entre colegas, hacer crítica literaria, así como tender redes sociales para publicar y posicionarse dentro del campo.

Como se planteó en la introducción, estas formas reconocidas de organización y autoorganización de los escritores e intelectuales se articulan socialmente de manera específica. En el caso de *El Ornitorrinco*, el conjunto de prácticas en las que hundía sus raíces transcurría durante los años sesenta y primeros setenta en lugares públicos y abiertos, como las reuniones del café Tortoni de Avenida de Mayo, u otros cafés o bares de Avenida Corrientes.¹⁷ Allí, la confección de la revista, así como sus editoriales y notas, se discutían en público, con rondas de lectura en voz alta y debates que ocupaban madrugadas enteras. La revista se

¹⁷ Con respecto a estas reuniones, Abelardo Castillo afirma que el café Tortoni “era la redacción de *El Escarabajo de Oro*. Era el living de la casa que ninguno de nosotros tenía en aquel momento. Era el lugar donde prácticamente hacíamos todo. Ahí se leían los cuentos y se decidía qué era lo que se iba a publicar. En esas viejas mesas discutíamos los editoriales de la revista, y redactábamos hasta el más pequeño suelto. Nos reuníamos en el reservado de la izquierda todos los viernes. Éramos como una especie de horda, que llegaba y ocupaba varias mesas, que componían de esa forma una más larga. Nadie podía permanecer cerca conversando normalmente, porque nosotros vociferábamos incesantemente acerca de los problemas de la literatura, o si no estábamos criticándonos con dureza los textos que traíamos [...] Todo el tiempo que podíamos lo gastábamos en el Tortoni. Para nosotros, ésa era la única manera de concebir la tertulia de café. [...] En el Tortoni empezamos alrededor de 1960 y estuvimos hasta el 74, durante toda la etapa de *El Escarabajo de Oro*. Fueron unos 15 años. Cuando salió *El Ornitorrinco*, ya bajo la dictadura, era muy difícil encontrarse en cafés o lugares públicos porque estaban prohibidas las reuniones. Además, habían establecido el estado de sitio... Desde entonces los encuentros pasaron a realizarse en mi casa” (Alejandro Michelena, “Una legendaria tertulia. Entrevista con Abelardo Castillo”. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/sem-alejandro.html> (consultado el 5/8/2015).

hacía de manera artesanal, la distribución era personal, a mano, en los quioscos de diarios de las líneas de subte o de las avenidas del centro porteño. De este modo, la revista articula una serie de prácticas y ámbitos de sociabilidad no institucionalizados e independientes del Estado, que sufrieron profundas transformaciones durante los años de la última dictadura. Por un lado, por el contexto represivo que obligaba a la autocensura y la retracción al ámbito privado, y, por otro lado, porque muchos de los escritores que habían animado este tipo de reuniones literarias, que habían formado parte de las redes de sociabilidad que estas prácticas generaban, —por ejemplo, los talleres o grupos literarios— se hallaban exiliados, perseguidos y, en algunos casos, muertos o desaparecidos.

La experiencia de los talleres, los cursos y los concursos literarios

Como se planteó previamente, en torno de la revista se realizaron diversas actividades que tenían como objetivo principal romper el aislamiento que se quería instalar entre diferentes actores culturales a causa del miedo y la vigilancia. En este sentido, los integrantes de la revista desarrollaron por esos años una serie de talleres literarios que marcaron, como se verá a continuación, una transformación importante en dichos escritores. Sobre todo, si se tiene en cuenta las críticas que habían sostenido Castillo y Heker sobre los talleres literarios durante los años sesenta.¹⁸ Pero será precisamente durante el contexto de la dictadura que los talleres literarios comenzarán a constituirse en una marca identitaria del campo literario y del movimiento cultural argentino, luego del período experimental de los años sesenta y de un lento crecimiento marginal de diversos talleres a partir de mediados de los años setenta.¹⁹

¹⁸ “*En realidad, en los años sesenta, a nosotros un taller de literatura, de narrativa, nos parecía una mala palabra, era una cosa para la gente de la SADE. Nos parecía ridículo*” (Entrevista del autor a Liliana Heker, *op. cit.*).

¹⁹ En el ámbito académico, en 1975, se crea el Grupo Grafein, surgido alrededor de la cátedra de Literatura Iberoamericana que dictaba Noé Jitrik en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El grupo se inició en el Instituto de Letras, pero luego se autonomizaron de este y comenzaron a reunirse en las casas de los distintos integrantes. Durante los años de la dictadura, desarrollaron varios talleres con diversos coordinadores y en 1981 la editorial española Altalena publica *Teoría y práctica de un taller de escritura*, en el que se recogía la experiencia del grupo (Tobelem, 1994). A diferencia de los “talleres literarios” tradicionales, Grafein funcionó —en sus comienzos— como taller de escritura: una especie de laboratorio en el que se investigaba la escritura propiamente dicha, las condiciones de producción. No se investigaba la escritura como medio para decir algo —un mensaje previo, por ejemplo—, sino como fin en sí misma. Una de las innovaciones del andamiaje teórico de Grafein consistió en despegar la escritura tanto de su concepción como el

Estos talleres vinculaban a diferentes escritores e intelectuales que se juntaban a estudiar y discutir teoría literaria, literatura, etcétera, en ámbitos que intentaban mantenerse a salvo de la represión, pero que, sin embargo, no siempre lo consiguieron. Por otro lado, los talleres literarios resultaban necesarios para que estos escritores pudiesen generar ingresos para poder vivir, es decir que se convertían en prácticas laborales. De esta manera, puede observarse que, desde los comienzos de la revista, en el número 2, de marzo-abril de 1978, y en el número 3, de junio-julio del mismo año, se anuncian en una sección titulada “Solo para ornitorrincos” cursos de técnica literaria, poesía, lingüística, historia crítica de la literatura nacional, psicolingüística y crítica. Según testimonios de los mismos escritores, los talleres literarios comenzaron a proliferar en Buenos Aires a mediados de los años setenta a partir de una doble necesidad: la de continuar con las reuniones literarias en lugares públicos, amenazadas por la vigilancia y la represión, y la de generar recursos económicos para aquellos escritores que o bien debieron alejarse de la enseñanza o se vieron perjudicados por la creciente crisis del mundo editorial. En este sentido, Liliana Heker sostiene:

Había una necesidad de los jóvenes escritores inéditos de reunirse con sus pares, habían desaparecido las revistas, no había reuniones en los cafés, no había manera de conectarse, de saber que el otro, que el semejante, existía. Ahí hay una necesidad muy grande. Y había una necesidad en general de los escritores, que ya más o menos habíamos publicado, de sobrevivir. Creo que los talleres empiezan a tener peso por esa doble necesidad. No era solo que los escritores queríamos que se nuclearan los otros escritores, en mi caso me habían echado del lugar donde trabajaba y había muchos también que se habían quedado sin trabajo, sin manera de subsistir.²⁰

Pero las relaciones de los escritores que animaron *El Ornitorrinco* con el mundo de los talleres literarios provienen de antes de la dictadura. A comienzos de los años setenta, los poetas del taller Mario De Lellis, entre los que se encontraban Daniel Freidemberg, Marcelo Cohen, Irene Gruss y Jorge Aulicino, comenzaron a asistir a las reuniones de *El Escarabajo de Oro*, los viernes a la noche en el Tortoni, y de esta manera se fueron vinculando con Castillo y Heker. Varios años más tarde, muchos de esos escritores y poetas formarían parte del *staff* de *El Ornitorrinco*.

producto solo de las personas con talento innato, como de pensarla como un instrumento para comunicar algo previo (Bas, 2015).

²⁰ Entrevista del autor a Heker, *op. cit.*

Los orígenes de taller Mario Jorge De Lellis se remontan a 1969, cuando aún se llamaba “Taller Aníbal Ponce” y se hacía los sábados en el barrio de Once, alrededor de una mesa en una oficina del teatro IFT.²¹ Casi todos los fundadores del taller tenían algún tipo de vínculo con la juventud del Partido Comunista, o bien eran militantes o simpatizantes, y eran dichos vínculos los que los reunía en ese espacio político-literario. A comienzos de los años setenta, el taller se muda al edificio de la SADE en la calle México, y cambia su nombre al de “Mario Jorge De Lellis”. Según los testimonios de sus integrantes, cuando el taller se mudó a la SADE dejó de tener un coordinador y cada reunión pasó a ser coordinada por un integrante cualquiera, que entre otras cosas se hacía cargo de distribuir el uso de la palabra durante las acaloradas discusiones. El taller era autogestionado, había poetas y narradores, la mayoría jóvenes. En las reuniones se leían poemas, fragmentos de novelas o cuentos, y luego se hacían las críticas. Una vez por mes había un invitado, escritores que iban a dar charlas y a contestar preguntas, entre los que cabe mencionar a Haroldo Conti, Abelardo Castillo, Liliana Heker, Humberto Costantini, Luis Luchi, Alfredo Carlino, Miguel Briante e Isidoro Blaisten.²²

A mediados de los años setenta, tanto Daniel Freidemberg como Irene Gruss se alejan del taller. A partir de esos años, en el grupo del De Lellis se produce un recambio generacional con respecto al grupo fundador, en el que comienza a gestarse el grupo de poetas que luego conformarán la revista *Mascaró*, en años de la democracia.²³

Este vínculo con el grupo fundador del taller Mario De Lellis, muchos de los cuales provenían de una tradición de militancia en el PC, marca un punto de contacto con los orígenes de la *especie*, a partir del desprendimiento crítico de un grupo de escritores que participaban de *La Gaceta Literaria*, revista ligada al PC, a fines de los años cincuenta. Tanto en el caso de Castillo y Heker, como en el de este grupo de escritores jóvenes, más ligados a la poesía que al cuento,

²¹ El teatro IFT (Idischer Folks Teater) fue fundado en 1932 en un local alquilado frente a la sinagoga de la calle Paso al 400. La sede actual se construyó en 1952, en la calle Boulogne Sur Mer 549. Los integrantes de su elenco pertenecían a la colectividad judía identificada con la izquierda. El IFT fue un centro fundamental del comunismo y de la actividad militante en la ciudad (Wainschenker, 2013).

²² “El De Lellis: una recapitulación”, por Matías Capelli. En *El Ansia. Revista de literatura argentina*, mayo, 2014. Disponible en <http://www.revistaelansia.com.ar/blog/?p=192> (consultado el 5/4/2016).

²³ La revista *Mascaró* nucleó a un grupo de escritores integrado por Luis Eduardo Alonso, Leonor García Hernando, Sergio Kisielewsky, Nora Perusín y Juano Villafañe, quienes se habían conocido a mediados de los setenta en el marco del Taller Literario Mario Jorge De Lellis.

ambos compartían en cierto modo algún tipo de relación política y cultural con los círculos del PC y, en el contexto de la dictadura, retoman algunas de las prácticas internas del partido, como las dinámicas grupales de lectura y discusión política y literaria, como eran los talleres.

Junto a la experiencia del De Lellis y los vínculos con el PC, los escritores de *El Ornitorrinco* también estuvieron vinculados con unos talleres literarios que se daban en el Instituto Argentino de Ciencias, a fines de los años sesenta. Estos talleres habían comenzado en 1965, dirigidos por el doctor Rodolfo Carcavallo, y según Isidoro Blaisten fueron los primeros intentos de talleres literarios que se hicieron en el país. En el Instituto Argentino de Ciencias dieron clases y cursos literarios Sábado, Borges, Marechal, Ulyses Petit de Murat, Conrado Nalé Roxlo, Bernardo Kordon, Agustín Cuzzani, Dalmiro Sáenz, Abelardo Arias, Abelardo Castillo, Marta Lynch, Humberto Costantini, Haroldo Conti, Carlos Mastronardi, entre otros.²⁴

A partir de estas experiencias, tanto Castillo como Heker comenzarán a realizar talleres literarios en sus domicilios a mediados de los años setenta, cuando el crescendo del terrorismo de Estado empieza a resquebrajar los espacios públicos que estos escritores frecuentaban. En el caso de Abelardo Castillo, empezó con los talleres literarios propios, un poco como desprendimiento de esos talleres que se hacían en el Instituto Argentino de Ciencias a los que a veces era invitado, antes de que salga *El Ornitorrinco*. Liliana Heker, por su parte, comenzó con su taller literario en 1977 y, al año siguiente, también coordinó un taller de narrativa en el mencionado teatro IFT.

De este modo, la relación entre los talleres literarios y la revista se vuelve mucho más fluida y vital, si se tiene en cuenta que una de las intenciones explícitas de la publicación es la de dar a conocer escritores jóvenes e inéditos. El crecimiento de los talleres literarios en la segunda mitad de los setenta se produce cuando al público interesado en aprender a escribir de la mano de los grandes maestros, se sumaron los jóvenes con inquietudes políticas que, a causa de la dictadura, ya no podían discutir sus textos en los bares (Schettini, 2008). Así, en el cambio de época que se verifica durante los años del terrorismo de Estado, se articularon zonas de la experiencia que, si bien se replegaron del ámbito público al ámbito de lo privado, no obstante, mantuvieron cierta visibilidad y continuaron las prácticas que se habían desarrollado en la época anterior.

²⁴ Isidoro Blaisten, *Anticonferencias*. Citado en Adriana Schettini en “¿Se puede enseñar a escribir ficción?”, *Suplemento ADN*, diario *La Nación*, 26/11/2008.

Junto a los cursos y talleres literarios, estos escritores continuaron con una tradición que heredaban de sus predecesores y que buscaba promover a determinados escritores a partir de otorgarles premios y reconocimientos en los concursos organizados desde la revista. Respecto a estos concursos, en la misma sección de los números 2 y 3, se anunciaba un futuro lanzamiento del primer concurso de cuento y poesía de *El Ornitorrinco*. Dicho concurso será anunciado en una nota destacada que ocupa la mitad superior de la página 21 del número 5, de enero-febrero de 1979.²⁵ El mismo aviso se reitera en la página 12 del número 6, de julio-agosto de 1979, y hace alusión al pedido de numerosos lectores para que se prorrogara la recepción de los trabajos. En el número 7, de enero-febrero de 1980, se anunciaba en una nota que ocupaba la totalidad de la página 24, que se había cerrado la recepción de cuentos y que los preseleccionados estaban a consideración del jurado; también se comunicaba que la entrega de premios se realizaría durante la primera quincena de marzo en la Sala Dos del Teatro IFT.²⁶ Además de la entrega de premios del concurso de cuentos, la revista organizó una fiesta que, en el contexto de la dictadura, implicaba algunas dificultades y riesgos.

En definitiva, la publicación de la revista durante esos años puso de manifiesto las transformaciones operadas en esta formación cultural, que hicieron del nuevo y último ejemplar un “bicho literario” con identidad propia. En el contexto crecientemente represivo que se instala en el país a mediados de los años setenta, este grupo de escritores tuvo que habituarse, por instinto de conservación, a relegar espacios y prácticas de sociabilidad en lugares públicos, que habían conformado buena parte de su identidad como grupo. Este hecho contribuyó a resquebrajar redes y relaciones sociales e incidió en el significado cultural y político de la especie.

²⁵ “I CONCURSO LATINOAMERICANO DE CUENTOS ‘EL ORNITORRINCO’. A partir del 15 de diciembre [de 1978] queda abierta la recepción de trabajos para nuestro Primer Concurso de Cuentos. Se designarán: un Primer Premio, al que se ha de otorgar El ornitorrinco de Oro, y Segundo y Tercer Premios, que recibirán El ornitorrinco de Plata. Serán seleccionados hasta diez cuentos (incluyendo los tres premios) que, junto con cinco relatos inéditos de escritores argentinos, integrarán el Primer Volumen de Cuentos Premiados de *El Ornitorrinco*” (*El Ornitorrinco*, n° 5, 1979, p. 21). El jurado del concurso, según lo anunciado en la revista, lo integraban Beatriz Guido, Luis Gregorich, Fernando Alonso e Isidoro Blaisten y “un equipo de preselección formado por el Consejo de Dirección de *El Ornitorrinco*”.

²⁶ Para este concurso se presentaron alrededor de ciento ochenta cuentos. Los escritores que obtuvieron la Primera Mención fueron Mabel Pagano por “Sol de 400 años”; Hebe Serebrisky por “En la cornisa”, y Antonio Brailovsky por “Fiesta”.

Escritores y dictadura: rupturas y continuidades

En el cambio de época que se verifica durante los años del terrorismo de Estado y la dictadura, hubo zonas de la experiencia que se replegaron del ámbito público al privado, en un contexto de creciente intolerancia respecto a los valores y las prácticas políticas de grandes segmentos de la cultura y la intelectualidad que venían desarrollándose desde los años sesenta. En el caso del grupo de escritores que alimentó la especie en la que se filia *El Ornitorrinco*, una de las prácticas y formas de sociabilidad que los identificó, y que desarrollaron asiduamente durante más de una década, eran las reuniones y tertulias en bares y cafés porteños. Como se mencionó en el apartado anterior, la edición y publicación de cada número de las revistas motivaba una serie de reuniones que, durante los dos primeros ejemplares de la especie, se hicieron en lugares públicos, como bares y cafés, a las que asistían escritores vinculados política y/o literariamente, cuando no afectivamente. En ellas se leían y discutían los textos propuestos a publicación, así como los temas que abordaría la revista, lo que acarrearía discusiones políticas y literarias que, de haberse podido registrar, constituirían un material invaluable para la historia cultural. Estas reuniones públicas, en el contexto de la última dictadura, ya no podrán seguir desarrollándose, lo que implicó un impacto profundo en las prácticas y formas de sociabilidad de estos escritores. Esto marca una de las principales rupturas que se producen en la sociabilidad de estos grupos literarios, puesto que, como ya se planteó, la dictadura fracturó el campo cultural y obligó al repliegue y encierro en el ámbito privado.

Para el caso de la revista, este repliegue impacta negativamente en su relación con los lectores. En este sentido, Heker sostiene sobre los primeros años de *El Ornitorrinco*:

A los lectores no los veíamos, la gente tardó mucho en enterarse que había salido el primer número de El Ornitorrinco. Fue el número que menos se vendió en toda nuestra historia de revistas literarias. Nos reuníamos en la casa de Castillo, en mi casa, pero todo lo exterior cambió totalmente. Al principio no sabíamos quiénes eran nuestros lectores. En El Escarabajo de Oro nos leían muchos estudiantes, poetas y narradores jóvenes, gente que amaba la literatura que, se detectaba, era la misma que compraba nuestros libros. En la época de la dictadura ni se vendían nuestros libros, la verdad que uno sentía que no existía, entonces no sabíamos, calculábamos que eran lectores que estaban vivos, y que de pronto habían leído El Escarabajo de Oro, que conocían a Abelardo y a mí y que se habían topado

*con la revista y la habían comprado, pero no los encontrábamos, no podíamos tipificar un lector como de algún modo podíamos tipificarlo con El Escarabajo de Oro. Ese lector no lo podíamos detectar.*²⁷

Otra de las rupturas que hay que destacar es la de los sentimientos que se ponen en juego en cada una de las distintas etapas por las que atravesó el grupo que animó la revista, y que incide considerablemente en el significado de esta. Si los años sesenta están caracterizados por las miradas retrospectivas de sus actores como “años felices”, los años de la dictadura son “años grises, de desolación”. Así, ya en 1973 Castillo registra en su diario el siguiente comentario: “Año cada vez más los primeros años de *El Escarabajo de Oro* –el 63, el 65– cuando el *grupo* era una realidad y una fiesta. Lamento que Sylvia no haya conocido aquello”;²⁸ “Ayer otro aniversario de *El Grillo de Papel*. Estábamos Liliana, Bernardo, Sylvia y yo. No tengo ningún interés en pensar que los aniversarios de la revista son tristes”.²⁹ Ese sentimiento de tristeza por la creciente disolución del grupo, en el contexto de la dictadura se mezclará con una sensación de miedo y desolación. Así, el 30 de diciembre, anota Castillo: “La ‘revolución’ de los militares ha creado entre los argentinos, entre los que nos quedamos, una triste sensación de aplastamiento y, a veces, de miedo”.³⁰

Este mismo estado de desolación y temor puede apreciarse, por ejemplo, en algunas de las cartas que conforman el volumen de la correspondencia del escritor Francisco Gandolfo con diferentes escritores de la época, como en el caso de la carta de Jorge Aulicino fechada el 13 de septiembre de 1976: “A veces pienso que acepté con demasiada facilidad el aislamiento que nos impusieron y si bien no escribo para exclusiva satisfacción de mi ombligo, me encuentro en un estado de ánimo más bien desolado y algo escéptico” (Gandolfo, 2011: 114); o la carta de Daniel Freidemberg fechada el 7 de marzo de 1978:

Aquí ando, muerto de miedo y tratando de ver cómo hago para sacar un pie, una mano o aunque sea la nariz de entre la pila de cartas, poemas, libros y revistas que ocupan mi departamento. No hay mañana en que no lleguen uno o dos sobres y el portero me mira como diciéndome: “Qué fatos raros tendrás vos en Rosario” (Gandolfo, 2011: 136).

²⁷ Entrevista del autor a Heker, *op. cit.*

²⁸ Castillo (2014), 15 de febrero, 1973, p. 346.

²⁹ *Ibidem*, 29 de septiembre, 1976, p. 391.

³⁰ *Ibidem*, 30 de diciembre de 1976, p. 400.

Esta nueva reconfiguración de las prácticas culturales que se opera en el grupo de la revista implica la conformación de microespacios:

[Estos microespacios] se constituyen como privados y públicos al mismo tiempo, pues implican actividades de puertas adentro que alcanzan una mínima repercusión y contribuyen a una reflexión –menos solitaria– sobre lo privado, lo público y lo político. [...] Esta esfera comprende distintas actividades organizadas en torno a las llamadas universidades de catacumbas (grupos de estudio de diferentes disciplinas y centros de investigaciones), la literatura y sus incontables talleres, el teatro y la proliferación de escuelas de enseñanza, la psicoterapia, el rock nacional y el cine (Ollier, 2009: 93).

Este movimiento del ámbito público al privado se observa claramente en la denominada “universidad de las catacumbas” y encuentra una estrecha relación con lo que sucede en el campo literario en el mismo contexto.³¹ Frente a esta situación, los sectores intelectuales y literarios ligados a las tradiciones de izquierda buscarán –al igual que lo hacen los exmilitantes de las organizaciones revolucionarias (Ollier, 2009)– preservarse de la represión a la vez que mantener ciertos espacios de reflexión colectiva en el ámbito privado, que se constituye en el ámbito privilegiado para el desarrollo intelectual y literario.

El repliegue en el ámbito privado no significó empero el corte abrupto de los lazos generados entre los escritores y diversos militantes y activistas políticos.

³¹ Como afirma Mara Polgovsky Ezcurra en su tesis doctoral sobre la cultura de catacumbas y los grupos de estudio que dirigieron Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer y Juan José Sebreli, estos se conforman a partir de una sensación de malestar y curiosidad insatisfecha por parte de los estudiantes, quienes “propusieron a profesores que habían sido expulsados de las aulas, u otros productores culturales que nunca habían formado parte de la universidad, comenzar un grupo de estudio. Las circunstancias en las que podía hacerse tal proposición no eran sencillas. El ambiente de aquella época estaba cargado de sospechas; no debía jamás perderse la apariencia del orden. Algunos profesores pedían primero su teléfono al interesado, después lo citaban en algún café para tener un breve encuentro y, posteriormente, si había cierto entendimiento mutuo, lo invitaban a participar. Así, la membresía de los grupos se mantuvo siempre limitada, no hubo convocatorias abiertas y generalmente los participantes eran invitados por un amigo o colega de ‘confianza’. En la mayoría de los casos, encontrar un lugar de reunión no supuso un reto significativo, ya que los grupos participaron del proceso de privatización de la vida cotidiana que engendró la dictadura y prácticamente todos se llevaron a cabo en los departamentos de los profesores. Siempre y cuando la entrada y salida de los estudiantes se hiciera con relativo sigilo –escalando las llegadas y salidas para que no caminaran en grupo ni hicieran ‘alboroto’–, las reuniones significaban un riesgo menor. Aun así, los diferentes grupos tomaron medidas precautorias a partir de sus circunstancias particulares” (Polgovsky, 2009: 66-67).

Por el contrario, en estos espacios se articularon redes y circuitos sociales que excedieron los estrechos límites del campo literario, y que intentaron preservar y continuar los vínculos entre los escritores y la política. En este sentido, Sylvia Iparraguirre recuerda: “Una reunión semi-clandestina con las Madres de Plaza de Mayo, que para mí fue una reunión extraordinaria, en términos personales, porque ahí Hebe de Bonafini explicó la importancia política de la consigna ‘Aparición con vida’. Me acuerdo de que fue en la calle Riobamba, en un local muy pequeño”.³²

De este modo, dice Ollier sobre estos espacios de contacto:

Van a dar lugar a los nuevos entrelazamientos, encierran una serie de logros (quizás victorias) en relación con la dictadura. Si haber sobrevivido se convierte en el primer triunfo sobre el régimen, evitar el aislamiento es el segundo. Porque además de atomizar a la población, cortando toda posibilidad de organización en torno a sus referentes sociales y políticos tradicionales, el Estado impone un modelo cultural de aislamiento (2009: 95).

Para tratar de romper ese aislamiento cultural impuesto por el régimen militar, además de publicar a escritores jóvenes e inéditos, en las páginas de la revista se publicitaban cursos y talleres literarios dictados por sus integrantes; y se organizaron, como ya lo habían hecho desde las revistas anteriores, concursos de cuentos en los que se buscaba promover y posicionar a nuevos escritores. De esta manera, el contexto represivo de los años de la dictadura redefinió las prácticas de estos escritores a partir de la fractura, el repliegue y aislamiento del campo literario.

Conclusiones

Como se intentó demostrar en las páginas anteriores, en el grupo que conformó la “formación cultural” que gestó la especie en la que se filia *El Ornitorrinco*, se operaron una serie de transformaciones en la composición interna del grupo, en sus prácticas, en los ámbitos de sociabilidad y los espacios por los que circulaban estos escritores, y las revistas que publicaban. En este sentido, un aspecto que incide en la significación político-cultural del grupo, y que marca un punto de diferenciación entre la última y las dos primeras revistas de la especie, es el de la composición del grupo en términos de los posicionamientos políticos de quienes lo integraron. En el caso de *El Ornitorrinco*, si bien la dirección seguía

³² Entrevista del autor a Sylvia Iparraguirre y Abelardo Castillo, junio 2013.

en manos de Abelardo Castillo, entre sus integrantes se observa una mayor heterogeneidad ideológica como lo demuestra la incorporación de Cristina Piña y de Sylvia Iparraguirre, quienes no pertenecían al campo de la izquierda que había caracterizado a los integrantes de las revistas anteriores.

Las transformaciones operadas en el grupo no se produjeron solo por cuestiones de índole política, como lo fue la ruptura y el alejamiento del grupo de Vicente Battista en *El Escarabajo de Oro*. El contexto represivo que se acentuó a mediados de la década del setenta y se profundizó en los años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, jugó un rol decisivo en dicha mutación, y produjo una fractura violenta en el campo literario entre aquellos escritores que debieron exiliarse, como Humberto Costantini —quien había formado parte del grupo de *El Escarabajo de Oro*— y quienes permanecieron en el país. Esta fractura sería el sustento de futuros enfrentamientos y debates con relación al rol de los escritores frente a la dictadura y sus relaciones con el régimen militar.

El impacto del contexto represivo y del accionar del terrorismo de Estado incidió profundamente en varios aspectos que hacen a la conformación del grupo, pero también a sus prácticas y a los ámbitos de sociabilidad que frecuentaban y por los que circulaba la revista. De esta manera, se observa una transformación fundamental en dichas prácticas y formas de sociabilidad, en ese proceso de repliegue del ámbito público al ámbito privado que se produce durante los años de la última dictadura. Para el caso de la revista *El Ornitorrinco* y de la sociabilidad desplegada en torno de ella, este hecho marca otro punto de inflexión en el desarrollo de la especie. Así, de la elaboración colectiva, con debates y lecturas en voz alta en el espacio público, como eran las tertulias y peñas literarias en las que se habían gestado las revistas anteriores, se pasó a un último ejemplar gestado en el ámbito privado, la casa de Abelardo Castillo, y que involucró a un número menor de asistentes y participantes de las reuniones organizadas por la revista.

Para concluir, podría pensarse la publicación de *El Ornitorrinco*, así como las prácticas desplegadas en torno a ella, a partir de la articulación de los conceptos de *retirada*, *camuflaje* y *resistencia*. Como ya se mencionó, fue último ejemplar de la “fauna fabulosa” de las revistas de Abelardo Castillo y, de esta manera, representó una *retirada* del mundo de las revistas literarias iniciado casi tres décadas atrás. Por otra parte, la revista se *camufló* con un discurso metafórico, elíptico en ocasiones, para construir espacios alternativos de crítica y producción literaria. Y, por último, al reivindicar la tradición de la que formaba parte, se encomendó la tarea de *resistir*, para sobrevivir en un contexto represivo como el de la última dictadura. Si bien la revista no formó parte de una resistencia

organizada, y las motivaciones de la publicación no respondían exclusivamente a los principios que dicho movimiento hubiese requerido, su discurso y algunas acciones de la revista generaron espacios alternativos para expresar críticas y publicar literatura que no respondía al modelo promovido desde el régimen militar o por un mercado editorial saturado de *best sellers*. Esos espacios, sin embargo, no fueron permitidos *a priori*, sino que el mismo hecho de abrirlos representó para estos escritores un acto de libertad en un contexto represivo, que implicó, al menos, correr un riesgo importante, en un panorama cultural censurado, golpeado y vigilado.

Bibliografía

- Agulhon, Maurice (2009). *El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Anderson, Perry (2012). *Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ansolabehere, Pablo (2014). “La vida bohemia en Buenos Aires (1880-1920): lugares, itinerarios y personajes”. En Bruno, Paula (dir.), *Sociabilidades y vida cultural: Buenos Aires, 1860-1930*, pp. 155-185. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Bas, Alcira (2015). “Talleres de Escritura: de Grafein al taller de expresión I”. *Traslaciones*, vol. 2, n° 3, pp. 9-22.
- Bruno, Paula (dir.) (2014). *Sociabilidades y vida cultural: Buenos Aires, 1860-1930*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Calabrese Elisa, y De Llano, Aymará (eds.) (2006). *Animales Fabulosos. Las revistas de Abelardo Castillo*. Mar del Plata: U.N.M.d.P. Ed. Martín-Fundación OSDE-Colección La Pecera.
- Calveiro, Pilar (1998). *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- Castillo, Abelardo (2014). *Diarios: 1954-1991*. Buenos Aires: Alfaguara.
- De Diego, José Luis (2001). “¿Quién de nosotros escribirá el Facundo?” *Intelectuales y escritores en Argentina (1970-1986)*. La Plata: Al Margen.
- (2009) “Un itinerario crítico sobre el mercado editorial de literatura en Argentina”. *Iberoamericana*, vol. x, n° 40, pp. 47-62.

- (2010) “Los intelectuales y la izquierda en la Argentina (1955-1975)”. En Altamirano, Carlos (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina. Volumen II. Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX*. Buenos Aires: Katz.
- Franco, Marina (2012). *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Gallone, Osvaldo (1999). “El magisterio del cuento (*El Grillo de Papel y El Escarabajo de Oro*)”. En Sosnowski, Saúl (ed.), *La cultura de un siglo. América Latina en sus revistas*, pp. 493-501. Buenos Aires: Alianza.
- Gandolfo, Francisco (2011). *Correspondencia*. Buenos Aires: En Danza.
- Gilman, Claudia (2003). *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Iglesias, Federico (2014). “Escritores y dictadura en Argentina: la revista *El Ornitorrinco* y el problema de la resistencia cultural (1977-1983)”. *Revista Binacional Brasil Argentina: Diálogo entre las ciencias*, vol. 3, nº 1, pp. 241-262.
- (2016). “Escritores, cultura y dictadura: El caso de la revista *El Ornitorrinco*”. Tesis de la Maestría en Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en <http://www.riehr.com.ar/detalleTesis.php?id=78>
- (2019). *Escritores, dictadura y resistencia: un estudio sobre la revista El Ornitorrinco 1977-1983*. Los Polvorines-La Plata-Posadas: Universidad Nacional de General Sarmiento-Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de Misiones.
- Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith (2002). *Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar*. Buenos Aires: Eudeba.
- Levín, Florencia (2013). *Humor político en tiempos de represión. Clarín 1973-1983*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- López Rodríguez, Rosana (2010). “El hilo de la vida. Humberto Costantini, narrativa y revolución”. En Costantini, Humberto, *Cuentos Completos: 1945-1987*, pp. 9-35. Buenos Aires: RYR.

- (2013). “El Preceptor. Roberto Santoro, el poeta imprescindible (1939-1977)”. En Santoro, Roberto, *Obra poética completa: 1959-1977*, pp.11-49. Buenos Aires: RYR.
- Ollier, María Matilde (2009). *De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y políticos de la izquierda argentina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Pittaluga, Roberto (2010). “El pasado reciente argentino: interrogaciones en torno a dos problemáticas”. En Bohoslavsky, Ernesto, Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel (comps.), *Problemas de historia reciente del Cono Sur (vol. I)*, pp. 23-35. Los Polvorines-Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo.
- Polgovsky Ezcurra, Mara (2009). *Cultura de catacumbas: grupos de estudio y disidencia intelectual en el Buenos Aires de la última dictadura*. Tesis doctoral, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales.
- Romano, Eduardo (1986). “Revistas argentinas del compromiso sartreano”. *Cuadernos Hispanoamericanos* 430, Madrid, pp. 164-179.
- Saer, Juan José (2003). *Lo imborrable*. Buenos Aires: Seix Barral.
- Sarlo, Beatriz (2014). “El campo intelectual: un espacio doblemente fracturado”. En Sosnowski, Saúl (comp.), *Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino*, pp. 95-107. Buenos Aires: Eudeba.
- Schettini, Adriana (2008). “¿Se puede enseñar a escribir ficción?”. Suplemento ADN, *La Nación*, 26 de noviembre. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/cultura/se-puede-ensenar-a-escribir-ficcion-nid1074237/> (fecha de consulta: 4/12/2019).
- Tobelem, Mario (1994). *El libro de Grafein. Teoría y práctica de un taller de escritura*. Buenos Aires: Aula XXI-Santillana.
- Wainschenker, Karina (2013). *Antecedentes, surgimiento y desarrollo del teatro IFT*. Actas de las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani.
- Williams, Raymond (2000). *Marxismo y Literatura*. Barcelona: Península.
- (2012). *Cultura y materialismo*. Buenos Aires: La Marca.

Sindicalismo y política. El lugar de la UOM en el escenario público nicoleño, 1972-1973*

César Mónaco

Continuó bajo otras formas, encadenándose eslabón por eslabón. No perdonando ningún vacío, convirtiendo cada eventual vacío en el punto nodal de todas las fuerzas contrarias en tensión.

Oswaldo Lamborghini, *El fiord*

En 1972, ante el proceso de reorganización del sistema de partidos abierto durante la última etapa del gobierno militar, Roberto Carri buscaba indagar las razones de lo que emergía como descollante en la vida política del país: el peronismo y su líder, y sobre todo, la heterogeneidad y los enfrentamientos internos del movimiento. Muy sintéticamente parecía remarcar un punto nodal de la dinámica política del momento: mientras que el ala política dependía de la palabra de Juan Domingo Perón, ya que “el aparato pequeño burgués” poseía un “peso relativo en un movimiento fundamentalmente obrero”, los sindicatos, en cambio, eran –o habían sido– “naturalmente una forma de afiliación política” para los trabajadores, lo que volvía decisivo su rol “en la política legal a largo plazo” (Carri, 1972: 7).

Más allá del grado de esquematismo y predicción de lo afirmado, lo cierto es que el proyectado protagonismo sindical encontraba su sustento en las décadas precedentes.¹ En esos años de proscripción, la complejidad del peronismo se había incrementado sin pausa y se había impulsado notablemente a finales de la década de 1960 con la ola de rebeliones populares que contribuyeron al fracaso de la “Revolución Argentina” (O’Donnell, 2009: 323-324). Este proceso de

* Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Guadalupe Ballester, Ernesto Bohoslavsky, Jorge Cernadas, María Elena Fonsalido, Gabriela Gomes, Daniel Lvovich, Valeria Manzano, Leandro Pankonin y Paula Zubillaga.

¹ Carri desarrolló esta cuestión en *Sindicatos y poder en la Argentina* (1967); no obstante, una obra ineludible aquí es *Resistencia e integración*, de Daniel James (2005).

heterogeneización y crisis partidaria tendría su punto más álgido con la vuelta de la democracia y del peronismo al poder, aunque buena parte de este se había (re)configurado durante la apertura política realizada por el gobierno de Alejandro Lanusse. Al momento del análisis de Carri, los tres núcleos distintivos eran las ya aludidas alas sindical, política y juvenil. El principal enfrentamiento se sinterizaba entre la dirigencia gremial ortodoxa y los sectores radicalizados. A expensas de los primeros, Perón había impulsado el protagonismo de estos últimos como parte de su estrategia política y de un *aggiornamento* partidario (Torre, 2004: 49; ver también Nahmías, 2013, cap. 11).

La reorganización del partido devino así en una dinámica de enfrentamientos entre los diferentes sectores y tendencias en función de la obtención del control de la estructura institucional. Como resume Alicia Servetto para los casos provinciales, lo que predominó fue una “lógica de lucha por el control de los recursos de poder intrapartidario que abarcaba desde la definición de los candidatos –y con ello el perfil ideológico que se pretendía dar al partido– hasta la puesta en marcha de una estrategia discursiva y propagandística destinada a atraer/reunir votantes, militantes y simpatizantes” (2010: 32). Como sabemos, esta lucha respondía a una cualidad transversal que recorría, entre otras, todas las instancias de representación estatal: nacional, provincial y municipal.

El presente trabajo se concentra en la última de ellas, a partir del abordaje del proceso abierto en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires). Como todo caso, dentro del curso y la lógica generales, este tiene sus rasgos específicos. Uno de estos, y que le otorgan cierta relevancia, refiere a la relación con el distrito de José Ignacio Rucci, quien en ese entonces lideraba la Confederación General del Trabajo (CGT). Rucci era el secretario general de la seccional local de Unión Obrera Metalúrgica (UOM-SN), que congregaba gremialmente a un núcleo obrero muy importante, producto del desarrollo industrial de la región en las dos décadas previas.

Desde mediados del siglo xx, la historia de San Nicolás y sus zonas aledañas se había visto trastocada con el emplazamiento de la siderúrgica estatal SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina). La construcción de la planta y su posterior puesta en funcionamiento –en 1960– trajo aparejadas transformaciones sociales y económicas notorias, que emergían del nuevo perfil productivo al que se iba integrando la región. En ese curso de cambios, su mundo sindical –como conjunto de actores y relaciones– comenzó a reconfigurarse. Los obreros de la acería fueron sindicalizados como metalúrgicos, mientras que la edificación de la planta implicó una mayor masa de trabajadores encuadrados en el gremio

de la construcción.² Eran los años en que la Unión Obrera Metalúrgica oficiaba sin disputas el papel de principal gremio a nivel nacional, con un poderío político y económico notables. Con todo, el proceso de consolidación sindical sobre el mundo somiero no dejó de tener importantes inconvenientes (Soul, 2010: 228-303; Mónaco, 2013), aunque a inicios de 1970 ya había conseguido buena parte de sus propósitos. Al momento de la apertura política referida, la seccional San Nicolás de los metalúrgicos era una organización fuertemente estructurada y dirigida férreamente por Rucci (Beraza, 2007, cap. 5).³

Una de las ideas centrales aquí, por lo tanto, es que bajo esta coyuntura se manifestó fuertemente el poder gremial de la UOM de San Nicolás. Como tal, entendemos la exteriorización sindical por medio de variadas instancias, pero, por sobre todo, la política. Su materialización inmediata, y de rasgos permanentes, fue la presencia sostenida e insoslayable de esta organización sindical en el escenario público nicoleño. Es un concepto que nos permite entender la historia nicoleña de la segunda mitad del siglo xx.⁴ Vinculado a esto, el estudio del caso nos brinda una referencia adicional y no menos sustancial: en el proceso de construcción de ese poder gremial localizado, José Ignacio Rucci no escatimó recursos, al límite de desafiar y desobedecer las directivas del líder del peronismo.

Las siguientes páginas tienen por objeto el abordaje del proceso político y gremial, entendido aquí como doble e inescindible, que se extiende en los doce meses siguientes a marzo de 1972. En lo político, el recorte remite al período iniciado con la apertura de la fase de normalización partidaria, específicamente la del peronismo local, hasta las elecciones de marzo del año posterior; en lo gremial, a la etapa desarrollada entre el proceso eleccionario que posibilitó la continuidad de la mesa directiva de la seccional de la UOM, hasta la unidad

² Vale mencionar que no estuvieron ausentes los conflictos entre ambas organizaciones. Hasta entrados los años setenta, no fueron menores las disputas de pertenencia sobre actividades que podían prestar a la ambigüedad. Más aún, algunas de estas tuvieron consecuencias importantes sobre la vida sindical local. Al respecto, ver Mónaco (2012).

³ Durante la primera mitad de los años sesenta, la seccional metalúrgica tuvo que atravesar conflictos y disputas internas entre diferentes líneas de conducción; esto se revirtió con el proceso de intervención iniciado en 1966, junto con la designación de Rucci en el cargo principal.

⁴ Para agregar a su definición, podemos decir que lo que llamamos aquí “poder gremial” refiere a la herencia del entonces denominado “doble juego” desplegado por buena parte del movimiento sindical argentino durante los años sesenta, bajo el contexto de proscripción del peronismo. Este implica la participación protagónica de los sindicatos en el escenario político, más allá del rol tradicional como representantes de los trabajadores en el plano laboral-económico. Ver James (2007: 146 y 2005, cap. 7).

reflejada en el reagrupamiento político-gremial de los principales sindicatos del distrito. A partir de este esquema, se pretende mostrar, en primer lugar, el grado de íntima articulación entre ambos procesos, que en buena parte del recorrido parecen proyectarse como uno solo. En este camino, y en segundo término, se busca identificar a sus actores y características. Y por último, remarcar el grado de incidencia de la seccional metalúrgica, en conjunción con otros referentes gremiales y políticos.

Primera etapa: causas y manifestaciones de la conflictividad político-gremial

La reelección de Rucci

Marzo de 1972 se inició auspicioso para la conducción local de la UOM-SN. La huelga de 48 horas dispuesta por la Confederación General del Trabajo, para los días 29 de febrero y 1 de marzo, había tenido un alto acatamiento en la ciudad y sus alrededores.⁵ Una comunión de declaraciones orientadas a las exitosas jornadas reflejaba la confraternidad gremial en torno a la medida y sus alcances. Para el gremio de los metalúrgicos, se había logrado “una auténtica demostración de protesta”. Para el secretario general de la delegación regional de la central obrera (CGT-SN), Antonio Magaldi, las jornadas de paro representaban “un rudo golpe para la vergonzosa conducción del gobierno de turno”.⁶ Pero el hecho más significativo para el gremialismo local se daría pocos días después, cuando Rucci, ya secretario general de la CGT, revalidara su título en las elecciones al frente de la conducción de la seccional metalúrgica para el período 1972-1974.

Las últimas elecciones del gremio, en 1970, habían sido sumamente importantes para que el líder metalúrgico, hasta entonces interventor de la seccional, acelerara su carrera como uno de los principales referentes del sindicalismo nacional. Los años a cargo de esta habían concluido con el desplazamiento

⁵ La medida, que había sido resuelta por el Comité Central Confederal cerca de veinte días antes, estaba integrada por un conjunto de demandas: el rechazo a la suspensión de la Ley N° 14250 (que reglaba las convenciones colectivas); la liberación de los presos gremiales y políticos, y el repudio a la legislación represiva; y el aumento en los ingresos del sector pasivo. Según la misma central, los alcances habían sido amplios, cerca de un 90% de ausentismo (*La opinión*, 2/3/1972).

⁶ *El Norte*, 2 y 4/3/1972.

del núcleo central de la oposición interna y había iniciado el camino hacia la normalización de la seccional a partir del llamado a elecciones.⁷

Regularizada la seccional y electo como su conductor, tres meses más tarde, Rucci fue elegido secretario general de la CGT. Fue a partir de entonces que logró consolidarse como una figura sindical de peso propio. Desde su lugar de cabeza de la central sindical, desarrolló una estrecha relación con Juan Domingo Perón, y vio saltar su protagonismo a partir de la reactivación política propiciada por Alejandro Lanusse. Apenas asumido, Lanusse había reiterado la estrategia de sus antecesores en torno a un nuevo intento de reconciliación con los líderes sindicales (De Riz, 2010: 97). Este marco permitió, como señala Juan Carlos Torre (2004: 51), devolver a la CGT un fuerte protagonismo y convertir a su secretario general en un interlocutor válido para el régimen. No obstante sus nuevas funciones y compromisos, Rucci no descuidaba su lugar de emergencia. San Nicolás, al fin y al cabo, era su bastión gremial.

Lo novedoso de la reelección de 1972 fue el surgimiento de un grupo opositor –denominado Agrupación Metalúrgica “8 de octubre”– conformado en su núcleo central por integrantes de la comisión interna de la planta General Savio. Esta fracción había dado su apoyo a Rucci dos años antes, pero en el devenir de la intervención fueron surgiendo diferencias con la gestión por el tipo de liderazgo.⁸ Lo peculiar de la ocasión se encontraba en las alianzas y adhesiones, ya que si bien contaba con pocas chances frente a la maquinaria oficial, su pretensión se veía reforzada a partir del apoyo que le brindaba un sector importante del peronismo local.⁹ La conducción de la seccional, por su parte, presentaba la reelección de la mesa directiva bajo el auspicio de la Agrupación Metalúrgica Juan Domingo Perón, que estaba presidida por un joven integrante de la seccional, Naldo Brunelli.¹⁰

A pesar de los reclamos de la oposición, que denunció en varias instancias el proceso, la conducción oficial impuso sus criterios en la conformación de la Junta Electoral. La lista de Rucci quedó como única, y por lo tanto, aseguró su

⁷ Para esa instancia, y como parte de una práctica regular, se había logrado desplazar a la lista opositora en un cuestionable desempeño de la junta electoral, lo que permitió el triunfo de la lista oficialista (Beraza, 2007: 93).

⁸ DIPBA, Mesa B, carp. 111, leg. 50, asunto: “Unión Obrera Metalúrgica-San Nicolás”, f. 148 (informe), y carp. 111, leg. 102, asunto: “Unión Obrera Metalúrgica. Agrupación Azul y Blanca”, f. 183 (informe); *El Norte*, 29/1/1972.

⁹ Ver *El Arroyeño*, 11/10/1971.

¹⁰ La lista, creada en octubre de 1971, contaba como vicepresidente a Luis Romano y con Jorge Nicolás como secretario de Prensa (*El Arroyeño*, 19/10/1971). Nombres, estos tres, que participaban ya en la mesa directiva de la seccional.

triumfo.¹¹ El siguiente paso fue buscar el apoyo de los líderes sindicales locales y, de esta forma, presentar una imagen de unidad. Esto implicaba reafirmar la fuerte impronta del gremio y su líder en la vida sindical nicoleña y, en el mismo proceso, obtener apoyo extra para su reelección.¹²

Si bien el desarrollo de la elección se dio en un contexto de regular tranquilidad, no estuvieron ausentes los inconvenientes para el sector dominante encabezado por el secretario general de la CGT. La iniciativa de impugnación del proceso electoral llevada adelante por la oposición había sumado adhesiones en el peronismo local. Desde la conducción oficial del Partido Peronista, pasando por un significativo sector de la Juventud Peronista, hasta un importante número de unidades básicas, anoticiados de la anomalía, comenzaron a demandar la intervención del Consejo Superior de la organización.¹³

La respuesta de la UOM-SN fue inmediata y contraatacó lo que entendía como una clara ofensiva. Durante días presionó públicamente a la rama política local para que rectificara su actitud, que no era, según hacía público, más que una inaceptable interferencia del sector político sobre un problema de exclusividad gremial.¹⁴ Esto no era más que un anticipo de los tiempos que se avecinaban. Un primer vestigio que preludiaba tanto la íntima relación entre lo gremial y lo político, como las particularidades de una localidad con una fuerte impronta industrial.

Normalización partidaria

En ese contexto, comenzaron a perfilarse las primeras actividades vinculadas a la normalización partidaria, iniciada en la segunda mitad del año anterior. Al igual que lo que ocurría en las estructuras nacionales y provinciales, las fuerzas políticas locales se preparaban para su reorganización en vista del llamado a elecciones. En San Nicolás, había sido designado como delegado para la conducción del Movimiento Justicialista local el abogado Humberto Parigini,

¹¹ *El Norte*, 1/2/1972; DIPBA, mesa B, carp. 111. Leg. 50, f. 148 y 153 (informe).

¹² Sobre un total de 210.100 afiliados, entre el 7 y el 12 de marzo se desarrollaron las elecciones de comisiones directivas de 46 seccionales de la UOM. En buena parte de estas, como solía ocurrir, se presentaron listas sin oposición, lo que representaba un fuerte indicador de continuidad de las autoridades (ver *El Norte*, 6/2/1972 y *El Siderúrgico*, enero-febrero de 1972).

¹³ *El Norte*, 4/3/1972.

¹⁴ *Ibidem*, 5 y 7/3/1972.

reconocido por haber desempeñado un rol significativo dentro del peronismo durante los difíciles años de su proscripción.¹⁵

Los primeros meses del año configuraban el momento indicado para evaluar el desarrollo de la reorganización partidaria iniciada meses atrás. Una de las primeras acciones a valorar fue el proceso de afiliación establecido por la Junta Promotora, el que se estaba llevando a cabo a partir de lo dispuesto por el estatuto de los partidos. En el distrito nicoleño, el plazo de entrega de las listas de afiliación se había fijado para el 10 de febrero. Poco después, el 4 de marzo, Héctor Cámpora y el secretario general del Movimiento Justicialista, Jorge Gianola, presidieron en la ciudad de Pergamino el congreso partidario correspondiente a la segunda sección electoral. Los resultados expuestos parecían halagadores, a excepción del caso de San Nicolás, donde el número de afiliados marcaba una contundente diferencia respecto al resto de las localidades. En especial, frente a Pergamino, donde el contraste se volvía notorio: 5.599 fichas contra las 1.700 del distrito ribereño. Aunque ambas representaban dos de las jurisdicciones más destacadas de la región, la diferencia del caso nicoleño por sobre el resto no dejaba de asombrar, pues contaba con un significativo componente asalariado vinculado a la producción industrial. ¿Cómo había sido esto posible? Según los representantes, el proceso había sido obstruido por la organización liderada por Rucci. Esta –denunciaban– había “utilizado importantes recursos económicos y medios de coerción o intimidación ante obreros de su propio gremio”.¹⁶

Para la conducción del partido el hecho representaba, en primera instancia, una falta grave a la verticalidad, tanto haya sido por impedimento directo o falta de compromiso en la tarea. La acusación, desde ya, fue rechazada de lleno por los dirigentes del gremio, que en cambio remitían el fracaso de la campaña a la desidia de los coordinadores de la operación; y de forma específica, a la escasa o nula acción en el proceso de afiliación que, según estos, se había dado a los sectores gremiales.¹⁷ Desde su perspectiva, la solución no era otra que el cambio de dirección del peronismo nicoleño.¹⁸

¹⁵ Entrevista a Denis Stagnaro, San Nicolás, junio de 2010.

¹⁶ *La Opinión de Pergamino*, 5/3/1972, citado en *El Norte*, 7/3/1972. Aunque la cifra en el ámbito local nunca fue desestimada, Jorge Gianola, con marcado optimismo, informaba durante el mismo proceso que se estimaban en 4.000 las afiliaciones realizadas en el distrito de San Nicolás (*Las Bases*, año I, n° 7, 16/2/1972).

¹⁷ *El Norte*, 7/3/1972.

¹⁸ Solicitada firmada por Naldo Brunelli y Jorge Nicolás, *El Norte*, 10/3/1972; y DIPBA, mesa A, carp. s.n., leg. 1, asunto: “Partido justicialista - Movimiento justicialista”, ff. 106 y ss.

Una tercera manifestación provino desde el Movimiento Juventud Peronista (MJP-SN), por parte de dos de sus referentes, Pedro Marchi y Denis Stagnaro.¹⁹ Estos representaban a la sección juvenil dentro del Movimiento Justicialista local y eran uno de los principales apoyos del delegado Parigini. A tono con el nivel nacional, la rama juvenil constituía el sector más radical del peronismo nicoleño y generaba múltiples suspicacias para la rama gremial, en especial, luego de su ascenso dentro del Movimiento, a finales de 1971.²⁰

En este caso en particular, además, el enfrentamiento entre la seccional de la UOM y este sector tenía raíces aún más concretas. La clave se encontraba en los conflictos gremiales suscitados a partir de la etapa de intervención de la seccional, iniciada a mediados de 1965, por parte del secretariado nacional. En ese entonces, Marchi y Stagnaro, entre otros, integraban un grupo de trabajadores de la siderúrgica estatal de relevante participación en la vida gremial, y de una llana oposición al oficialismo. Varios de ellos participaban de la comisión interna y, como tal, conformaban uno de los objetivos del interventor. Luego de diversas maniobras gremiales, este consiguió removerlos; y, en 1967, fueron despedidos de la empresa (Beraza, 2007: 87). Pero cinco años más tarde, en 1972, emergía una nueva situación. Los sectores afectados ahora se encontraban bajo un nuevo contexto que les permitía enfrentar a su viejo oponente por fuera del gremio, por lo que es indudable que su participación dentro del peronismo distrital aportaba un grado de radicalización y confrontación particular, que articulaba el discurso sectorial del momento con la situación concreta vivida por protagonistas.²¹

El domingo 7 de mayo, como había sido dispuesto por el Consejo Superior, y como ocurrió en buena parte de los distritos del país, se realizaron las elecciones internas del partido. En la provincia de Buenos Aires los comicios se efectuaron en 111 jurisdicciones sobre un total de 121. La intención inicial, impulsada

¹⁹Es necesario precisar que la Juventud Peronista nicoleña se encontraba dividida en dos sectores: el primero, al que acabamos de hacer mención, y un sector conducido por Roberto Karaman y Guillermo Cappadoro que quedó al margen de la participación en la conducción partidaria (ver *El Norte*, 7, 14 y 20/7/1972).

²⁰Específicamente, su reconocimiento como parte del Consejo Superior del Movimiento (Gillespie, 1998: 152; James, 2005: 316 y ss.).

²¹En su interpretación de lo ocurrido, para la Juventud Peronista, Brunelli y su agrupación tenían una sola finalidad: “Accionar en contra del pueblo peronista, pilar auténtico en el que descansa la gran transformación nacional y social”. A diferencia de ellos –afirmaban–, que sabían situarse “al lado de las bases que se expresan como en este caso en defensa de los vulnerados derechos de los hermanos trabajadores”, y se comprometían a “destruir a los enemigos del pueblo que medran a su sombra” (*El Norte*, 7/3/1972).

por el propio Perón, había sido la de acordar listas únicas en función de un mayor grado de organización y disciplina, y, por lo tanto, disponer de todos los esfuerzos posibles para evitar los enfrentamientos internos que se habían extendido en el transcurso de los últimos meses (Bozza, 1999: 137). Durante la primera ronda de elecciones en la provincia de Buenos Aires, se impusieron las listas únicas en 89 distritos. En el resto, donde había dos listas o más, las vencedoras fueron las afines a las conducciones locales y a la nacional.²² En San Nicolás, como en la amplia mayoría de los distritos bonaerenses, la única lista presentada había buscado aglutinar una razonable representatividad de las ramas.²³

Dicho esto, es necesario señalar dos cuestiones. Por un lado, es evidente que, pese a las dificultades manifiestas durante la primera mitad del año, el peronismo nicoleño había llegado a las elecciones internas sin mayores dificultades. El proceso de afiliación, aunque no estuvo exento de cuestionamientos, había podido concluir en tiempo y forma; y los pedidos permanentes de renuncia sobre el delegado interventor Parigini, por parte de los líderes metalúrgicos y sus aliados políticos, no habían logrado prosperar. En todo caso, la UOM local había oficiado como un “enemigo común” que reforzaba la cohesión partidaria.

El segundo punto que merece un comentario está relacionado con la participación concreta en los comicios internos. El número total de votantes para la elección de autoridades locales del PJ fue de 500, un 34% del padrón habilitado. Para el principal periódico local, la concurrencia había sido definitivamente baja e implicaba una caída del “entusiasmo y conciencia política de los peronistas”. La afirmación partía del cotejo con los comicios internos realizados por el Partido Radical. En estos, los 190 votos que habían participado representaban un 84% de los afiliados habilitados.²⁴ A pesar de lo sustancial de la diferencia, no dejaba de ser un mero dato para una afirmación tan relevante. Ambos procesos habían sido diferentes y tenían sus particularidades. Para mencionar la más evidente, el radicalismo nicoleño no había logrado, pese a los esfuerzos, constituir una lista única. Los dos sectores en pugna tenían la peculiaridad de diferenciarse por cuestiones personalistas más que por adscripciones mayores; y también, ambos apoyaban a los *renovadores* de Raúl Alfonsín.²⁵

²² *La Opinión*, 9/5/1972.

²³ *El Norte*, 9/5/1972.

²⁴ *Ibidem*, 10/5/1972.

²⁵ *Ibidem*, 6 y 9/5/1972. Lo más indicado sería un estudio comparativo profundo de esta serie de elecciones sobre un conjunto de casos determinados, pero ese es un trabajo que desborda ampliamente las pretensiones de este artículo. Pese a ello, se puede realizar una breve referencia:

Ruptura sindical

Los enfrentamientos con la UOM-SN durante el inicio de la reorganización partidaria si bien representaron claros inconvenientes, no tuvieron el grado de consideración como para empantanarla. Desde ya, esta apreciación no implica relativizar el poder de ese sector gremial. Este había crecido de la mano del desarrollo industrial y con la nueva década comenzaba a perfilarse como un grupo de poder clave dentro y fuera del nivel distrital; sus prácticas públicas ante acontecimientos como los que hemos mencionado eran una demostración. Una de las preguntas relevantes que se desprende es hasta qué punto se avanzó en el proceso de normalización frente a la exclusión del gremio más relevante de la región. Distanciada la UOM-SN, ¿qué ocurría con la rama sindical?, o más precisamente, ¿quién ejercía esa representación?

Aunque el gremio de los metalúrgicos representaba ya para estos años la mayor y más importante institución sindical de San Nicolás, desde el inicio de la nueva década había empezado a mostrar su relevancia la delegación regional de la Confederación General del Trabajo (CGT-SN), conducida por Antonio Magaldi. En torno a esta se aglutinaban un conjunto de gremios de forma más o menos permanente, de acuerdo a las contingencias de la vida sindical local. Fue este sector el que adhirió, por lo menos durante buena parte de 1972, a la conducción política del peronismo. Y junto al Movimiento Juventud Peronista, con el que guardaba evidentes diferencias, representaban el más importante apoyo al delegado partidario. San Nicolás, en este punto, no era una excepción, lo mismo ocurría en una multiplicidad de distritos y, particularmente, en la estructura nacional.

Magaldi era un obrero textil que había logrado, en escasos años, hacerse del liderazgo de la seccional local de la Asociación Obrera Textil (AOT-SN), para poco después asumir, en julio de 1970, el de la delegación regional de la CGT. En sus dos años al frente de esta, había logrado ubicarse a la cabeza de un conglomerado de actores comunales que excedía a la estructura sindical. Unidades básicas y, especialmente, representantes barriales y de asociaciones vecinales solían participar de los plenarios convocados por esta central obrera. En cuanto a la construcción de su figura, además, sus actividades eran regularmente reseñadas por la prensa local, un factor importante que contribuía a posicionarlo como un referente ineludible en la esfera pública distrital.

en Mar del Plata, donde compitieron varias listas y luego de tres elecciones, el porcentaje -34%- fue similar al de San Nicolás. Ver Ladeux (s/f).

La figura de Magaldi se fue acrecentando en paralelo a sus cada vez más regulares intervenciones públicas. Esta situación le permitió situarse progresivamente dentro de la nueva etapa institucional. Así, estuvo presente en la compleja reorganización del peronismo lugareño, aunque más no sea en sus orígenes, de manera solapada. Pese a ello, desde esa condición inicial, se constituyó como un apoyo muy importante para la rama política. Esto se expresó con claridad en el mismo mes de marzo, durante el ya citado cruce de acusaciones entre los dirigentes metalúrgicos y la conducción política. Fue a partir de ese momento que el distanciamiento y la confrontación entre la regional de la CGT y la seccional de la UOM se sucedieron.

Esto se observó en la conformación de la mesa directiva de las 62 Organizaciones locales, en la que Magaldi asumió como secretario general, en tanto la secretaría adjunta quedó a cargo del gremio de la Construcción (UOC-SN).²⁶ Con la flamante conducción quedaba cristalizada la división en el arco gremial. Por un lado, la UOM-SN, desde ahora también fuera de las 62 Organizaciones; por el otro, el delegado regional de la CGT y flamante secretario general de la mesa directiva de los sindicatos peronistas, en colaboración con los gremios adscriptos a ambas instituciones.²⁷

Durante el resto de 1972, el enfrentamiento intergremial no solo se sostuvo, sino que además tuvo momentos reveladores, suscitados al ritmo propio de una lógica de acciones ofensivas y contraofensivas. De importante repercusión fue la constricción económica inducida por la CGT sobre la regional San Nicolás, provocada por el retaceo de los recursos necesarios para los gastos de funcionamiento. La respuesta del delegado local fue no solo denunciar la acción públicamente, sino aumentar la apuesta y, en un gesto de marcado simbolismo, reunirse con una agrupación gremial surgida en el interior de SOMISA que pretendía constituirse como el primer sindicato específico para la rama siderúrgica, el Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de Argentina (STSA) (Mónaco, 2013). La contestación desde la sede metalúrgica fue determinante y se procedió a la ruptura de relaciones políticas y gremiales debido a “la conducta, participación y actitud” del delegado regional de la CGT.²⁸ Pero el punto más álgido, que señalaba el grado de desavenencia al que se había llegado, logró expresarse por otros medios: una seguidilla de atentados contra los oponentes. En menos de

²⁶ El secretario general de esta organización, desde hacía ya unos años, era Héctor Quiroga. Referencias al respecto pueden encontrarse en Mónaco (2012).

²⁷ *El Norte*, 23 y 24/3/1972.

²⁸ *Ibidem*, 27/5/1972.

treinta días, las sedes del STSA, de la CGT-SN y de la UOM-SN fueron atacadas con bombas incendiarias.²⁹

En definitiva, así quedaba sellada la ruptura gremial que se expresaría en los meses siguientes y que tendría una importante relevancia en las últimas semanas del año. El sector sindical liderado por el dirigente textil Antonio Magaldi había soportado los embates de la poderosa UOM-SN y, en el mismo camino, había conseguido reforzar su alianza con la conducción del partido. Por parte de los metalúrgicos, sus intenciones se mantenían en pie. La conducción de la seccional se encontraba gremialmente consolidada, pero políticamente desplazada del peronismo.

Segunda etapa: profundización del conflicto político y reconfiguración gremial

La “Lista 2”

Al igual que en el resto de los distritos bonaerenses, la elección de precandidatos por el justicialismo nicoleño para los comicios de marzo de 1973 debía atenerse a lo dispuesto por el Consejo partidario provincial. El fin era evitar un proceso de elecciones internas que pudiera exacerbar aún más los enfrentamientos entre ramas y sectores. En tal sentido, se establecía que cada consejo departamental, conformado por sus cuatro ramas (política, sindical, juvenil y femenina), eligiera los precandidatos a los cargos de intendentes, concejales y consejeros titulares; como también diputados y senadores provinciales proporcionales a cada sección electoral. Esas precandidaturas, posteriormente, debían ser elevadas al Consejo provincial que, como autoridad de última instancia, las definiría.³⁰

El peronismo nicoleño se dispuso a la selección de sus precandidatos, pues en consonancia con las elecciones de mayo —cuando se había logrado acordar una lista única— esta nueva instancia no era más que otro paso en el sistema de acuerdos desplegado desde principios de año; y, como tal, un reflejo del proceso de normalización, ya que la amplia mayoría de las figuras que integraban el Consejo venía participando activamente del proceso de regularización partidaria.³¹

²⁹ *Ibidem*, 30 y 31/5 y 27/6/1972. Esta serie de atentados, bien que inmersos en una coyuntura particular, iban a marcar localmente el inicio de un ciclo de violencia política y sindical mayor.

³⁰ *El Norte*, 3/12/1972.

³¹ *Ibidem*, 10/12/1972.

Para el cargo de intendente fue postulado quien en ese entonces ejercía la Secretaría Adjunta del Consejo partidario, Eduardo Kolberg. En tanto, el resultado final de la lista de precandidatos coincidía con lo proyectado: se había logrado un compuesto de representaciones con el amplio apoyo de la asamblea.³² A fin de cuentas y como en la mayoría de los casos, la decisión final de Consejo no era más que el formalismo necesario para la oficialización de la lista. Lo más importante, según se sostenía, era la ausencia en el proceso de grandes costos o fracturas. Y en este sentido, la “unanimidad” conseguida –conforme fue publicada la noticia– contribuía a reforzar las decisiones tomadas en torno a una imagen de amplia cohesión interna.³³

Sin embargo, los días siguientes dejaron ver que esto había sido solamente una imagen momentánea. Las desavenencias habían existido y aunque se había logrado desplazarlas a un segundo plano, pronto la dinámica de la política local las traería con fuerza al centro de la escena. La no inclusión en la lista de precandidatos implicó el retiro del gremio de la Construcción.³⁴

Fue la escisión esperada frente a una homogeneidad tensa; y su efecto, el reforzamiento de la oposición gremial liderada por los metalúrgicos. El argumento replicaba al que en las últimas semanas se escuchaba en diversos lugares del país, esto es, la exclusión o la falta de representatividad de sectores en instancias decisorias. Como sector opositor, no se detuvo en la mera crítica y rechazo de lo decidido por el Consejo partidario, sino que presentó una segunda lista de candidatos. Esta fue conocida como la “Lista 2” y en oposición a las candidaturas oficiales, dejaba entrever una mayor participación sindical. Siete miembros, sobre un total de veintiocho, expresaban, sin duda, la pregonada

³² La lista de precandidatos a concejales quedó establecida de la siguiente forma: Pedro Marchi, Ítalo Jovert, Denis Stagnaro, Ramón Caffiero, Clemente Ramos, Adelmor Regalía, Héctor Marín, Oscar Fió y Héctor Bellagamba. Los seis primeros en representación de la JP-SN; de los cuatro restantes, Regalía y Marín provenían de la rama gremial, en tanto Fió y Bellagamba del sector político. A la vez, fueron seleccionados como candidatos a diputados provinciales el líder sindical Antonio Magaldi y Pedro Gamarra; Humberto Parigini, por su parte, fue postulado precandidato a senador provincial.

³³ *El Norte*, 3/12/1972.

³⁴ A mediados de año, el dirigente de la Construcción, Héctor Quiroga, había tenido que transitar durante días una situación conflictiva conducida por una oposición “clasista y antiburocrática”, y en aquella oportunidad tanto el apoyo de la CGT local como el de las 62-SN –de las que su sindicato participaba– habían sido relevantes. Sin embargo, hacia fin de año y en medio de las negociaciones para las próximas elecciones, este vínculo fue virando (*El Norte*, 16/6/1972).

“mayor representatividad”,³⁵ y entre estos se erigía con fuerza la presencia de la UOM-SN, columna vertebral del nuevo bloque.³⁶

Segunda estocada

La aceleración de los tiempos políticos y las disputas por las listas había repercutido fuertemente sobre los gremios, en especial, el metalúrgico. La primera gran manifestación en este sentido fue la solicitud de reorganización de la mesa directiva del peronismo gremial. El objetivo había cobrado impulso luego de la reunión que mantuviera Perón con la mesa nacional de las 62 Organizaciones, en la sede central de la UOM. Allí, el líder del justicialismo había incitado a la rama gremial a una unión “indisoluble” frente a las “fuerzas negativas que vienen gravitando sobre el destino de la patria”,³⁷ mensaje que envalentonó a los metalúrgicos de San Nicolás, quienes, en lo inmediato, buscaron cumplir con su largo deseo de no solo unirse, sino también de participar en la conducción del cuerpo local de gremios. Así, el 14 de diciembre, la UOM-SN, en nombre de la conducción nacional de las 62 Organizaciones, lanzó un comunicado para “reorganizar y conformar la mesa directiva” de la filial.³⁸

La noticia provocó una profunda conmoción en el sector gremial, especialmente en las organizaciones que participaban en la ya conformada mesa local. Para estas, el comunicado de la UOM-SN no era más que un contrasentido, debido a que parecía desconocer que las “62 Organizaciones están en el orden local legalmente constituidas”, y como “testimonio irrefutable” ofrecían “las actas y documentación pertinente”.³⁹ Además, argumentaban que al no haberse recibido ninguna notificación oficial, no era dable reconocer una convocatoria al respecto, y en esa misma dirección reafirmaban su “apoyo incondicional” a la mesa conducida por Antonio Magaldi. Lo notorio, no obstante, era que varios de los firmantes habían participado del cónclave organizado por la UOM-SN, en

³⁵ *El Norte*, 10/12/1972.

³⁶ Esta presentaba a tres de sus dirigentes entre los precandidatos: Brunelli, secretario de organización del gremio, que junto a Irineo Araujo, de la comisión interna de SOMISA, se postulaban para concejales; en tanto Cecchi, secretario adjunto, se proponía como delegado ante el Consejo del justicialismo provincial. De las restantes dieciséis precandidaturas a concejales, tres eran cubiertas por dirigentes de los gremios de la Construcción, Rurales y del Plástico. En suma, la presencia sindical duplicaba a la de la lista oficial.

³⁷ *El Norte*, 13/12/1972.

³⁸ *Ibidem*, 14/12/1972.

³⁹ *Ibidem*, 15/12/1972.

el que se gestó la “Lista 2”. Más aún, varios representantes de estos sindicatos – Panaderos y Madereros– participaban como precandidatos frente a la lista oficial, a la vez que mantenían su cargo y defendían la mesa de las 62 Organizaciones presidida por el dirigente textil. Un elemento que nos muestra lo erróneo que sería entender el proceso a partir de posiciones rígidas y no de movimientos, negociaciones y conveniencias, al menos dentro del arco gremial.⁴⁰

Pero la búsqueda de desarticulación del poder gremial no se detuvo ahí, y desde la UOM-SN se redobló la presión. Mientras Magaldi y sus apoyos pretendían digerir la emergencia de las 62-SN paralela, el Consejo Directivo de la CGT resolvía “hacerse cargo de la Delegación Regional de la CGT de San Nicolás”, ante “la necesidad de proceder a adoptar las medidas que permitan el normal funcionamiento”, debido a que “la situación que se plantea en la citada delegación no se ajusta a las claras normas de orden estatutario”.⁴¹

Esto representó la segunda e incisiva estocada sobre el núcleo liderado por Magaldi. Visto en perspectiva, los que le continuaron fueron los últimos atisbos de resistencia. Acorralado por la doble acción, el secretario general de la central y de las 62-SN convocó con urgencia a los respectivos plenarios. En el primero de ellos, el de la CGT local, contó con la presencia de catorce de los miembros adheridos y se resolvió poner “en estado de alerta a todos los trabajadores”; y se amenazó con un paro general en caso de efectivizarse la intervención. El contra argumento sostenía que si el problema se originaba en el estado del mandato de la comisión directiva, que había vencido en octubre, la solución estaba en su renovación por medio del llamado a elecciones y no a través de la intervención.⁴²

Rucci o Perón

Como se mencionó al inicio, el conflicto por las listas en San Nicolás tuvo lugar dentro de un contexto mayor en el que los enfrentamientos y las tensiones marcaban la agenda diaria del peronismo, aunque también, en menor medida, de otras fuerzas políticas. Desde mediados de año, los tiempos se habían acelerado en pos del armado partidario en vista del llamado electoral. Hacia allí se dirigían

⁴⁰ El plenario de gremios díscolos finalmente se realizó. Los sindicatos se dieron cita en el Centro de Empleados de Comercio y presididos por el dirigente Alberto Steco, que ofició como delegado organizador, constituyeron una nueva mesa directiva para la conducción de los gremios peronistas de San Nicolás. Al frente de esta fue designado Rodolfo Cecchi, de la UOM, y Quiroga fue electo como adjunto.

⁴¹ *El Norte*, 16/12/1972.

⁴² *Ibidem*, 17/12/1972.

también la reorganización de la mesa directiva nacional de las 62 Organizaciones y la reelección de Rucci al frente de la CGT. La “columna vertebral” se aprestaba hacia el futuro. A medida que se avanzaba en el segundo semestre, además, era más explícito su desplazamiento por parte del sector político y, sobre todo, del juvenil. Perón había dispuesto –ya ha sido dicho– la reorganización del Consejo Directivo del Movimiento a partir de la inclusión de la juventud; una maniobra significativa que, como sostiene De Riz: “Convirtió a la JP en participante de pleno derecho en el juego político” (2010: 107). Un año más tarde, a mediados de diciembre de 1972, la elección de candidatos para el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) terminaba de definir esta percepción. Ya eran evidentes, para la cúpula sindical, las señales sobre el “escaso peso que ahora tenía en el movimiento” (James, 2005: 319-320).

La convención nacional del Justicialismo del 10 de diciembre tenía la finalidad de aceptar formalmente la conformación de un frente político para las elecciones y de proclamar la candidatura presidencial. Bajo similares objetivos, un día antes había comenzado en Avellaneda la convención correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Pero en este segundo caso, los inconvenientes en torno a un acuerdo eran manifiestos. En el distrito bonaerense, el conflicto dentro del movimiento no solo no había logrado zanjarse en las instancias previas en torno a los pactos sobre las candidaturas, sino que, al igual que en una gran cantidad de provincias, se había incrementado en las últimas semanas. Luego de una suspensión acordada en virtud de las diferencias, el congreso bonaerense reunido en Avellaneda, desoyendo las directivas nacionales, dio por proclamado a Manuel de Anchorena y Luis Guerrero como candidatos a gobernador y vice de la provincia, respectivamente. De esta forma, los sectores encumbrados del sindicalismo bonaerense y nacional materializaban su alianza con una nueva fuerza política más acorde a sus pretensiones y lineamientos: el Movimiento Federal, fundado y conducido por el hacendado Anchorena, adscrito ahora al peronismo. Su compañero de fórmula, Luis Guerrero, era entonces secretario general de la seccional Avellaneda del gremio metalúrgico y secretario adjunto del sindicato nacional. La alianza se enfrentaba a los sectores que sostenían a Oscar Bidegain, quien era apoyado en ese entonces por otro sector de la UOM, el de Victorio Calabró, secretario general de la seccional Vicente López y tesorero de la organización a nivel nacional.⁴³

Con 220 congresales presentes, sobre 309, el congreso de Avellaneda se desarrolló bajo un estricto control del sector gremial que, en comunión con la

⁴³ *La Opinión*, 10 y 17/12/1972.

policía, había logrado impedir el ingreso de sectores opositores. Así, en disidencia, pudieron no solo imponer la candidatura deseada, sino también aprobar las listas distritales que adherían, entre ellas la “Lista 2” de San Nicolás.⁴⁴

Como represalia, el Consejo Superior Justicialista resolvió expulsar a Anchorena bajo el cargo de “inconducta partidaria”.⁴⁵ Y ante el mantenimiento de la fórmula, legalmente válida, desde las filas del desplazado Bidegain se presentó un pedido de impugnación en la Justicia Electoral. Se decretó, además, la caducidad de aquel congreso y se dispuso la intervención de la estructura partidaria de la provincia.⁴⁶ En los primeros días de enero, el conflicto llegó a su fin: la sedición había resultado difícil de sostener, y Anchorena y Guerrero terminaron renunciando a sus candidaturas. La Justicia Electoral había declarado nulo al congreso disidente y aprobado lo actuado por la intervención.⁴⁷

En resumen, el congreso de Avellaneda fue ante todo una expresión de la crisis interna del PJ, y más específicamente, la reacción de un importante sector del sindicalismo peronista que manifestó su descontento con el armado partidario preelectoral. Por supuesto, dentro de la heterogeneidad y extensión de la rama sindical se podían hallar posiciones diversas. La misma UOM representa un buen ejemplo. Sin la participación de un sector de esta no hubiera habido congreso disidente, como tampoco se hubiera extendido lo que duró. El principio de solución salió del mismo gremio metalúrgico, aunque la primacía de la “verticalidad” de Lorenzo Miguel no fuese más que un retroceso momentáneo que se recuperaría con creces durante los siguientes meses.

La segunda cuestión refiere al propio Rucci y su papel en esta crisis. Su relación de proximidad al líder del Movimiento Federal era públicamente conocida, al igual que su cercanía ideológica.⁴⁸ El mismo Anchorena, repudiado por muchos, criticado por Perón al punto de ser expulsado del partido en esta etapa, tendría un rol relevante, al igual que sus “federalistas”, en el futuro.⁴⁹ Sin embargo, el papel del secretario general de la CGT durante los sucesos de diciembre continúa aún bajo las sombras. Según Beraza, más allá de su probada

⁴⁴ *Ibidem*, 17/12/1972.

⁴⁵ *Ibidem*, 19/12/1972 y 4/1/1973.

⁴⁶ *Ibidem*, 20/12/1972.

⁴⁷ *Ibidem*, 3/1/1973; *Mayoría*, 3/1/1973.

⁴⁸ Para una breve y particular referencia sobre esta relación, ver Sebrelí (1986: 302).

⁴⁹ En mayo de 1974, a poco más de un año de transcurridos estos desencuentros, Manuel de Anchorena fue designado por el presidente Perón como embajador ante Gran Bretaña. Menos conocido y más relevante fue el aporte de recursos y cuadros que él y sus “federalistas” proveyeron para la represión paraestatal desatada durante ese gobierno. Para una aproximación, ver Verbitsky (2006) y Larraquy (2007, cap. 13).

verticalidad, Rucci había sido presionado por un sector de la UOM para que convenciera a Perón de la fórmula Anchorena-Guerrero; y una vez acontecido lo de Avellaneda, su amistad con el estanciero había impedido su participación activa.⁵⁰

Posiblemente, el desdibujo de su acción haya sido producto de la tirantez entre esos dos objetivos discordantes que llevaban adelante: la estrategia de Perón, por un lado, y un sector sindical aunado a las pretensiones del líder del Movimiento Federal, por el otro. En verdad, profundizar este aspecto a partir de las fuentes disponibles podría llevarnos a descender a una dimensión excesivamente especulativa. Pero, a los fines de nuestra indagación, una observación es necesaria y se expresa en el mismo caso de San Nicolás. Allí, la reacción sindical se desató no bien iniciado diciembre, apenas conformada la lista oficial. La UOM-SN había sido su origen y cargaba con la conducción del enfrentamiento que implicaba un profundo menoscabo de la “verticalidad”. Además, el propio Rucci, que continuaba siendo el secretario general de la seccional, participaba activamente de los vaivenes sindicales de la comunidad. En definitiva, Rucci no tuvo reparos en su estrategia política local, al punto de propiciar un camino que claramente se alejaba de lo requerido por Perón. Para este último, la obediencia y celeridad del proceso de nominación de las candidaturas eran claves para evitar los más que evidentes enfrentamientos intrapartidarios. La imagen de un Rucci fiel a los designios de su líder político, presentada en diversos estudios, podría así valer solo para el nivel nacional, ya que no tiene su correlato para nuestro caso.⁵¹

La unidad sindical

La primera consecuencia de la irrupción de la “Lista 2” en San Nicolás fue la de retrasar el Frente en el ámbito local. A nivel nacional, a principios de diciembre, el peronismo había presentado en sociedad la coalición que encabezaría para disputar las elecciones, el Frejuli. Diez días más tarde, fue proclamada su

⁵⁰ El autor también da por seguro que fue el atentado de Montoneros a Luis Guerrero “lo que provocó la renuncia de la fórmula metalúrgica” (Beraza, 2007: 207-209). En cambio, para el diario local, el mismo Rucci se había ocupado de realizar las gestiones para el retiro de la candidatura (*El Norte*, 16/1/1972).

⁵¹ Al menos dos componentes fueron claves en la construcción de esa imagen. Primero, su papel como portavoz de Perón, a partir de 1970; luego, el papel jugado, a partir de mayo de 1973, en la puesta en marcha y sostenimiento del “Pacto social”. Ver Torre (2004: 31-36); De Riz (2010: 133-134) y Beraza (2007: caps. 8, 9 y 10).

fórmula presidencial: Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima. A pesar de ello, en San Nicolás –al igual que en una gran cantidad de distritos–, el conflicto político dentro del justicialismo seguía marcando el ritmo, en especial los hechos producidos en el congreso provincial y sus resoluciones. La habilitación que había realizado este de la denominada “Lista 2” –también conocida como la “lista de Rucci”– le había dado un nuevo impulso al sector del peronismo encabezado por la UOM-SN. Aunque, en lo inmediato, la caducidad y la intervención dispuesta por el Consejo Nacional devolviera las esperanzas al sector encabezado por Parigini.

La intervención del Consejo, que entre otras medidas tenía que reemplazar a los miembros de los consejos locales, era terminar de definir las listas distritales. En San Nicolás no hubo grandes modificaciones, ya que como interventor fue designado el mismo Parigini. En los siguientes días se terminaron de definir las últimas cuestiones y la lista del Frente local pudo quedar constituida.

A pesar de ello, el problema parecía no concluir. El sector opositor del peronismo seguía firme en su intención y como señal había incluido en la lista sus alianzas. Con sorpresa, el interventor y sus aliados se anoticiaron, al día siguiente de finalizado el plazo de presentación de listas, que su propuesta no había sido oficializada, concretamente porque esta no se encontraba como tal al momento de cierre. A último momento, el listado oficial sugestivamente había sido retirado, por lo que se determinaba como oficial la propuesta de los metalúrgicos presentada a través del Partido Conservador Popular. Las autoridades locales del Frejuli reaccionaron para frenar el ardid y denunciaron lo ocurrido ante la Justicia Electoral, la que terminó por considerar el recurso, estableció la nulidad de la “Lista 2”, y en su lugar consagró la del Frente.⁵² Terminaba así el último intento del peronismo opositor para imponer sus candidatos.

Si en lo político la exclusión de la “Lista 2” puede ser leída como una derrota de la UOM-SN, no ocurriría lo mismo en el plano gremial, ya que el estado de situación finalmente cambió a mediados de enero. Luego de semanas de presión, la táctica del sector encabezado por Rucci pareció dar efecto: Magaldi comenzaba a comprender que la única salida implicaba una rápida negociación. Así, luego de todo, se limaron asperezas a fin de alcanzar una reorganización del sector gremial. El resultado fue una lista de “Unidad”, como se la llamó. Desde ahora, la conducción sería compartida con los metalúrgicos. Las elecciones se realizaron, como había sido dispuesto por la CGT, y en la nueva mesa directiva quedó materializado el amplio pacto gremial: Magaldi permanecía como dele-

⁵² *El Norte*, 11 y 16/1/1973.

gado regional, mientras que el metalúrgico Cecchi era designado subdelegado, en tanto la profesorería se le otorgó al gremio de la Construcción, a Quiroga.⁵³ Fue el primer paso en el que el arco sindical reestructuraba su poder; pocos meses después, lo ejercitaría.

Las elecciones

En total fueron siete los candidatos a intendente que compitieron en San Nicolás en marzo de 1973. Frente a las predicciones que había sostenido el peronismo opositor, que pronosticaban una sensible diferencia entre los votos a presidente e intendente, determinados por la falta de una lista representativa del peronismo local, los resultados del escrutinio confirmaron un contundente triunfo del Frejuli. En la elección a intendente, este casi había triplicado al segundo partido más votado, la Alianza Popular Federalista. Y respecto a la candidatura presidencial, por parte de la misma lista, la diferencia había sido solamente de dos puntos porcentuales: el candidato a intendente Kolberg había superado los 21.600 votos, un 44,8% del total y cerca de unos mil menos que la fórmula Perón-Solano Lima, que obtuvo casi 22.600, un 46,8%. De las veinte bancadas disponibles para el Concejo Deliberante, doce finalmente quedaron para el Frente Justicialista de Liberación, cuatro para la Alianza Popular Federalista (conocida también como “manriquismo”) y cuatro para la Unión Cívica Radical.⁵⁴ Una importante mayoría de nueve concejales subscribían directamente al peronismo. El desafío se abriría frente al poder de un arco gremial unificado y con el ascendente protagonismo de la conducción de la UOM.

Conclusiones

A través de este recorrido, he tratado de dar cuenta de ciertos aspectos generales de la política partidaria del peronismo nicoleño y de las principales organizaciones sindicales durante el período extendido entre 1972 y principios del año siguiente. Más precisamente, del tipo y grado de participación de la UOM-SN en el proceso iniciado a partir de la reorganización partidaria del justicialismo que concluyó con el triunfo electoral de marzo de 1973. Uno de los rasgos dis-

⁵³ *El Siderúrgico*, 31/1/1973.

⁵⁴ *El Norte*, 28/3 y 4/5/1973.

tintivos que he intentado resaltar es el grado de articulación, y por lo tanto de complejidad, entre ambas dimensiones, como también lo difuso de sus límites.

Como sabemos, en términos algo esquemáticos, lo que comenzó a prevalecer desde la transición hacia la democracia del 73, y sobre todo durante ella, fue –para utilizar un término de Servetto– una “dinámica adversativa”, que encontraba dos extremos configurados entre la ortodoxia sindical y los sectores político-juveniles (2010: 250). Esta imagen de antagonismo y disposición opuesta en el escenario político dentro del mismo partido no dejó de contar con sus matices, por supuesto. La reducción de escala tiende a que, sin difuminarse las líneas generales, prevalezcan ciertas particularidades; y el caso de San Nicolás contó con las propias. En rigor, los análisis de escala acotada llevan a reafirmar u observar las interpretaciones dominantes.⁵⁵ Estos procesos situados brindan esa posibilidad y deben asumir ese desafío. Al menos, esta ha sido la intención de este trabajo: la reconstrucción de una dinámica específica y sus claves explicativas, en diálogo con un marco interpretativo mayor; en este caso, la dinámica de un proceso político de gran relevancia en la historia reciente argentina.

Consolidado como el principal gremio en el escenario local a comienzos de los años setenta, el sindicato de los metalúrgicos devino en una especie de factor de poder que buscó tener una participación insoslayable en la vida política del distrito. Sin embargo, hemos visto que la ecuación no era tan sencilla, y el mundo gremial local no se iniciaba y finalizaba en la relevancia propia de la UOM-SN, pues otros actores incidían también de forma sustantiva. Tal el caso de la delegación regional de la CGT y las 62 Organizaciones locales, lideradas por Magaldi. Este representó un apoyo significativo para el desarrollo del proceso de normalización del partido al oficiar durante estos meses como contrapeso sindical. Pero esto se modificaría poco antes de las elecciones. Hacia 1973, el mundo gremial de San Nicolás se encontraba ya unificado bajo una UOM en permanente ascenso. Esto implicó la apertura de un nuevo escenario: el sector político del peronismo y sus alianzas a cargo del poder formal (como conducción política), frente a un arco gremial de significativa incidencia y de notable presión.

Un factor central en este desarrollo fue la figura de Rucci. La marcada presencia del gremio metalúrgico no puede deslindarse, para esos años, de la incidencia de su secretario general, devenido en el principal referente sindical del país y una figura clave en el desarrollo de la estrategia de Perón. A su vez,

⁵⁵ Para un balance y reflexión al respecto, basado en la historia reciente argentina, ver Bohoslavsky y Lvovich (2017).

el propio Rucci es una muestra de la complejidad que puede emerger en el mismo recorte de observación. Como dirigente de la central de trabajadores, se sumió, en buena medida, a las órdenes del líder del partido como primera figura sindical –y esto lo colocó no pocas veces en el centro de las tensiones–, pero en cuanto protagonista de la arena peronista del distrito hizo prevalecer la lógica corporativa, que se aunaba con su propia construcción de poder. San Nicolás había sido la base en su ascenso sindical.

En perspectiva, al momento de abordar la historia contemporánea nicoleña y a la vista de la enorme injerencia que desplegó la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica en la vida política y social del distrito desde los años setenta en adelante, resulta imposible omitir la importancia de la coyuntura aquí analizada. Fue un momento clave en lo que sería una efectiva inserción en el distrito y la región. Como en pocas partes del país, esta seccional logró constituir un poder gremial –o sea, sindical y político–, anclado territorialmente, considerable y perdurable. Para este caso, la predicción de Carri sería más que acertada.

Bibliografía

- Beraza, Luis (2007). *José Ignacio Rucci*. Buenos Aires: Vergara.
- Bohoslavsky, Ernesto y Lvovich, Daniel (2017). “La historia reciente argentina a escala regional (1973-1983)”. En Bandieri, Susana y Fernández, Sandra (coord.), *La historia argentina en perspectiva local y regional*, pp. 215-238. Buenos Aires: Teseo.
- Bozza, Juan A. (1999). “El arte del asedio y de la negociación. Perón y el lanzamiento del Frente Cívico de Liberación Nacional”. En Pucciarelli, Alfredo (ed.), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, pp. 117-166. Buenos Aires: Eudeba.
- Carri, Roberto (1972). “El peronismo y el gran acuerdo”. *Antropología 3ª. Mundo*, n° 9, pp. 2-9.
- De Riz, Liliana (2010). *La política en suspenso, 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.
- Gillespie, Richard (1998). *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Buenos Aires: Grijalbo.
- James, Daniel (2005). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Siglo XXI.

- (2007). “Sindicatos, burócratas y movilización”. En James, Daniel (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, pp. 117-167. Buenos Aires: Sudamericana.
- Ladeuix, Juan Iván (s/f). “Entre la institucionalización y la práctica. La normalización del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires. 1972–1973”. Disponible en <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/jornadas/ladeuix.pdf>
- Larraquy, Marcelo (2007). *López Rega. El peronismo y la Triple A*. Buenos Aires: Punto de Lectura.
- Mónaco, César (2012). “Rebelión de las bases y disputa intersindical: el caso de los trabajadores del gremio de la Construcción de la planta General Savio”. IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
- (2013). “Un sindicato siderúrgico: desarrollo y declive de una propuesta gremial para los trabajadores de SOMISA (Argentina, 1965-1973)”. *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM*, n° 26. Disponible en <https://journals.openedition.org/alhim/4711>
- Nahmías, Gustavo (2013). *La batalla peronista. De la unidad imposible a la violencia política (Argentina 1969-1973)*. Buenos Aires: Edhasa.
- O'Donnell, Guillermo (2009). *El Estado burocrático autoritario, 1966-1973*. Buenos Aires: Prometeo.
- Sebreli, Juan J. (1986). *La saga de los Anchorena*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Servetto, Alicia (2010). *73-76: El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Soul, Julia (2010). *Las relaciones de clase y la construcción de una comunidad de fábrica en la ex SOMISA* (tesis doctoral). Disponible en <http://grupoantropologiadeltrabajo.blogspot.com.ar/2010/10/tesis-de-doctorado-las-relaciones-de.html>
- Torre, Juan C. (2004). *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-76*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Verbitsky, Horacio (2006). *Ezeiza*. Buenos Aires: La Página.

Autoras y autores

Guadalupe Ballester es profesora universitaria en Historia y magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en el nivel secundario y como becaria doctoral del Conicet. Ha investigado sobre cuestiones de historia reciente argentina en el conurbano bonaerense. Su tesis de maestría se centró en los vínculos establecidos entre las dirigencias de las asociaciones y el gobierno municipal de General Sarmiento entre 1973 y 1983. Ha publicado artículos de investigación y reseñas académicas en revistas de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México.

Juan Luis Besoky se desempeña como becario posdoctoral del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Realizó su tesis doctoral en Ciencias Sociales sobre la “derecha peronista” y actualmente investiga la violencia paraestatal en los años setenta. Es profesor en Historia de la materia Historia Social Contemporánea y de Historia Social General en la UNLP.

Ernesto Bohoslavsky completó el doctorado en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y la maestría en Ciencias Sociales del Centro Bartolomé de las Casas (CUSCO) y FLACSO (Quito). Se ha especializado en el estudio de las derechas sudamericanas en el siglo XX. Actualmente es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde enseña e investiga sobre historia de América Latina. Ha dictado clases de posgrado en una docena de universidades de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

Gabriela Gomes es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Latinoamericanos por la

Universidad Nacional de San Martín y profesora universitaria en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Se desempeña como docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la UNGS. Actualmente, es becaria doctoral del Conicet, cuya investigación aborda los proyectos de vivienda de interés social en los regímenes dictatoriales latinoamericanos. Es autora del libro *La política social de los regímenes dictatoriales en Argentina y Chile (1960-1970)* (2016), así como de varios artículos sobre historia política de la Argentina y de Chile.

Federico Iglesias es magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor universitario de Historia (UNGS). En 2016 defendió sus tesis de maestría “Intelectuales, cultura y dictadura: el caso de la revista *El Ornitorrinco*”, dirigida por la doctora Ximena Espeche. Publicó artículos sobre escritores y dictadura en diversas revistas académicas y libros. Se desempeña como docente en la UNGS y en la Universidad Nacional de José C. Paz, y como docente de Historia III, IV y V en la escuela secundaria de la UNGS.

Daniel Lvovich es doctor en Historia (UNLP, 2001). Se desempeña como investigador docente asociado de la UNGS y como investigador independiente del Conicet. Ha publicado numerosos trabajos sobre la historia del siglo xx argentino, entre los que se destacan *Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina* (2003), *El nacionalismo de derecha en la Argentina. Desde sus orígenes hasta Tacuara* (2006) y la compilación (junto a P. Flier) *Los usos del olvido. Recorridos, dimensiones y nuevas preguntas* (2014).

César Mónaco es profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Doctorando en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano (UNGS). Jefe de Trabajos Prácticos (regular) de Problemas de Historia Argentina Contemporánea e Historia Argentina Contemporánea en la citada universidad. Se especializa en la historia social de la Argentina de la segunda mitad del siglo xx, específicamente en la historia del movimiento obrero y de los trabajadores bajo esa etapa. Ha presentado ponencias en diversos congresos y ha publicado artículos, capítulos y actas sobre el campo de especialización. Investigación en curso: “Trabajadores, sindicatos y política en San Nicolás de los Arroyos, 1965-1983”.

Sergio Daniel Morresi es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencia Política por la Universidade de San Pablo (USP, Brasil). Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y como investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (IHUCSO-Conicet). Es autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, análisis político e historia reciente. Su actividad se concentra en el estudio del liberalismo, el neoliberalismo y las derechas políticas.

Florencia Osuna es doctora (UBA), magíster (IDAES-UNSAM) y profesora universitaria (UNGS) en Historia. Actualmente es becaria posdoctoral del Conicet y docente en las Universidades Nacionales de General Sarmiento y de La Plata. Es autora de los libros *De la “revolución socialista” a la “revolución democrática”: las prácticas políticas del PST-MAS durante la última dictadura (1976-1983)* (UNLP-UNGS-UNAM, 2015) y de *La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar Social entre dos dictaduras (Argentina, 1966-1983)* (Prohistoria, 2017).

Cristian Vázquez es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Formosa. Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, y doctorando en el mismo programa de posgrado. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Formosa.

Martín Vicente es licenciado en Comunicación Social (FCECS-USAL, 2006). Magíster en Ciencia Política (IDAES-UNSAM, 2009). Doctor en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2014). Investigador del Conicet (IGEHCs-UNCPBA). Su área de investigación es la historia político-intelectual de las derechas argentinas, con especial énfasis en la tradición liberal. Ha publicado artículos en libros colectivos y en revistas especializadas de la Argentina, Brasil, Estados Unidos y Francia, así como el libro *De la refundación al ocaso. Los intelectuales liberal-conservadores argentinos ante la última dictadura* (UNLP-UNGS-UNAM, 2015). Actualmente trabaja sobre la recepción de la problemática del totalitarismo en la Argentina.

La **Colección Humanidades** de la Universidad Nacional de General Sarmiento reúne la producción relacionada con las temáticas de historia y filosofía, enmarcadas en las líneas de investigación de la Universidad, siempre en vinculación con el desarrollo de nuestra oferta académica y con nuestro trabajo con la comunidad.

Partiendo de las preguntas propias de la historia política, social y cultural, y más allá de la relativa amplitud de sus objetos de estudio, una serie de puntos de partida en común articulan estos trabajos que indagan en diversas dimensiones de la sociedad y el Estado entre las décadas de 1960 y 1980. Uno de estos puntos es la necesidad de inscribir la temporalidad relativamente corta de la historia reciente en marcos cronológicos más amplios, que permitan articular las especificidades del período dentro de continuidades institucionales, identitarias, políticas o culturales de mayor alcance y percibir las novedades relativas. Junto con ello, el criterio de considerar la escala de análisis empleada en cada caso no como un elemento dado *a priori*, sino como una dimensión seleccionada conscientemente.

Asimismo, en los trabajos se observa una marcada preocupación por dar cuenta de los múltiples modos en que se vinculan, de un modo osmótico, las distintas agencias estatales consideradas con segmentos de la sociedad. Se forman fronteras porosas entre Estado y sociedad a través de las cuales se desplazan los intereses sociales y corporativos, las ideologías, sujetos, grupos profesionales, tradiciones intelectuales, entre otros.



Colección Humanidades

Universidad Nacional
de General Sarmiento 



Libro
Universitario
Argentino

